



LOS VALORES SOCIALES EN BOLIVIA

**UN ESTUDIO A PARTIR DE LA ENCUESTA MUNDIAL
DE VALORES Y LA ENCUESTA DE VALORES
A ADOLESCENTES, 2024**

Los valores sociales en Bolivia. Un estudio a partir de la Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta de Valores a Adolescentes, 2024.

© Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública
© Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA
© Oxfam Internacional

Coordinación del estudio:

Daniel Eduardo Moreno Morales

Autores:

Zarina Aruzamén Zambrana
Eduardo Córdova Eguívar
Ricardo Dacosta Escobar
Santiago Laserna Fernández
Natasha Morales Escoffier
Daniel Eduardo Moreno Morales
Daniela Osorio Michel
Vivian Schwarz Blum
Gonzalo Vargas Villazón

Investigadores principales de la EMV en Bolivia:

Daniel Eduardo Moreno Morales
Vivian Schwarz Blum
Santiago Farjat Bascón

Edición:

Ricardo Dacosta Escobar
Víctor Orduna Sánchez

Revisión de calidad:

Santiago Farjat Bascón
Carla Camacho Joffre

Nº de Depósito Legal: 2-1-7302-2025

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Oxfam Internacional. Las opiniones vertidas en el material son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen el criterio institucional. Se permite la reproducción total o parcial de este material (gráficos, tablas, ilustraciones, y texto) siempre que no sea alterada y se asignen los créditos correspondientes de propiedad a los autores.

Esta publicación es de distribución gratuita.
Prohibida su venta.
La Paz, Bolivia
2025

Índice

Prólogo	7
Resumen ejecutivo	9
La EMV y la EVA en Bolivia.....	9
Resultados principales.....	10
Conclusiones: Los valores de la sociedad boliviana y el ejercicio de derechos	15
CAPÍTULO 1: La EMV y la EVA: Elementos para estudiar y promover el ejercicio de derechos <i>Daniel E. Moreno Morales</i>	17
Introducción	17
1. Los valores de la sociedad y el ejercicio de derechos	18
2. La Encuesta Mundial de Valores: Un programa de estudio comparativo internacional	24
3. La Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta de Valores a Adolescentes en Bolivia.....	26
4. Características sociodemográficas de la muestra.....	33
5. Enfoque y metodología del informe	38
Referencias	40
CAPÍTULO 2: Los valores sociales en Bolivia: Señales de un lento cambio cultural <i>Ricardo Dacosta</i>	43
Introducción	43
La teoría de la modernización y el cambio cultural.....	45
1. Los valores fundamentales de la sociedad boliviana	48
2. Respeto por la autoridad, autonomía personal y libertad percibida	58
3. La tolerancia hacia la diversidad.....	66
Conclusiones.....	71
Referencias	73
CAPÍTULO 3: Los valores de la sociedad boliviana en relación a la nación y el mundo <i>Daniel E. Moreno Morales</i>	75
Introducción	75
1. Identidades nacional y locales, migración y perspectivas internacionales en un mundo globalizado	76
2. Pertenencia e identidad nacional y local	79
3. Percepciones sobre la migración	85
4. Miradas a otros países y entidades internacionales.....	88

Conclusiones.....	97
Referencias.....	98
CAPÍTULO 4: Valores económicos de la sociedad boliviana en 2024: Entre el esfuerzo, el escepticismo y la desconfianza institucional <i>Santiago Laserna</i>	101
Introducción	101
Contexto económico boliviano	103
1. Igualdad, mérito y rol del Estado.....	104
2. Corrupción e impunidad.....	119
3. Justificación de prácticas ilegales	121
Conclusiones.....	123
Referencias.....	125
CAPÍTULO 5: Democracia y valores sociales en Bolivia <i>Daniela Osorio Michel</i>	127
Introducción	127
1. Las múltiples caras de la democracia	128
2. Midiendo la democracia desde la gente	131
3. ¿Quién cree en qué? Perfiles sociales y dimensiones de la democracia	137
4. Las dimensiones de la democracia y sus consecuencias	143
5. Las democracias frente al espejo de la crisis	151
Conclusiones.....	155
Referencias.....	157
CAPÍTULO 6: Ciencia, tecnología y religión <i>Eduardo Córdova</i>	161
Introducción	161
La relación entre ciencia y religiosidad	162
1. La sociedad boliviana, la ciencia y la tecnología	163
2. Conflictos entre la ciencia y la religión.....	173
3. La sociedad boliviana, la religión y la religiosidad.....	176
4. Tolerancia hacia otras religiones	182
Conclusiones.....	185
Referencias.....	187
CAPÍTULO 7: Valores para la igualdad de género. El papel de las ideas y actitudes sobre roles de género <i>Vivian Schwarz Blum</i>	189
Introducción	189
1. La importancia de los valores para la igualdad de género.....	190
2. Valores para la igualdad de roles y jerarquías entre mujeres y hombres y de género.....	198

3. Valores para la igualdad de género en el espacio privado e íntimo.....	201
4. Valores para la igualdad entre mujeres y hombres: espacio público vs. espacio privado	207
5. Rol de la prevalencia de violencia sobre la igualdad de género	214
Conclusiones.....	217
Referencias	220
CAPÍTULO 8: Confianza social general y asociacionismo <i>Gonzalo Vargas V.</i>	223
Introducción	223
1. Confianza y desconfianza en clave sociopolítica.....	224
2. Radiografía de la confianza social en Bolivia.....	230
3. Capital social y asociacionismo	235
4. Confianza social generalizada, confianza externa y confianza interna.....	241
5. Confianza social generalizada e institucionalidad política	248
Conclusiones.....	251
Referencias	252
CAPÍTULO 9: Adolescencia, cuerpos y decisiones: una mirada a los Derechos sexuales y reproductivos en Bolivia <i>Zarina Aruzamén Z. Vivian Schwarz Blum</i>	257
Introducción	257
1. Autonomía y DSDR de adolescentes en Bolivia	259
2. Situación actual del ejercicio de autonomía y DSDR de parte de adolescentes en Bolivia.....	260
3. Hallazgos de la EVA y la EMV.....	267
Conclusiones.....	290
Referencias	291
CAPÍTULO 10: Los valores de la población adolescente en Bolivia <i>Natasha Morales Escoffier</i>	295
Introducción	295
1. Valores normativos y proyecciones hacia la niñez.....	297
2. Vínculos afectivos y bienestar subjetivo en la adolescencia.....	300
3. Trabajo y ocio como parte del tránsito hacia la adultez	307
4. Identidad social, economía y democracia.....	310
Conclusiones.....	317
Referencias	319
Sobre las y los autores	322
Anexo digital	323

Presentación

Comprender mejor el contexto de valores y normas sociales permite conocer más profundamente una sociedad. Bajo esta premisa, Ciudadanía – Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Oxfam Internacional han desplegado un esfuerzo conjunto para desarrollar, por segunda vez consecutiva en Bolivia, la Encuesta Mundial de Valores (EMV), dirigida a la población adulta, y la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA) 2024.

Los resultados de ambas encuestas han sido sistematizados en el informe “Los valores sociales en Bolivia. Un estudio a partir de la Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta de Valores a Adolescentes, 2024”, que da continuidad al trabajo iniciado en 2017 y busca contribuir a la reflexión y comprensión de la evolución de los valores y actitudes en la sociedad boliviana. La evidencia muestra una relación directa entre los valores predominantes de cada sociedad y la construcción de normas sociales, así como entre estas normas y los comportamientos individuales que, en la mayoría de los casos, están determinados por los valores colectivos.

En este marco, el objetivo central del estudio es aportar a la comprensión de cómo los valores y actitudes repercuten en las condiciones para el ejercicio de los derechos y responsabilidades ciudadanas en Bolivia, prestando especial atención a los grupos poblacionales que históricamente han enfrentado mayores dificultades para ejercer sus derechos. En este sentido, este trabajo trata de identificar los factores normativos que pueden limitar o potenciar la participación plural de la ciudadanía en la vida social y política del país.

Este informe no sólo alimenta una base de datos comparativa internacional de gran valor para la investigación global, sino que también aspira a constituirse en una fuente de información que promueva la producción de conocimiento, la reflexión crítica y el diálogo sobre la sociedad boliviana entre instituciones, organizaciones y movimientos sociales. En esta línea, en la investigación destacan tanto los avances hacia una estructura de valores más abierta y favorable al ejercicio de derechos, como los desafíos que persisten frente a actitudes conservadoras e inequitativas.

El documento ofrece una perspectiva comparativa de alto valor, al analizar los datos de las dos rondas de encuestas (2017 y 2024), lo que permite observar los cambios ocurridos en un corto periodo, considerando las diferencias intergeneracionales entre adultos y adolescentes, así como la posición de Bolivia en el contexto global de los países que han participado en la EMV. Además, este informe incorpora la

Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA) como una innovación metodológica propia de Bolivia, que proporciona información indicativa sobre qué motiva los comportamientos de las y los adolescentes, qué les afecta y cómo toman decisiones. Los nueve capítulos temáticos del informe abordan áreas fundamentales como la autonomía individual, la identidad nacional, los valores económicos y democráticos, las actitudes hacia la ciencia, la tecnología y la religión, la igualdad y equidad de género, la confianza interpersonal y los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia. Cada capítulo, elaborado por especialistas en su área, aplica un riguroso análisis estadístico para identificar relaciones sólidas entre variables, presentando los hallazgos de forma accesible para un público amplio y diverso.

La Agenda 2030 reconoce que, para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental transformar las normas sociales y enfrentar los desafíos vinculados a las desigualdades, las prácticas discriminatorias y los derechos humanos. Su enfoque busca erradicar la pobreza, garantizar la igualdad de género y promover la inclusión social a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para el UNFPA, este informe reviste especial importancia porque permite identificar tendencias en los valores sociales en Bolivia y la necesidad de su transformación para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de las diferencias y más favorable al ejercicio de derechos. Los valores, al guiar la conducta y fomentar el respeto y la empatía, crean un entorno propicio para que las personas tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus vidas, contribuyendo así a un futuro más equitativo.

En este marco, se reafirma la importancia de trabajar sobre los valores para lograr cambios sociales positivos: promover la autonomía y el empoderamiento de las personas, erradicar la violencia basada en género y las prácticas nocivas y discriminatorias, y garantizar la igualdad y la autonomía de todas las personas, especialmente jóvenes y mujeres, entre otros.

Esperamos que la lectura de este informe fomente el diálogo constructivo y acciones transformadoras que impulsen una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos de todas y todos.

Pablo Salazar Canelos
Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA

Resumen ejecutivo

La EMV y la EVA en Bolivia

La Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta de Valores a Adolescentes (EMV y EVA, respectivamente) se llevaron a cabo en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024, en el marco de una alianza de cooperación entre Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Oxfam Internacional. Es la segunda vez que este esfuerzo se pone en práctica, replicando la experiencia previa de 2017 y generando información útil para conocer cómo han cambiado los valores y las actitudes de la sociedad boliviana en los últimos años.

La EMV es un proyecto global que estudia los valores de las sociedades en todo el mundo y que se ha implementado durante las últimas cuatro décadas. La EMV se aplica en “olas” o “rondas” de encuestas sucesivas, mediante un cuestionario similar y comparable que se aplica sobre muestras representativas de la población nacional mayor de edad en países de todo el mundo. La encuesta realizada en Bolivia en 2024 forma parte de la octava ronda de la EMV (la de 2017 fue parte de la séptima ola del estudio). Además, en Bolivia se aplica parte del cuestionario de la EMV a una muestra representativa de la población adolescente, de 12 a 17 años de edad, lo que permite hacer comparaciones entre los valores de personas adultas y jóvenes. Esta última es la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA), un desarrollo metodológico propio de Bolivia, que se implementó por primera vez en 2017 y, en una segunda ronda, en 2024.

Los datos de la EMV y la EVA han sido generados considerando criterios que garantizan tanto la representatividad como la calidad de la de la información, empleando una modalidad CAPI (encuesta levantada mediante dispositivos electrónicos de campo). La representatividad se logra por medio del diseño y uso de una muestra que llega a personas que viven en hogares de áreas urbanas y rurales de todo el país; se trata de una muestra polietápica de 1.200 casos para la EMV y 900 para la EVA, que permite generar inferencias con márgenes de error de 2,83 y 3,27 puntos porcentuales, respectivamente. Asimismo, la calidad de la información de la encuesta se garantiza por medio de la aplicación de mecanismos de control de calidad, que incluyen un proceso de supervisión remota para la verificación de la ubicación de la entrevista, así como la escucha de las mismas (gracias a la grabación de audio), a fin de detectar

y corregir posibles errores en el procesamiento de la información. Por otra parte, la encuesta se realizó considerando protocolos de protección de sujetos humanos, como la protección del anonimato y el consentimiento informado; lo que, en el caso de adolescentes, implica recabar la autorización firmada de parte de sus padres, madres o tutores legales.

Este informe analiza los resultados de la encuesta tomando en cuenta tres perspectivas comparadas principales: la temporal (2017-2024), la intergeneracional (adultos y adolescentes) y la internacional (Bolivia frente a otros países del mundo, aunque la cantidad de países con encuestas culminadas a la fecha de realización del estudio es relativamente pequeña). El informe considera nueve temáticas relevantes para el estudio de los valores, organizadas en capítulos específicos: los valores relacionados con la autonomía individual, la identidad y el sentido de pertenencia nacional; los valores económicos; los democráticos; las actitudes hacia la ciencia y la tecnología; los valores asociados con la equidad de género, la confianza interpersonal, las actitudes hacia los derechos sociales y reproductivos; y el balance general de la situación de los valores de la población adolescente.

Cada capítulo ha sido redactado por un especialista en la temática correspondiente. En términos metodológicos, el análisis parte de la aplicación de modelos estadísticos multivariados que permiten identificar relaciones sólidas entre variables, garantizando un tratamiento riguroso de la información. La presentación de los datos privilegia gráficos y tablas sencillas, con el objetivo de llegar a un público que no sea no solamente técnico o académico.¹ El enfoque del análisis de cada capítulo apunta a pensar cómo los hallazgos en materia de valores y actitudes repercuten en las condiciones para el ejercicio de derechos y responsabilidades ciudadanas en el país.

Resultados principales

Los resultados de la EMV y la EVA 2024 en Bolivia muestran un conjunto de hallazgos matizados. Si bien se observan indicios de una apertura de la sociedad boliviana hacia valores más favorables al ejercicio de la autonomía personal, también persisten valores y actitudes conservadoras y reactivas frente a muchos derechos. La mejor forma de presentar estos hallazgos es mediante una síntesis de las conclusiones

1. El primer capítulo del informe profundiza algunos aspectos referidos a la metodología y el enfoque empleado para el estudio, tanto en términos teóricos como analíticos.

obtenidas de cada capítulo temático del estudio.

El segundo capítulo del estudio² se enfoca en los valores sociales que inciden directamente en el desarrollo de las capacidades autónomas de los individuos. Este enfoque constituye un eje central del marco teórico y analítico propuesto por la EMV desde sus inicios, y se aborda ampliamente a lo largo de este capítulo. Los datos sugieren que la estructura general de valores de la sociedad boliviana no ha cambiado en los últimos siete años, particularmente en lo relativo a la priorización de las cualidades que deben transmitirse a los niños. En este sentido, la valoración de cualidades como la independencia o la imaginación es muy baja, mientras que cualidades vinculadas con la autoridad y la comunidad –como los buenos modales– siguen ocupando la prioridad más alta. Al mismo tiempo, las prioridades de la población adolescente son muy similares a las de los adultos. No obstante, en contraste con el carácter estático de la priorización de valores, se aprecian cambios positivos aunque leves–, en la aceptación de prácticas como, por ejemplo, la homosexualidad y el aborto. En general, los adolescentes muestran mayor aceptación que los adultos de estas prácticas, lo que refleja un avance en el reconocimiento del ejercicio de la autonomía individual.

El tercer capítulo indaga sobre el sentido de pertenencia hacia la nación boliviana y sobre las actitudes referidas al contexto internacional. La intensidad promedio del sentimiento de orgullo nacional disminuido ligeramente desde la encuesta anterior (2017), y sigue siendo más alta entre la población que se autoidentifica con parte de un pueblo indígena. No existen diferencias entre adultos y adolescentes en el apego hacia lo nacional, pero sí en la valoración de otros niveles: los jóvenes son más globalistas, mientras que las personas de más edad valoran más los espacios locales. Además de la edad, otros factores inciden de forma relevante en las opiniones sobre algunos temas: la región oriental es más abierta a la migración, mientras que las mujeres ven de manera más negativa a Rusia y a Arabia Saudita, y quienes tienen como primera lengua un idioma indígena ven con mayor recelo y negatividad a la Unión Europea y a los Estados Unidos. En contraste, la confianza en entidades internacionales ha aumentado de manera muy clara en la sociedad boliviana –todas las que se mencionan son vistas mucho más favorablemente ahora que en la encuesta anterior–, lo que sugiere una mayor apertura hacia el contexto internacional.

Por otra parte, el análisis de los valores económicos planteado en el cuarto capítulo de este estudio muestra que la población boliviana sigue valorando el esfuerzo

2. Como se señaló en el acápite anterior, el primer capítulo profundiza algunos aspectos de enfoque, teóricos y metodológicos.

individual por encima de la redistribución de la riqueza, aunque los adolescentes lo hacen con menor énfasis. De manera consistente con esto, se reconoce que son los individuos –y no el Estado–, quienes tienen la mayor responsabilidad económica. A pesar de ello, la preferencia por la propiedad estatal de las empresas –frente a la propiedad privada– sigue siendo mayoritaria, aunque el porcentaje favorable se ha reducido en cerca de 10 puntos. El nivel educativo de las personas es un factor relevante para explicar diferencias en los valores económicos, puesto que quienes tienen mayor trayectoria educativa son más favorables a la propiedad privada de las empresas y al reconocimiento meritocrático, mientras que las personas con menor nivel educativo tienden a justificar con mayor frecuencia prácticas ilegales como el soborno o la evasión fiscal. La percepción de corrupción se ha incrementado mucho: en 2024, casi el 95% de la población considera que existe mucha corrupción en el país, el porcentaje más alto entre los países con datos disponibles en la ronda 8 de la EMV a nivel mundial.

El capítulo cinco introduce una innovación metodológica mediante el uso de un conjunto de índices para tratar de entender qué valores están detrás de la comprensión de la democracia que prima en la sociedad boliviana. En este sentido, al contrastar tres dimensiones de la democracia –procedimientos electorales, límites institucionales y capacidad redistributiva– se observa que la preferencia dominante es la electoral procedimental. Un mayor nivel educativo refuerza esta tendencia, reduciéndose, a la vez, la adhesión a las dos otras dimensiones. Esta dimensión electoral procedimental de la democracia está también relacionada con una mayor valoración de la democracia como forma de gobierno y con una mayor insatisfacción con respecto a la forma en la que funciona actualmente el sistema político en Bolivia. Quienes comparten esta percepción también se muestran más interesados en participar en política y están más involucrados en asociaciones y organizaciones. En general, la crisis institucional del sistema político boliviano puede evidenciarse en el declive registrado, en comparación con el 2017, en la proporción de personas que se adhiere a alguna de estas tres formas de entender la democracia.

Las valoraciones que hace la sociedad boliviana sobre la ciencia y la tecnología son el foco central del capítulo sexto, que vincula estas percepciones con la religiosidad de las personas. Los datos muestran que, en promedio, el entusiasmo por los desarrollos tecnológico-científicos en Bolivia es bajo, aunque varía según la región (mayor valoración en el Oriente) y el nivel de ingresos (a mayor ingreso, mayor valoración). De manera complementaria, la preocupación sobre el cambio climático y sus consecuencias es alta entre la ciudadanía, resultando en una mayoría

de personas que entiende que es más importante cuidar el medio ambiente incluso que promover el desarrollo económico –creencia más fuerte entre los más jóvenes y educados–. Aunque la centralidad de la religión en la vida de las personas ha venido disminuyendo, y con ello también la intolerancia religiosa, las percepciones sobre ciencia y tecnología están cruzadas por las creencias religiosas: la mayoría de los bolivianos cree, en caso de conflicto, la religión debería tener preeminencia sobre la ciencia. Esta convicción es más común en el Oriente del país, entre personas con menor educación y entre quienes son parte de una denominación protestante evangélica.

El séptimo capítulo aborda los valores relacionados con la equidad de género, un tema clave en la intersección entre valores sociales y derechos. El capítulo muestra que los valores y normas sociales que limitan el ejercicio equitativo de la vida social de las personas están relacionados con una estructura normativa más amplia en la que la autonomía individual está limitada. A pesar de ello, se registran avances en la transición hacia una sociedad con valores orientados hacia la igualdad de género: mayor apertura y aceptación hacia la autonomía de decisión sobre el matrimonio, sobre el aborto y sobre la planificación de la reproducción. También es un dato positivo que los adolescentes se muestren, por lo general, más reacios hacia actitudes que comprometen la equidad entre hombres y mujeres, y que muestren mayor acuerdo con posturas favorables a ésta (aunque en algunos casos se reproduce la relación en “U” que se había reportado en la encuesta de 2017, por la cual los adolescentes aprueban actitudes que van en contra de la equidad con similar intensidad que los adultos mayores, mientras que los adultos más jóvenes tienden a rechazarlas). Ahora bien, aunque se ha reducido el apoyo a actitudes que limitan la equidad de género en el espacio privado, su aprobación sigue siendo mayoritaria. En el espacio público, en cambio, las actitudes que limitan la participación de las mujeres reciben ahora mayor apoyo, aunque siguen siendo minoritarias en términos absolutos. Finalmente, la justificación de la violencia de género se ha duplicado en términos porcentuales y es más alta entre los adolescentes más jóvenes, lo que sin duda es una señal de alarma.

En el octavo capítulo aborda uno de los temas que se ha destacado en el análisis comparativo de Bolivia con otros países: la confianza interpersonal, que sigue siendo baja –en concordancia con el registro histórico–; y el asociacionismo, que ha sido siempre alto en el país. La confianza social, o interpersonal, es más alta entre los adolescentes que entre adultos y entre hombres que entre mujeres. Esta diferencia se observa tanto en la confianza general como en la interna (hacia personas

cercanas) y externa (hacia desconocidos). Los adolescentes muestran mayores niveles de participación en asociaciones y organizaciones sociales, mientras que las mujeres y los no indígenas participan menos que los hombres y que quienes se autoidentifican con alguno de los pueblos indígenas del país, respectivamente. La confianza social también favorece el asociacionismo, pero quizás lo más relevante es que tiene una relación directa y positiva con la percepción de la importancia de vivir en un gobierno democrático –circunstancia que se extiende a los distintos tipos de confianza (generalizada, interna y externa)–.

El noveno capítulo analiza información que proviene principalmente de la EVA, con el propósito de desentrañar la comprensión y valoración que hace la población adolescente de los derechos sexuales y derechos reproductivos, así como de algunos servicios que se brindan para atender necesidades relacionadas con éstos. Los adolescentes reconocen mayoritariamente que la anticoncepción es un derecho de las personas; sin embargo, pese a ello, están menos convencidos que el resto de la sociedad de que los anticonceptivos deberían estar libremente disponibles para toda la población (aquí se verifica nuevamente el patrón en “U”, por el que los adolescentes adoptan actitudes tan conservadoras como las de sus abuelos). En contraste, los adolescentes se muestran más dispuestos que el resto de la población a aceptar prácticas como la homosexualidad o el aborto, y esta aceptación ha venido creciendo en el tiempo. En relación con la Educación Integral en Sexualidad (EIS), la mayoría de los adolescentes cree que ésta ofrece herramientas útiles para tomar decisiones, y esta creencia es más fuerte entre los adolescentes de 15 a 17 años que entre los más jóvenes, de 12 a 14. La mayoría cree que la EIS es suficiente para prevenir embarazos no deseados, aunque la explicación mayoritaria a los embarazos adolescentes que se ofrece es, precisamente, la falta de información.

El capítulo final del informe busca ofrecer conclusiones específicas sobre los valores de la población adolescente boliviana. En primer lugar, confirma la persistencia de una matriz de valores conservadores que se prioriza por encima de otros más consistentes con la autonomía individual. En segundo lugar, el capítulo corrobora que la familia es el elemento más importante en la vida de los adolescentes, y que esta relevancia incluso se ha incrementado; no obstante, la confianza en la familia ha descendido y es particularmente baja entre las mujeres adolescentes (menos de la mitad confía plenamente en su familia). Esta baja confianza repercute negativamente en la percepción de felicidad entre los adolescentes, para quienes también las amistades juegan un papel importante. Los adolescentes valoran más el trabajo que el tiempo libre y tienen un posicionamiento ideológico no muy distinto al de

los adultos, cuando se considera el eje izquierda-derecha, aunque sí afirman tener mayor interés por la política. Por otra parte, al ser consultados sobre la importancia de vivir en un régimen democrático, su nivel de convencimiento de las ventajas de este tipo de sistema sobre otros posibles es significativamente más débil que el que se registra entre la población adulta.

Conclusiones: Los valores de la sociedad boliviana y el ejercicio de derechos

El análisis de los datos de la EMV y la EVA de 2024 en Bolivia revela que la sociedad boliviana atraviesa un proceso de transformación normativa hacia una estructura de valores más abierta y favorable al ejercicio de derechos y responsabilidades individuales. Sin embargo, se trata de un proceso lento, que enfrenta fuertes resabios conservadores sobre los que se asientan actitudes intolerantes e inequitativas que persisten en el tiempo.

Destacan, como aspectos positivos, la mayor aceptación de prácticas relacionadas con la autonomía individual. Los cambios registrados en estas variables no son por lo general de gran magnitud, pero siguen una dirección común: hacer que la sociedad esté más dispuesta a aceptar las decisiones que toman las personas en el marco del ejercicio de su libertad y autonomía. Se puede evidenciar, además, un lento proceso de secularización que tiende a desvincular los valores sociales de los religiosos. Las percepciones sobre la economía son matizadas y, si bien prima una perspectiva en la que el reconocimiento al esfuerzo individual es central, no se abandona por completo la demanda de acción estatal. Al mismo tiempo, la sociedad boliviana se muestra más abierta al contexto internacional, lo que representa oportunidades en este momento histórico específico. También resulta alentador que los adolescentes se muestren más críticos ante posturas que afectan negativamente la equidad entre hombres y mujeres, y que acepten con mayor frecuencia que los adultos decisiones resultantes del ejercicio de la autonomía individual. La sociedad privilegia la comprensión electoral de la democracia, y la participación en espacios de asociación voluntaria continúa siendo elevada, sobre todo entre los adolescentes, quienes también muestran promedios más altos de confianza en los demás.

Asimismo, se registran valores y actitudes que representan desafíos importantes hacia el futuro, en tanto pueden constituir una amenaza directa al ejercicio de derechos de otras personas. La persistencia de una estructura de valores en la que prevalecen las cualidades relacionadas a la autoridad y a la comunidad por encima

de aquellas relacionadas con el desarrollo de las capacidades de las personas es uno de ellos. La disminución del sentimiento de orgullo de ser boliviano refuerza el diagnóstico de crisis que atraviesa el país, el cual también se pone de manifiesto en la percepción extremadamente alta sobre la corrupción y en el “vaciamiento” en los significados asociados a la democracia. La confianza interpersonal sigue siendo muy baja, y de manera muy preocupante, la justificación de la violencia contra las mujeres se ha incrementado en el marco de un conjunto de valores poco favorables hacia la igualdad de género. Las y los adolescentes más jóvenes, de entre 12 y 14 años, presentan en muchos casos actitudes tan conservadoras como las de las y los adultos mayores, lo que sugiere deficiencias importantes en el proceso formativo tanto en el ámbito familiar como en el escolar.

CAPÍTULO 1:

La EMV y la EVA: Elementos para estudiar y promover el ejercicio de derechos

Daniel E. Moreno Morales

Introducción

Este capítulo plantea algunas de las bases conceptuales de la discusión sobre los valores sociales y presenta de manera muy sucinta los esfuerzos de la Encuesta Mundial de Valores (EMV) para abordar su estudio, tanto en perspectiva temporal como internacional, a través de una encuesta dirigida a registrar los distintos valores y aplicada a una muestra representativa de la población mayor de 18 años. La EMV se realiza por segunda vez en Bolivia, después de haberse aplicado en 2017. Además, en Bolivia, la EMV se lleva a cabo junto con la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA), en función de un desarrollo metodológico propio que permite registrar los valores de la población de entre 12 y 17 años.

Los valores constituyen un tema central en el debate, tanto a nivel social –en conversaciones entre amigos o familiares– como en el ámbito de la política, donde cada vez marcan más diferencias. Los valores importan e interpelan, en tanto representan, por definición, aquello que es importante para las personas y para la sociedad en su conjunto. Pero ¿qué son los valores sociales? ¿De qué manera condicionan el comportamiento de las personas? ¿Pueden cambiar en el tiempo? ¿Cómo se relacionan con el ejercicio de los derechos de la gente? Estas son las preguntas que se busca responder en este capítulo inicial. Para ello, se combina una reflexión teórica sobre los valores y su importancia en las sociedades contemporáneas –especialmente en la boliviana– con el planteamiento de la metodología y las características principales de su estudio por medio de la EMV.

La realización en Bolivia de la EMV y la EVA es fruto de un esfuerzo institucional conjunto Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, con el apoyo de OXFAM Internacional. Esta iniciativa tiene la finalidad de profundizar el conocimiento e impulsar la discusión

sobre los elementos normativos que inciden en el ejercicio de los derechos humanos en Bolivia, específicamente entre los sectores que afrontan mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos. Este esfuerzo se suma al de decenas de instituciones y entidades a nivel internacional que, mediante su aporte a la EMV, contribuyen con un recurso de análisis de las sociedades comparativo y de actualización periódica, útil para comprender aquellos elementos invisibles que son de interés público y que desempeñan un rol determinante para el ejercicio los derechos de la ciudadanía.

1. Los valores de la sociedad y el ejercicio de derechos

1.1 Valores sociales, normas y creencias

Los valores de una sociedad son un elemento constitutivo y estructural, en la medida en que establecen aquello que se considera deseable y lo que está “bien” en contraposición con lo que está “mal”. Los valores son referentes normativos compartidos por los miembros de una colectividad –aunque no necesariamente por todos– y orientan tanto el razonamiento como las acciones de las personas. Los valores son las creencias y principios que “valen” en una sociedad; aquellos que se convierten en referentes y orientan las acciones individuales y colectivas.

La Encuesta Mundial de Valores en Bolivia de 2017 definía, en su primera publicación de resumen (Ciudadanía, 2018a), a los valores sociales de la siguiente manera:

“Son las convicciones básicas y abstractas que tienen las personas sobre sí mismas y sobre el mundo. Contienen una dimensión normativa; es decir, definen los conceptos fundamentales acerca del bien y del mal. Son, por lo general, de carácter social –esto significa que son compartidos por una comunidad– y tienden a permanecer –cambian lentamente en el tiempo–; por ejemplo, la importancia que se le da a libertad o a los valores religiosos”.

Así entendidos, los valores anteceden a las normas sociales, en la medida en que estas últimas son pautas de comportamiento aceptadas socialmente que se sustentan en los valores sociales. Las normas sociales confieren operatividad a los valores, los convierten en pautas para el comportamiento que pueden ser más o menos formales, pero son distintas a éstos: existen en el nivel de las prácticas, de las actitudes, mientras que los valores existen en un ámbito más abstracto. La institucionalización de las normas sociales refuerza los valores subyacentes y tienden a normalizarlos en

la práctica. Las creencias, por su parte, son convicciones compartidas socialmente que se asumen como verdaderas. Las creencias están relacionadas con los valores y los legitiman desde un plano menos abstracto.

Por ejemplo, un valor en una sociedad puede ser la igualdad; la sociedad “valora” el principio de igualdad entre las personas. Una creencia relacionada con el valor de la igualdad puede ser: “todas las personas son iguales ante la ley” o también “Dios hizo iguales a todos los seres humanos”. Por otra parte, una norma social consistente con el valor de la igualdad podría ser tratar a todas las personas de igual forma.

La definición de valores que se emplea aquí es agnóstica respecto a su contenido y define como valores a todas las orientaciones normativas presentes en una sociedad, independientemente del juicio que pueda hacerse sobre ellas. Por tanto, los valores no necesariamente representan un contenido “positivo”. La dicotomía entre valores y antivalores –planteada, muchas veces, como la oposición entre valores positivos y negativos– no tiene sentido en la comprensión del tema que se plantea en este estudio.

Ahora bien, los valores de una sociedad pueden ser más o menos propicios para el ejercicio de los derechos de las personas. Mientras que la definición misma de valores es neutra respecto a su carácter positivo o negativo, la manera en la que éstos afectan la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos libremente en una sociedad implica definir un rasero que no depende de los valores en sí, sino de sus consecuencias. Esta postura es consistente con un principio filosófico de origen liberal: cada quien tiene el derecho (y la capacidad) de decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal en su vida, siempre y cuando esta decisión no afecte los derechos de las otras personas.

Valores como la tolerancia a la diferencia, la igualdad de oportunidades, el cumplimiento de la ley o el respeto a la libertad ajena son elementos fundamentales para el ejercicio de derechos en una sociedad. En cambio, otros valores –como la primacía de la religión sobre la política, la normalización del robo o la corrupción, o la aceptación de supuestas diferencias “naturales” para condicionar las oportunidades– tienen consecuencias claramente negativas para el ejercicio de derechos, particularmente de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad o históricamente subalternizados.

En muchos otros casos, las implicaciones de los valores sobre los derechos son menos evidentes. Por ejemplo, si una sociedad privilegia a la comunidad sobre la individualidad de las personas, esto puede limitar, en algún grado, el ejercicio de las libertades de las personas, al mismo tiempo que garantiza otros derechos como

la protección o la seguridad. Algo parecido puede decirse de la priorización de lo local o nacional sobre lo internacional o lo global, así como de la disposición a confiar en los demás. Las consecuencias de este tipo de valores sobre el ejercicio de derechos dependen, en gran medida, del contexto y de las circunstancias inmediatas que entran en juego; no puede asumirse que tengan, por regla general, un efecto favorable o desfavorable sobre los derechos de las personas.

Tampoco es cierto que los valores sean el único factor que determina las condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas. El marco legal y las capacidades estatales para garantizar estos derechos son igualmente importantes. También lo son las condiciones materiales de desarrollo de una sociedad, de la que dependen sus capacidades de garantizar a todas las personas recursos y servicios que generan oportunidades. Sin embargo, los valores tienen una importancia especial en tanto actúan, por un lado, como reguladores del trato y el intercambio entre los ciudadanos y, por otro, como moduladores de lo que el Estado y sus instituciones hagan –esto si se parte del supuesto de que en gobiernos democráticos los Estados no pueden aplicar permanentemente políticas que vayan en contra de los principios y creencias de sus ciudadanos.

Los valores también son relevantes para el ejercicio de una segunda dimensión fundamental de la ciudadanía democrática: las responsabilidades. Los valores determinan qué tan dispuestas están las personas para asumir actitudes positivas, de responsabilidad en sus comunidades y en el país. Al mismo tiempo, los valores marcan la disposición de las personas a cumplir la ley y actuar sobre la base de principios éticos, entendiendo las consecuencias de sus acciones desde un plano que considera a los otros como individuos y como colectividad. Derechos y responsabilidades están profundamente imbricados como parte de la vida en sociedad, y están atravesados por valores, creencias y normas sociales que les dan sentido y permiten su realización cotidiana.

1.2 Transformación de las sociedades y cambios en los valores

Es importante tener en cuenta que los valores, como parte de la cultura de una sociedad, tienden a ser estables, a mantenerse en el tiempo. Pueden cambiar, transformarse, al igual que las convicciones de los individuos también cambian, pero lo hacen por lo general de manera gradual, lentamente en el tiempo. A nivel internacional, la EMV ha estudiado el cambio de valores en distintas sociedades, bajo el supuesto de que un mayor desarrollo material –es decir, una superación de las necesidades básicas que garantizan la reproducción social– deberían propiciar

sociedades con valores más altruistas.

En términos generales, la evolución de los valores de las sociedades en el mundo parece estar dirigido a un conjunto de principios más modernos, más seculares y más respetuosos de las decisiones individuales (Inglehart, 1997). Pero es claro que este proceso de modernización de valores no ocurre de manera automática en todas las sociedades, ni tampoco se da de manera homogénea. Existen brechas importantes en el mundo entre los valores de distintas sociedades y, en muchos casos, también se observan brechas internas en un proceso de polarización normativa, donde los valores se agrupan en dos grandes grupos o campos, con numerosas posturas antagónicas (tal y como sucede actualmente en los Estados Unidos, por ejemplo, con una sociedad cada vez más polarizada).

En lo que se refiere a los motores de la transformación cultural, el cambio de valores puede darse de manera “natural”, como resultado de la evolución de las sociedades, que conlleva procesos de enriquecimiento intercultural, globalización o superación de las condiciones materiales asociadas a determinados valores. El reemplazo generacional también puede ser uno de los factores que consoliden el cambio de valores en una sociedad: las nuevas generaciones –los más jóvenes– pueden adoptar valores diferentes a los de sus padres o abuelos, como resultado de procesos diferenciados de socialización, de su incorporación a la globalización por medio de la tecnología y sus posibilidades comunicacionales (Castells, 2009, 2024; PNUD, 2009), por necesidades materiales diferentes o como resultado de un proceso histórico singular en el que ciertos elementos normativos suelen tener prioridad sobre otros (Carballo y Moreno, 2013; Inglehart y Welzel, 2005; Norris y Inglehart, 2009).³

No obstante, la transformación de los valores de una sociedad también puede ser resultado de la acción deliberada de colectivos y agentes sociales que buscan activamente cambiar las pautas culturales relacionadas con los valores o, por el contrario, mantenerlas, conservarlas y proyectarlas hacia el futuro (Norris e Inglehart, 2003; UNDP, 2023). Esta diferencia permite distinguir a “conservadores” y “transformadores” en términos sociales, ambos campos con roles muy activos en la búsqueda de la definición de los principios normativos centrales de las sociedades en todo el mundo contemporáneo.

La disputa por los valores se ha convertido en un terreno cada vez más importante

3. Esto pone de relieve la importancia de conocer los valores y prioridades de los más jóvenes en perspectiva comparada con las generaciones mayores. A pesar de su relevancia, los estudios que permiten contrastar las actitudes, valores y preferencias de las personas desde un enfoque intergeneracional no son frecuentes, ni a nivel global ni en América Latina y Bolivia.

a nivel mundial. Distintas colectividades y muchas organizaciones e instituciones participan en lo que se ha denominado como “guerra cultural”, mediante la que se trata de controlar (transformar o preservar) los valores de las sociedades. Así, el campo de la política está cada vez más entrelazado con esta disputa cultural por los valores centrales de una sociedad, los cuales pueden ser, además, institucionalizados a través de la labor estatal (con la regulación o la creación –o no– de entidades y centros de desarrollo de distintas temáticas). En consecuencia, las candidaturas políticas en todo el mundo reflejan cada vez de manera más clara diferencias no solo programáticas, sino profundamente culturales. La “guerra cultural” contemporánea tiene en la política democrática uno de sus campos de batalla principales.

1.3 Transformación de valores y derechos en Bolivia

Las tensiones de la “guerra cultural” en torno a los valores sociales no son ajenas a Bolivia. Las disputas entre conservadores y liberales locales se asemejan bastante a las que se observan en cualquier otro lugar del mundo, y encuentran sus trincheras más profundas en temas como el derecho al aborto, el papel de la religión en la sociedad, la oposición entre orden y autonomía, o el reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales. No se trata de una disputa menor, ya que refuerza los clivajes existentes en términos normativos en la sociedad y enfrenta visiones que hacen énfasis en los derechos de las personas frente a otras en las que se priorizan las costumbres y las virtudes morales colectivas.

En Bolivia, además de la pugna en torno a estos temas “clásicos” de la guerra cultural global, existe una tensión significativa entre los valores occidentales y aquellos que se atribuyen a los pueblos indígenas. Los valores que forman parte de las culturas tradicionales de los pueblos indígenas –particularmente andinos–, tendrían cualidades distintas al énfasis en la democracia liberal, el mercado y el individuo; se centrarían más bien en lo comunitario y en una relación de respeto a la naturaleza que adquiere un carácter espiritual.

Algunos intelectuales bolivianos insisten en destacar las diferencias (reales o no) entre las visiones occidentales y modernas, y los valores de la cosmovisión andina o amazónica (aunque estos últimos no necesariamente provengan de un conocimiento histórico y etnográfico riguroso, sino de interpretaciones basadas en información limitada) (Alvizuri, 2009; Mansilla, Gamboa y Alcocer, 2014; Rivera C.,

2008).⁴ Para ciertos autores, la reivindicación nostálgica de los supuestos valores ancestrales de los pueblos indígenas respalda –muchas veces– actitudes autoritarias y antidemocráticas (Mansilla, 2023). Para otros, en cambio, la exclusión de la cultura y los valores de los pueblos originarios devela actitudes racistas y discriminatorias (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2023). Éste es, sin duda, un tema central del debate contemporáneo boliviano.

Durante los últimos 20 años, el Estado boliviano ha tomado partido por la posición que reivindica las culturas de los pueblos originarios y sus valores. Este respaldo se ha dado en el marco de una polémica que alcanza la definición misma de la identidad del Estado y la nación boliviana, que de acuerdo a la Constitución aprobada en 2009 adquiere un carácter plurinacional con un horizonte deseado de interculturalidad. Sin embargo, más allá del ámbito simbólico y de las declaraciones oficiales, la evidencia sobre avances concretos hacia una sociedad más plural y respetuosa de las diferencias sigue siendo limitada.

Para complejizar aún más la situación, las distintas versiones de los valores “correctos” para la sociedad boliviana entran en contacto con una amplia y dinámica cultura popular de orden mestizo y urbano (Laserna, 2023; Sánchez Patzi, 2017). Los valores que transmite esta cultura popular –o que se expresan en sus manifestaciones–, tienen contenidos éticos (y estéticos) cuando menos cuestionables y a menudo reproducen mensajes machistas, violentos y de celebración del derroche (Mansilla, 2017). Además, la raigambre popular que han adquirido las iglesias evangélicas amplifica una agenda marcadamente conservadora, que gana muchos adeptos entre sectores emergentes.

Estos contenidos conviven y compiten con mensajes de resistencia y reivindicación de derechos, desde posturas de activismo social *con arreglo a valores* en torno a un sinfín de temas, que van desde el ecologismo hasta el feminismo, pasando por las reivindicaciones de las tribus urbanas. En conjunto, la “guerra cultural” se manifiesta, por lo general, como una cacofonía de difícil interpretación para las personas que son, al mismo tiempo, soldados y territorios en disputa.

4. Es evidente que existen valores propios de las culturas indígenas en Bolivia, los cuales tienen gran valor y pueden representar esquemas de pensamiento y acción diferentes a los de la corriente central en la sociedad boliviana, sin embargo, muchas veces se atribuye a las culturas indígenas elementos normativos desde una mirada colonial propia del “buen salvaje”. Esto pasa a menudo cuando se discute los supuestos valores de los pueblos indígenas relacionados con la naturaleza y su conservación.

2. La Encuesta Mundial de Valores: Un programa de estudio comparativo internacional

La EMV es un programa de investigación comparativa internacional vigente desde hace varias décadas. Se trata de uno de los proyectos de investigación más ambiciosos y extensos que se han emprendido en el campo de las ciencias sociales comparadas en el mundo. Su objetivo es investigar sistemáticamente los valores, creencias y actitudes de las personas en diversas sociedades, así como sus cambios a lo largo del tiempo. La EMV se ha convertido en una fuente fundamental de información para el estudio de la relación entre cultura, desarrollo, democracia y bienestar, así como para la elaboración de políticas públicas y líneas de acción institucional relacionadas a estos temas en todo el mundo.

Los orígenes de la EMV están estrechamente ligados con el trabajo del sociólogo Ronald Inglehart, cuya teoría sobre el cambio generacional de valores se basó en las diferencias relacionadas a la satisfacción de necesidades materiales de la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La teoría del posmaterialismo, planteada por Inglehart, sostiene que las generaciones que crecieron con mayor seguridad económica durante la posguerra tendrían que haber desarrollado un conjunto de valores distintos a los de generaciones anteriores: en lugar de enfocarse en necesidades materiales básicas (como seguridad física y económica), comenzaron a priorizar valores como la libertad de expresión, la participación política, la realización personal y la igualdad de género (Norris e Inglehart, 2003).

La EMV opera como un proyecto autofinanciado localmente, con un comité central dirigido desde la sede de la organización en Viena, Austria. Esto quiere decir que cada una de las entidades a cargo de la encuesta es responsable del financiamiento de la misma en su país. Por otra parte, la sede de la EMV es responsable de definir los instrumentos finales, acompañar el proceso, garantizar la calidad y comparabilidad de la data, así como de producir y publicar las bases de datos comparativas.

Actualmente, el cuestionario de la EMV incluye preguntas orientadas a medir valores, preferencias y actitudes de las personas en las siguientes categorías temáticas: a) valores sociales, actitudes y estereotipos; b) felicidad, bienestar y trabajo; c) capital social, confianza y pertenencia a asociaciones; d) posmaterialismo; e) seguridad; f) valores económicos, corrupción y migración; g) ciencia, tecnología, medio ambiente y cambio climático; h) valores religiosos; i) valores éticos y normas; j) planificación

familiar; k) interés y participación política; l) cultura y sistemas políticos; y m) datos sociodemográficos. Los cuestionarios tanto de la EMV como de la EVA aplicados en Bolivia pueden ser consultado en la página de internet que Ciudadanía ha habilitado para el proyecto.⁵

La EMV se aplica sobre muestras estadísticamente representativas de la población adulta de cada país, siguiendo criterios rigurosos en la definición de la muestra y la selección de los entrevistados. Los cuestionarios se adecúan para que funcionen de acuerdo a la realidad de cada país, adaptando la redacción de las preguntas a las formas lingüísticas e idiomáticas locales, pero haciendo énfasis en la aplicación del cuestionario completo, de manera que se garantice la comparabilidad entre los países a lo largo del tiempo.

2.1 Alcance y cobertura

La EMV se ha realizado a lo largo de siete “olas”, ciclos o rondas de encuestas comparativas internacionales. La primera ola se llevó a cabo entre 1981 y 1984 en 10 países de seis continentes; el único país de América Latina que participó fue Argentina. La segunda ronda se realizó entre 1990 y 1994, con la inclusión de 21 países; sumándose Brasil y Chile por parte de América Latina.

El gran salto en la cobertura de la EMV se produjo en la tercera ronda, aplicada desde 1995 hasta 1999 en 57 países. En América Latina, además de los tres países referidos en la ronda anterior, se incorporó a Colombia, República Dominicana, El Salvador, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. La cuarta ronda (2000-2004) abarcó 41 países, mientras que la quinta (2005-2009) se extendió a 58 países. En la sexta ronda (2010-2014) participaron un total de 60 países.

La ronda de encuestas más reciente con información disponible en la base de datos de la EMV es la séptima, levantada entre 2017 a 2022, sobre un récord de 66 países. Ésta fue la primera ronda en la que se obtuvieron datos para Bolivia. En total, a lo largo del funcionamiento del proyecto se han realizado encuestas en más de 100 países del mundo, que en conjunto representan el 90% de la población mundial.

La información proveniente de la EMV en sus siete rondas completas (1981-2022) es de acceso público y gratuito. Cualquier persona o institución interesada en emplear los datos puede descargar las bases de datos comparativas completas del sitio web oficial de la EMV.⁶ La octava ronda de la encuesta, a la que pertenecen los datos

5. Véase: <https://ciudadaniabolivia.org/publicacion/informe-nacional-de-la-8va-ronda-de-la-encuesta-mundial-de-valores-en-bolivia-y-de-la-2da-ronda-de-la-encuesta-de-valores-a-adolescentes/>

6. Véase: www.worldvaluessurvey.org

presentados aquí, estará también disponible una vez se concluyan las encuestas en los distintos países previstos, lo que se estima ocurrirá en 2026.

3. La Encuesta Mundial de Valores y la Encuesta de Valores a Adolescentes en Bolivia

La realización de la EMV en Bolivia tiene como propósito generar información que contribuya a producir conocimiento sobre los valores y las preferencias de las personas, a partir de la aplicación del instrumento comparativo propuesto por la EMV. El énfasis reside en la combinación de información y conocimiento, ya que el objetivo no es solamente alimentar la base de datos comparativa internacional de la EMV, sino también producir conocimiento y reflexión sobre la sociedad boliviana a partir de los datos obtenidos. Este informe responde a ese propósito, centrando su atención en la relación entre los valores y las condiciones sociales para el ejercicio de derechos por parte de las personas.

Como se mencionó anteriormente, la EMV se realizó en Bolivia por primera vez en 2017, en el marco séptima ronda global de la encuesta. Bolivia no había sido incluido antes en ninguna de las seis rondas previas debido a la falta de interés, a las dificultades en el financiamiento y a las capacidades limitadas de las instituciones locales para poner en práctica la encuesta. Para concretar la realización de la encuesta, se generó una alianza entre distintas instituciones, con el liderazgo comprometido de Amaru Villanueva, quien desde el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia desarrolló el marco institucional para el estudio. La alianza que posibilitó la realización de EMV en Bolivia por primera vez incluyó a dos agencias de Naciones Unidas –UNICEF y UNFPA–, a Oxfam Internacional y a Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, como entidad ejecutora y socio académico del proyecto en el país.⁷

La encuesta correspondiente a la octava ronda de la EMV se realizó en Bolivia en 2024, manteniendo a las tres últimas instituciones como socios del proyecto. Esta nueva ronda de la EMV fue posible gracias al interés y compromiso de UNFPA en Bolivia, que aportó la mayor parte de los fondos para la obtención de los datos y la elaboración del informe. También fue importante el apoyo de Oxfam Internacional, principalmente en la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA). Ciudadanía

7. La información sobre la EMV 2017 en Bolivia puede consultarse en las publicaciones que se generaron a partir de la información de Ciudadanía 2018a, 2018b, 2019.

nuevamente cumplió el rol de entidad ejecutora y responsable de la investigación para este estudio.

Además de la EMV aplicada sobre una muestra representativa de la población adulta del país, se decidió extender la encuesta sobre una muestra correspondiente a la población de entre 12 y 17 años. Esto permite comparar los datos de la población adulta con los de la nueva generación, no solo explorando de manera más directa hipótesis de cambios generacionales en los valores, sino también considerando a los adolescentes como sujetos de opinión (algo poco frecuente en los estudios de este tipo). De esta manera nace la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA), una innovación con respecto a la EMV que se aplica en Bolivia y que amplía los alcances del estudio (Ciudadanía, 2018b).

La EVA se aplicó en 2024 de forma paralela y simultánea a la encuesta de adultos, utilizando una versión adaptada y reducida del cuestionario. El levantamiento de información se realizó aplicando un conjunto de protocolos de trabajo que garantizan los derechos de los adolescentes entrevistados, lo que implica el consentimiento informado por parte de los padres o apoderados legales de los menores de edad, refrendado mediante firma. La sección de descripción metodológica del estudio presenta más información sobre estos protocolos de protección de los participantes en la encuesta.

3.1 Características de la EMV y la EVA de 2024

La EMV 2024 en Bolivia se llevó a cabo empleando una muestra estadísticamente representativa de la población adulta boliviana, con un total de 1.200 entrevistas realizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2024.⁸ Las entrevistas se practicaron mediante una modalidad cara a cara en los hogares de los entrevistados, por parte de un equipo de encuestadores profesionales de Ciudadanía, específicamente capacitados para este estudio. Se emplearon dispositivos electrónicos de campo (y no papel) para el levantamiento de la información, conforme la modalidad de encuesta CAPI (Computer Assisted Personal Interview, por sus siglas en inglés).⁹

8. Es importante tener presente que la EMV/EVA se llevó a cabo en Bolivia en un contexto de agudización de una crisis de múltiples dimensiones, marcada por la desconfianza y la desinstitucionalización, luego de un período más bien próspero y estable (véase Ciudadanía, 2024).

9. La realización de encuestas en la modalidad CAPI presenta importantes ventajas con respecto al trabajo de campo en papel. Por ejemplo, las encuestas CAPI evitan el error en la administración de preguntas durante la aplicación del cuestionario, facilitando el flujo de preguntas cuando existen saltos en el cuestionario. Además, se minimizan los errores y el tiempo asociados a la transcripción y se puede generar un conjunto de parámetros para mejorar la supervisión, incluyendo la verificación de la ubicación geográfica de la entrevista, la identidad del encuestador y la calidad de la lectura de las preguntas por medio de la grabación de la misma (sobre el punto ver Seligson y Moreno Morales, 2018).

La muestra corresponde a un diseño probabilístico estratificado y multietápico, con empleo de conglomerados y selección final del entrevistado mediante la aplicación de una cuota bidimensional de sexo y edad. Este diseño permite generar promedios a nivel nacional con un margen de error de $\pm 2,83$ puntos porcentuales, asumiendo un nivel de confiabilidad del 95%.¹⁰

La muestra de adultos de la EMV se complementó con la muestra de población adolescente de la EVA, aplicada mayormente en los mismos hogares en los que se hizo la encuesta a adultos. La muestra de adolescentes incluyó un total de 900 observaciones, lo que permite generar promedios nacionales con un margen de error de $\pm 3,27$ puntos (95% de confiabilidad). Debido a que las observaciones no son del todo independientes –puesto que muchos entrevistados adolescentes son hijos de los entrevistados adultos, lo que genera una correlación intra grupo–, en este estudio las muestras son comparadas, pero tratadas de manera independiente y, por lo general, no se generan resultados que combinen adolescentes con adultos. Además de ser representativa para el nivel nacional, la muestra está diseñada para generar inferencias representativas a nivel subnacional para los grupos de municipios definidos como estratos. En este sentido, se han definido tres estratos de municipios en función del tamaño poblacional, a partir de los resultados de población total por municipio del Censo de Población y Vivienda 2024:

- 1) Municipios de más de 200.000 habitantes.
- 2) Municipios entre 20.000 y 199.999 habitantes.
- 3) Municipios de menos de 20.000 habitantes.

El número de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) para cada estrato se definió de forma tal que replique la distribución de la población nacional en cada uno de estos estratos. De este modo, se asignaron 23 UPM para el primer estrato (que concentra el 46% de la población), 17 UPM para el segundo estrato (con el 33% de la población nacional), y 10 UPM para el tercero (20% de la población).

Para la EMV, se estableció un tamaño de clúster de ocho entrevistas por UPM, distribuidas en tres clústeres. Esta configuración permite aplicar una cuota bidimensional de sexo y edad que garantiza una muestra balanceada desde el clúster, de acuerdo a la composición detallada en la tabla 1.

10. El anexo digital de este documento contiene la muestra originalmente diseñada, la que finalmente se recabó, así como todos los materiales complementarios descritos en esta sección.

Tabla 1. Conformación de clústeres de la EMV (adultos)

	Grupos de edad		
	25%	50%	25%
Adultos	18 a 26	27 a 51	52 o más
Hombres	1	2	1
Mujeres	1	2	1

Fuente: Elaboración propia.

Para la EVA se definió un total de seis entrevistas por clúster, lo que también permitió la aplicación de una cuota de sexo y edad a este nivel (ver tabla 2).

Tabla 2. Conformación de clústeres de la EVA (adolescentes)

	Grupos de edad		
	12 a 13	14 a 15	16 a 17
Adolescentes	12 a 13	14 a 15	16 a 17
Hombres	1	1	1
Mujeres	1	1	1

Fuente: Elaboración propia.

El tamaño de la muestra permite estimar un margen de error de entre 4,17% y 6,33% para los estratos en la EMV, y de entre 4,82% y 7,3% para los estratos de la EVA.

El diseño polietápico de la muestra contempló, en un primer momento, la selección de municipios dentro de los estratos. Esta selección se hizo por medio de procedimientos aleatorios, con una probabilidad ajustada al tamaño de cada municipio. Posteriormente, se seleccionaron también de forma aleatoria las zonas censales donde se establecería cada UPM, a partir de la información cartográfica disponible. Finalmente, se seleccionaron los hogares por medio de un procedimiento sistemático que evita el sesgo en la selección. Tal como se mencionó previamente, la selección final del entrevistado se hizo aplicando una cuota de sexo y edad dentro de cada clúster.

La tabla 3 presenta la distribución final de la muestra luego de la conclusión del trabajo de campo.¹¹ La información se organiza por estrato, consignando el departamento, el municipio y el número de casos tanto para la muestra de adultos (EMV) como para la de adolescentes (EVA).

11. Como suele suceder en este tipo de estudios, algunos municipios inicialmente seleccionados tuvieron que ser reemplazados, principalmente debido a factores de conflictividad social. Esto fue posible gracias a la selección previa y aleatoria de municipios de reemplazo para cada estrato.

Tabla 3. Muestra por estrato, departamento, municipio y encuesta

Estrato	Departamento	Municipio	Número de entrevistas (EMV)	Número de entrevistas (EVA)
Más de 200.000 habitantes	Santa Cruz	Santa Cruz de la Sierra	192	144
	La Paz	El Alto	72	54
	La Paz	La Paz	72	54
	Cochabamba	Cochabamba	72	54
	Oruro	Oruro	24	18
	Chuquisaca	Sucre	24	18
	Tarija	Tarija	24	18
	Cochabamba	Sacaba	24	18
	Potosí	Potosí	48	36
	Cochabamba	Quillacollo	48	36
Más de 20.000 menos de 200.000	Santa Cruz	La Guardia	48	36
	Beni	Trinidad	24	18
	Santa Cruz	Cotoca	24	18
	Cochabamba	Villa Tunari	24	18
	Cochabamba	Tiquipaya	24	18
	Santa Cruz	Yapacaní	24	18
	Cochabamba	Vinto	24	18
	La Paz	La Asunta	24	18
	Cochabamba	Entre Ríos (Cochabamba)	24	18
	Beni	Guayaramerín	24	18
	Oruro	Challapata	24	18
	Santa Cruz	Camiri	24	18
	Chuquisaca	Monteagudo	24	18
	Tarija	Entre Ríos (Tarija)	24	18
	La Paz	Guanay	24	18
	Potosí	Colquechaca	24	18
	Oruro	Corque	24	18
	Menos de 20.000 habitantes	Tarija	Uriondo	24
La Paz		Cajuata	24	18
Cochabamba		Totora	24	18
La Paz		Puerto Acosta	24	18
Potosí		Vitichi	24	18
Oruro		Poopó	24	18
Chuquisaca		Villa Serrano	24	18
TOTAL				1.200

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Control de calidad

El proceso de levantamiento de información de campo estuvo acompañado por un procedimiento de supervisión y control de calidad que garantiza la calidad de la información y la integridad de la base de datos. Este control de calidad incluye la implementación de procedimientos que Ciudadanía habitualmente aplica para producir datos de la más alta calidad posible. Los elementos de control de calidad más relevantes que se implementaron en la EMV y la EVA para garantizar la fiabilidad de la información fueron los siguientes:

- Pruebas piloto de los cuestionarios (de adultos y adolescentes) para garantizar su comprensión y fluidez durante el trabajo de campo. Estas pruebas piloto se desarrollaron con entrevistados de distintas condiciones socioeconómicas y resultaron en ajustes a los cuestionarios finales empleados en campo.
- Diseño de protocolos de protección de sujetos humanos y consentimiento informado, de acuerdo a estándares legales nacionales y a principios internacionales de trabajo con personas. Esto fue especialmente importante para la realización de entrevistas con menores de edad.
- Capacitación amplia de los encuestadores sobre el cuestionario que emplean, así como sobre los valores y principios de las instituciones que financian y ejecutan el estudio. La capacitación incluyó la importancia de los protocolos de protección de sujetos humanos, la confidencialidad y protección de datos personales, y su aplicación.
- Acompañamiento en campo de los encuestadores por parte de un supervisor/coordinador de campo, quien facilita el trabajo con las comunidades y autoridades locales, y atiende cualquier necesidad que tengan los encuestadores o las personas consultadas sobre el proyecto. El acompañamiento también garantiza que los encuestadores hagan el trabajo de campo en los lugares previamente definidos.
- Los cuestionarios fueron cuidadosamente programados mediante un software específico para la realización de encuestas en el campo (STG) en la modalidad CAPI. La programación incluye la grabación remota del audio de la entrevista, el registro de la ubicación donde se realiza la entrevista por medio de geolocalización, la identificación del encuestador y otra información adicional (*paradata*) que se registra en el sistema con cada entrevista.
- Escucha remota de las encuestas en un plazo inferior a las 48 horas desde su realización. Esto permitió hacer recomendaciones sobre la lectura de las preguntas a los encuestadores o, cuando fue necesario, depurar y reemplazar

encuestas mientras ellos estaban todavía en las zonas de trabajo.

- Verificación de parámetros generados por el sistema: coordenadas dentro de las geocercas definidas en la muestra,¹² aplicación de cuotas de sexo y edad, duración de la entrevista e identificación de las y los entrevistadores.
- Verificación del cumplimiento de consentimiento informado, tanto por medio de la lectura de la carta dirigida a adultos como a través de la autorización escrita otorgada por los padres y/o madres para la participación de adolescentes en el estudio.

3.3 Protección de sujetos humanos participantes

La encuesta se llevó a cabo tomando en cuenta un conjunto de procedimientos dirigidos a garantizar la protección de los sujetos humanos participantes. Estos procedimientos están definidos en un protocolo que fue parte de la capacitación a los encuestadores. Algunos de los aspectos incluidos en este protocolo son los siguientes:

- Presentación personal del encuestador/a y del propósito de su visita.
- Lectura de una carta de consentimiento informado (incluida en el anexo digital de este informe). La encuesta se realiza solamente en caso de que la persona entrevistada esté de acuerdo con su contenido.
- La realización de la encuesta a adolescentes menores de edad para la muestra de la EVA solamente se realiza previa autorización de al menos uno de los padres o del representante legal del encuestado. Esta medida, si bien complejiza el proceso de levantamiento de información, es consistente con la normativa boliviana y con las consideraciones éticas en el trabajo con adolescentes.
- La entrevista se realiza considerando condiciones de confidencialidad que permitan al entrevistado sentirse seguro y en confianza con el encuestador. Esto implica procurar un espacio en el que el encuestado pueda responder sin interferencias ni juicios u opiniones de otros miembros de su familia o comunidad.
- El anonimato es fundamental para una encuesta como la EMV. Ciudadanía se

12. Las geocercas consisten en la delimitación de un espacio geográfico fuera del cual no puede realizarse la entrevista. La geocerca se establece mediante la definición de un punto con una ubicación central en la zona de trabajo (centroide), a partir del cual se define un radio donde debe realizarse la entrevista (el radio varía de acuerdo a la densidad poblacional del área). Si el encuestador se encuentra fuera de esta área, recibe un mensaje de advertencia automático del sistema. El uso de este recurso permite controlar y garantizar que las entrevistas se realicen en la zona geográfica donde fueron sorteadas inicialmente.

adhiera a los principios y estándares de las entidades internacionales para la realización de estudios de opinión pública (ESOMAR y WAPOR), en lo que se refiere a procedimientos que garanticen el anonimato y el consentimiento informado de los participantes.¹³

- Ciudadanía garantiza que la información personal de cada entrevistado (como su nombre), no se guarde en el mismo archivo que contiene las respuestas a la entrevista. La información personal obtenida se conserva únicamente para fines de supervisión del trabajo de campo, pero en un archivo diferente al de los resultados de la encuesta. La información personal se mantiene de forma segura y no se comparte ni con la sede internacional de la EMV ni con los financiadores del proyecto en Bolivia.
- La encuesta incluye procedimientos específicos de aplicación en caso de que los encuestadores encuentren una persona que esté en riesgo evidente o que sea víctima de violencia de algún tipo. Este procedimiento pasa por el contacto de Ciudadanía con las autoridades correspondientes para que asuman las medidas de protección necesarias.
- Los protocolos de protección de sujetos humanos contemplan acciones específicas que deben tomar los encuestadores en caso de que su seguridad física resulte comprometida de alguna manera. Estas acciones incluyen la participación inmediata de la institución y la gestión correspondiente con las autoridades comunales y estatales para garantizar el bienestar del equipo de campo.

4. Características sociodemográficas de la muestra

La muestra diseñada y aplicada para la realización de la EMV en Bolivia en 2024 es una muestra autoponderada que, debido al elemento de aleatoriedad en la selección de los participantes, debería reflejar con precisión razonable los parámetros realmente existentes en la población boliviana. Algo similar sucede con la muestra de la EVA, en la medida en que se trata de una muestra anidada en la muestra de la población adulta.

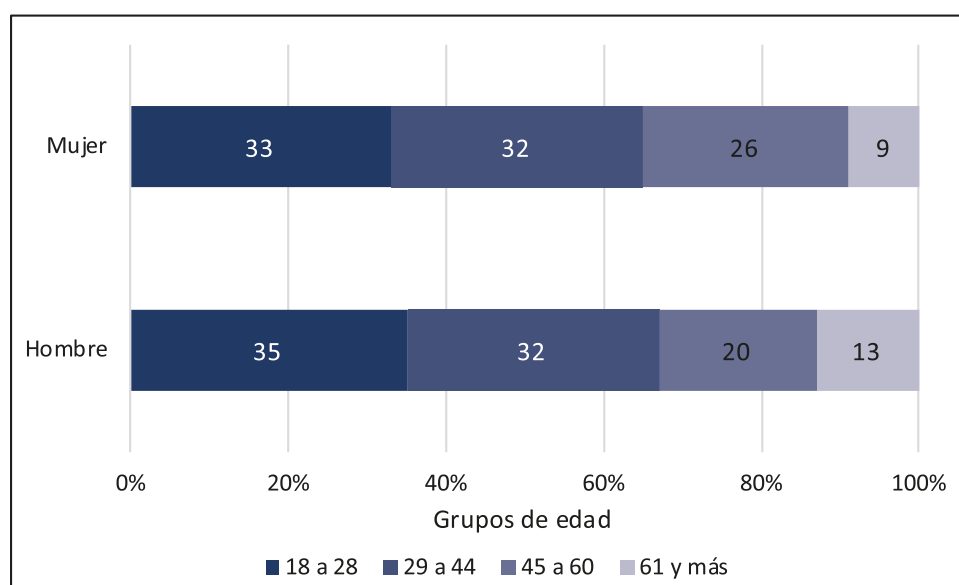
Ambas muestras –tanto la de adultos como la de adolescentes– presentan una distribución controlada: 50% de hombres y 50% de mujeres. Este equilibrio es resultado de la aplicación de la cuota que incluye la variable de sexo en su definición,

13. ESOMAR (por sus siglas en inglés) es la Sociedad Europea para la Investigación de Opinión y Marketing y su Código de Ética está disponible en: <https://esomar.org/code-and-guidelines/icc-esomar-code>. Por otra parte, el Código de Ética de la Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés) está disponible en: <https://wapor.org/about-wapor/code-of-ethics/>.

garantizando una muestra balanceada.

En cuanto a la distribución por edades, la muestra de adolescentes está distribuida de manera relativamente constante entre las distintas edades (de 12 a 17 años¹⁴), con porcentajes que oscilan entre el 14% y el 17% para cada una de las categorías. La muestra de adultos también obedece a una distribución balanceada por edades, con preeminencia de adultos jóvenes en una proporción similar a la que se podría esperar según los parámetros conocidos de la población boliviana. El gráfico 1 muestra esta distribución.

Gráfico 1. Distribución de la muestra por grupos de edad, según sexo



Fuente: Elaboración propia.

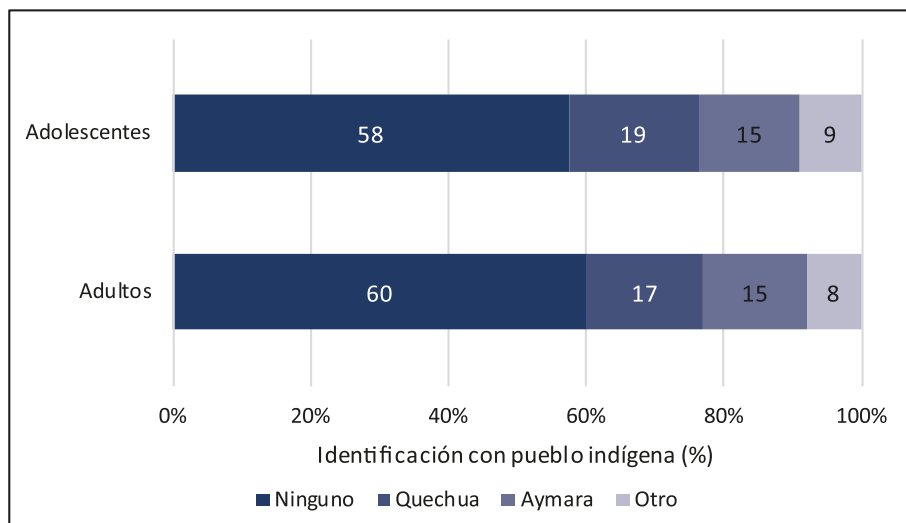
La encuesta incluyó la misma pregunta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia utilizó en el Censo 2024 para medir la autoidentificación con algún pueblo indígena. Los resultados de esta pregunta muestran que alrededor de cuatro de cada diez bolivianos se identifica con alguno de los pueblos indígenas del país; esta cifra es muy similar –y estadísticamente indistinta– a la reportada por el INE en agosto de 2025.¹⁵ Como se sabe por estudios previos (Molina y Albó, 2006; Moreno Morales, 2019), las categorías identitarias con mayor autoidentificación son la “quechua” y,

14. El análisis de la información trata de manera diferenciada a los chicos de 12 a 14 años y a los de 15 a 17.

15. El INE presentó, en agosto de 2025, los resultados del CNPV de 2024, que en la pregunta sobre autoidentificación encuentra que el 38,7% de los bolivianos se autoidentifican con alguno de los pueblos indígenas del país (véase: <https://cpv2024.ine.gob.bo/index.php/resultados/sociales-y-economicas/resultados-caracteristicas-soc-eco-autoidentificacion/>).

luego, “aymara”, muy por encima de los otros pueblos indígenas minoritarios del país.¹⁶

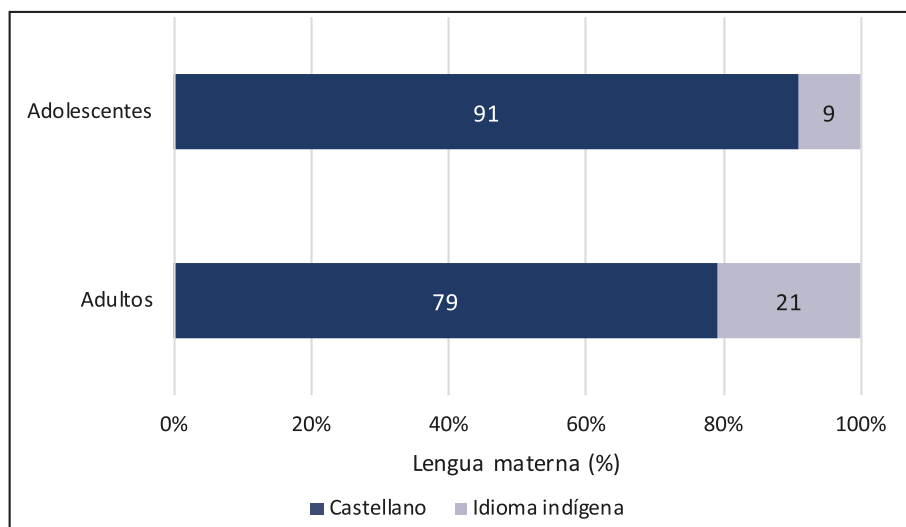
Gráfico 2. Distribución de la muestra según autoidentificación con un pueblo indígena, según cohorte



Fuente: Elaboración propia.

La lengua materna predominante en la población boliviana contemporánea es el castellano. Entre adolescentes, esta proporción es aún más grande mayor: más del 90% de los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen al castellano como el idioma en el que aprendió a hablar. El gráfico 3 siguiente muestra esta información.

Gráfico 3. Distribución de la muestra según lengua materna, por cohorte

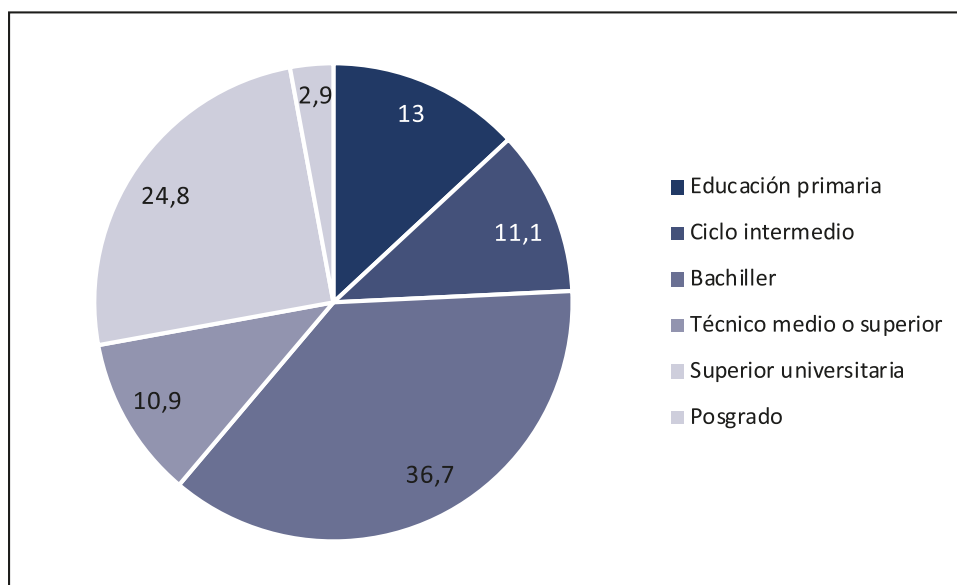


Fuente: Elaboración propia.

16. En el grupo de “otros” se incluyen, además de todas las categorías reconocidas para identificar a pueblos indígenas en Bolivia, ya sea por el idioma o su autodenominación (como, por ejemplo, mojeño o qaraqara), muchos otros que no identifican con claridad a qué pueblo indígena se adscriben o responden (véase Molina B. y Albó, 2006).

También es relevante la información sobre el máximo nivel educativo alcanzado por los entrevistados para la EMV. La distribución de respuestas según grupos de nivel educativo es consistente con lo que se conoce de la población boliviana, con una mayoría que declara haber alcanzado educación secundaria (bachiller) o inferior. El gráfico 4 muestra estos datos.

Gráfico 4. Distribución de la muestra según máximo nivel educativo alcanzado

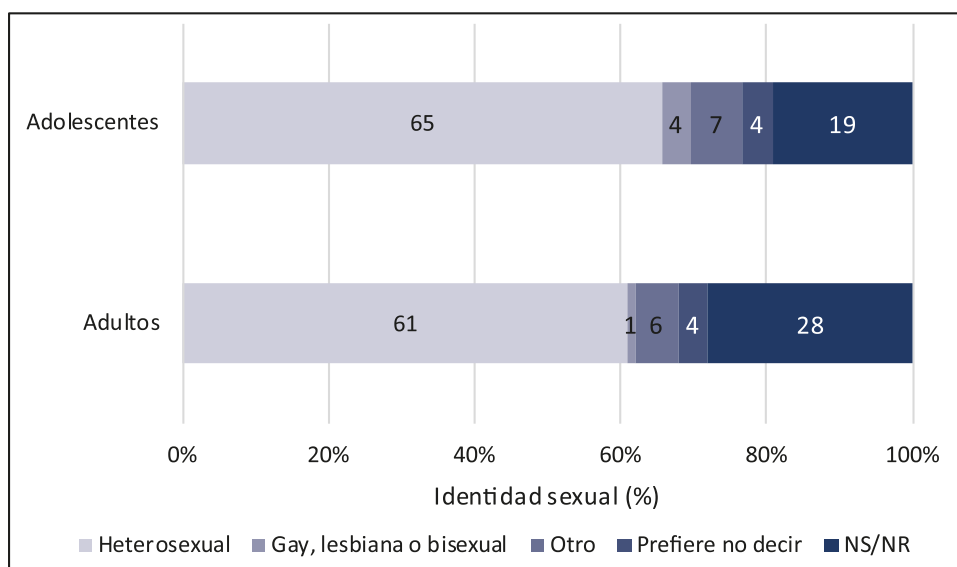


Fuente: Elaboración propia.

Otras preguntas incluidas en la encuesta permiten explorar las características de la población boliviana que no suelen ser recabadas por otros estudios. La primera se refiere a la identidad sexual.¹⁷ Los resultados muestran que alrededor de dos terceras partes de la población boliviana se define como “heterosexual”, mientras que los que se reconocen como gay, bisexual o lesbiana representan el 1% de los adultos y el 4% de los adolescentes. Alrededor del 10% se identifican con “otra” categoría o prefieren no responder. Hay un porcentaje considerable (registrados entre quienes “no saben”) que no entiende o no responde esta pregunta, con una proporción más alta entre los adultos que entre los adolescentes.

17. La pregunta que se aplicó fue la siguiente: “Personalmente, ¿usted se identifica como heterosexual, lesbiana, gay, bisexual u otro? 1. Heterosexual 2. Lesbiana 3. Gay 4. Bisexual 5. Otro 6. Prefiere no decir”.

Gráfico 5. Distribución de la muestra según identidad sexual, por cohorte



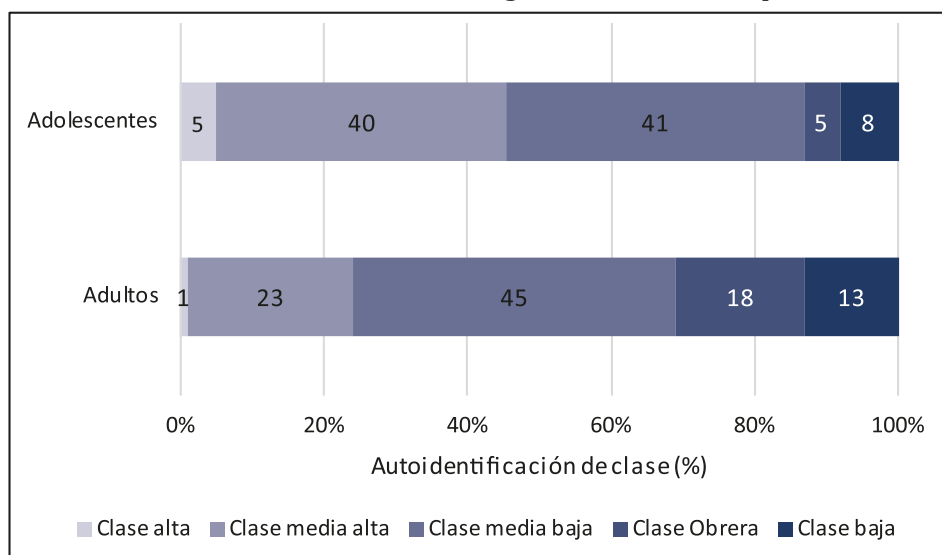
Fuente: Elaboración propia.

La segunda pregunta tiene que ver con la identidad de clase. La categoría mayoritaria es la de “clase media baja”, con 45% de los adultos y 41% de los adolescentes, lo cual confirma estudios previos sobre el tema (Laserna *et al.*, 2018).¹⁸ Lo más relevante, sin embargo, es que la proporción de adolescentes que se identifica como “clase alta” o “clase media alta” es mucho mayor que la de los adultos (el porcentaje es casi el doble, 45% vs 24%). Esto, sin duda, llama la atención y podría reflejar tanto una tendencia aspiracional en las respuestas como un desconocimiento de los más jóvenes en relación a las características socioeconómicas de sus familias.

18. La pregunta empleada por la EMV es la siguiente: “La gente algunas veces se describe a sí misma como de clase alta, clase media alta, clase media baja, clase obrera o clase baja. Usted se describiría como de.....:”

1. Clase alta;
2. Clase media alta;
3. Clase media baja;
4. Clase obrera
5. Clase baja”.

Gráfico 6. Distribución de la muestra según identidad de clase, por cohorte



Fuente: Elaboración propia.

5. Enfoque y metodología del informe

Este informe busca generar conocimiento sobre las condiciones para el ejercicio de derechos en Bolivia, a partir de un diagnóstico de los valores y actitudes predominantes registrados por medio de la EMV y la EVA de 2024. La perspectiva adoptada por el informe tiene un componente comparativo y otro analítico que incluye una estrategia metodológica basada en análisis estadísticos multivariados.

En términos comparativos, el análisis de información planteado en este informe busca hacer tres comparaciones principales. En primer lugar, analizar cómo han evolucionado los valores de la sociedad boliviana desde la última vez que se aplicó la encuesta, en 2017. Se trata de una comparación temporal, en la que la dirección del cambio de valores debe dar pautas sobre el rumbo que sigue el país. El instrumento empleado permite hacer esta comparación, puesto que la mayoría de las preguntas realizadas en 2024 también se plantearon en 2017.

En segundo lugar, la comparación se da entre la muestra de la población adulta del país y la población adolescente, es decir, entre las encuestas de la EMV y la EVA. Esta comparación es útil en el marco de la discusión de un posible cambio generacional de valores, por medio del cual las nuevas generaciones de bolivianos tendrían valores y orientaciones distintos de los de la población adulta. Esta mirada se complementa con una comparación de los datos de la EMV según grupos de edad, lo que permite comparar a los adultos jóvenes (18 a 28 años), con los mayores, divididos a su vez en grupos de 29 a 44, 45 a 60 y más de 60 años.

La tercera comparación se hace entre los países incluidos en la octava ola de la EMV. La encuesta tiene la virtud de realizar las mismas preguntas en todos los países en los que se aplica, lo que maximiza las posibilidades de comparación internacional. Bolivia fue uno de los primeros países en aplicar la EMV en esta ronda, por lo que el número de países disponibles para las comparaciones hasta mediados de 2025, cuando se cerraba la redacción de este informe, era todavía limitado.

En términos analíticos, la metodología empleada en el análisis de la información permite identificar relaciones entre variables que han demostrado ser robustas en análisis estadísticos más rigurosos. Cada una de las relaciones bivariadas que se presentan en el documento –como, por ejemplo, la que muestra que el sentido de pertenencia a la nación boliviana es más fuerte entre quienes se identifican como indígenas– resulta de un análisis de regresión multivariada, logística o lineal, que busca identificar efectos independientes de distintas variables sobre aquellas que son el foco de atención en cada capítulo. En todo el estudio se usó una especificación básica de modelo multivariado que incluye las siguientes variables dependientes referidas a las y los entrevistados: área de residencia (urbana o rural), región del país (oriente, occidente o valles), edad (dividida en grupos), sexo (hombre o mujer), autoidentificación con un pueblo indígena, primer idioma hablado en el hogar (castellano o idioma indígena), nivel de ingreso (en grupos de ingreso), nivel educativo y nivel educativo de la madre del entrevistado, que sirve como *proxy* del nivel socioeconómico del hogar del que proviene la persona. Sobre la base de este modelo inicial, los análisis realizados para los distintos capítulos incluyeron variables relevantes específicamente para la temática específica tratada.

Para facilitar la presentación de la información, se optó por gráficos sencillos que representan pocas variables –una, dos o, en algunos casos, tres– variables al mismo tiempo.

El informe está dividido en nueve capítulos temáticos que, junto con éste, dan cuenta de la evolución de los valores de adultos y adolescentes en Bolivia entre 2017 y 2024. El segundo capítulo del informe discute información relacionada a los valores “básicos” de la sociedad boliviana: aquellos que son priorizados por las personas para la educación de sus hijos e hijas y los que son centrales en sus vidas. El capítulo siguiente plantea información relacionada con el sentido de pertenencia de las bolivianas y bolivianos hacia la nación, como comunidad política, explorando también las percepciones sobre migración, organismos internacionales y algunos países relevantes en el contexto internacional. El cuarto capítulo se enfoca en los valores económicos, tratando de dilucidar cuáles son aquellos que orientan las actitudes

de la sociedad boliviana en relación a la economía. El quinto capítulo se concentra en la democracia y su comprensión por parte de la ciudadanía en Bolivia; esto se hace a través de la construcción de un conjunto de índices que agregan información de la encuesta para distintas dimensiones de la democracia. El sexto capítulo pone atención en una temática con relevancia creciente en las sociedades contemporáneas: la forma en la que la gente entiende y valora la ciencia y la tecnología, y cómo estas valoraciones se relacionan con la religiosidad. El séptimo capítulo se enfoca en los valores y las actitudes relevantes para la equidad de género, explorando las bases normativas de la desigualdad entre hombres y mujeres. El octavo capítulo se enfoca en una temática que había llamado fuertemente la atención en la encuesta de 2017: los bajos registros en relación a la confianza interpersonal. Por otra parte, el noveno capítulo se enfoca solamente en la EVA a fin de dar cuenta de las actitudes y valores de los adolescentes referidos a sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo una valoración de los servicios a los cuales acceden. Finalmente, en el capítulo diez se presenta un balance de los valores de los adolescentes en Bolivia, adoptando una mirada comparativa intergeneracional y temporal.

Referencias

- Alvizuri, Verushka (2009). *La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952-2006)*. Santa Cruz: El País.
- Carballo, Marita y Moreno, Alejandro (coord.) (2013). *El cambio de valores en América: Hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores* (Cámara de Diputados Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Ed.). México D.F.
- Castells, Manuel (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Castells, Manuel (2024). *Advanced Introduction to Digital Society*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Ciudadanía (2018a). *Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y Ciudadanía. Recuperado de: https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017_0.pdf
- Ciudadanía (2018b). *Los valores sociales de la juventud en Bolivia* (Daniel E. Moreno Morales, Ed.). La Paz: Ciudadanía, CIS, UNICEF, Oxfam, UNFPA.

- Ciudadanía (2019). *Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia* (CIS, UNICEF). La Paz. Recuperado de:
https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Encuesta_Mundial_Valores.pdf
- Ciudadanía (2024). *La democracia en ojos de la gente. 25 años de cultura política en Bolivia* (Daniel E. Moreno Morales, Ed.). La Paz: Ciudadanía, KAS, Plural editores.
- Inglehart, Ronald (1997). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Social Change in 43 Societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald y Welzel, Christian (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511790881
- Laserna, Roberto; Moreno Morales, Daniel E.; Zegada Claire, María Teresa; Ramírez Soruco, Alejandra; Rivera, Alberto y Komadina, George (2018). *Chicha y limonada. Las clases medias en Bolivia*. La Paz: CERES, Plural.
- Laserna, Santiago (2023). *Economía creativa en Bolivia*. La Paz: Plural, CERES.
- Mansilla, H. C. F. (2017). La cultura popular como manifestación de conservadurismo cotidiano. Observaciones dispersas sobre el retroceso de las normativas éticas y estéticas en la actualidad latinoamericana. *Trayectorias*, 19, 3-22.
- Mansilla, H. C. F. (2023). Una aproximación crítica a la filosofía andina. *Enfoques*, XXXV(2).
- Mansilla, H. C. F.; Gamboa, Franco y Alcocer, Pamela (2014). *Una disyuntiva complicada. Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la globalización*. La Paz: PIEB.
- Molina B., Ramiro y Albó, Xavier (2006). *Gama étnica y lingüística de la población boliviana*. La Paz: PNUD.
- Moreno Morales, Daniel E. (2019). The mysterious case of the disappearing Indians: changes in self-identification as indigenous in the latest inter-census period in Bolivia. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 1-20. doi:10.1080/17442222.2019.1612829
- Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2003). *Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change Around the World*. New York: Cambridge University Press.

Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2009). *Cosmopolitan communications: Cultural Diversity in a Globalized World*. Cambridge University Press.

PNUD (2009). Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010. Buenos Aires: PNUD.

Rivera C., Silvia (2008). Violencia e interculturalidad. Paradojas de la etnicidad en la Bolivia de Hoy. *Revista Willka, El Alto*, 2.

Sánchez Patzi, Mauricio (2017). *La ópera chola: música popular en Bolivia y pugnas por la identidad social*. La Paz: Plural, IFEA.

Seligson, Mitchell A., y Moreno Morales, Daniel E. (2018). Improving the Quality of Survey Data Using CAPI Systems in Developing Countries. En Lonna R. Atkeson & R. Michael Alvarez (Eds.), *The Oxford Handbook of Polling and Survey Methods*.

UNDP (2023). *2023 Gender Social Norms Index*. Recuperado de: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/gsni202303pdf.pdf>

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (2023). *Informe del vivir bien*. Recuperado de:

https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/informe_del_vivir_bien_epb.pdf

CAPÍTULO 2:

Los valores sociales en Bolivia: Señales de un lento cambio cultural

Ricardo Dacosta

Introducción

En sus más de cuarenta años de existencia, la Encuesta Mundial de Valores (EMV) ha medido la distribución y evolución de valores y actitudes sociales relacionados con varias dimensiones de la vida social en los distintos países en los que se ha llevado a cabo. Entre otras cuestiones, la EMV mide las actitudes hacia la autoridad y hacia la autonomía individual, los valores asociados a la supervivencia y a la autoexpresión, y los niveles de tolerancia hacia la diversidad. Este capítulo se centra en analizar la situación de estas dimensiones en Bolivia, a partir de los datos de la octava ronda de la EMV, llevada a cabo en 2024, y su evolución desde 2017, cuando se realizó la séptima ronda internacional de la EMV en el país. Además, se analizan las diferencias entre adultos (mayores de 18 años) y adolescentes (de 12 a 17 años), gracias a los datos de la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA), realizada de forma simultánea a la EMV en Bolivia.

En las últimas décadas, Bolivia ha mostrado avances sólidos en varios indicadores de desarrollo económico y mejoras moderadas, pero tangibles, en algunos indicadores de bienestar social. La bonanza económica vivida entre mediados de las décadas del 2000 y 2010 ha supuesto unos niveles de crecimiento y estabilidad económica pocas veces vistos en la historia reciente del país. Sin embargo, estos logros se han visto amenazados en los últimos años, particularmente a partir de la crisis política de 2019, de la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, de la delicada situación económica que atraviesa Bolivia.

Las últimas décadas se han caracterizado también por cambios importantes en otros ámbitos. Por ejemplo, los avances en la tecnología –particularmente, en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)–, y la ampliación de su acceso y cobertura han permitido una mayor interconexión de la sociedad boliviana,

así como una mayor exposición a los debates sociales de escala global.¹

Por otro lado, el país ha emprendido transformaciones significativas en las instituciones políticas –como, por ejemplo, el reconocimiento de la plurinacionalidad y la descentralización del Estado– y ha experimentado la incorporación de actores sociales diversos y de extracto popular al centro de la esfera pública. Además, en las últimas décadas se ha acelerado la reconfiguración de la base sociodemográfica de la sociedad boliviana, con una población adulta que adquiere cada vez mayor peso en la pirámide poblacional y un perfil cada vez más urbano. Estas transformaciones han estado acompañadas, en mayor o menor medida, de tensiones sociales y del despliegue de narrativas diversas en la esfera pública, en el marco de las disputas en torno al posicionamiento, en la sociedad, de determinados valores, percepciones y creencias.

Desde la teoría del cambio social, cuyo origen se encuentra estrechamente ligado al proyecto de la EMV, se entiende que el conjunto de transformaciones que ha experimentado Bolivia en las últimas décadas tendría que expresarse, de alguna manera, en transformaciones graduales en los valores sociales predominantes. En ese sentido, en este capítulo se analiza la evolución temporal y las diferencias generacionales de la estructura de valores de los bolivianos en relación con las siguientes dimensiones: (1) los valores fundamentales de la sociedad; (2) el valor de la autoridad y de la autonomía individual; y (3) la tolerancia hacia las diversidades. Cada una de estas dimensiones se aborda en un apartado específico, precedido por un apartado conceptual, en el que se repasan algunas ideas principales de la teoría del cambio cultural que guían el análisis.

En relación con los valores fundamentales, la EMV incluye una batería de preguntas sobre cuales son ‘las cualidades que deben enseñarse a hijos e hijas’. Éste es un buen indicador de cuáles son los valores sociales más profundos en una sociedad, es decir, aquellos que, con mayor convicción, sus miembros consideran que deben ser preservados y/o transmitidos intergeneracionalmente. Además, la EMV incluye otra batería de preguntas que permite indagar a qué esferas o dimensiones (la política, el trabajo, la religión, etc.) los ciudadanos confieren más importancia en sus propias vidas. El análisis de estos dos conjuntos de variables son la base del primer apartado de este capítulo, en el que se aborda la evolución de los valores fundamentales de los bolivianos.

1. Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, el porcentaje de hogares con acceso a internet en Bolivia pasó del 10,67% en 2012 a 76,3% en 2024 (87,7% en el área urbana) (INE, 2024).

Por otra parte, el segundo apartado se enfoca en la autoridad y la autonomía individual. La EMV explora variables que permiten analizar la importancia que se le otorga a la autoridad, por un lado, así como el sentimiento de control y capacidad de decisión sobre las propias vidas –lo que se define como ‘libertad percibida’–, por otro. Asimismo, la encuesta incluye una batería de preguntas que miden las actitudes en torno a prácticas que caen dentro de la esfera del ejercicio de la autonomía individual –como el aborto, la eutanasia o las relaciones sexuales prematrimoniales, entre otras–.

En el tercer apartado se aborda la evolución de la tolerancia hacia la diversidad. Esta cuestión se trata a partir del análisis de un bloque de preguntas sobre la preferencia o aceptación de tener como vecinos a grupos de personas diferentes –por ejemplo, en términos de orientación sexual, país de origen, diversidad lingüística y preferencias religiosas–. El capítulo cierra con un apartado de conclusiones en el que se sintetizan los principales hallazgos.

Aunque el periodo de análisis temporal abarca solamente siete años (2017-2024), un lapso relativamente corto para apreciar transformaciones culturales mayores, se detectan algunos cambios en las variables estudiadas que podrían estar apuntando algunas tendencias generales y generacionales de mayor calado. Para aportar mayor robustez a los análisis y poder observar la relación de las actitudes y valores sociales con una serie de variables sociodemográficas relevantes, se han realizado, adicionalmente, análisis estadísticos de correlaciones, análisis de varianza (ANOVA) y análisis estadísticos multivariados a partir de modelos de regresión logística, según se detalla en el capítulo introductorio. Para facilitar la lectura del capítulo, los resultados estadísticos no se detallan profundamente, aunque son mencionados brevemente o están incorporados en los análisis y gráficos que se presentan a lo largo del capítulo.

La teoría de la modernización y el cambio cultural

A partir del trabajo de Inglehart (1977; 1990; 1997; 2018), Welzel e Inglehart (2005; 2013) y Norris e Inglehart (2004), entre otros, se ha podido comprobar que los valores y creencias predominantes en las sociedades evolucionan gradualmente a lo largo del tiempo, y están muy relacionados con las condiciones históricas y económicas de cada sociedad. Por ejemplo, Welzel e Inglehart (2005) han estudiado cómo los valores predominantes en las sociedades con mayor desarrollo económico difieren de los que predominan en países con indicadores de desarrollo más bajos y

desiguales, y cómo éstos han ido cambiando de forma lenta, pero bastante predecible, a lo largo del tiempo. De acuerdo con estos autores, el proceso de modernización socioeconómica –al reducir paulatinamente las limitaciones externas y la inseguridad a las que se enfrentan los individuos en términos materiales, educativos y sociales– trae consigo un despliegue de valores relacionados con la autoexpresión, la autonomía y la tolerancia.

Esta expansión, a su vez, promueve una serie de demandas sociales en torno a, por ejemplo, la democracia, el ejercicio de la autonomía personal, la igualdad de género, la tolerancia a las diversidades y las posibilidades de autoexpresión. Por otro lado, este proceso significa también la erosión de valores más tradicionales y materialistas, es decir, aquellos asociados a garantizar su propia seguridad física y económica (valores de supervivencia), como la obediencia a las normas sociales, el respeto –acrítico– a la autoridad o la priorización del trabajo y de la religión sobre otras dimensiones de la vida.

Desde este punto de vista, la inseguridad económica y física, que ha sido la condición más usual de las mayorías sociales a lo largo de gran parte de la historia humana, también tiene como reflejo el refuerzo de los lazos intragrupalos frente a grupos considerados externos (por ejemplo, los lazos familiares frente a los extraños, los lazos locales frente a los foráneos y los lazos nacionales frente a los extranjeros). Así, las tradiciones y normas sociales intragrupalos se refuerzan y se conciben como elementos que generan certidumbre y seguridad grupal, frente a las ‘amenazas’ externas. Los valores que ponen el foco en el cumplimiento de las tradiciones y normas sociales se contraponen, de esta forma, a los valores que fomentan la autoexpresión y el ejercicio de la autonomía individual.

Aunque el planteamiento central de la teoría de la modernización cultural ha puesto énfasis en el desarrollo económico –con todas sus implicaciones– como el principal factor condicionante de los cambios en los valores, lo cierto es que hay otras variables que también juegan un rol fundamental en dar forma a la estructura de valores de una sociedad. Las formas de organización de la economía, el grado de desigualdad social, la expansión de nuevas tecnologías, factores medioambientales y la acción política, por ejemplo, contribuyen a moldear los valores sociales predominantes, y no lo hacen necesariamente en una dirección lineal y predecible.

Además, desde otras perspectivas teóricas, se han estudiado también las diferencias y transformaciones culturales, prestando atención a otros ejes de análisis como, por ejemplo, a partir de los ejes ‘colectivista’ versus ‘individualista’, de la ‘autonomía individual’ versus ‘la inmersión en el grupo’, o de la ‘armonía con’ el entorno versus

el 'dominio de[l]' entorno (Schwartz, 2013), que plantean matices respecto a la universalidad y linealidad del cambio cultural.

En cualquier caso, la configuración de los sistemas de valores sociales y sus transformaciones no ocurren en el vacío; suceden sobre estructuras de valores y creencias preestablecidas que, además, se transmiten en gran medida de forma intergeneracional (Norris e Inglehart, 2004), por lo que, por ejemplo, dos sociedades con estructuras económicas similares podrían presentar sistemas de valores muy distintos, en parte debido a sus 'puntos de partida' diferentes. Además, el hecho de que ocurran transformaciones rápidas en las condiciones materiales de una sociedad no se traduce, necesariamente, en cambios inmediatos en los sistemas de valores, especialmente en aquellos más arraigados en la tradición y en la identidad grupal de determinada sociedad. Incluso, para Inglehart (2006), es evidente que la tradición cultural y religiosa, el pasado colonial y otros factores históricos influyen consistentemente en los sistemas de valores de las sociedades, a pesar de la fuerza que supone el proceso de modernización.

Por último, así como las condiciones sociales y materiales de existencia se encuentran desigualmente distribuidas entre las distintas sociedades y naciones, los valores sociales y sistemas de creencias tampoco están repartidos de forma homogénea entre los miembros de una misma comunidad, aunque se puedan encontrar patrones más o menos extendidos en cada una. Este hecho supone que, al interior de las sociedades, distintos actores pugnen, con mayor o menor éxito, por el posicionamiento de los valores y creencias que consideran correctos sobre el resto de la comunidad.

En todo caso, las transformaciones en las estructuras de valores y creencias no se producen de forma homogénea y sincrónica en la sociedad, pero se pueden medir cambios en los promedios agregados del conjunto, observar tendencias a lo largo del tiempo y comparar la situación concreta entre distintos países, regiones y grupos o estratos sociales.

A partir de distintos análisis con una muestra cada vez más amplia de países, la EMV ha podido revelar que la transformación de valores es un fenómeno global, aunque el contexto cultural y geográfico pueda, claramente, condicionar el ritmo y dirección concreta de esta transición.² En ese sentido, es necesario introducir algunos matices en el análisis de las sociedades de nuestro contexto.

Entre estos matices, particularmente en la región andina, es importante considerar

2. Por ejemplo, Pettersson y Esmer (2008) observan que, aunque se producen transformaciones en algunos valores concretos, estos no necesariamente implican cambios culturales mayores, y que, en todo caso, los datos de la EMV no muestran que se esté produciendo una homogeneización cultural a nivel global.

la preexistencia de culturas indígenas cuyas cosmovisiones propias, sistemas económicos (por ejemplo, los *ayllus*) y sistemas de valores han pervivido hasta nuestros días, en mayor medida que en otros puntos de Sudamérica. Además, la configuración de una estructura social colonial entre los siglos XVI y XIX, y la persistencia de muchas de estas estructuras hasta bien entrado el siglo XX (e incluso hasta nuestros días), han contribuido también a la consolidación de un sistema de valores marcado por la desigualdad y un orden social jerárquico y patriarcal.

En ese sentido, la preeminencia de ciertos valores sociales y actitudes sobre otras no son entendidos, al menos en este capítulo, como buenas o malas en sí mismas, si no como expresiones de estructuras sociales más profundas, históricamente construidas. El crecimiento de unos u otros tipos de valores en la sociedad boliviana no se interpreta, en consecuencia, desde un punto de vista moral o normativo, si no, en todo caso, como más propicio o desfavorable para el despliegue o el ejercicio de determinados derechos y formas de relacionamiento social.

1. Los valores fundamentales de la sociedad boliviana

Los valores fundamentales de una sociedad suelen tener un arraigo profundo entre sus miembros, quienes se encargan de transmitirlos de generación en generación. Por ello, tienden a ser relativamente estables, y los cambios en su estructura suelen ser muy lentos y graduales. Como se mencionó anteriormente, los valores prioritarios de las sociedades cambian a medida que se producen transformaciones sociales y económicas, por ejemplo, en las condiciones materiales de existencia o en las capacidades de posicionar los valores que hayan tenido los distintos actores de una determinada sociedad. En ese marco, valores asociados a la seguridad, la obediencia y la inmersión grupal suelen ser prioritarios en sociedades marcadas por la inseguridad material y física, mientras que en sociedades con mayor seguridad existencial se abren paso valores como la autonomía personal, la creatividad y la tolerancia hacia la diversidad (Inglehart, 1977).

En 2017, la sociedad boliviana mostraba una estructura de valores claramente orientada hacia la seguridad y la obediencia grupal, que se situaban muy por encima de otros valores más asociados a la autonomía individual y la autoexpresión, como la tolerancia o la creatividad. Estos últimos, se situaban, en cambio, al final de la lista de prioridades de los bolivianos (Ciudadanía, 2019).

En este apartado se analiza en qué medida se ha transformado –o se está transformando– esta estructura de valores fundamentales. Así, en las siguientes líneas se explora la evolución de los valores predominantes en la sociedad boliviana

entre 2017 y 2024, y cómo se diferencia la estructura de valores prioritarios entre los adultos (mayores de 18 años) respecto a los adolescentes (de 12 a 17 años).

Para ello, en el subapartado 1.1 se analizan las preferencias respecto a las cualidades que deben enseñarse a los hijos e hijas, es decir, cuáles son las cualidades que los bolivianos creen que deben preservarse o transmitirse en la sociedad. Por otra parte, en el subapartado 1.2 se analizan las esferas o dimensiones que los bolivianos consideran más importantes en sus propias vidas.

1.1 ¿Qué cualidades deben transmitirse en la sociedad?

La EMV incluye una batería de preguntas respecto a las cualidades que deben fomentarse en niños y niñas. Los entrevistados deben seleccionar hasta cinco cualidades de una lista de 11, según se observa en la pregunta original, formulada como sigue:

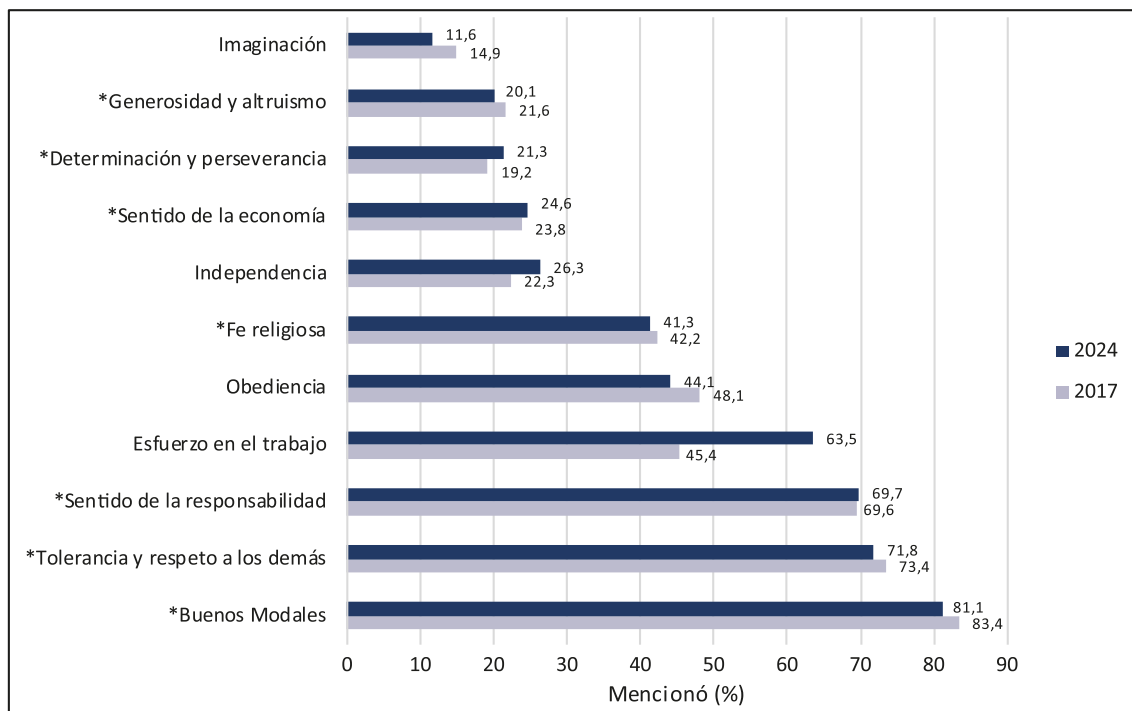
“Aquí hay una lista de cualidades que pueden fomentarse en el hogar para que los niños y las niñas las aprendan. ¿Cuál considera usted que es especialmente importante para enseñar a los niños?:

• <i>Buenos modales</i>
• <i>Independencia</i>
• <i>Esfuerzo en el trabajo</i>
• <i>Sentido de responsabilidad</i>
• <i>Imaginación</i>
• <i>Tolerancia y respeto hacia otras personas</i>
• <i>Sentido de la economía y espíritu de ahorro</i>
• <i>Determinación y perseverancia</i>
• <i>Fe religiosa</i>
• <i>Generosidad, altruismo</i>
• <i>Obediencia”</i>

En 2024, las tres principales cualidades que las y los bolivianos adultos consideran que deben ser transmitidas a sus hijas e hijos siguen siendo las siguientes: buenos modales (81%), tolerancia y respeto hacia los demás (72%) y sentido de responsabilidad (70%), en ese orden, y sin que se hayan registrado variaciones estadísticamente significativas desde 2017. Completan la lista de las cinco cualidades más mencionadas otras dos que también estaban entre las prioritarias en 2017: el

esfuerzo en el trabajo, cuya importancia subió significativamente del 45,4% al 63,5% en 2024, y la ‘obediencia’, que bajó cuatro puntos (del 48% al 44%).

Gráfico 1. Cualidades que hay que fomentar en los niños. Porcentaje de menciones, Bolivia, EMV 2017-2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Fuente: Elaboración propia.

En el extremo contrario, las cinco cualidades que se mantienen al final de la lista para las y los bolivianos siguen siendo las siguientes: imaginación (cuya importancia cayó del 15% al 11,6%), generosidad y altruismo (20%), determinación y perseverancia (21%), sentido de la economía y espíritu de ahorro (24,6%) e independencia (que subió cuatro puntos desde 2017, alcanzando el 26,3% en 2024). La fe religiosa (41%) se mantiene sin variación significativa desde 2017, en mitad de la tabla de cualidades que deben fomentarse en los niños, de acuerdo con la población adulta boliviana. Estos datos dan cuenta de una gran estabilidad en la estructura de valores de los bolivianos, al menos en lo que respecta a las cualidades que se valoran en las personas y que se cree que deben ser transmitidas intergeneracionalmente. En ese sentido, se observa la persistencia de un sistema de valores que prioriza cualidades asociadas a asegurar la supervivencia y seguridad física y material, como el esfuerzo en el trabajo, así como aquellas asociadas con el mantenimiento de los lazos intragrupal (buenos modales y obediencia de las normas sociales y la autoridad). Sin embargo, aunque se

advierte un aumento significativo de la primera de estas cualidades –marcada por el contexto económico particularmente delicado–, se aprecia también un descenso leve pero significativo en las últimas dos.

Al mismo tiempo, no obstante se puede advertir que los valores asociados a la autoexpresión y el desarrollo de la individualidad –como la creatividad y la determinación y perseverancia– no han sufrido grandes variaciones a lo largo de estos siete años, manteniéndose entre los más bajas de la lista de este bloque, sí se observa un ligero repunte de la independencia como cualidad valorada por los bolivianos adultos. Estos resultados no son concluyentes, pero permiten distinguir la estabilidad de un sistema de valores muy centrado en el cumplimiento de las normas sociales, con un ligero avance de los valores asociados a la autonomía frente a la obediencia.

Para analizar si la preferencia por determinadas cualidades está asociada con variables sociodemográficas concretas, se han aplicado modelos de análisis estadísticos multivariados sobre cada una de las cualidades de este bloque de preguntas. Es decir, se analizó si las preferencias por estas cualidades están asociadas a variables sociodemográficas como el sexo, la edad, la región del país, la residencia en municipios urbanos o rurales, el nivel de ingreso económico, el nivel de educación formal alcanzado, el nivel de educación formal de la madre, la lengua materna y la identidad indígena, tomando en cuenta las posibles interacciones entre estas variables.

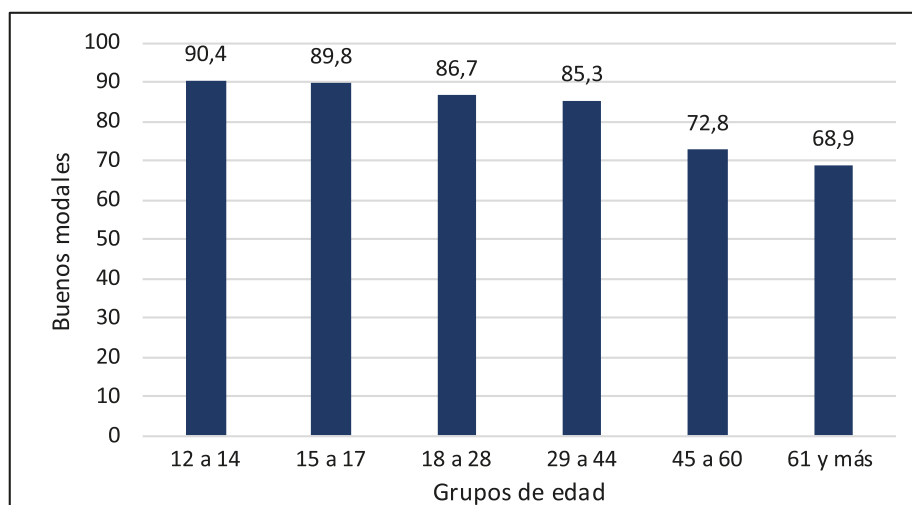
Los resultados muestran poca consistencia en la asociación de variables sociodemográficas o socioeconómicas con una preferencia clara por un grupo de cualidades (de supervivencia y cohesión grupal, o de autonomía y autoexpresión) sobre otro. Es decir, aunque las preferencias por algunas de estas cualidades sí muestran correlaciones estadísticamente significativas con algunas variables sociodemográficas concretas, éstas no se presentan de forma consistente en el resto de cualidades de cada uno de estos grupos.

Por ejemplo, los buenos modales y el sentido de la responsabilidad parecen tener menor relevancia entre los habitantes del oriente del país, en comparación con los de los valles y la zona andina. Por otro lado, valores como la tolerancia y respeto a los demás y la imaginación se correlacionan con la variable sexo, pero de forma distinta: las mujeres le dan más importancia que los hombres a la tolerancia y el respeto a los demás, mientras que los hombres valoran más la imaginación que las mujeres.

También, como vemos a continuación, la edad es un factor que se correlaciona de forma estadísticamente significativa con la importancia de los buenos modales' como

calidad para enseñar a los hijos e hijas, siendo los más jóvenes quienes le dan mayor importancia, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Porcentaje de personas que menciona los buenos modales, por grupos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2024

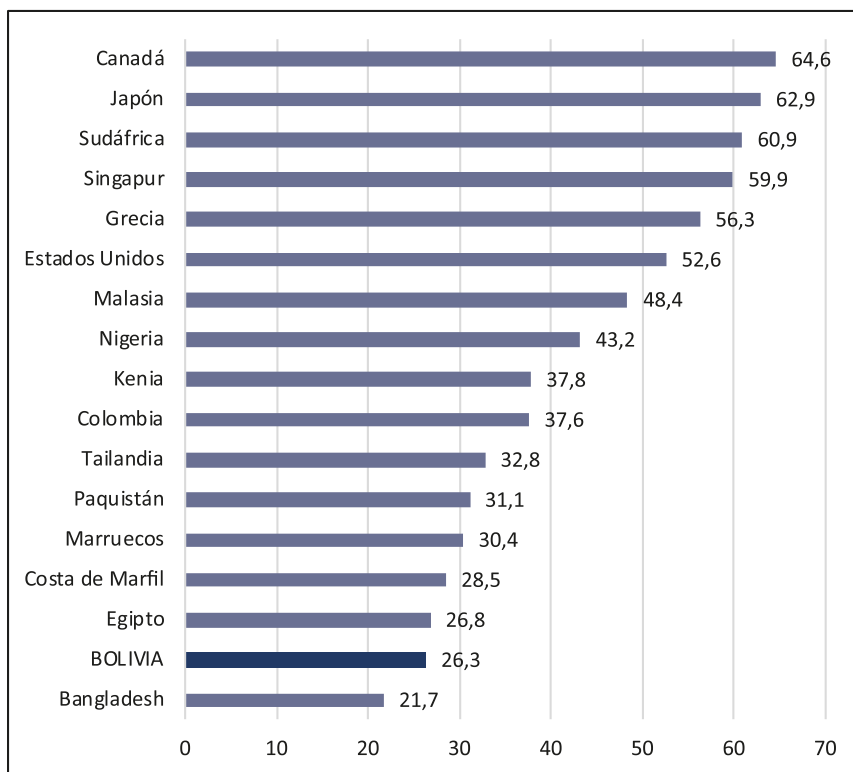


Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, la independencia es un valor que solo se correlaciona negativamente con la autoidentificación como aymara. Es decir, las personas que se identifican como aymaras son menos proclives a considerar que la independencia sea una cualidad importante para fomentar en los hijos, lo cual es consistente con un sistema de valores menos individualista y más comunitario, característico en los pueblos indígenas andinos.

Aunque en 2024 se registra un repunte de la independencia en Bolivia respecto al año 2017, el país sigue mostrando porcentaje bajo de personas que considera que esta cualidad deba ser transmitida a los hijos, en comparación con otros países del mundo. Entre los países para los que ya se cuenta con datos de la octava ronda de la EMV, Bolivia ocupa la penúltima posición, situándose sólo por encima de Bangladesh.

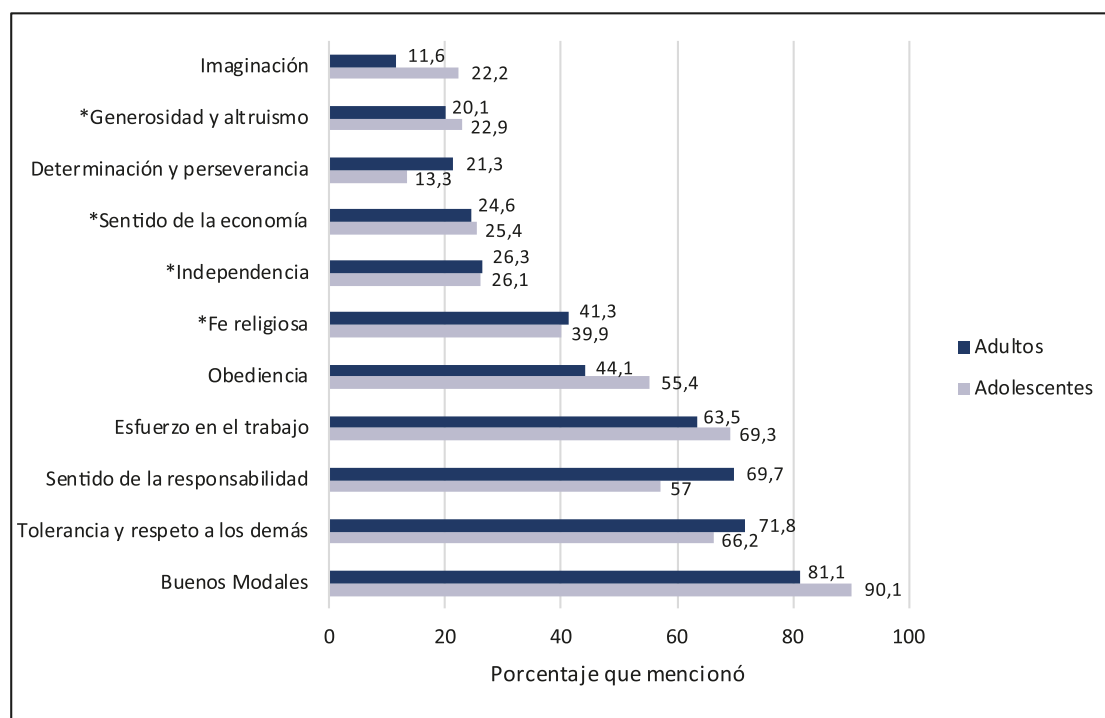
Gráfico 3. Porcentaje de entrevistados que menciona independencia como una cualidad que debe ser transmitida a los hijos, por países, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 4 se observan, comparativamente, los porcentajes obtenidos en el mismo bloque de preguntas en 2024, entre la muestra de adultos y la muestra de adolescentes. Como se puede ver, la estructura de valores de los adolescentes bolivianos difiere poco, en términos generales, de la estructura de valores de sus pares adultos. Las cinco cualidades más importantes en la formación de los hijos, según los adultos, coinciden con las cinco cualidades más importantes para los adolescentes, esto es: buenos modales, tolerancia y respeto a los demás, esfuerzo en el trabajo, obediencia y sentido de la responsabilidad. Del mismo modo, los valores asociados a la autonomía y autoexpresión –como la determinación y perseverancia, y la imaginación y la independencia– están, también entre los adolescentes, al final de su lista de prioridades.

Gráfico 4. Cualidades que hay que fomentar en los hijos. Bolivia, EMV y EVA 2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, existen algunas diferencias relevantes entre adultos y adolescentes que vale la pena observar. Por un lado, los adolescentes otorgan mayor importancia a las cualidades como los buenos modales, la obediencia y el esfuerzo en el trabajo que los adultos. Es decir, los adolescentes bolivianos presentan porcentajes significativamente más altos que los adultos en valores asociados a la seguridad material y el respeto a la autoridad y las normas sociales. Por otro lado, los adolescentes muestran menor preferencia por la mayoría de las cualidades asociadas con la autonomía y la tolerancia, y un porcentaje similar al de los adultos en relación con la independencia.

Es decir, en términos generales, esto indica que los adolescentes bolivianos parecen tener un sistema de valores un poco más conservador que sus pares adultos, destacando además su inclinación más pronunciada hacia la obediencia y los buenos modales. La única excepción que podría observarse es que los adolescentes le otorgan mayor importancia que los adultos al fomento de la imaginación, alcanzando el doble de lo registrado en los adultos. No es extraño, sin embargo, que ésta sea una cualidad más relevante entre los adolescentes, dado su paso más reciente por la infancia y la escuela, etapas de la vida en las que se fomenta y se ejerce más la imaginación,

frente al mayor pragmatismo y realismo que exige el mundo adulto. En todo caso, esta cualidad sigue registrando uno de los porcentajes más bajos respecto a las otras cualidades mencionadas.

1.2 ¿Qué aspectos son importantes en la vida de los bolivianos?

Luego de revisar las preferencias respecto a las cualidades que deben transmitirse en la sociedad, este subapartado analiza cuales son las dimensiones o aspectos de la vida que las y los bolivianos consideran más importantes para ellos mismos. En la EMV se abordó esta cuestión a partir de la siguiente pregunta:

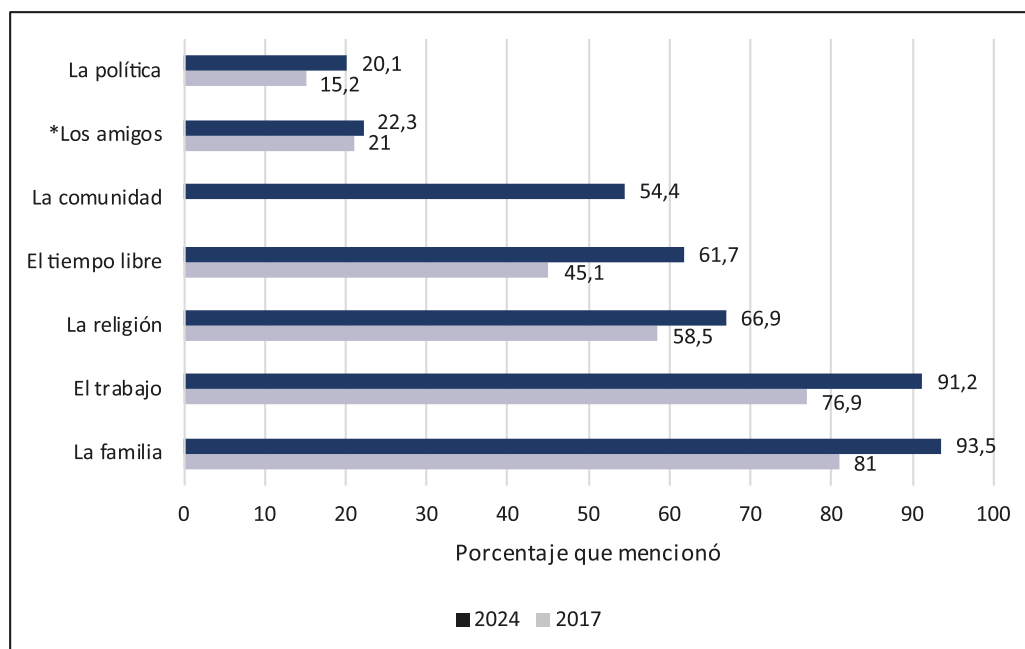
“Para cada uno de los siguientes aspectos, dígame qué importancia tiene en su vida. ¿Diría que es: ‘nada importante’, ‘poco importante’, ‘algo importante’ o ‘muy importante’?:

• <i>La familia</i>
• <i>Los amigos</i>
• <i>El tiempo libre</i>
• <i>La política</i>
• <i>El trabajo</i>
• <i>La religión</i> • <i>La comunidad”</i>

Como se observa en el gráfico 5, en 2024 –al igual que en 2017– la familia y el trabajo fueron, con bastante distancia frente al resto, los dos aspectos principales para la vida de los bolivianos: más del 90% de las personas los consideran muy importantes en sus vidas. Con cierta distancia, en tercer, cuarto y quinto lugar se sitúan la religión, el tiempo libre y la comunidad, con valores de 67%, 62% y 54%, respectivamente. Finalmente, los amigos y la política ocupan los últimos lugares en importancia para la vida de los bolivianos, con 22% y 20%, respectivamente.

Aunque entre 2017 y 2024 todos los aspectos mostraron un crecimiento en el porcentaje de personas que los consideran muy importantes, los crecimientos más relevantes se registran en la familia (12%), el trabajo (14%) y, principalmente, en el tiempo libre (16%).

Gráfico 5. Porcentaje de personas que menciona que estos aspectos tienen mucha importancia en su vida, EMV 2017-2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha visto anteriormente, en el marco de la teoría del cambio cultural, una mayor importancia del trabajo se asocia a valores de supervivencia, mientras que la religión, la familia y la comunidad se asocian con valores más tradicionales y centrados en garantizar la cohesión intragrupal. En el caso de las dos últimas, particularmente, se asocian con una concepción menos individualista de la vida. Por el contrario, el énfasis en la importancia del tiempo libre, los amigos y la política suelen ser señales de sociedades menos tradicionales y que valoran una inserción más autónoma en el tejido social (Inglehart, 1997).

Siguiendo esta lógica, la sociedad boliviana presenta –como se observó en el subapartado anterior–, un sistema de prioridades centrado en valores más tradicionales, colectivistas y de supervivencia. Sin embargo, si bien entre 2017 y 2024 se observa un reforzamiento en la importancia que los bolivianos le dan a la familia y al trabajo, se registró un crecimiento aún mayor en la importancia del tiempo libre y un crecimiento significativo de la importancia de la política en la vida de los bolivianos.

Los análisis multivariados realizados no muestran correlaciones entre estas prioridades y las principales variables sociodemográficas de forma sistemática, aunque sí se pueden detectar algunas correlaciones aisladas interesantes. Por

ejemplo, se observa una mayor importancia de la familia entre las personas de mayor edad y también entre personas con mayor nivel de educación formal. También se puede observar mayor valoración del trabajo entre quienes viven en el área rural del país, y una correlación positiva entre la edad y la valoración del tiempo libre: las personas mayores le dan mayor importancia al tiempo libre que las personas más jóvenes.

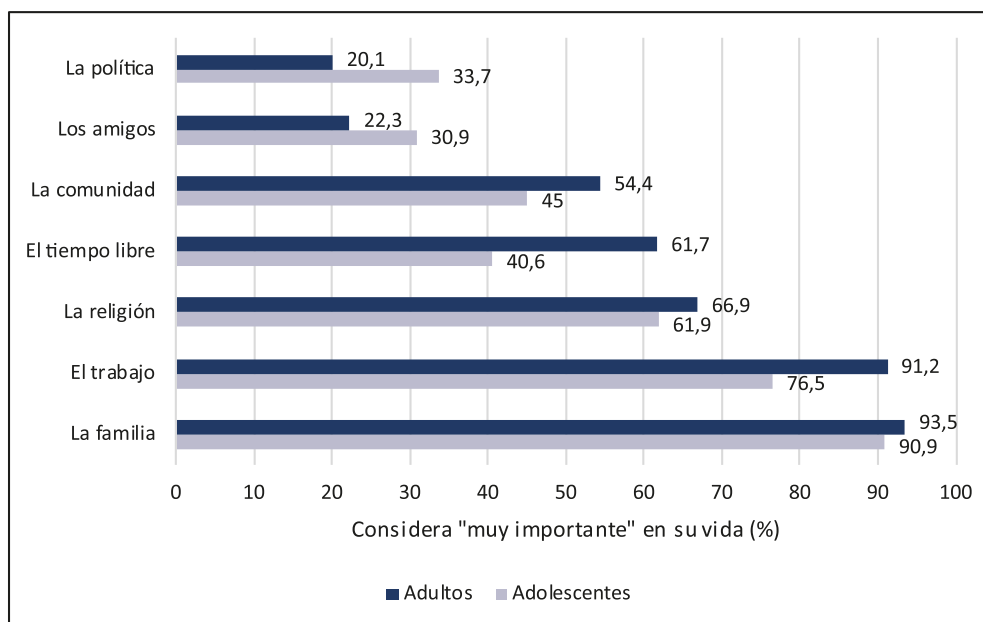
Esta última correlación, sin embargo, no se observa cuando comparamos la muestra agregada de adultos (EMV) con la de adolescentes (EVA). Como se puede apreciar en el gráfico 6, la familia y el trabajo –curiosamente–, son también los dos aspectos a los que los adolescentes le otorgan mayor importancia en sus vidas, seguidos, con cierta distancia –aunque con porcentajes menores a los de los adultos– por la religión y la comunidad.

Por supuesto, aunque la mayoría de los adolescentes no tienen un trabajo, probablemente sus actividades escolares y sus perspectivas de próxima incorporación al mundo laboral le otorgan a esta dimensión un peso significativo en sus vidas actuales, más aún en un contexto de crisis económica.

No es sencillo determinar si las diferencias entre adolescentes y adultos responden a un factor generacional o a características propias de la etapa vital. Siguiendo la teoría de modernización y cambio cultural, el hecho de que los adolescentes bolivianos se hayan criado en condiciones de mayor seguridad existencial que sus padres podría explicar una menor adhesión a valores tradicionales. Al mismo tiempo, esta situación podría también explicarse por condiciones propias de su etapa de vida, caracterizada por una mayor disponibilidad de tiempo libre y una mayor interacción con los amigos; elementos que explicarían el comportamiento de estas variables, distinto al de los adultos.

En cualquier caso, en 2024, en términos generales, los adolescentes bolivianos atribuyen menor importancia a la familia, el trabajo y la religión, y mayor relevancia a los amigos y a la política que sus pares adultos. Llama particularmente la atención esto último, ya que la esfera de la política supera incluso a la de los amigos en la lista de aspectos muy importantes para la vida de los adolescentes. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas.

Gráfico 6. Porcentaje de personas que menciona que estos aspectos tienen mucha importancia en su vida, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

En líneas generales, al igual que en el subpartado anterior, no se observa una tendencia clara que apunte inequívocamente en dirección de un cambio cultural en la sociedad boliviana en los últimos siete años, al menos en lo que respecta a la importancia atribuida a distintas dimensiones en la vida de los y las bolivianas. Sin embargo, sí se pueden ver indicios que apuntarían a un cambio generacional, o al menos diferenciado entre adolescentes y adultos, en dirección al despliegue de valores menos tradicionales, menos apegados a la dinámica 'intragrupal' (familia, trabajo, comunidad), y más proclives a valores asociados a la autonomía individual.

2. Respeto por la autoridad, autonomía personal y libertad percibida

En el marco de la teoría de la modernización cultural, se entiende que un mayor respeto a la autoridad y las normas sociales es un valor típico de sociedades con mayor inseguridad existencial. Esto se debería a que, en contextos de mayor vulnerabilidad económica o de riesgos sobre la integridad física, la adhesión al grupo se relaciona con mayores probabilidades de supervivencia, al estar inmerso en las redes sociales que permitirían acceso a la solidaridad intragrupal, aunque esto vaya en detrimento de la autonomía individual.

Sin embargo, aunque el respeto por la autoridad pueda brindar cierta certidumbre

y seguridad a los sectores sociales más vulnerables, otros autores apuntan que, en sociedades desiguales, los grupos privilegiados tienden a justificar el orden social existente (Jost y Van der Toorn, 2011) y, por lo tanto, serían más proclives a valorar positivamente la autoridad. En todo caso, es razonable pensar que ambas tendencias se encuentran presentes y en tensión al interior de las sociedades, aunque en términos agregados se pueda observar la preeminencia de alguna de ellas.

El respeto por la autoridad también suele correlacionarse con sociedades más tradicionales, en las que la doctrina religiosa o el orden social imperante –como, por ejemplo, jerarquías étnicas o de casta– son más fuertes, frente a valores seculares e individualistas. En ese sentido, los procesos de modernización, secularización, reducción de desigualdades y modernización de las instituciones democráticas y del Estado de derecho podrían promover valores más afines a la autonomía individual frente a la adhesión a la autoridad.

Para un análisis sobre el cambio cultural en Bolivia, resulta relevante analizar la evolución que ha tenido el valor de la autoridad y del ejercicio de la autonomía individual a lo largo del tiempo. En correspondencia con lo anterior, en el punto 2.1 se analiza la evolución de la importancia que tiene para los bolivianos el respeto a la autoridad, mientras que en el punto 2.2 se presta atención a la evolución de la ‘libertad percibida’, es decir, del sentimiento sobre la capacidad de elección individual y control sobre sus propias vidas que sienten las personas. Finalmente, en el punto 2.3 se analizan las actitudes ciudadanas en torno al ejercicio de la autonomía y las libertades individuales.

2.1 Respeto a la autoridad

Al igual que en el apartado anterior, Bolivia presentaba en 2017 una preferencia muy marcada hacia un mayor respeto a la autoridad. Una de las preguntas incluidas en la EMV que permiten medir estas actitudes es la siguiente:

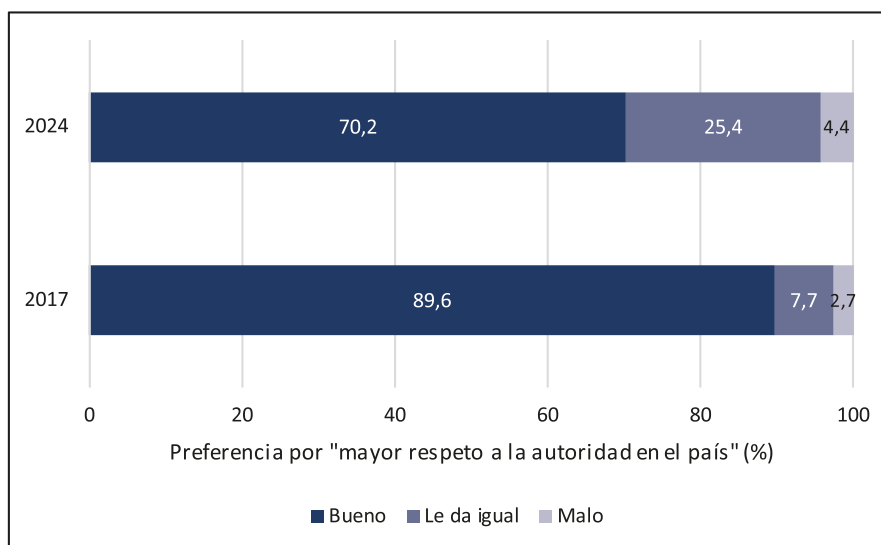
“Por favor, dígame si usted piensa que sería algo bueno, algo malo, o le daría igual que exista mayor respeto por la autoridad:

- *Algo bueno*
- *Algo malo*
- *Le da igual”.*

Siete años después, en 2024, la mayoría de los bolivianos aún considera que un mayor respeto a la autoridad sería algo bueno para el país. Sin embargo, en este

lapso de tiempo, esta opinión ha caído fuertemente, en casi un 20%, desde el 89,6% registrado en 2017 al 70,2% registrado en 2024. Sin embargo, este dato no debe interpretarse en el sentido del crecimiento de una sociedad contraria al respeto a la autoridad, pues la categoría opuesta (que considera que “sería algo malo” que exista más respeto por la autoridad) no ha experimentado un incremento significativo. En cambio, en este marco temporal, se ha visto un ‘trasvase’ desde la categoría de apoyo hacia la categoría de indiferencia, que ha crecido, a su vez, casi 20%: del 7,7% al 25,4%.

Gráfico 7. Preferencia por que exista mayor autoridad en el país. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados obtenidos en los análisis multivariados aplicados sobre esta variable, la preferencia por un ‘mayor respeto a la autoridad’ en Bolivia está asociada a variables sociodemográficas y económicas como el sexo, la edad y el nivel de ingresos. Las mujeres, las personas mayores y las personas con mayores niveles de ingresos consideran –en mayor proporción que los hombres, los más jóvenes y las personas con menores ingresos–, que sería bueno un mayor respeto por la autoridad en el país. En cambio, la región de residencia, el nivel de educación formal, la lengua materna y la identidad indígena no están asociados a esta preferencia, cuando se controla por el resto de variables sociodemográficas.³

3. Para el análisis de ésta y otras variables se empleó un modelo estadístico multivariado que incluye como variables independientes el área de residencia (urbana o rural), la región del país, el grupo de edad, el sexo de la persona (hombre o mujer), el nivel de ingreso, la autoidentificación con un pueblo indígena, el nivel educativo de la persona y el de la madre de la persona entrevistada. Sólo se reportan las relaciones entre variables que son estadísticamente significativas en estos modelos multivariados. Esta metodología está descrita con mayor profundidad en el capítulo introductorio de este informe.

Esta drástica reducción en los porcentajes de preferencia hacia un mayor respeto por la autoridad es una de las señales más claras, hasta ahora observadas, de una transformación en los valores sociales de los bolivianos hacia posturas menos favorables a la autoridad.⁴ En el apartado anterior ya se observó una leve reducción de la obediencia y un ligero aumento de la independencia como cualidades valoradas entre los bolivianos. Sin embargo, en la variable que se analiza en este subapartado se aprecia una transformación mucho más clara y pronunciada en esa dirección. Cabe señalar que esta pregunta no fue incluida en la muestra de adolescentes en 2024, por lo que no es posible verificar si la tendencia generacional que se aprecia en los análisis multivariados se mantiene al incluir una generación más joven.

2.2 Libertad percibida

Siguiendo la lógica de la teoría de modernización y cambio cultural, el sentimiento de libertad de elección y control sobre su propia vida –conocido como ‘libertad percibida’– está asociado a mayores niveles de seguridad existencial (Inglehart, 1997) y a menores constricciones externas, como tradiciones y normas sociales rígidas. En este sentido, constituye un síntoma de un mayor empoderamiento individual (Welzel y Inglehart, 2005). También se asocia a un mayor acceso a oportunidades educativas y de información, lo que genera mayor conciencia sobre la capacidad de agencia personal (Norris y Inglehart, 2004).

Por otra parte, la libertad percibida también podría estar relacionada con la comparación entre sus propias capacidades de elección respecto a las que se perciben en el entorno inmediato, o respecto a sí mismos en el pasado reciente. En cualquier caso, existe evidencia sólida de que la libertad percibida es uno de los principales predictores de felicidad, incluso por encima de otras variables como la salud subjetiva, el nivel de ingresos o el estatus laboral (Verme, 2023). Por ello, el estudio de su evolución resulta relevante también en esos términos.

La pregunta que utiliza la EMV para medir la libertad percibida es la siguiente:

“Algunas personas sienten que tienen total libertad de elegir y control sobre sus vidas, mientras que otras [personas] sienten que lo que hacen no tiene un efecto real en lo que les ocurre. Por favor, use esta escala, en la cual 1 significa ‘sin ninguna capacidad de elegir’ y 10 significa ‘mucha capacidad de elegir’ para indicar cuánta libertad de elección y control siente usted que tiene sobre su vida”.

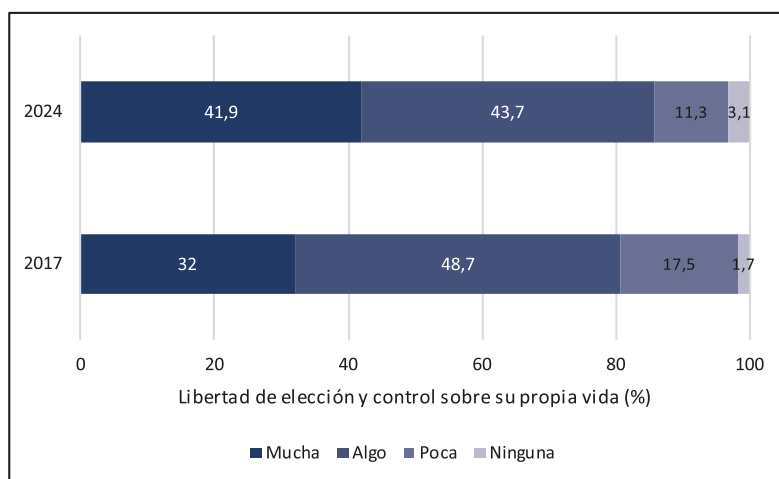
4. Hablar de una ‘cultura política’ menos autoritaria requeriría analizar muchos otros aspectos más allá de la preferencia explícita por un mayor respeto a la autoridad. Con datos recientes del Barómetro de las Américas –y utilizando variables de medición distintas– Vivian Schwarz (2024) ha identificado que en la sociedad boliviana se han incrementado, en términos generales, las actitudes autoritarias en la sociedad civil en relación con los valores democráticos.

A continuación, los entrevistados debían situarse en cualquier punto de la escala del 1 y el 10. Para efectos de este análisis, se agrupan las respuestas en cuatro categorías:

- *Mucha libertad de elección y control sobre sus vidas*: posiciones 9 y 10.
- *Algo de libertad*: posiciones 6, 7 y 8.
- *Poca libertad y control sobre sus vidas*: posiciones 3, 4 y 5.
- *Ninguna libertad*: posiciones 1 y 2.

En la octava ronda de la EMV en Bolivia (2024) se observa un crecimiento significativo del sentimiento de ‘libertad de elección y control sobre su vida’ –es decir de la ‘libertad percibida’–, entre los bolivianos adultos respecto a la ronda anterior. Entre 2017 y 2024, las personas que sienten que tienen mucha libertad de decisión y control sobre sus vidas ha aumentado en 10 puntos porcentuales, pasando del 32% en 2017 al 42% en 2024. A su vez, la suma de los porcentajes de quienes sienten que no tienen ‘ninguna’ o que tienen ‘poca’ capacidad de decisión y control sobre sus vidas, se ha reducido en casi 5 puntos porcentuales en total: del 19,2% al 14,4%, entre 2017 y 2024.

Gráfico 8. Libertad percibida. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Tras aplicar los modelos de análisis multivariado detallados en el apartado introductorio, se puede observar que la libertad percibida está correlacionada positivamente con la residencia en el área rural y en la zona oriental del país. Es decir, las personas que habitan en el área rural y en la zona oriental reportan, en mayor medida, este sentimiento de libertad percibida, frente a los habitantes de las zonas urbanas y de las regiones de la zona andina y los valles, manteniendo constantes las

otras variables, como la identidad con un pueblo indígena, el nivel de ingresos y el nivel de educación, por ejemplo.

Finalmente, los datos reflejan que los adolescentes presentan menores niveles de libertad percibida en relación con los adultos. Se asume que esta diferencia no está relacionada necesariamente con cambios culturales intergeneracionales sino más bien con la etapa vital propia de los adolescentes. Dado que la mayoría de los adolescentes vive aún bajo la dependencia y/o tutela de sus padres, es razonable asumir que cuentan con un menor grado de control y decisión sobre sus propias vidas.

2.3 Actitudes en torno al ejercicio de la autonomía individual

La EMV incluye una batería de preguntas relacionadas con la justificación de prácticas asociadas al ejercicio de la autonomía de las personas.⁵ Esta justificación o aceptación está estrechamente relacionada con los valores y normas sociales predominantes, y dan pistas sobre los límites aceptables del ejercicio de la autonomía individual, es decir, sobre la rigidez de las normas sociales. Las prácticas incluidas en esta encuesta son las siguientes: el aborto, el divorcio, la homosexualidad, la eutanasia, las relaciones sexuales prematrimoniales y el suicidio.

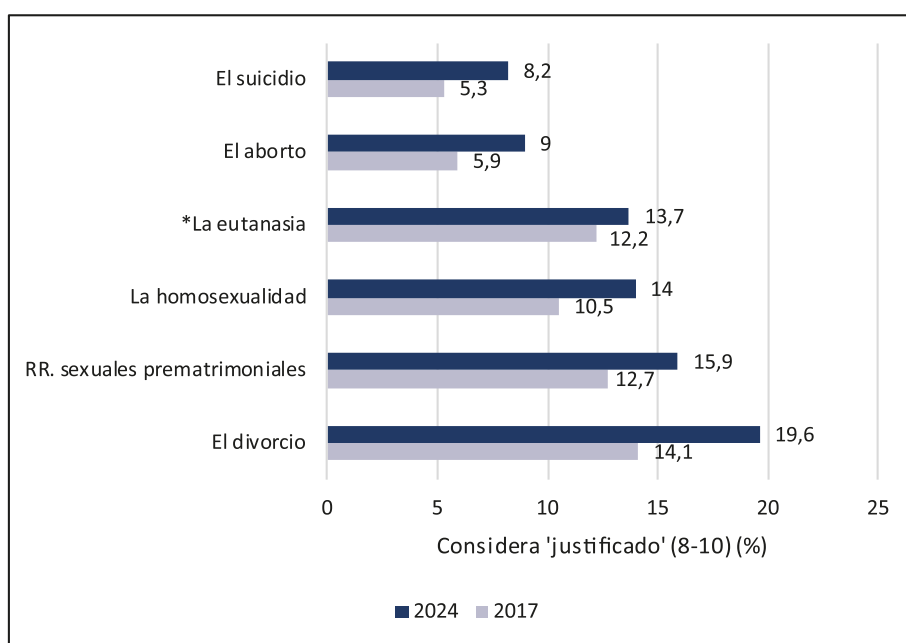
Desde el punto de vista de la teoría del cambio cultural, una mayor justificación del aborto, el divorcio, la homosexualidad y las relaciones sexuales prematrimoniales dan cuenta de una mayor adhesión a valores de autonomía individual y autoexpresión, así como a una creciente secularización cultural, es decir, de una menor influencia de la religión en la definición de los límites morales y normativos del comportamiento individual (Norris e Inglehart, 2004). Con ciertos matices, la justificación o aceptación de la eutanasia y, particularmente, del suicidio, también se consideran indicadores de aceptación del ejercicio de la autonomía del individuo, en tanto que representan el extremo de la facultad de decisión individual sobre su propia vida, por encima de la sociedad, el Estado o la religión (Welzel, 2013). En el caso del suicidio, mayores niveles de justificación también podrían significar no tanto una aprobación directa del acto, sino una menor censura moral hacia quienes lo cometen. Sin embargo,

5. La pregunta textual en la EMV es la siguiente: “Para cada una de las siguientes afirmaciones, dígame, por favor, si Usted piensa: Que nunca están justificadas, que siempre están justificadas o algún otro punto en la escala”. A continuación, se leen las prácticas que incluye, entre otras, las seis referidas en este capítulo. El entrevistado debe decir, para cada una de ellas, qué tan justificada o injustificada la considera, en una escala de 1 al 10, en la que 1 significa ‘nunca justificada’ y 10 ‘siempre justificada’. En este capítulo, hemos considerado que las personas consideran claramente ‘justificadas’ estas prácticas si se sitúan en algún punto entre el 8 y el 10, incluidos.

esta variable puede también expresar inseguridad existencial, anomia, mayor vulnerabilidad o problemas de salud mental, por ejemplo, por lo que estos autores reconocen que su interpretación requiere especial cautela.

En términos generales, los bolivianos registran niveles muy bajos en la justificación de todas estas prácticas, con porcentajes que, en 2024, van desde el 8,2% en el caso del suicidio, al 19,6% para el divorcio. Sin embargo, en la muestra de adultos se aprecia un aumento de los niveles de tolerancia respecto a 2017 en todas las variables. La justificación del divorcio y de la homosexualidad son las variables que registran un mayor crecimiento en este periodo, mientras que la eutanasia es la única práctica cuya aceptación, según los resultados de la encuesta, no llega a ser estadísticamente significativa.

Gráfico 9. Porcentaje de personas que justifica estas prácticas. Bolivia, EMV 2017-2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Fuente: Elaboración propia.

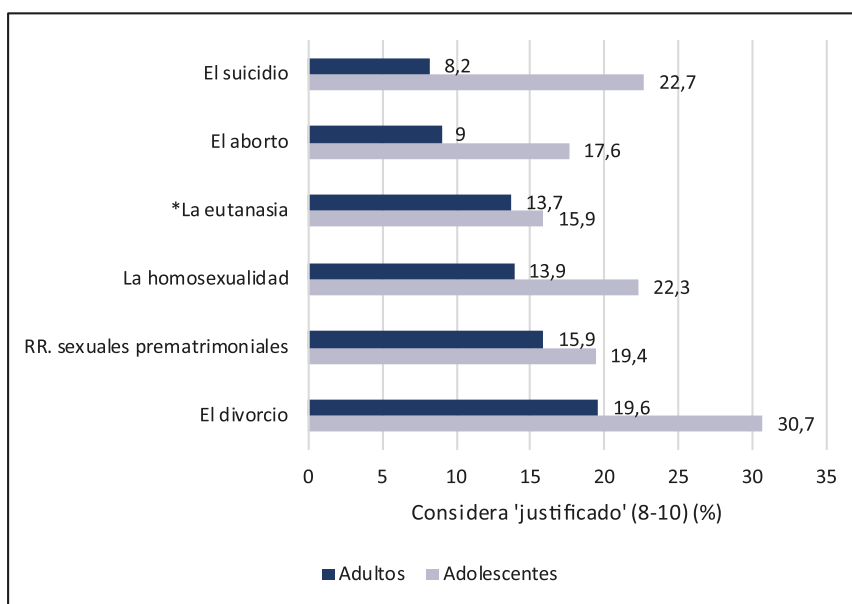
Estos resultados evidencian una creciente apertura de la sociedad boliviana en torno al ejercicio de la autonomía individual, que en muchos casos se traduce, además, en el reconocimiento y ejercicio de derechos. Para Welzel (2013), las actitudes más favorables hacia estas prácticas suponen un apoyo a ‘valores emancipatorios’ e indican una sociedad con mayor estima de la autonomía personal sobre las cuestiones morales y normativas, y un menor control coercitivo sobre los demás. En

ese sentido, el crecimiento de las actitudes favorables en torno al divorcio, el aborto, la homosexualidad y las relaciones sexuales prematrimoniales, entre 2017 y 2024, son una señal importante de una transición cultural en Bolivia hacia posiciones más abiertas a la autonomía y libertad individual.

Esta lectura se vuelve aún más optimista cuando se observan los valores registrados en la muestra de adolescentes. Todas las prácticas de este bloque registran porcentajes más altos de justificación entre adolescentes que entre los adultos, con la salvedad de la eutanasia, cuya variación no es estadísticamente significativa. Las diferencias más amplias entre los adolescentes y los adultos, sin tomar en cuenta el suicidio, se observan en una mayor justificación del divorcio (con 11,1 puntos más), el aborto (8,7 puntos de diferencia), y la homosexualidad (8,4 puntos más que los adultos).

Respecto al suicidio, es llamativo que los adolescentes registren valores mucho más altos que los observados en adultos (hasta 14,5% más), y más altos que todas las demás categorías, a excepción del divorcio. Como se mencionó anteriormente, esta diferencia podría reflejar una aproximación menos normativa o condiciones de vulnerabilidad mayores entre los adolescentes, y su interpretación requeriría un abordaje más especializado que excede el alcance de este capítulo.

Gráfico 10. Porcentaje de personas que justifica estas prácticas. Bolivia, EMV y EVA 2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Fuente: Elaboración propia.

De todas las dimensiones analizadas en este capítulo, el crecimiento de las actitudes positivas hacia las prácticas de la autonomía individual constituye la señal más clara de un cambio cultural en Bolivia. Este cambio se manifiesta tanto en términos temporales (entre 2017 y 2024) como también, y quizás especialmente, en términos generacionales (entre adultos y adolescentes). Además, las actitudes particularmente favorables hacia el aborto, el divorcio, las relaciones sexuales prematrimoniales y la homosexualidad apuntan a una transición cultural particularmente marcada en ámbitos relacionados con la sexualidad y la igualdad de género. Estos asuntos se abordan con mayor detalle en capítulos posteriores de este libro.

3. La tolerancia hacia la diversidad

Como se menciona en la introducción de este capítulo, desde la teoría del cambio cultural, la tolerancia es un valor que, habitualmente, se fortalece en sociedades en las que las condiciones económicas y de bienestar social mejoran. Al reducirse la percepción de que las diferencias (de origen, religión, lengua, etc.) suponen amenazas para la estabilidad y la seguridad grupal, las mismas empiezan a percibirse como aceptables e incluso beneficiosas. Por otro lado, en sociedades en las que las necesidades básicas están satisfechas y se generan entornos de crianza con mayores grados de seguridad, también se suelen presentar mayores niveles de agencia individual y, por lo tanto, una preeminencia de valores más favorables a la autoexpresión y el respeto a las diversidades.

En todo caso, este fenómeno depende de que el desarrollo económico esté acompañado de mayores niveles de equidad social, puesto que en sociedades prósperas pero desiguales no se generan las condiciones de seguridad existencial para amplios sectores de la población, lo que pone en riesgo la percepción de seguridad colectiva (Inglehart, 2018).⁶ Es más, para autores como Uslaner (2011, 2012), la desconfianza y el miedo a la diferencia no se explican tanto por el grado de desarrollo económico sino, fundamentalmente, por el grado de segregación y desigualdad. En ese sentido, sólo los procesos de desarrollo económico y de expansión del bienestar social que están acompañados por una mejora en la equidad, tienden a generar mayores niveles de tolerancia hacia la diversidad y mayor respeto a la autonomía individual del resto de los miembros de la sociedad.

6. Inglehart sugiere que el aumento continuado de la desigualdad y la precariedad en algunas sociedades con niveles altos de prosperidad económica estaría detrás del ‘reflejo’ autoritario e intolerante (contra inmigrantes, personas pobres, personas racializadas, diversidades sexuales, etc.), que se vive con mayor intensidad en las últimas décadas.

Por el contrario, el rechazo a la diferencia suele ser mayor en sociedades con tradiciones fuertes y normas sociales rígidas, donde las diferencias culturales, religiosas o lingüísticas, entre otras, son percibidas como amenazas para la seguridad y estabilidad social (incluidas la seguridad ciudadana, la estabilidad laboral o el orden jerárquico, entre otros). En ese sentido, las sociedades con fuertes lazos intragrupalmente suelen contar con menor margen para la divergencia de sus miembros y para la incorporación de personas externas.

Como se ha discutido en apartados anteriores, existen otros factores que también pueden favorecer el cambio cultural y la tolerancia hacia la diversidad. Además de los avances económicos, el desarrollo en las TIC, el aumento en los niveles y calidad de la educación, y la acción de distintos actores sociales e institucionales en la promoción de la tolerancia, por ejemplo, pueden desempeñar un rol igualmente relevante.

En este apartado se analiza si en Bolivia se han producido cambios en los niveles de intolerancia entre 2017 y 2024, en qué medida la tolerancia es un valor presente en la sociedad boliviana, y cuál ha sido su tendencia en los últimos años.

Para ello, se examinan los resultados de una batería de preguntas que permiten medir el grado de intolerancia respecto a grupos concretos de personas distintas, a partir de preguntas sobre qué grupos de personas preferirían ‘no tener como vecinos’,⁷ de acuerdo a la siguiente lista: ‘gente de otra raza’, ‘personas de otra religión’, ‘extranjeros’, ‘homosexuales’ y ‘personas que hablan un idioma distinto al suyo’. Este bloque de preguntas constituye un indicador bastante explícito sobre la intolerancia social, los prejuicios y la exclusión hacia grupos específicos de la sociedad.⁸

En la séptima ronda de la EMV, Bolivia presentaba –al igual que la mayoría de los países de la región– niveles relativamente bajos de intolerancia contra personas de distinta raza y religión, en comparación con otras regiones del mundo con igual grado de desarrollo económico (asumiendo, por supuesto, que ningún grado de intolerancia en estos aspectos es aceptable ni lo suficientemente bajo). En 2017, Bolivia tampoco presentaba niveles particularmente altos de rechazo hacia extranjeros y personas que hablan otro idioma, en comparación con otros países de

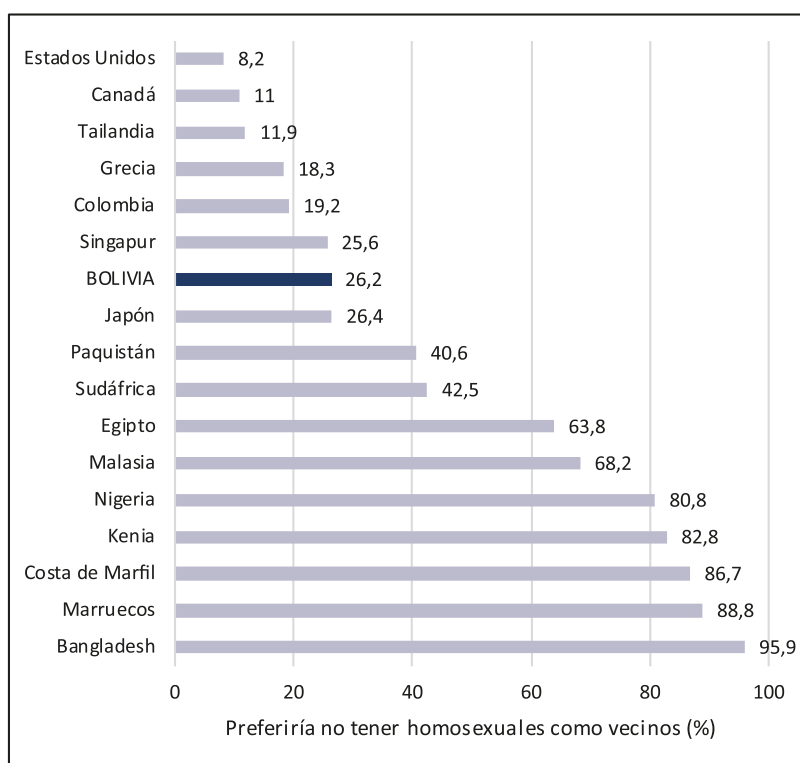
7. La pregunta textual en la EMV es la siguiente: “En esta lista hay varios grupos de personas. ¿Podría indicar aquellos que usted preferiría NO tener como vecinos?”. A continuación, los entrevistados pueden mencionar todos los grupos de la lista que consideren que preferirían no tener como vecinos. La muestra de adolescentes de 2024 no incluyó esta batería de preguntas, por lo que no es posible, en esta ocasión, verificar si los adolescentes bolivianos presentan actitudes diferentes a las de los adultos en este aspecto.

8. Al preguntar sobre la preferencia de ‘no tener como vecinos’ a personas de determinados grupos, se pretende evocar la probabilidad de mantener interacción directa con estas personas, a diferencia de una idea más ‘abstracta’ de tolerancia (por ejemplo, preguntando si ‘acepta’ a estos grupos) que, al no implicar la cohabitación en espacios de interacción concretos, como el espacio público o los servicios públicos del vecindario, podría, incluso, llegar a ser compatible con una sociedad segregada y desigual.

la región como, por ejemplo, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Perú o Ecuador, que duplicaban los porcentajes de Bolivia. Sin embargo, ya en 2017 Bolivia presentaba un alto nivel de intolerancia contra personas homosexuales, incluso en comparación con sus pares latinoamericanos.

Siete años más tarde, con los datos de la octava ronda de la EMV, se observa que uno de cada cuatro adultos bolivianos todavía menciona a las personas homosexuales como un grupo que 'no quisiera tener como vecinos'. Aunque este sigue siendo un porcentaje alto, representa una ligera reducción respecto al 30% registrado en 2017. En relación con el resto de países incluidos hasta la fecha en la octava ronda de la EMV, Bolivia se ubica más cerca de Colombia y de países occidentales o con tradición liberal –como Canadá, Estados Unidos o Japón–, que de países de otras latitudes, incluso más comparables en niveles de desarrollo económico, como Bangladesh, Marruecos o Kenia, cuyos porcentajes de rechazo a los homosexuales superan el 80% y hasta el 90%.⁹

Gráfico 11. Porcentaje de personas que preferiría NO tener a homosexuales como vecinos, por país, EMV 2024

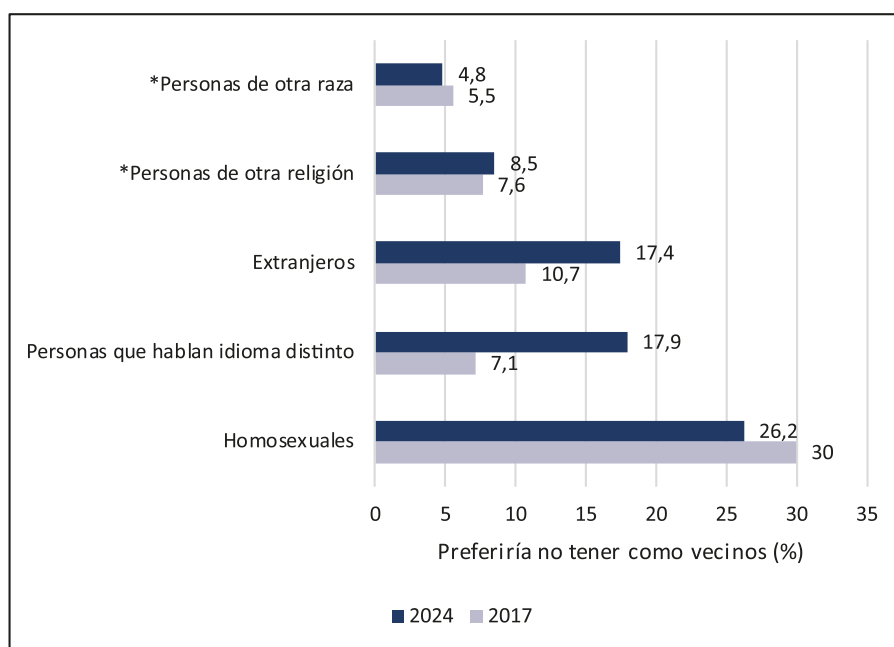


Fuente: Elaboración propia.

9. Aunque la religión parece ser un factor relevante en este ámbito, algunos países con religión mayoritariamente cristiana, como Sudáfrica y Kenia, o con proporciones equivalentes de islam y cristianismo, como Nigeria y Costa de Marfil, presentan niveles de intolerancia hacia homosexuales tan altos como países mayoritariamente musulmanes, como Marruecos o Paquistán.

Por otra parte, en este mismo periodo, Bolivia ha registrado un fuerte crecimiento del rechazo hacia los extranjeros y hacia las personas que hablan un idioma distinto, el cual ha pasado del 10,7% al 17,4% en el primer caso, y del 7% al 18% en el segundo, como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 12. Porcentaje de personas que preferiría NO tener a estos grupos como vecinos. Bolivia, EMV 2017-2024



* Las diferencias no son estadísticamente significativas.

Fuente: Elaboración propia.

En el mismo gráfico, se puede apreciar que la intolerancia frente a personas de distinta raza y religión se ha mantenido en niveles relativamente bajos, sin variaciones estadísticamente significativas respecto a la ronda anterior.

De acuerdo a los análisis multivariados realizados, el rechazo a los homosexuales está fuertemente correlacionado con el sexo de los encuestados: los hombres rechazan, en mucha mayor proporción que las mujeres, tener a personas homosexuales como vecinos. También se registra una correlación negativa, aunque débil, con el nivel de ingresos: las personas con menores ingresos tienden a mostrar mayor rechazo. Respecto al rechazo a los extranjeros, se observa una correlación negativa con las personas de la región oriental del país y con el nivel de educación. Es decir, las personas del oriente boliviano y aquellas con mayor nivel de educación formal presentan menores porcentajes de intolerancia hacia los extranjeros que quienes habitan la zona andina y la zona de los valles, y que quienes tienen menor nivel

educativo. Este patrón también es consistente con la teoría de modernización y cambio cultural citada anteriormente.

Por otra parte, los análisis multivariados sugieren que el rechazo hacia personas que hablan un idioma distinto (al de la persona entrevistada) se correlaciona negativamente con la autoidentificación indígena. Esto quiere decir que las personas que no se identifican como indígenas presentan mayores niveles de rechazo hacia quienes hablan un idioma distinto al suyo. Un análisis de correlaciones entre las variables de 'intolerancia a extranjeros' e 'intolerancia a personas que hablan un idioma distinto' descarta que exista una correlación entre ambas variables. Estos resultados podrían indicar que la intolerancia hacia personas que hablan una lengua distinta, al menos entre las personas que no se identifican como indígenas, son un reflejo de la persistencia y crecimiento de prejuicios hacia los hablantes de lenguas originarias.

En síntesis, los resultados descritos en este apartado no permiten afirmar que se haya producido un cambio cultural orientado hacia valores más abiertos y tolerantes entre los bolivianos. Por el contrario, como se ha observado, no se han registrado cambios significativos en los niveles de tolerancia hacia 'personas de otra raza' y 'personas de otra religión', mientras que, en relación con 'extranjeros' y con 'personas que hablan un idioma distinto al suyo' se aprecian niveles de intolerancia significativamente más altos que hace siete años. En ese lapso, solamente se ha registrado una leve caída en los niveles de intolerancia hacia personas homosexuales, pero el rechazo a este colectivo sigue presentando los niveles más altos de entre todos los grupos incluidos en este análisis.

Conclusiones

Ofrecer una interpretación global de los resultados observados en este capítulo no es tarea sencilla, pues se observan comportamientos heterogéneos en las distintas variables analizadas que no permiten afirmar, categóricamente, que exista una dirección clara en la transformación de los valores de los bolivianos. En términos generales, a partir del análisis de los datos de la EMV y la EVA, se observa la persistencia de valores tradicionales y retrocesos importantes en relación con la tolerancia hacia la diversidad, pero, al mismo tiempo, se vislumbran cambios favorables hacia el ejercicio de la autonomía individual y la autoexpresión.

Como se ha señalado anteriormente, la sociedad boliviana muestra una gran estabilidad en su estructura de valores fundamentales, en las esferas que los bolivianos consideran prioritarias en sus vidas y en las cualidades que desean

transmitir a las futuras generaciones. Tanto los valores fundamentales como las dimensiones que importan más en la vida de los bolivianos mantienen un carácter eminentemente tradicional, con una preferencia por valores asociados a la supervivencia y la seguridad, y favorables al mantenimiento de las normas sociales y la obediencia. Por su parte, los valores vinculados al despliegue de la autonomía individual, la autoexpresión y de la independencia siguen teniendo menor peso relativo en nuestra sociedad, aunque se observa un ligero crecimiento respecto al 2017.

Entre los adultos bolivianos, sí se aprecia un significativo descenso en las variables que miden la preferencia por la autoridad y la obediencia, así como un crecimiento importante en la libertad percibida, es decir, en el sentimiento de libertad para tomar sus propias decisiones y controlar el rumbo de su vida. Esta evolución favorable hacia el ejercicio de la autonomía individual se expresa con mayor claridad en las actitudes frente a prácticas como el divorcio, la homosexualidad, el aborto y las relaciones sexuales prematrimoniales. En este aspecto, además, podría hablarse de una tendencia generacional, ya que los adolescentes presentan posturas aún más abiertas que los adultos.

Por otra parte, cuando se analiza la evolución de la tolerancia hacia la diversidad, se observan nuevamente tendencias heterogéneas, que apuntan, principalmente, hacia el aumento de la intolerancia hacia ciertos grupos sociales. Concretamente, entre los bolivianos adultos se ha producido un despunte del rechazo hacia extranjeros y personas que hablan un idioma distinto. De acuerdo a los análisis estadísticos realizados, esto último parece estar relacionado con la persistencia y el crecimiento de prejuicios contra la población indígena, aunque no existen datos adicionales que puedan corroborar este indicio. Y, si bien se observa un leve descenso de la intolerancia hacia los homosexuales, los niveles de rechazo contra este grupo siguen siendo muy altos (los más altos entre todos los grupos analizados). En ese sentido, en 2024 los bolivianos no parecen ser más tolerantes, en términos agregados, que en 2017, y futuros informes de la EMV deberían considerar hacer seguimiento de la evolución de estos valores.

En líneas generales, se puede decir que las y los bolivianos, siete años después de la primera ronda de la EMV en el país, siguen manteniendo una cultura eminentemente conservadora y tradicional, aunque se observan transformaciones heterogéneas en algunos valores. Estas transformaciones se definen como heterogéneas porque se observan comportamientos distintos en relación con el mantenimiento de normas sociales y la autoridad, en función de la variable a la que se preste atención, y al

mismo tiempo se evidencian tendencias claramente positivas en torno a la libertad percibida, la secularidad y el ejercicio de la autonomía individual, y claramente negativas en lo que respecta a la tolerancia hacia la diversidad.

Las sucesivas crisis económicas y políticas que el país arrastra desde 2019 podrían estar influyendo en la persistencia de valores asociados a la supervivencia y seguridad existencial, en detrimento de valores más emancipadores. Una eventual cronificación de estas crisis podría entorpecer el proceso de desarrollo económico y social, y, por consiguiente, dificultar una transformación cultural de la sociedad boliviana hacia posturas más abiertas, tolerantes y seculares.

Por otra parte, la creciente inserción de la sociedad boliviana en los debates internacionales, facilitada por la tecnología, representa desafíos y oportunidades para avanzar en la transformación cultural, particularmente entre la población más joven, que está más expuesta a estas esferas. La exposición cada vez mayor a discursos antiderechos, machistas, clasistas y xenófobos –que están en boga en las redes sociales y enciertas narrativas políticas actuales– también puede representar un lastre para el despliegue de valores más emancipadores.

El avance en derechos sociales, identitarios, sexuales y políticos en Bolivia depende, en buena medida, de que los valores predominantes en la sociedad sean favorables a la autoexpresión individual, a la tolerancia hacia la diversidad, a la secularización y a una actitud crítica frente a la autoridad, la tradición y las normas sociales asentadas. En ese sentido, el sistema educativo, el mundo de la cultura y la acción de los distintos actores sociales en todos los ámbitos pueden contribuir a inclinar decisivamente la balanza hacia una u otra dirección. Es decir, la capacidad que tengan los distintos actores sociales y estatales de contrarrestar los discursos reaccionarios y posicionar valores más emancipatorios en la sociedad –y, sobre todo, en las nuevas generaciones–, puede determinar el rumbo que adopte el proceso de cambio cultural en Bolivia. Por consiguiente, el avance en el ejercicio de derechos para todas y todos los bolivianos depende, en gran medida, del éxito o el fracaso de estas acciones.

Referencias

Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (2019). *Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia*.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (2024). Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, accesible en página web: <https://cpv2024.ine.gob.bo/> (última consulta: 28 de agosto de 2025).

- Inglehart, Ronald (1977). *The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among Western Publics*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey.
- Inglehart, Ronald (1990). *Cultural Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton University Press, Princeton, Nueva Jersey.
- Inglehart, Ronald (1997). *Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press, Princeton. Nueva Jersey.
- Inglehart, Ronald (2006). “Mapping global values” en Esmer y Pettersson (2006). *Measuring and Mapping Cultures: 25 Years of Comparative Value Surveys*. Brill. Vol. 5 N.º 2-3, págs. 11-32.
- Inglehart, Ronald (2018). “Cultural Evolution, People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World” en *Changing Societies y Personalities. 2018. Vol. 2. Iss. 2, 2(2)*, 198-202. Cambridge University Press.
- Jost, John T. y Jojanneke van der Toorn (2011). “System Justification Theory” en Van Lange *et. al* (eds.), *Handbook of Theories of Social Psychology*, vol. 2, pág. 313-343, SAGE Publications Ltd.
- Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2004). *Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide*. Cambridge University Press, Nueva York.
- Pettersson, Thorleif y Yilmaz Esmer (Eds.) (2008). *Changing Values, Persisting Cultures. Case Studies in Value Change*. Brill, Leiden - Boston.
- Schwartz, Shalom (2013). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems. In *The psychology of values* (pp. 1-24). Psychology Press.
- Schwarz, Vivian (2024). “El avance autoritario en la sociedad civil boliviana” en *La Democracia en los Ojos de la Gente. 25 Años de Cultura Política en Bolivia*. Ciudadanía y Konrad Adenauer Stiftung.
- Uslaner, Eric (2011). Contact, Diversity, and Segregation. Working paper
- Uslaner, Eric (2012). *Segregation and Mistrust. Diversity, Isolation, and Social Cohesion*. Cambridge University Press, Nueva York.
- Verme, P. (2023). “Perceived Freedom”, en: Maggino, F. (eds.) (2023), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_2126

Welzel, Christian e Inglehart, Ronald (2005). *Modernization, Cultural Change and Democracy. The Human Development Sequence*. Cambridge University Press, Nueva York.

Welzel, Christian e Inglehart, Ronald (2013). *Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation*. Cambridge University Press, Nueva York.

CAPÍTULO 3:

Los valores de la sociedad boliviana en relación a la nación y el mundo

Daniel E. Moreno Morales

Introducción

Históricamente, la identidad nacional ha sido un tema central para la sociedad boliviana. La integración de los ciudadanos a la comunidad política de la nación ha representado un desafío permanente para un país con una gran diversidad cultural y geográfica. Pero además de diverso, Bolivia sigue siendo un país con elevados niveles de desigualdad socioeconómica, rasgo que comparte con buena parte de las sociedades latinoamericanas. La desigualdad tiende a superponerse con las diferencias étnico culturales de la población y la configuración de la nación boliviana está fuertemente marcada por condiciones históricas de diversidad, desigualdad y exclusión, así como de los esfuerzos para superarlas.

El contexto internacional –el conjunto de países y organismos internacionales con los cuales tanto el Estado como los ciudadanos bolivianos se relacionan–, adquiere relevancia especial en el marco de la globalización y la integración regional. La migración de personas entre países evidencia que lo internacional no solo opera en un plano institucional y diplomático, sino que constituye una experiencia vital para millones de seres humanos. Este ámbito es también clave para entender cómo se configura la nación boliviana en relación con el otro: el extranjero, el migrante, los otros países.

La intensidad y el sentido de pertenencia nacional, así como la percepción de los otros y la relación con ellos, definen valores significativos para el ejercicio de derechos, algunos de ellos en clara situación de vulneración, como los derechos de los migrantes y de los refugiados. Estas percepciones también pueden develar las aspiraciones colectivas, marcando como referentes a países con sociedades y gobiernos más o menos respetuosos de los derechos de las personas. Finalmente, la percepción de las entidades internacionales puede definir las condiciones de inserción del país en la globalización, así como las oportunidades de aprovechar sus

potenciales ventajas.

Este capítulo presenta, en su primera parte, una caracterización de la temática de la identidad nacional y la relación de la sociedad con el ámbito internacional. Las siguientes secciones exponen la información de la EMV. En primer lugar, sobre la identidad nacional, luego sobre la migración y, finalmente, en relación a las percepciones de los bolivianos sobre otros países y algunos organismos internacionales. Las conclusiones recogen los principales hallazgos y plantean algunos desafíos en torno a las implicaciones de los mismos para el ejercicio de derechos en el país.

1. Identidades nacional y locales, migración y perspectivas internacionales en un mundo globalizado

En Bolivia, la identidad ha sido históricamente una de las primeras preocupaciones nacionales. Las debilidades en el proceso de conformación de una nación a partir del proyecto del Estado republicano decimonónico se combinan con la presencia de clivajes regionales y étnico-culturales profundos que generaron una sensación de fragilidad en el sentimiento de pertenencia al país. Para muchos, la existencia misma de la nación boliviana –en tanto comunidad política asumida como legítima por todos sus miembros– ha estado cuestionada en distintos momentos de la historia del país.¹

La existencia de una comunidad política de iguales es la base societal de una democracia moderna, algo en lo que Bolivia ha mostrado históricamente falencias importantes que se reflejan tanto en las condiciones socioeconómicas como en los *habitus* que naturalizan y reproducen las desigualdades. En Bolivia y en otros países de la región andina (Degregori, 1998), las desigualdades en el acceso a servicios y a mecanismos de participación política han generado una diferenciación significativa en la experiencia ciudadana, dando lugar a distintas categorías de ciudadanía.

Estas diferencias y su relación con la comunidad política nacional no son producto del azar, sino que responden a la configuración colonial de la sociedad boliviana.

1. Ésta es una discusión de larga data en Bolivia, y los recientes festejos del Bicentenario del país (en agosto de 2025) han vuelto a poner atención sobre la temática. Esta cuestión ha sido abordada empíricamente por algunos estudios que han trabajado la relación de los bolivianos con la nación, entre ellos un capítulo del informe de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia de 2017 (Ciudadanía, 2018). Es también una contribución muy importante la serie de estudios publicados como resultado de la convocatoria del PIEB sobre la nación boliviana en 2014 (Fernández Saavedra, Chávez y Zegada, 2014; García Yapur, García Orellana, y Soliz Romero, 2014; Mansilla, Gamboa, y Alcocer, 2014; Molina, Cortez y Muñoz, 2014; Moreno Morales, Vargas y Osorio, 2014; Murillo, Bautista Durán y Montellano, 2014; Nicolas y Quisbert, 2014; Tórrez y Arce, 2014).

Esto quiere decir que las distinciones étnicas de la sociedad se convierten en una matriz de organización jerárquica de la misma, donde lo indígena ocupa un lugar de subalternidad en relación a lo mestizo y lo que tiene un origen europeo evidente. La matriz colonial de la estratificación social boliviana (Rivera C., 1993) es algo evidente.

El “proceso de cambio” que vivió el país durante el primer cuarto del siglo XXI responde directamente a las tensiones generadas por las desigualdades en la incorporación de los ciudadanos a la comunidad política nacional. El proyecto de Estado Plurinacional definido en la Constitución de 2009 buscó enfrentar de manera directa las condiciones de desigualdad y estratificación de la sociedad sobre una base étnico-cultural de origen colonial.² Es evidente que este proceso político logró avances importantes en lo que se refiere a la construcción de un país más inclusivo, en el que todos los ciudadanos puedan sentirse parte válida de la comunidad política nacional. La reducción de la pobreza y, en particular, la ampliación de la clase media, han sido logros importantes en ese camino.³

La inclusión de las poblaciones indígenas en las dinámicas estatales también ha sido relevante, sobre todo, en el plano simbólico. Las aspiraciones de interculturalidad consagradas en la Constitución de 2009 representan un cambio sustantivo en la definición de un país que busca acomodar mejor sus diferencias. La incorporación efectiva de indígenas y personas de sectores populares en los niveles de decisión estatal contribuyó a generar mayor igualdad en la relación entre ciudadanos y Estado (aunque no resolvió muchos problemas en el trato del Estado hacia los ciudadanos). Mecanismos legales como la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación dejaron claro que actitudes de discriminación por motivos raciales y de origen cultural son inaceptables, aunque su implementación en la práctica ha resultado problemática e insuficiente en relación a los desafíos que se planteaban. Pese a los avances, la problemática de la construcción de una comunidad política nacional sigue vigente. Por un lado, las desigualdades históricas no han sido completamente superadas, y las desigualdades sociales siguen afectando negativamente a la población indígena y a quienes viven en las áreas rurales del país, como lo evidencian la mayoría de los indicadores de bienestar registrados por las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro lado, las

2. Sobre el proceso de construcción de la constitución de 2009, ver Schavelzon, 2012.

3. Distintos estudios demuestran un crecimiento real de los sectores medios en ese período, algo que sucede también en otros países de América Latina: véase, Castellani y Zenteno, 2015; Lustig y López-Calva, 2010; PNUD, 2014. Lo que este fenómeno significa para la sociedad boliviana y su estructura de clases es algo que ha generado más discusión: véase Laserna et al., 2018; Paz Gonzales, 2023; Villanueva, 2020, 2024.

diferencias regionales –otro clivaje importante–, no han sido abordadas de manera estructural desde el proyecto del Estado Plurinacional, e incluso en algunos casos se han podido reactivar como una reacción al proceso de construcción nacional en clave indígena (particularmente aymara) comandado por el MAS (Alvizuri, 2009).

Además de lo que sucede internamente, las identidades nacionales se construyen en relación con lo externo, con otros países, otras sociedades y entidades internacionales. En un marco de globalización financiera y cultural, el escenario internacional es cada vez más relevante y la forma en que cada país se inserta en él resulta determinante para sus oportunidades de desarrollo económico y de integración nacional. Las dinámicas geopolíticas y los actores involucrados en ellas son referentes importantes para una sociedad, incluso para una como Bolivia, que tradicionalmente mira más hacia adentro que hacia afuera.

En el contexto internacional, el flujo de personas entre países es un fenómeno de importancia creciente; la migración internacional es cada vez más importante en el mundo. La movilidad de los seres humanos de un país a otro es cada vez más dinámica; según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales alcanzó los 280 millones en 2020, la cifra más alta de la historia, y sigue creciendo cada año.⁴ Muchas personas migran voluntariamente en busca de mejores oportunidades de vida; otras lo hacen obligadas, desplazadas por conflictos internos, crisis humanitarias o por los efectos del cambio climático en sus países de origen. Esta gran cantidad de población migrante genera presión sobre los sistemas de protección, sobre el empleo y sobre la seguridad ciudadana.

Por su importancia cuantitativa, la migración se ha convertido en un tema central del debate público, especialmente en los países que reciben más migración. Las políticas domésticas e internacionales están cada vez más influenciadas por el tema de la migración. Al mismo tiempo, la opinión pública en todo el mundo tiene posiciones cada vez más marcadas –y muchas veces polarizadas– al respecto.

Si bien la migración actual hacia Bolivia es relativamente reducida en términos de la cantidad de personas que vienen a vivir a país, el tema es importante principalmente por la historia del país como expulsor de población. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 1,8 millones de bolivianos viven en el exterior, aunque la información que se tiene al respecto no es del todo precisa. En cualquier caso, puede asumirse que la mayoría de las familias bolivianas tiene alguna experiencia directa con la migración,

4. Informe sobre las Migraciones en el Mundo, OIM, 2024, en: <https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/?lang=ES>.

con algún miembro viviendo fuera de Bolivia.⁵

Detrás de la migración internacional operan un conjunto de sentidos en relación a lo que cada país representa, no solo en términos de oportunidades para los migrantes, sino también como modelo para otros países. Esto tiene que ver con percepciones distintas de lo que cada país representa en el escenario internacional. La percepción sobre cada país puede revelar información valiosa de lo que la sociedad boliviana considera como un ejemplo válido. Es evidente que Rusia, Estados Unidos o China no representan lo mismo en el escenario internacional. La valoración que se hace de uno u otro puede reflejar las preferencias ciudadanas por los valores que cada uno de estos países representa (o, al menos, que se asume que podría representar).

La percepción que tienen los bolivianos de las entidades internacionales marca también el grado de apertura de la sociedad boliviana al mundo exterior. Un país que desconfía de los actores internacionales tiende a mirar hacia adentro, sin encontrar fuera de sus fronteras socios con los cuales colaborar en términos de beneficio mutuo. La percepción tradicional de la explotación permanente por parte de los extranjeros hacia Bolivia es una de los tópicos detrás de la falta de confianza en los actores internacionales.

La forma en la que las identidades nacional, local y regional se articulan, así como las percepciones que tienen los bolivianos sobre la migración, sobre otros países y sobre los organismos internacionales, son el tema de este capítulo. El análisis de la información de la EMV sobre estas temáticas puede contribuir a entender mejor los avances en la consolidación de la comunidad de la nación boliviana, y a hacerlo en referencia también a lo que sucede fuera del país. Esto resulta útil para discutir los valores de la sociedad desde una perspectiva en la que posturas localistas y globalistas pueden resultar complementarias.

2. Pertenencia e identidad nacional y local

Las democracias modernas requieren de la existencia de una comunidad política nacional; para que el país funcione necesita de personas que reivindiquen el valor de su nacionalidad y asuman un sentido de “destino común” que una a todos los miembros de una colectividad nacional (Norris, 1999). Los ciudadanos deben “imaginarse” parte de la comunidad nacional para que ésta funcione (Anderson, 1993).

Uno de los indicadores que se refieren al vínculo de las personas con el país es

5. El Censo de 2024 pregunta específicamente sobre esto. La publicación de sus resultados permitirá conocer con mayor precisión la proporción de familias bolivianas que tienen al menos un miembro viviendo en otro país.

el orgullo de ser boliviano. Parece evidente que, al menos cierto nivel de orgullo nacional, es una señal saludable del vínculo de los ciudadanos con la comunidad política nacional –aunque también es evidente que un exceso de orgullo nacional podría traer consigo actitudes chauvinistas con potenciales rasgos autoritarios y rechazo contra personas de otras nacionalidades.⁶

La EMV incluye una pregunta sobre el nivel de orgullo que sienten las personas por su nacionalidad:

¿En qué medida está Usted orgulloso/a de ser boliviano/a?

(Leer y codificar una respuesta)

1) Muy orgulloso/a

2) Algo orgulloso/a

3) Poco orgulloso/a

4) Nada orgulloso/a

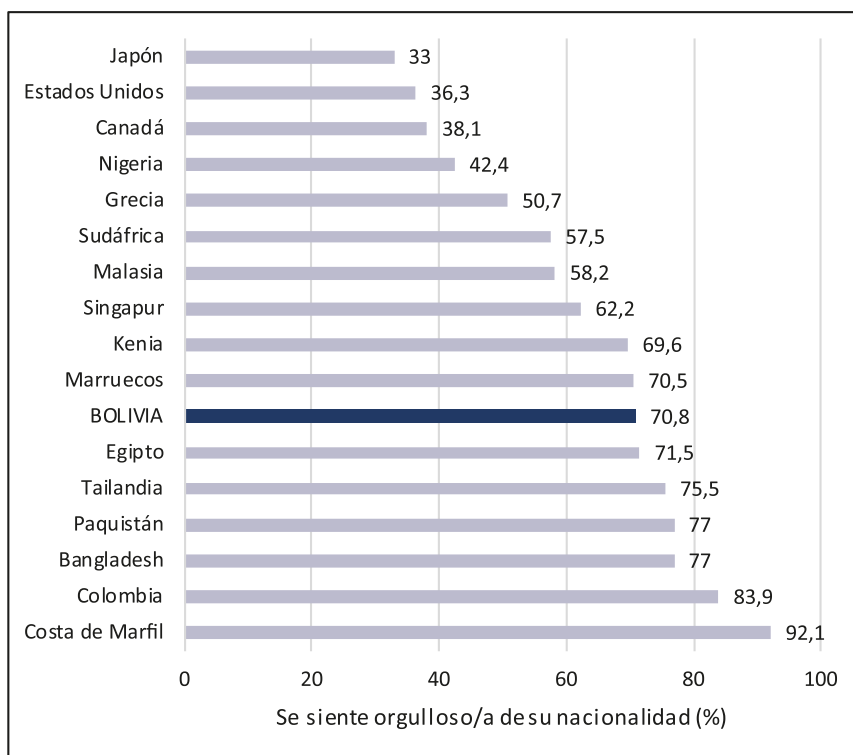
5) No soy [boliviano/a]

Los datos de la encuesta de 2024 muestran que siete de cada diez bolivianos se sienten muy orgullosos de su nacionalidad. Este porcentaje representa una ligera disminución respecto a 2017, cuando se registró un valor de 76%.

En términos comparativos, de entre los países para los cuales ya se tiene información en esta ronda global de la EMV, el orgullo nacional que se registra en Bolivia tiene un valor medio, aunque es notablemente más bajo que el de Colombia, otro país sudamericano incluido en la Encuesta del que ya se dispone de datos. El gráfico que sigue muestra dicha comparación.

6. La historia de la humanidad es pródiga en ejemplos en los cuales el exceso de patriotismo resultó en gobiernos autoritarios y proyectos imperialistas (Arendt, 1973; Gellner, 1983; Norris y Inglehart, 2019).

Gráfico 1. Porcentaje de personas que dice estar orgullosa de su nacionalidad, Bolivia en perspectiva comparada. EMV 2024



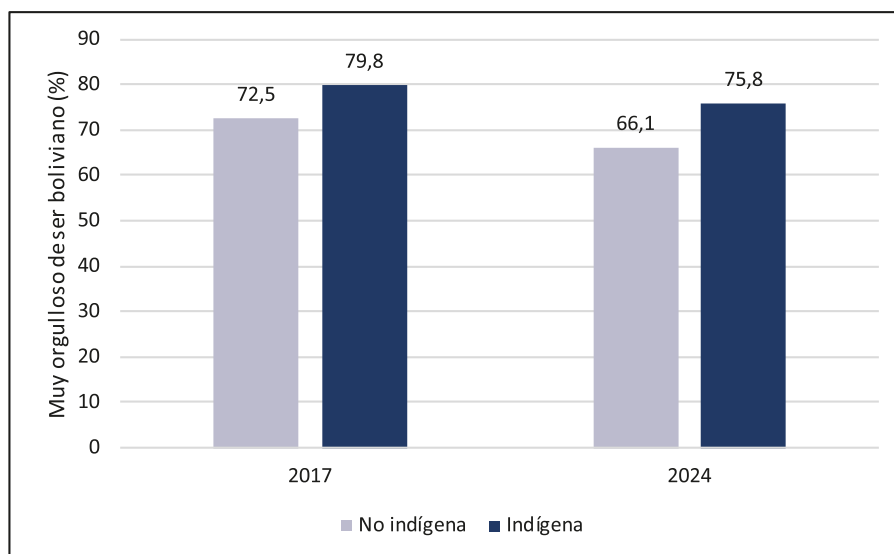
Fuente: Elaboración propia.

¿Qué factores se relacionan con el orgullo de ser boliviano? Un hallazgo relevante, derivado del análisis estadístico multivariado,⁷ es que la población indígena boliviana se sienta más orgullosa de su nacionalidad que el resto de los bolivianos.⁸ La diferencia –de casi 10 puntos porcentuales en los promedios– es de una magnitud importante y es estadísticamente significativa.

7. Se realizó una serie de análisis estadísticos multivariados (regresiones logísticas) para modelar el efecto que tienen distintas variables en la probabilidad de que una persona se sienta orgullosa de ser boliviana, así como para las otras variables de interés en este capítulo. Las variables que se incluyeron en los modelos estadísticos son: sexo, edad, área de residencia, región del país, ingreso, autoidentificación con un pueblo indígena, primera lengua de la persona, nivel educativo de la o el entrevistado y nivel educativo de su madre, como proxy del nivel educativo del hogar de donde proviene.

8. Otras fuentes de información de más larga data muestran que hasta 2005 no había diferencias relevantes en el sentido de orgullo y pertenencia nacional entre indígenas y no indígenas, pero a partir de la llegada del MAS al poder, en 2006, la población indígena se siente más fuertemente vinculada con la comunidad política nacional que el resto (Moreno Morales, 2008; Seligson et al., 2006).

Gráfico 2. Porcentaje de personas muy orgullosas de ser bolivianos, por autoidentificación étnica. Bolivia, EMV 2017 y 2024



Fuente: Elaboración propia.

Otros factores que inciden en el sentimiento de orgullo nacional son la edad –con las personas mayores registrando niveles más altos de orgullo–, y el nivel de ingresos, que también presenta una relación positiva. Sin embargo, ambos factores muestran una relación con niveles apenas marginales de significancia estadística.

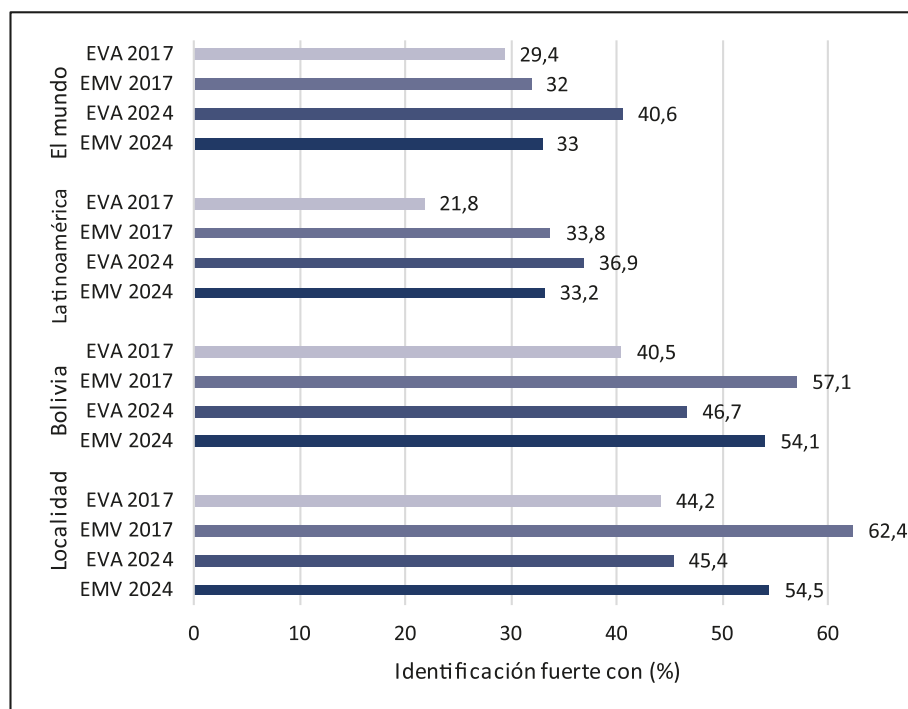
Además del orgullo nacional, la EMV también indaga sobre el sentido de pertenencia de las personas a la comunidad nacional preguntando directamente cuánto se identifica la persona con el país, con el nivel local (el lugar o comunidad donde vive la persona) y con el nivel supranacional (América Latina y el mundo). La batería de preguntas empleada para esto es la siguiente:

Las personas tienen puntos de vista diferentes sobre sí mismos y cómo se relacionan con el mundo. Usando esta tarjeta, ¿podría decirme cuánto se identifica usted con...? (Leer y codificar una respuesta para cada declaración):

	<i>Mucho</i>	<i>Algo</i>	<i>Poco</i>	<i>Nada</i>
<i>Su pueblo (comunidad) o ciudad en la que Usted vive</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>El país en su conjunto (Bolivia)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>El continente (América latina)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>El mundo</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

En 2024, los sentidos de identificación con lo local y con lo nacional presentan porcentajes similares –ligeramente superiores al 54%–, mientras que la identificación con los espacios externos, tanto América Latina como el mundo, también son similares entre sí, con alrededor del 33%. Comparativamente con los datos de 2017, en 2024 se observa un ligero descenso en la intensidad de la identificación con el espacio local y nacional entre los adultos. En cambio, entre los adolescentes se aprecia una intensificación de la identidad nacional, así como de la identificación con América Latina y con el mundo. El gráfico siguiente muestra los porcentajes de personas que se identifican mucho con cada uno de estos espacios (local, nacional, regional y global), distinguiendo los datos para adultos (EMV 2017 y EMV 2024) y adolescentes (EVA 2017 y EVA 2024).

Gráfico 3. Porcentaje de personas con identificación fuerte con distintos ámbitos, por muestra. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

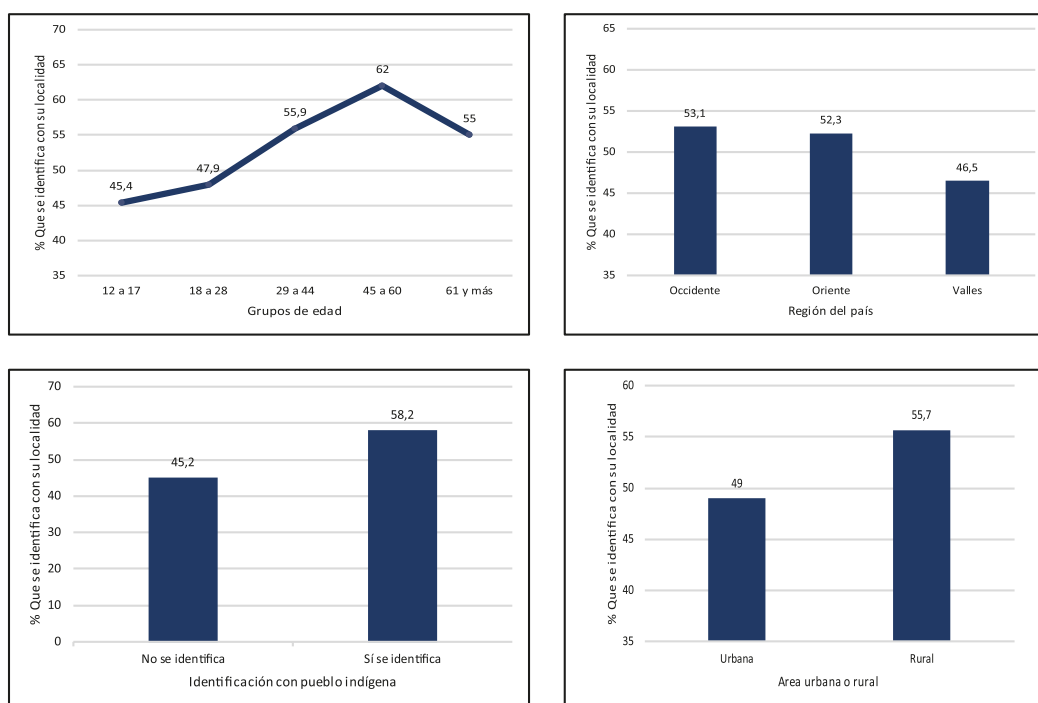
Así, los adultos tienen un sentido de pertenencia a los espacios local y nacional más fuerte que el de los adolescentes. En contrapartida, los más jóvenes manifiestan una identificación más fuerte que los adultos con lo que está más allá de lo nacional, lo regional y el mundo.

Un análisis más detallado de las variables relacionadas a la identificación con estos distintos niveles muestra que el apego a lo local, al terruño, es más fuerte entre

• Los valores de la sociedad boliviana en relación a la nación y el mundo

quienes viven en las áreas rurales, entre quienes se identifican con un pueblo indígena y entre las personas de mayor edad, y es ligeramente menor entre quienes viven en las regiones de valles del país (departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija).

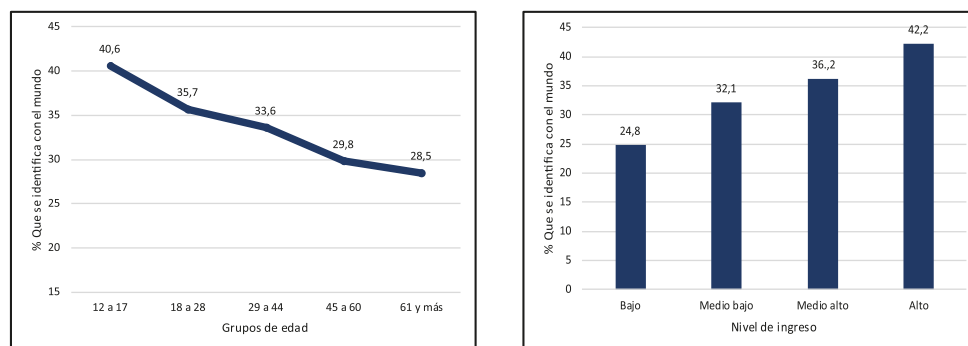
Gráfico 4a, 4b, 4c, 4d. Identificación con lo local según grupos de edad, región del país, autoidentificación indígena y área de residencia. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

En cambio, en el espacio identificado al otro extremo –el mundo–, la identificación es más fuerte entre las personas más jóvenes y entre las personas con mayores ingresos.

Gráfico 5a y 5b. Factores con efecto sobre la identificación con el mundo. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

En suma, estos datos revelan un sentido de pertenencia a la comunidad política de la nación relativamente sólido, aunque con indicios de reducción en su intensidad en relación a la encuesta de 2017. Al mismo tiempo, la identificación con espacios locales también se ha reducido entre los adultos, siendo más sólida en el área rural, entre las personas de más edad y entre la población indígena, mientras que resulta más débil en los departamentos del centro del país. Paralelamente, los jóvenes y las personas con mejores ingresos económicos muestran una tendencia identitaria más globalista.

3. Percepciones sobre la migración

Las percepciones de los bolivianos sobre la migración están estrechamente vinculadas a su experiencia personal con este fenómeno, lo que abarca tanto sus implicaciones directas como indirectas (por ejemplo, crecer en un hogar con padres que trabajan en el exterior o depender de las remesas enviadas por familiares). Al mismo tiempo, estas percepciones sobre las migraciones develan el grado de apertura de las sociedades hacia el resto del mundo, así como su disposición a recibir población de distintos orígenes, culturas y experiencias de vida. Ésta es una cuestión que se inscribe en un debate público muy influido por los sentimientos de miedo o inseguridad que envuelven el fenómeno de la migración.

La EMV incluye algunas preguntas directamente enfocadas hacia esta temática. Un par de ellas apunta a evaluar las percepciones de las personas sobre las consecuencias que tienen tanto la emigración como la inmigración sobre el país. Las preguntas son las siguientes:

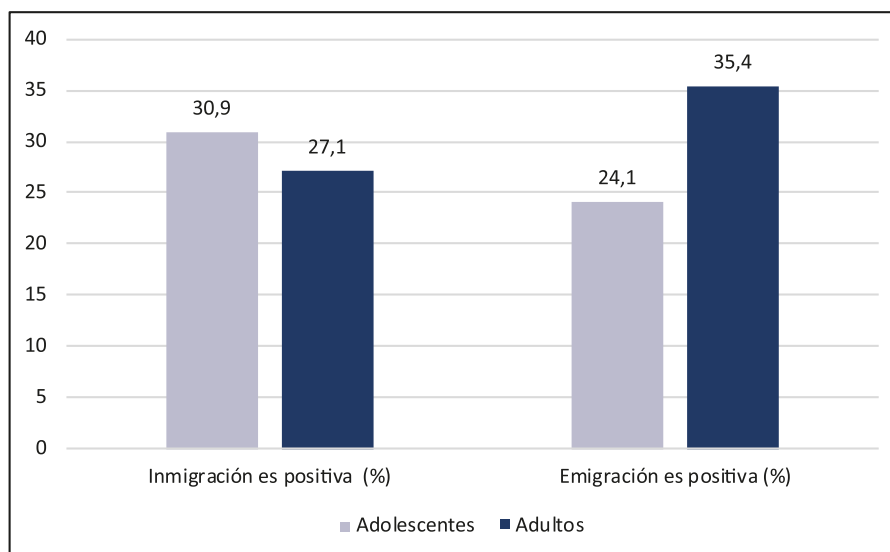
En relación a las personas que se van del país o a las que vienen a vivir a nuestro país, por favor dígame si esto es positivo o negativo para Bolivia

	<i>Completamente negativo</i>					<i>Completamente positivo</i>				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Inmigración, las personas que vienen a vivir a Bolivia</i>										
<i>Emigración, las personas que se van de Bolivia</i>										

En general, las respuestas tienden a ser más favorables que negativas; la suma de las respuestas positivas (8, 9 y 10) supera a la de las respuestas negativas (1, 2 y 3). El siguiente gráfico muestra los porcentajes de personas que consideran positiva

la migración en estas dos facetas, distinguiendo entre adolescentes y personas mayores de 18 años.⁹

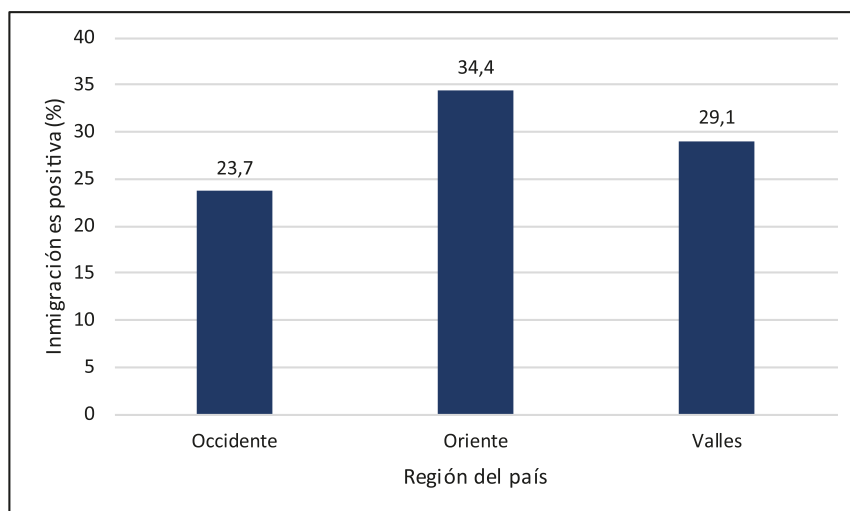
Gráfico 6: Percepciones sobre emigración e inmigración para adultos y adolescentes. Bolivia, EMV y EVA 2024



En lo que se refiere a la inmigración, después de un análisis multivariado que se controla mediante otros factores, la única característica socioeconómica que tiene un efecto independiente y significativo es la región del país donde vive la persona: en general, quienes viven en los departamentos del oriente tienen una actitud más favorable hacia la inmigración.

9. Para mejorar la exposición de estos resultados, las respuestas fueron recodificadas de tal manera que a las respuestas 8, 9 y 10 se les asigna un valor de 100, que corresponde a clasificación de efecto “positivo”, mientras que las otras respuestas, de 1 a 7, recibieron un valor de 0.

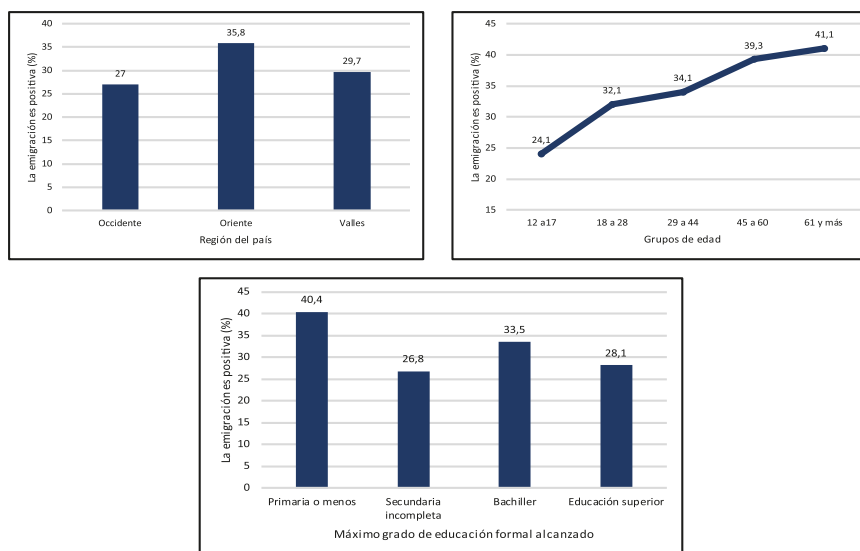
Gráfico 7. Porcentaje de personas que cree que la inmigración es positiva, por región del país. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la emigración, una vez controlados otros factores, los habitantes de los departamentos del oriente del país son también quienes muestran una mirada más positiva hacia la emigración. Además, la edad guarda una relación positiva con esta percepción: los adultos mayores tienden a considerar la emigración de manera más positiva en comparación con los jóvenes y los adolescentes. Finalmente, las personas con nivel educativo primario o inferior perciben la emigración de manera más positiva que aquellas personas con mayor nivel educativo.

Gráfico 8a, 8b y 8c. Porcentaje de personas con percepción positiva de la emigración, por región (a), edad (b) y nivel educativo (c). Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

En resumen, los bolivianos que viven en los departamentos del oriente del país, particularmente Santa Cruz, donde se concentra la gran mayoría de la muestra correspondiente a la región oriental (incluyendo también a Beni y Pando), tienen una mirada más positiva sobre los efectos de la emigración y de la inmigración en Bolivia. Les siguen los habitantes de los departamentos de los valles. En ese sentido, la información sugiere que Santa Cruz –el departamento que más migración internacional recibe– está más abierta al mundo, al menos en lo que respecta a la percepción de los beneficios potenciales asociados tanto a recibir migrantes y a expulsar población a otros países.

Por otro lado, en comparación con los adultos, los adolescentes jóvenes tienen una percepción de la emigración algo menos positiva. Esta diferencia no necesariamente está vinculada con la intención de migrar que tengan las personas (es conocido que el impulso para migrar es más fuerte entre los adultos más jóvenes), sino con la valoración de los efectos que esta práctica pueda tener en el país (por ejemplo, con la expulsión de capital humano o la afectación de las relaciones intrafamiliares). Sin embargo, esta explicación no es por el momento precisa.

4. Miradas a otros países y entidades internacionales

Esta última sección presenta la información de la Encuesta respecto a la valoración que tienen los bolivianos sobre distintos países y entidades internacionales. ¿Cuál es la percepción que tienen los bolivianos sobre otros países? La EMV incluye un conjunto de preguntas específicamente diseñadas para captar esta preocupación, teniendo en cuenta algunos países relevantes a nivel mundial:¹⁰

¿Usted tiene una opinión muy favorable, algo favorable, algo desfavorable o muy desfavorable de los siguientes países...? (Leer y codificar para cada una):

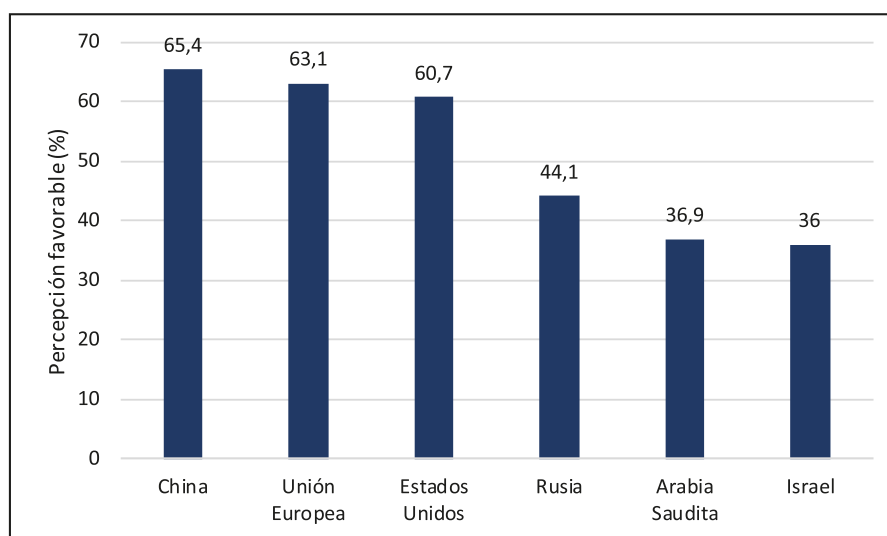
	<i>Muy favorable</i>	<i>Algo favorable</i>	<i>Algo desfavorable</i>	<i>Muy desfavorable</i>
<i>China</i>	4	3	2	1
<i>Unión Europea</i>	4	3	2	1
<i>India</i>	4	3	2	1

10. Los países sobre los que se pregunta son relevantes en el escenario internacional. Es posible que otros países tengan más relevancia para el caso boliviano, como Brasil o Venezuela; lamentablemente, por motivos de espacio en un cuestionario ya largo, solamente se incluyeron los países que forman parte del cuestionario base de la Encuesta Mundial de Valores para todo el mundo. Si bien la Unión Europea no es un país en sí mismo, se lo considera como un solo ítem para simplificar la discusión.

<i>Israel</i>	4	3	2	1
<i>Rusia</i>	4	3	2	1
<i>Arabia Saudita</i>	4	3	2	1
<i>Estados Unidos</i>	4	3	2	1

El gráfico que sigue muestra el porcentaje de adultos que tiene una visión “muy favorable” o “favorable” de cada uno de los países en cuestión.

Gráfico 9. Porcentaje de personas con percepción favorable sobre distintos países. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Entre los seis países considerados, China es el que muestra un mayor porcentaje de favorabilidad entre los bolivianos, aunque las diferencias con la Unión Europea y los Estados Unidos no son estadísticamente significativas; poco más de seis de cada diez bolivianos ve de manera favorable a estas naciones. En contraste, Rusia, Arabia Saudita e Israel registran niveles de favorabilidad más bajos y minoritarios.

Un análisis más profundo de la información permite identificar un conjunto de factores que inciden sobre la percepción que tienen los bolivianos en relación a los países considerados en esta lista. Independientemente de otros factores, la edad, el sexo, la región, la confianza en el gobierno nacional, tener un idioma indígena como primera lengua e identificarse con un pueblo indígena tienen una relación

estadística con estas percepciones, aunque lo hacen de manera diferenciada.¹¹ La tabla que sigue muestra el efecto de cada uno de estos factores sobre la percepción favorable hacia los distintos países de interés. En cada celda se consigna la relación que tiene una variable sobre la percepción de cada país; por ejemplo, una vez que se controla por otros factores, ser mujer no tiene una relación significativa con la percepción sobre la China, la Unión Europea e Israel, pero sí muestra una relación positiva débil con Estados Unidos y una relación negativa fuerte con Rusia y Arabia Saudita (es decir, las mujeres tienen una opinión más desfavorable sobre Arabia Saudita y Rusia que los hombres, y una percepción ligeramente más positiva sobre Estados Unidos).

Tabla 1. Resumen de los efectos de distintas variables sobre la valoración de países

Variable / País	China	U.Europea	EEUU	Rusia	A. Saudita	Israel
Sexo (mujer)			POSITIVO, DÉBIL	NEGATIVO, FUERTE	NEGATIVO, FUERTE	
Edad	NEGATIVO, FUERTE		NEGATIVO, DÉBIL	NEGATIVO, FUERTE	NEGATIVO, FUERTE	
Confianza en gobierno	POSITIVO, DÉBIL			POSITIVO, FUERTE	POSITIVO, DÉBIL	POSITIVO, FUERTE
Lengua madre indígena		NEGATIVO, FUERTE	NEGATIVO, FUERTE			
Autoidentificación indígena					POSITIVO, FUERTE	
Área (rural)					POSITIVO, DÉBIL	
Región (Oriente vs occidente y valles)				NEGATIVO, DÉBIL		

Fuente: Elaboración propia.

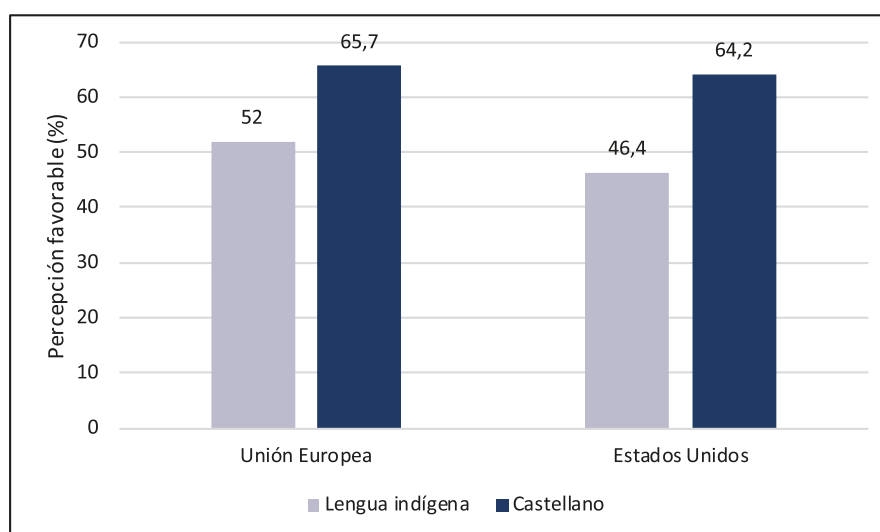
De la lectura de la tabla anterior se desprende que, además de las diferencias en la percepción que tienen las mujeres sobre algunos países, los jóvenes ven más favorablemente a China, Rusia y Arabia Saudita que los mayores, mientras que la diferencia en torno a Estados Unidos es menos pronunciada. La dimensión política también resulta significativa: quienes expresan confianza en el gobierno boliviano

11. Se usó un modelo de regresión logística multivariada para modelar la probabilidad de que una persona tenga una percepción favorable o muy favorable de cada país. Las variables que se incluyeron en el modelo son el área de residencia (urbano o rural), la región del país (oriente, occidente o valles), la edad, el sexo, el ingreso, la confianza en el gobierno, la autoidentificación como indígena, el primer idioma que habló la persona, el nivel educativo de la persona y el de su madre como proxy del nivel socioeconómico del hogar de donde proviene la persona.

muestran mayor favorabilidad hacia Rusia e Israel, y menor hacia China y Arabia Saudí, en comparación con quienes muestran poca confianza en el gobierno nacional. Por otra parte, tener un idioma indígena como primera lengua reduce drásticamente la percepción favorable sobre la Unión Europea y Estados Unidos. Por parte, las personas que se autoidentifican como indígenas y quienes viven en el área rural ven más favorablemente a Arabia Saudita. En contraste, en el oriente boliviano son algo más críticos con respecto a Rusia que el resto de los bolivianos.

Estas diferencias pueden ser importantes en términos sustantivos. Por ejemplo, la favorabilidad hacia Estados Unidos es casi un 20% más baja entre quienes tienen una lengua indígena como su primer idioma, en comparación con quienes tienen al castellano como lengua materna. Algo similar, aunque ligeramente menos marcado, sucede con la Unión Europea (ver gráfico 10).

Gráfico 10. Percepción favorable de la Unión Europea y los Estados Unidos, por lengua materna. Bolivia, EMV 2024

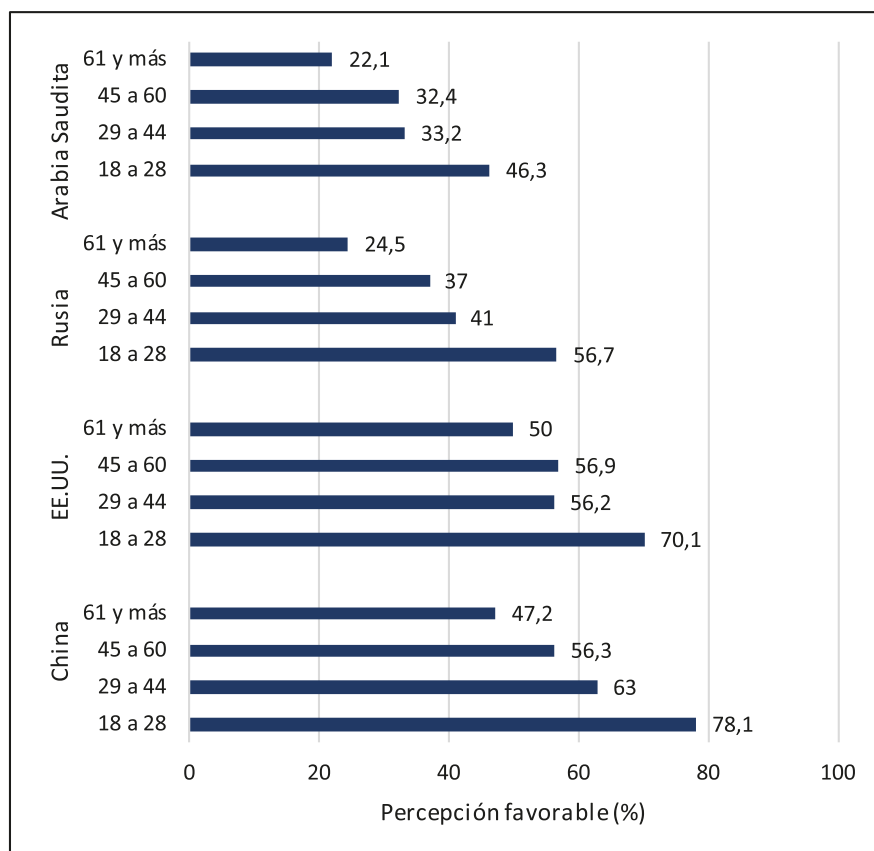


Fuente: Elaboración propia.

El efecto de la edad resulta igualmente evidente. Los jóvenes tienden a mostrar una percepción mucho más favorable hacia los distintos países considerados en el cuestionario, en comparación con las personas de mayor edad. Esta relación es muy clara, tal y como se presenta en el gráfico 11.¹²

12. Las preguntas sobre el contexto internacional no fueron incluidas en la muestra de adolescentes.

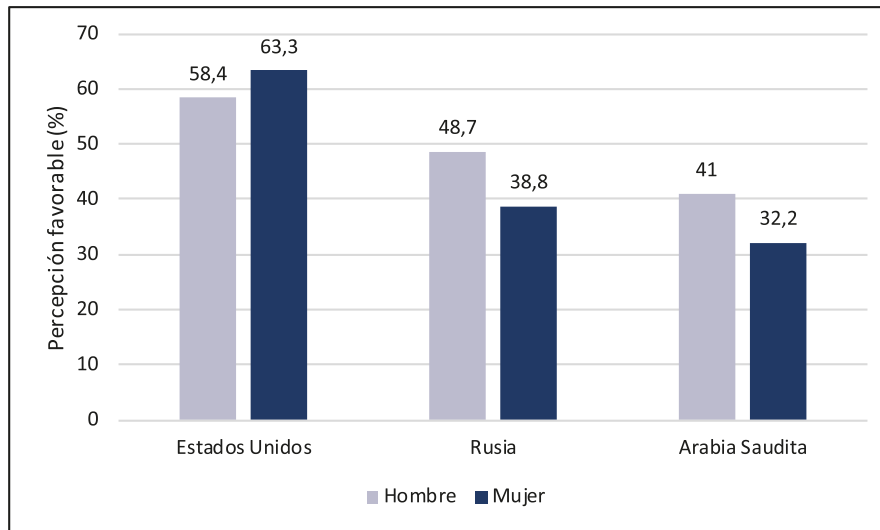
Gráfico 11. Porcentaje de personas con percepción favorable sobre distintos países, por grupo de edad. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Como se discute más arriba, las mujeres tienen una percepción más favorable que los hombres sobre Estados Unidos, y mucho más desfavorable sobre Rusia y Arabia Saudita. Es posible que esta diferencia se explica por la percepción sobre un trato deficiente o injusto a las mujeres en estos dos países, aunque la explicación precisa de este fenómeno requiere de investigaciones específicas.

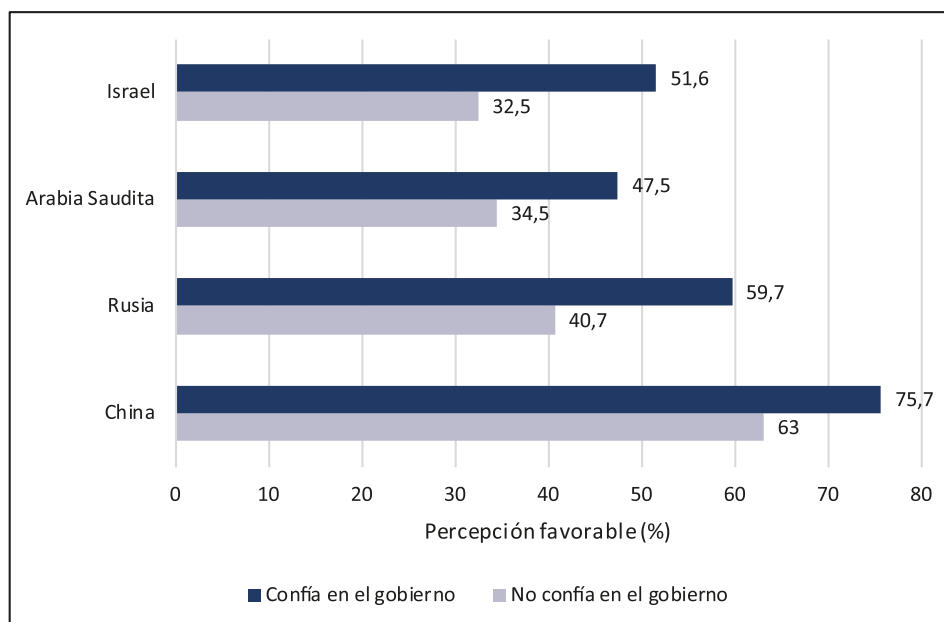
Gráfico 12. Porcentaje de personas con percepción favorable sobre países, por género. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Una de las variables que mejor explica las diferencias en la percepción sobre algunos países es el nivel de confianza en el gobierno nacional. Los bolivianos que confían en el gobierno ven más favorablemente a China, Rusia, Arabia Saudita y también a Israel. Las afinidades ideológicas del gobierno boliviano y su política exterior reciente parecen ofrecer una explicación coherente para la percepción favorable hacia China y Rusia. La explicación para las diferencias en la percepción de Arabia Saudita e Israel, ambas también sustantivamente importantes y estadísticamente significativas, son menos claras.

Gráfico 13. Porcentaje de personas con percepción favorable sobre países por confianza en el gobierno nacional de Bolivia. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Además de la percepción sobre los distintos países, en la EMV se pregunta sobre la confianza que despiertan distintas entidades internacionales. La pregunta se formula de la siguiente manera:

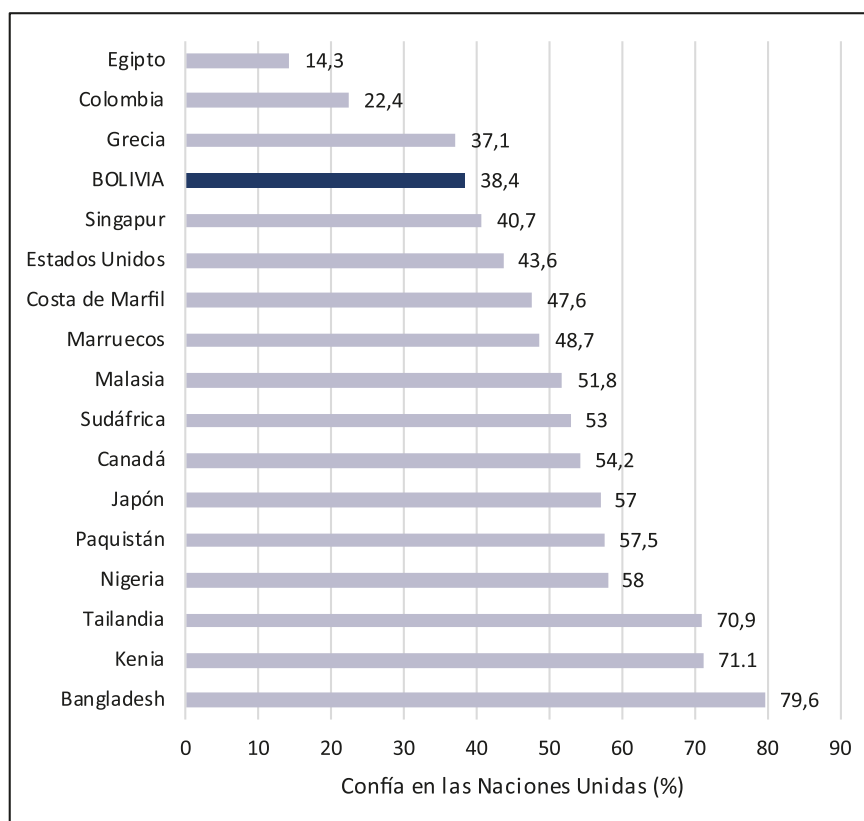
Hablando de organizaciones internacionales, ¿cuánta confianza tiene usted en ellas? Para cada una, por favor dígame si tiene mucha confianza, algo de confianza, poca confianza, nada de confianza (Leer y codificar para cada una):

	<i>Mucha confianza</i>	<i>Algo de confianza</i>	<i>Poca confianza</i>	<i>Nada de confianza</i>
<i>El MERCOSUR</i>	1	2	3	4
<i>La Organización de Naciones Unidas (ONU)</i>	1	2	3	4
<i>La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)</i>	1	2	3	4
<i>El Banco Mundial (BM)</i>	1	2	3	4
<i>El Fondo Monetario Internacional (FMI)</i>	1	2	3	4
<i>La Organización Mundial de la Salud (OMS)</i>	1	2	3	4
<i>La Organización Mundial del Comercio (OMC)</i>	1	2	3	4

En términos generales, la confianza en las entidades internacionales no es alta entre la población adulta boliviana. Ninguna de las instituciones referidas logra superar el umbral de la mitad de la favorabilidad cuando se consideran las respuestas de

“muchísima confianza” y “algo de confianza”. Cuando se comparan estos promedios con los de otros países para los cuales ya se tiene información en esta ronda de la EMV, la confianza de los bolivianos en las entidades internacionales es relativamente baja. El gráfico siguiente muestra el porcentaje de personas que confía en la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia y en los otros países.

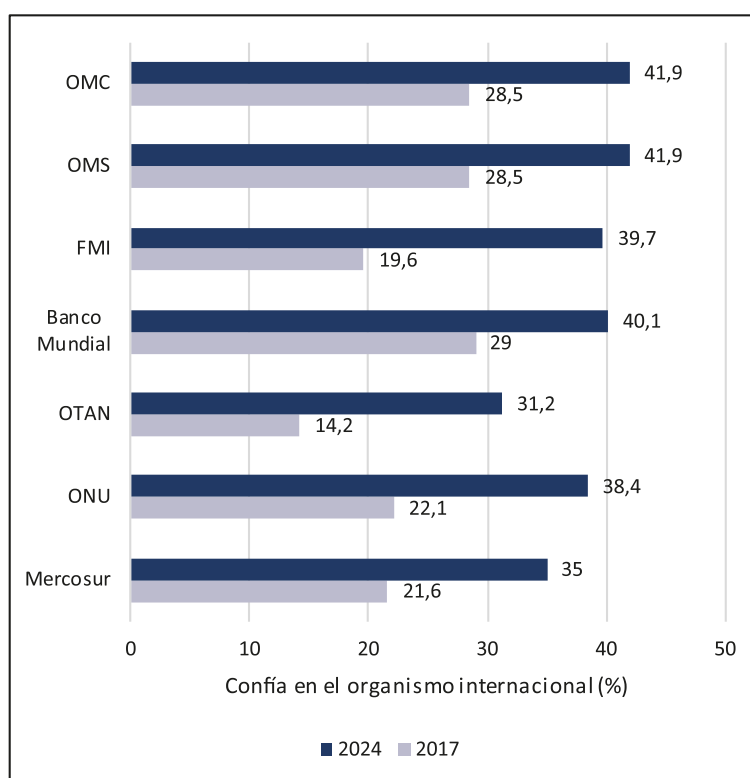
Gráfico 14. Porcentaje de personas que confía en las Naciones Unidas. Bolivia en perspectiva comparada internacional, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, el dato más destacado en el caso boliviano es el notable incremento en los niveles de confianza hacia todas estas entidades internacionales entre 2017 y 2024. En cada caso, el aumento es significativo tanto desde una perspectiva sustantiva como estadística. El gráfico 15 muestra esta comparación.

Gráfico 15. Confianza en distintos organismos internacionales. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

La percepción que tienen los bolivianos sobre los organismos internacionales ha mejorado consistentemente en todas las variables consideradas. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande? Si bien la información disponible en la Encuesta no permite establecer una respuesta concluyente, pueden esbozarse algunas hipótesis que expliquen este cambio tan llamativo. Una respuesta plausible es que el cambio esté relacionado con el agotamiento del modelo político y económico boliviano, que a finales de 2024 ya alimentaba una sensación de crisis profunda entre los bolivianos. En este contexto, el aumento de confianza en los organismos internacionales puede estar relacionado con la percepción de la necesidad de recurrir a algunos de estos organismos para hacer frente a la crisis.

Otra hipótesis, complementaria a la anterior, apunta a la misma política exterior boliviana, caracterizada en los últimos años por priorizar vínculos con gobiernos y organismos afines ideológicamente. Este cambio podría estar manifestando una demanda ciudadana por mayor articulación internacional con distintos organismos internacionales, así como por una diversificación en la lógica de relacionamiento exterior del país.

También es posible que el incremento en la confianza en los organismos

internacionales tenga que ver con el crecimiento de la cobertura y uso de Internet, en particular a partir de la pandemia, lo que ha podido contribuir a que la gente identifique mejor el escenario internacional, desarrollando una visión más positiva hacia sus actores.

En resumen, esta sección ha evidenciado que la percepción referida a algunos países –como China, la Unión Europea y los Estados Unidos– es mayoritariamente favorable, mientras que la opinión sobre otros –Rusia, Arabia Saudita e Israel–, es mayoritariamente negativa. Distintos factores explican estas percepciones, entre ellos la confianza en el gobierno nacional, la edad de las personas y el provenir de un hogar donde se habla una lengua indígena. También se ha evidenciado un cambio sustancial en la valoración de las y los bolivianos hacia los organismos internacionales, los cuales son vistos con mucha más confianza ahora que siete años atrás.

Conclusiones

Este capítulo ha presentado y discutido información sobre cómo los bolivianos perciben su pertenencia a la comunidad imaginada de la nación, así como su visión respecto a los principales actores del escenario internacional. El sentido de pertenencia a una comunidad de iguales –concebida como nación– es un componente necesario para las democracias modernas, y tiene un carácter particularmente relevante en países, como Bolivia, que históricamente han estado marcados por la desigualdad de su población y por la estructuración jerárquica de la sociedad.

Los datos analizados muestran que el vínculo de los bolivianos con la comunidad política nacional es sólido, aunque se observan leves señales de debilitamiento en comparación a los resultados de la EMV realizada en 2017. Es relevante que, en promedio, la población indígena sienta un vínculo con la nación boliviana más fuerte que el resto de la población, y que esta diferencia tienda a crecer. Esta información sugiere que, al menos en el plano simbólico, el Estado Plurinacional podría haber contribuido a revertir la exclusión histórica de los pueblos indígenas en el imaginario de la nación boliviana.

Otro aspecto relevante es la diferencia generacional entre los adolescentes y los adultos en Bolivia. Los más jóvenes muestran una identidad con una visión más globalista, mientras que los adultos mayores privilegian lo local. Esta diferencia seguramente está vinculada con la conectividad digital y el uso de Internet, mucho más frecuente entre los más jóvenes, e implica una comprensión diferente del lugar que los bolivianos ocupan en el mundo.

Por otra parte, tanto la emigración como la inmigración no son percibidas como un hecho positivo por la mayoría de la población. Sin embargo, las percepciones son, en promedio, más favorables en la región oriental del país, lo que sugiere una mayor apertura hacia el mundo en comparación con la zona andina. Este hallazgo es consistente con la proyección de Santa Cruz de la Sierra como un polo de desarrollo no solamente nacional, sino regional en América Latina.

También es destacable el cambio en la percepción hacia los actores internacionales (entidades internacionales de distinto tipo). En 2024, los bolivianos muestran una visión más positiva que en 2017 hacia instituciones como las Naciones Unidas, pero también hacia el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que señala una mayor apertura hacia el contexto internacional.

Resulta evidente que el escenario internacional adquiere una relevancia creciente, incluso en un país, como Bolivia, caracterizado por mantener, históricamente, una mirada más introspectiva (a los bolivianos les cuesta pensar su país en el escenario internacional y no como una excepcionalidad). Sin embargo, la percepción de los bolivianos sobre otros países y sobre las entidades internacionales puede ser un contrapunto al ejercicio de una política internacional que durante las últimas décadas ha priorizado la cercanía ideológica sobre relaciones más pragmáticas. Las perspectivas de tener una inserción exitosa en la globalización pasan por una diplomacia profesional que haga énfasis en los posibles beneficios para la sociedad boliviana que puedan resultar de la asociación con distintas entidades.

Referencias

- Alvizuri, Verushka (2009). *La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952-2006)*. Santa Cruz: El País.
- Anderson, Benedict (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México D.F.: FCE.
- Arendt, Hannah (1973). *The Origins of Totalitarianism*. New York: HBJ Books.
- Castellani, Francesca y Zenteno, Janet (2015). Pobreza y movilidad social en Bolivia en la última década. *BID Nota Técnica, IDB-TN-889*.
- Degregori, Carlos Iván (1998). Movimientos étnicos, democracia y nación en Perú y Bolivia. En Claudia Dary (Ed.), *La construcción de la nación y la representación ciudadana en México, Guatemala, Perú y Bolivia* (pp. 159-226). Ciudad de Guatemala: Guatemala.

- Fernández Saavedra, Gustavo; Chávez, Gonzalo y Zegada, María Teresa (2014). *La Bolivia del Siglo XXI, nación y globalización. Enfoque internacional y estudios de caso*. La Paz: PIEB.
- García Yapur, Fernando; García Orellana, Luis Alberto y Soliz Romero, Marisol (2014). *“MAS legalmente, IPSP legítimamente”*. *Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas en Bolivia*. La Paz: PIEB-PNUD.
- Gellner, Ernest (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Laserna, Roberto; Moreno Morales, Daniel E.; Zegada Claire, María Teresa; Ramírez Soruco, Alejandra; Rivera, Alberto y Komadina, George (2018). *Chicha y limonada. Las clases medias en Bolivia*. La Paz: CERES - Plural.
- Lustig, Nora y López-Calva, Luis F. (2010). *Declining Inequality in Latin America: A Decade of Progress?* Brookings Institution.
- Mansilla, H. C. F.; Gamboa, Franco y Alcocer, Pamela (2014). *Una disyuntiva complicada: Bolivia plurinacional y los conflictos de las identidades colectivas frente a la globalización*. La Paz: PIEB.
- Molina, Wilder; Cortez, Denisse y Muñoz, Evangelio (2014). *Lejos de Estado, cerca de la nación. Ser boliviano en el Beni en tiempos del Estado Plurinacional*. La Paz: PIEB.
- Moreno Morales, Daniel E.; Vargas, Gonzalo y Osorio, Daniela (2014). *Nación, diversidad e identidad en el marco del Estado Plurinacional*. La Paz: PIEB.
- Murillo, Mario; Bautista Durán, Ruth y Montellano, Violeta (2014). *Paisaje, memoria y nación encarnada. Interacciones ch'ixis en la Isla del Sol*. La Paz: PIEB.
- Nicolas, Vincent y Quisbert, Pablo (2014). *Pachakuti: El retorno de la nación. Estudio comparativo del imaginario de la nación de la Revolución Nacional y del Estado Plurinacional*. Sucre: PIEB.
- Norris, Pippa (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Norris, Pippa e Inglehart, Ronald (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Paz Gonzales, Eduardo (2023). *El esquema de clases sociales en Bolivia*. La Paz: IDIS OXFAM.

PNUD (2014). *Perfil de estratos sociales en América Latina: pobres, vulnerables y clases medias*.

Rivera C., Silvia (1993). *La raíz: colonizadores y colonizados*. En Xavier Albó y Franz Barrios (Eds.), *Violencias encubiertas en Bolivia (I)*. La Paz: CIPCA - Aruwiyiri.

Schavelzon, Salvador (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz: Clacso-Plural-CEJIS-IWGIA.

Torrez, Yuri y Arce, Claudia (2014). *Construcción Simbólica del Estado Plurinacional de Bolivia. Imaginarios políticos, discursos, rituales y celebraciones*. La Paz: PIEB.

Villanueva, Amaru (2020). Bolivia: la clase media imaginada. *Nueva Sociedad*, 285.

Villanueva, Amaru (2024). *Clases medias y otras luciérnagas*. La Paz: FES Oxfam.

CAPÍTULO 4: Valores económicos de la sociedad boliviana en 2024: Entre el esfuerzo, el escepticismo y la desconfianza institucional

Santiago Laserna

Introducción

¿Qué dice la forma en que la población boliviana aprueba (o rechaza) prácticas como la evasión fiscal, el favoritismo o el subsidio estatal? ¿Hasta qué punto se cree que el éxito económico depende del esfuerzo personal o de las conexiones políticas? Más allá de las cifras macroeconómicas y los discursos oficiales, los valores que una sociedad cultiva respecto a la igualdad, el mérito y la legalidad ofrecen pistas clave sobre su salud institucional y sus horizontes democráticos. En este contexto, los datos de la segunda Encuesta Mundial de Valores en Bolivia (EMV) abren una ventana privilegiada para explorar cómo se configuran las creencias económicas de los ciudadanos bolivianos.

Desde un enfoque teórico, los valores económicos captados por la EMV se enmarcan en el debate sobre la relación entre cultura política, capital social y legitimidad institucional. Autores como Inglehart y Welzel (2005) sostienen que, a medida que las sociedades avanzan en términos de seguridad material y autonomía individual, tienden a consolidarse valores que privilegian la autoexpresión, el sentido de justicia social y la intolerancia hacia la corrupción. En este sentido, la importancia asignada al mérito personal como base del éxito económico, el apoyo a políticas redistributivas del Estado, y la condena a prácticas ilegales como la evasión fiscal o el uso indebido de influencias, pueden leerse como indicadores del grado de consolidación normativa de una sociedad y de su orientación hacia modelos institucionales democráticos y eficientes.

De acuerdo a la literatura mencionada, los valores económicos de las personas

orientadas a la supervivencia (*survivalists* o *materialists*) se centran en garantizar la seguridad material y la estabilidad, lo que se traduce en apoyo a un papel más fuerte del Estado en la economía, medidas de protección contra la competencia externa y mecanismos de redistribución para asegurar que las necesidades básicas de todos estén cubiertas. Las personas con estos valores suelen priorizar el mantenimiento del empleo, la estabilidad de ingresos y la reducción de riesgos económicos, incluso si ello limita la innovación o la apertura de mercados. En cambio, quienes se identifican con valores de autoexpresión tienden a favorecer un entorno económico más dinámico, con menor intervención estatal, mayor apertura al comercio y a la competencia, y una fuerte valoración de la autonomía individual y del emprendimiento. Para ellos, la prosperidad se alcanza, principalmente, a través del esfuerzo personal, la creatividad y la capacidad de adaptarse a entornos cambiantes, aceptando cierto nivel de incertidumbre a cambio de mayores oportunidades de crecimiento.

El módulo de preguntas relacionadas a valores económicos de la EMV ofrece una ventana empírica para examinar la arquitectura valorativa subyacente a las preferencias económicas de los ciudadanos. Las preguntas Q107 a Q111 del cuestionario (en el anexo digital de este volumen) exploran el equilibrio deseado entre igualdad y mérito, así como el rol que se espera del Estado en garantizar el bienestar social. Las preguntas Q112 y Q113 abordan la percepción de impunidad y confianza institucional, mientras que el bloque Q130 a Q134 indaga sobre la aceptabilidad social de prácticas ilegales, lo que permite estimar el grado de internalización de normas cívicas fundamentales. Este conjunto de indicadores permite analizar cómo se combinan en cada sociedad las ideas de justicia distributiva, eficacia institucional y cultura legal (Alesina y Angeletos, 2005; Welzel y Inglehart, 2013).

En un momento histórico en el que muchos países –incluyendo a Bolivia– enfrentan simultáneamente crisis de legitimidad política, desigualdad persistente y debilitamiento del Estado de derecho, resulta especialmente pertinente examinar cómo los valores económicos configuran la relación entre ciudadanos e instituciones. Comprender estas percepciones no solo permite explicar las preferencias políticas actuales en el país, sino también anticipar los desafíos de gobernabilidad y cohesión social en escenarios de transformación económica. El análisis de los datos más recientes de la EMV en torno a estos valores puede, por tanto, arrojar luz sobre las tensiones estructurales que afectan el desarrollo democrático y el contrato social en Bolivia.

Pero antes, considerando que la encuesta de valores anterior se realizó en Bolivia siete años antes de la ronda de 2024, resulta pertinente revisar qué ha sucedido en

el país en el ámbito socioeconómico durante este periodo. Esto, con la finalidad de identificar posibles causas de cambios en las actitudes de los bolivianos respecto a sus valores económicos, si los hubiera.

Contexto económico boliviano

Durante el período 2019-2024, Bolivia experimentó una aparente estabilidad política y económica, aunque marcada por una tendencia general de deterioro. A pesar de algunos logros iniciales, como la acumulación de reservas internacionales y la expansión del mercado interno, el modelo rentista (basado en la explotación de recursos naturales y la distribución estatal de sus rentas) comenzó a mostrar signos de agotamiento estructural (Linares, 2024; Laserna *et al.*, 2011). La política de priorizar la redistribución por sobre la inversión productiva ha debilitado la capacidad de generación de ingresos sostenibles, incubando una crisis que hoy afecta visiblemente a los hogares (Fundación Milenio, 2024).

Este deterioro comenzó a hacerse evidente en 2014 con la caída de los precios de los hidrocarburos y la reducción de los volúmenes de exportación (Morales, 2014). El Estado intentó compensar la pérdida de ingresos mediante inversiones públicas que, en su mayoría, no generaron retornos significativos y terminaron convirtiéndose en una carga fiscal (Arias, 2011). A esto se sumó un creciente endeudamiento público, subsidios no progresivos y una economía informal en expansión, alimentada por la falta de empleo formal y el auge del contrabando y otras actividades ilegales. La inestabilidad política entre 2019 y 2020, agravada por la pandemia de COVID-19, acentuó la crisis y derivó en una transición accidentada de gobierno (Fundación Milenio, 2021).

La actual administración optó por mantener los pilares del modelo anterior: control de precios, subsidios generalizados y tipo de cambio fijo, en un contexto que ya no contaba con los excedentes fiscales de anteriores años. Aunque el gobierno logró contener la inflación por un tiempo, lo hizo a costa de una creciente brecha cambiaria, un gasto público insostenible y el deterioro de las reservas internacionales.

Hacia 2025, el país enfrenta problemas de abastecimiento, inflación de dos dígitos, y un Estado sin liquidez, que apenas logra sostener los subsidios a combustibles y alimentos básicos. Todo ello revela los límites del modelo vigente, que pese a su colapso funcional, sigue estando profundamente arraigado en el imaginario político y social de Bolivia.

1. Igualdad, mérito y rol del Estado

1.1 Igualdad de ingresos vs. esfuerzo individual

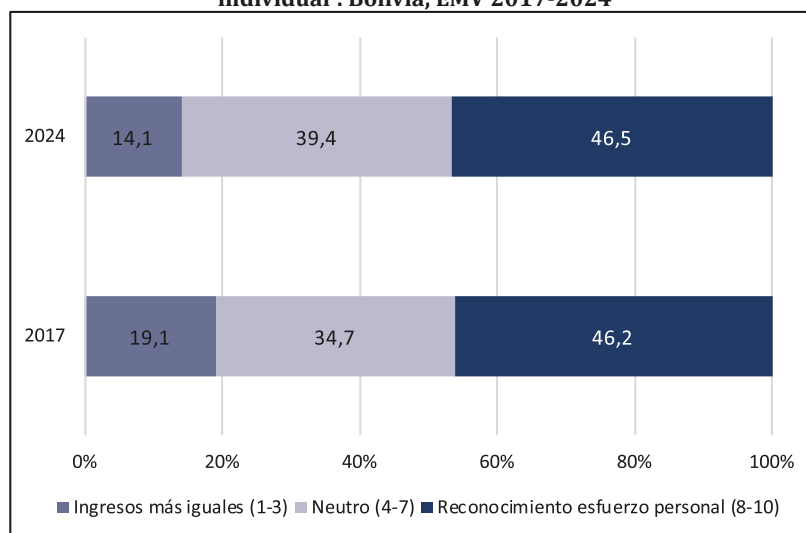
En la discusión sobre el rol del Estado en la economía es común encontrarse con una contraposición entre aquellos que sostienen que la igualdad de ingresos debería ser más importante que la desigualdad ocasionada por el esfuerzo individual. La pregunta que sigue busca determinar cuál es el sentimiento de la población respecto a esta contraposición, formulada de la siguiente manera:

“Ahora me gustaría que me dijera qué opina sobre distintos temas. ¿Dónde colocaría su opinión en esta escala? 1 significa que está totalmente de acuerdo con la afirmación que se encuentra a la izquierda, 10 significa que está totalmente de acuerdo con la afirmación que aparece a la derecha; y si su opinión se encuentra en algún otro lugar intermedio de la escala, puede elegir el número que corresponda”.

Los ingresos deberían ser más iguales					Debe haber más reconocimiento al esfuerzo individual				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

En el gráfico 1 se observa una reducción entre 2017 y 2024 del grupo que apoya una distribución igualitaria (respuestas 1-3), pasando del 19,1% al 14,1%. Sin embargo, esto no se traduce en un aumento proporcional del grupo que prioriza el mérito del esfuerzo individual (respuestas 8-10).

Gráfico 1. Porcentaje de personas que prefiere “Ingresos más iguales” vs. “Reconocimiento al esfuerzo individual”. Bolivia, EMV 2017-2024



Además de esta caída en el respaldo a la igualdad de ingresos, el gráfico 1 muestra un fenómeno igualmente significativo: el crecimiento del grupo que adopta posiciones intermedias en la escala (respuestas 4 a 7), que pasa del 34,7% en 2017 al 39,4% en 2024. Este desplazamiento hacia el centro puede interpretarse como una señal de despolarización o, al menos, de un enfriamiento de las posturas ideológicas más radicales sobre el papel redistributivo del Estado.

Este fenómeno puede estar relacionado con varios factores. En primer lugar, podría tratarse de una fatiga ideológica: tras años de discursos polarizados sobre igualdad versus mérito, una parte creciente de la población parece estar optando por posiciones más pragmáticas o moderadas. Esto podría indicar una mayor sofisticación en la comprensión de las dinámicas económicas, reconociendo que tanto la equidad como el esfuerzo individual son necesarios en un modelo de desarrollo equilibrado.

Sin embargo, el crecimiento del segmento neutro puede expresar una creciente incertidumbre o ambivalencia frente a un contexto económico y social complejo. Entre 2017 y 2024, Bolivia y el mundo enfrentaron transformaciones profundas, como la pandemia de COVID-19, que puso en evidencia tanto las desigualdades estructurales como el valor del esfuerzo individual en contextos adversos. Este contexto podría haber erosionado las certezas absolutas y fomentado una postura más cautelosa o matizada frente a dilemas distributivos.

Este corrimiento hacia el centro tiene implicaciones importantes para las políticas públicas: en lugar de apostar exclusivamente por modelos centrados en la igualdad o en el mérito, la ciudadanía parece demandar una combinación más inteligente de ambos enfoques, capaz de generar oportunidades reales sin descuidar la justicia social.

Complementariamente, la comparación generacional entre adultos y adolescentes que figura en el gráfico 2 (usando solamente datos del 2024), revela diferencias significativas en la forma en que ambos grupos comprenden y valoran el dilema entre igualdad de ingresos y reconocimiento al esfuerzo individual. Mientras que entre los adultos predomina la preferencia por el mérito personal (46,5%), entre los adolescentes es considerablemente menor (38%), lo que representa una diferencia de más de ocho puntos porcentuales.

Este contraste, sugiere que los adolescentes muestran una menor adhesión a las ideas meritocráticas que los adultos. Sin embargo, no se observa un desplazamiento hacia una posición más igualitarista, ya que el porcentaje de quienes apoyan abiertamente la igualdad de ingresos (respuestas 1-3) es bajo en ambos grupos: 14,1% en adultos y 12,1% en adolescentes. La diferencia principal reside en el notable aumento del

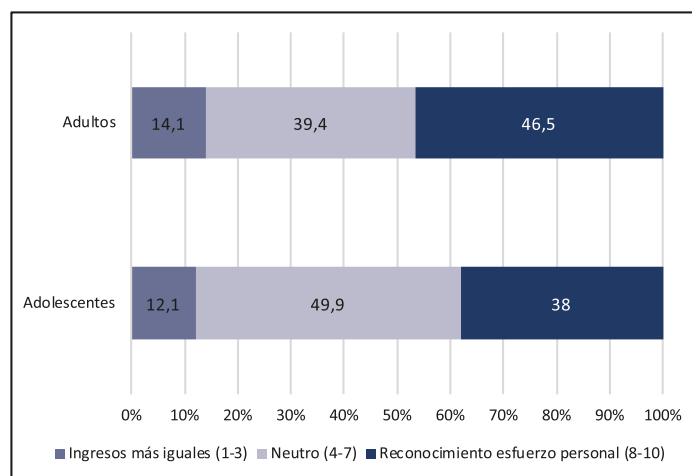
grupo que adopta posturas intermedias (respuestas 4-7), que alcanza el 49,9% en los adolescentes, en contraste con el 39,4% en los adultos.

Este hallazgo puede interpretarse como una señal de mayor ambivalencia o apertura entre los más jóvenes. Frente a un entorno social y económico cambiante, los adolescentes parecen menos inclinados a adoptar posturas ideológicas definidas, y más propensos a mantener una mirada crítica o expectante. Es posible que esta moderación refleje tanto una falta de convicción como una mayor complejidad en su forma de pensar sobre los temas económicos.

El resultado también puede estar indicando una desafección hacia el discurso meritocrático tradicional, especialmente si los adolescentes perciben que el esfuerzo individual no siempre se traduce en resultados justos o equitativos. Esto podría obedecer a experiencias cercanas de desigualdad, precariedad laboral o falta de oportunidades educativas, que erosionan la creencia en el mérito como motor de progreso.

En conjunto, el gráfico 2 sugiere que la población adolescente no se encuentra ni fuertemente alineada con la redistribución ni plenamente convencida de las virtudes del mérito, al menos en lo que se refiere a la respuesta a la pregunta planteada. Esta posición intermedia puede abrir una ventana de oportunidad para construir discursos y políticas más matizadas, que respondan a su sensibilidad hacia la justicia social sin ignorar la importancia del esfuerzo. Para los tomadores de decisiones, resulta clave reconocer que la próxima generación no se adhiere de forma automática a los marcos ideológicos heredados, y que su visión sobre el rol del Estado en la economía aún está en formación.

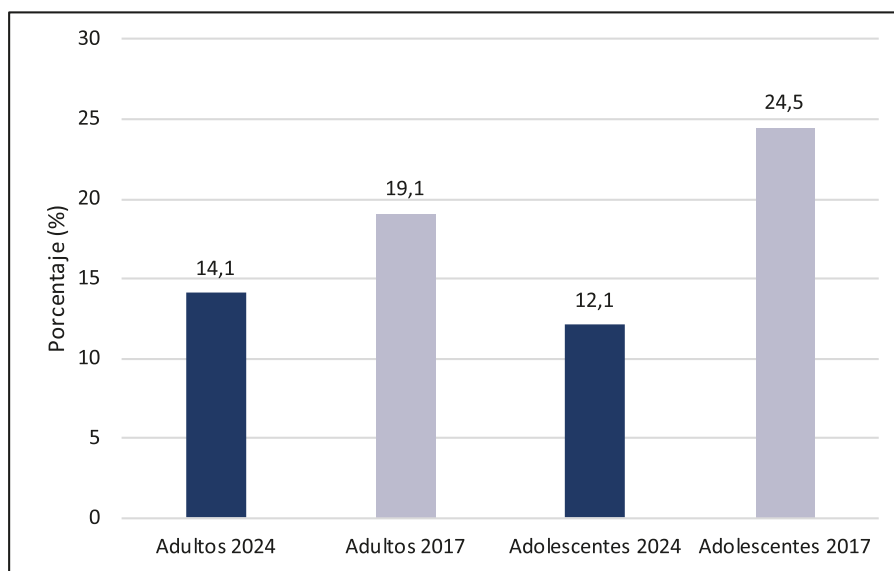
Gráfico 2. Porcentaje de personas que prefiere “Ingresos más iguales” vs “Reconocimiento al esfuerzo individual”. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, este desencanto con el apoyo a la igualdad de ingresos es todavía más evidente en el gráfico 3, donde se puede evidenciar claramente cómo el apoyo a esta idea se reduce a la mitad entre 2017 y 2024, para los adolescentes.

Gráfico 3. Porcentaje de personas que apoyan la igualdad de ingresos. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 3 evidencia una tendencia claramente descendente en la proporción de personas que priorizan la igualdad de ingresos, tanto en adultos como en adolescentes. En el caso de los adultos, el apoyo a esta postura disminuye del 19,1% en 2017 al 14,1% en 2024. En los adolescentes, el descenso es aún más marcado: del 24,5% en 2017 al 12,1% en 2024, lo que representa una caída de más de 12 puntos porcentuales.

Este comportamiento sugiere un cambio de fondo en las valoraciones sociales vinculadas a la equidad distributiva.

El dato resulta particularmente relevante desde una perspectiva intergeneracional: los adolescentes de 2017 expresaban un idealismo más fuerte respecto a la redistribución, posiblemente asociado a una mayor conciencia social en contextos escolares o familiares. Sin embargo, para 2024, los adolescentes parecen haber adoptado un enfoque más escéptico o pragmático, que podría estar vinculado a su experiencia directa con las limitaciones del entorno económico, el desempleo juvenil o la percepción de que el sistema no recompensa ni castiga de manera justa.

Este descenso en el respaldo a la igualdad de ingresos plantea desafíos importantes para las políticas públicas orientadas a la cohesión social. Si bien no necesariamente

implica un rechazo a la justicia social en sentido amplio, sí sugiere que la narrativa basada únicamente en la redistribución pierde eficacia simbólica, y que será necesario construir marcos más integradores que articulen equidad con oportunidades reales de progreso individual.

En conjunto, los tres gráficos permiten observar cómo la población boliviana, tanto adulta como adolescente, ha transitado en pocos años desde una visión más orientada a la igualdad hacia posiciones más neutras o inclinadas al mérito, en un contexto de transformaciones sociales, económicas y culturales que aún están en curso, lo que representa un tímido avance hacia los valores postmaterialistas o de autoexpresión.

1.2 Responsabilidad del gobierno vs. responsabilidad individual

Continuando con la discusión de enfoque económico respecto al rol estatal, se procedió a consultar sobre el nivel de responsabilidad que los ciudadanos le asignan al Estado. Por un lado, se plantea la idea de que el Estado debería asumir más responsabilidad en proporcionar un medio de vida a toda la población. Esta idea se alinea con la corriente de la pregunta presentada anteriormente, según la cual los ciudadanos preferirían ingresos más iguales entre todos por medio de una redistribución de ingresos. En ambos casos, se infiere que lo que se busca es un Estado con un rol más activo en la planificación y control de la economía, valores fuertemente ligados con los valores materialistas o de sobrevivencia. Por otro lado, se contraponen la idea de la responsabilidad individual. En el caso de un país donde el rol estatal es más limitado, no sólo se encuentra una mayor variación de ingresos, los cuales suelen estar ligados con el esfuerzo individual, sino también un mayor grado de responsabilidad individual, donde cada individuo asume el desafío de lograr su propio medio de vida en base a sus capacidades, inclinaciones y valores de autoexpresión.

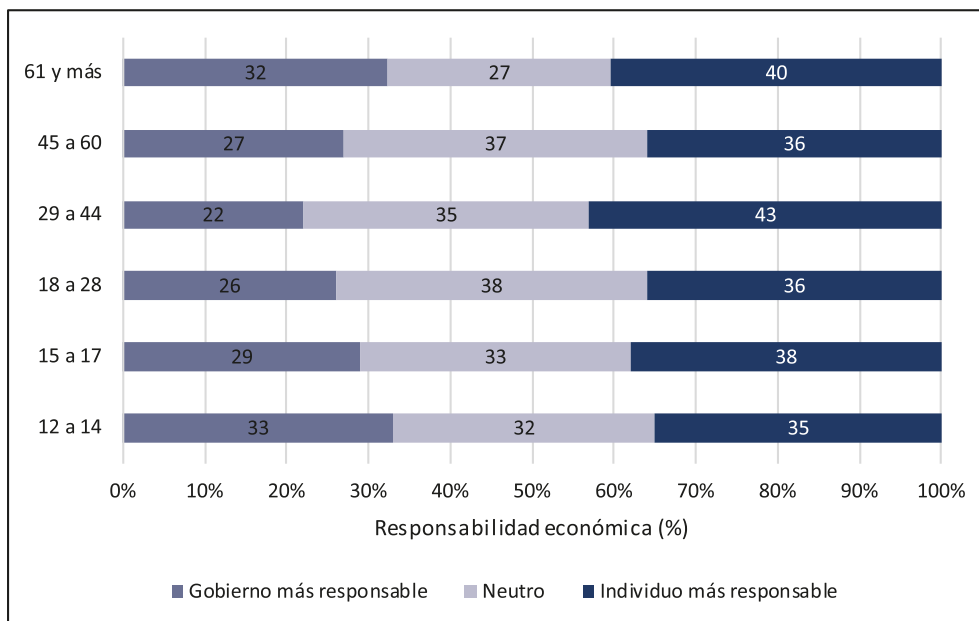
De manera específica, en la pregunta analizada se pidió a la población escoger su preferencia entre los siguientes valores:

<i>El Gobierno debería asumir más responsabilidad en proporcionar un medio de vida a toda la población</i>					<i>Cada uno debería asumir más responsabilidad para lograr su propio medio de vida</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

En este caso, como lo muestra el gráfico 4, la exigencia hacia el rol del Estado es fuerte en solo un cuarto de la población, y esta tendencia no parece haber variado

mucho en los últimos siete años, reduciéndose incluso 2,2 puntos porcentuales, un margen estadísticamente irrelevante. Aunque la posición neutral es significativa (35%), también lo es el porcentaje de personas que afirma que cada uno debe asumir mayor responsabilidad sobre sus medios de vida (38%), haciendo que, en conjunto, haya una leve tendencia favorable a la responsabilidad individual sobre la responsabilidad del Estado, lo cual mantiene cierta consistencia ideológica con la pregunta anterior.

Gráfico 4. Porcentaje de personas que prefiere “Responsabilidad del Gobierno” vs. “Responsabilidad individual”, por grupos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, al formular la misma pregunta a los adolescentes, se observa que sus respuestas giran un poco más hacia la esperanza de contar con un Estado más intervencionista, que asuma la responsabilidad de garantizar un medio de vida para todos. Curiosamente, este fenómeno no se limita a los más jóvenes, sino que también se presenta entre los de edad más avanzada; ambos grupos que se encuentran normalmente en situaciones más vulnerables y menos activos económicamente. Por ello, resulta comprensible que su respuesta gire en torno a exigir un Estado que tome más responsabilidad por su bienestar. No obstante, es importante destacar que, en términos generales, la preferencia recae sobre una mayor responsabilidad para cada individuo.

1.3 Propiedad privada vs. propiedad estatal

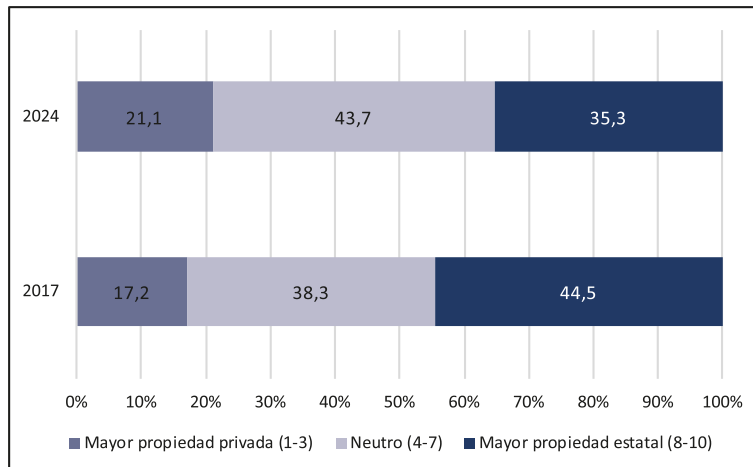
Dando continuidad a la línea de discusión sobre el rol del Estado, se plantea la pregunta sobre los derechos de propiedad, contraponiendo el incrementar la propiedad privada de las empresas (lo cual sigue la línea ideológica de la responsabilidad y el esfuerzo individuales, en el marco de la autoexpresión) frente al crecimiento de la propiedad estatal (más consistente con la igualdad de ingresos y la responsabilidad estatal, valores de sobrevivencia). Nuevamente, la lógica subyacente es que un Estado con mayores responsabilidades, y que desempeña un rol más activo en la búsqueda del bienestar colectivo, debería también incrementar la cantidad de propiedad que administra, en lugar de permitir a los individuos tomar la decisión sobre qué hacer con su propiedad y cuánta pueden adquirir.

Siguiendo esta línea de valores, la pregunta efectuada fue la siguiente:

<i>Debería incrementarse la propiedad privada de las empresas</i>					<i>Debería incrementarse la propiedad estatal de las empresas</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El gráfico 5 muestra que se registra un considerable descenso en la preferencia por la propiedad estatal (de 44,5% en 2017 a 35,3% en 2024). La franja que apoya la empresa privada crece tímidamente, y el centro se mantiene como la opción mayoritaria. Esta tendencia refleja un evidente desencanto con la expansión estatal, un dato consistente con los resultados de las últimas dos preguntas, pero sin llegar a convertirse en un viraje hacia el liberalismo económico, comúnmente ligado con los valores de autoexpresión.

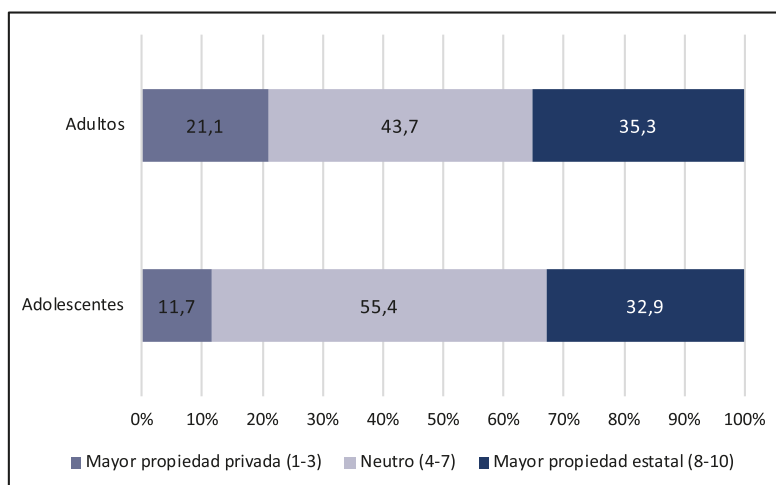
Gráfico 5. Porcentaje de personas que prefiere “Más propiedad privada” vs. “Más propiedad estatal”. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

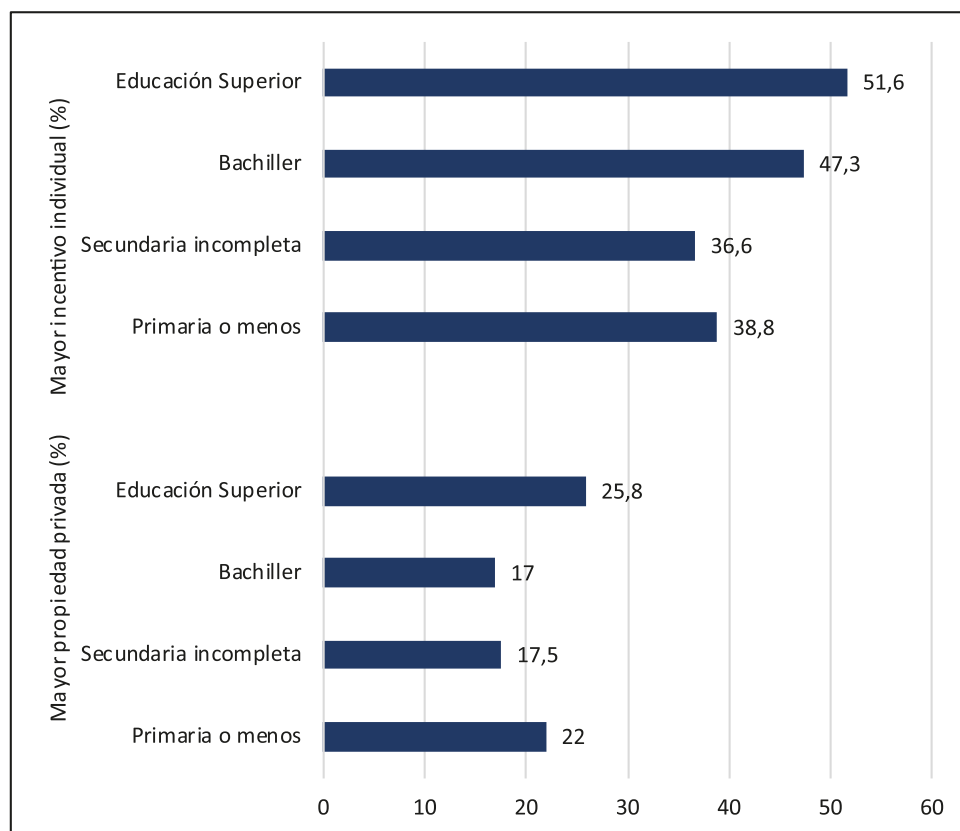
En los adolescentes se encuentra nuevamente con un caso más inclinado hacia una respuesta moderada, como lo muestra el gráfico 6, con más de la mitad acomodándose en los puntos neutrales, y sólo un 11,7% que se inclina más hacia la propiedad privada. Tomando ambos gráficos de manera conjunta, se puede ver que hay más personas que se inclinan hacia la propiedad estatal que hacia la propiedad privada, aunque debe reconocerse que el descenso de este indicador es consistente con lo que sucede en las anteriores preguntas.

Gráfico 6. Porcentaje de adultos y adolescentes que prefieren “Más propiedad privada” vs. “Más propiedad estatal”. Bolivia, EMV y EVA 2024



Adicionalmente, es necesario señalar que las percepciones de un rol estatal reducido, muy fuertemente ligadas con los valores económicamente liberales y capitalistas, están fuertemente influenciadas por el nivel educativo de la persona: el gráfico 7 muestra que estos valores se relacionan fuertemente con la educación (y los análisis multivariados realizados en el marco de este análisis muestran que esto se da de forma independiente de otros factores como el ingreso o la autoidentificación étnica).¹

Gráfico 7. Efecto del nivel educativo sobre la preferencia por “Más propiedad privada” y “Más incentivos individuales”. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, a pesar de las tendencias identificadas anteriormente, el gráfico 8 permite contextualizar la preferencia boliviana por la propiedad privada respecto a otros países. Del conjunto de países encuestados en la EMV 8 a la fecha de elaboración

1. Esta conclusión resulta de un conjunto de análisis de regresión logística multivariada en la que se modela la probabilidad de que una persona prefiera la propiedad privada y el incentivo individual. Las variables incluidas en el modelo son el área de residencia (urbano o rural), la región del país (occidente, oriente o valles) el grupo de edad, el sexo de la persona, nivel de ingreso, nivel educativo, nivel educativo de la madre, autoidentificación con un pueblo indígena, primer idioma hablado en la casa.

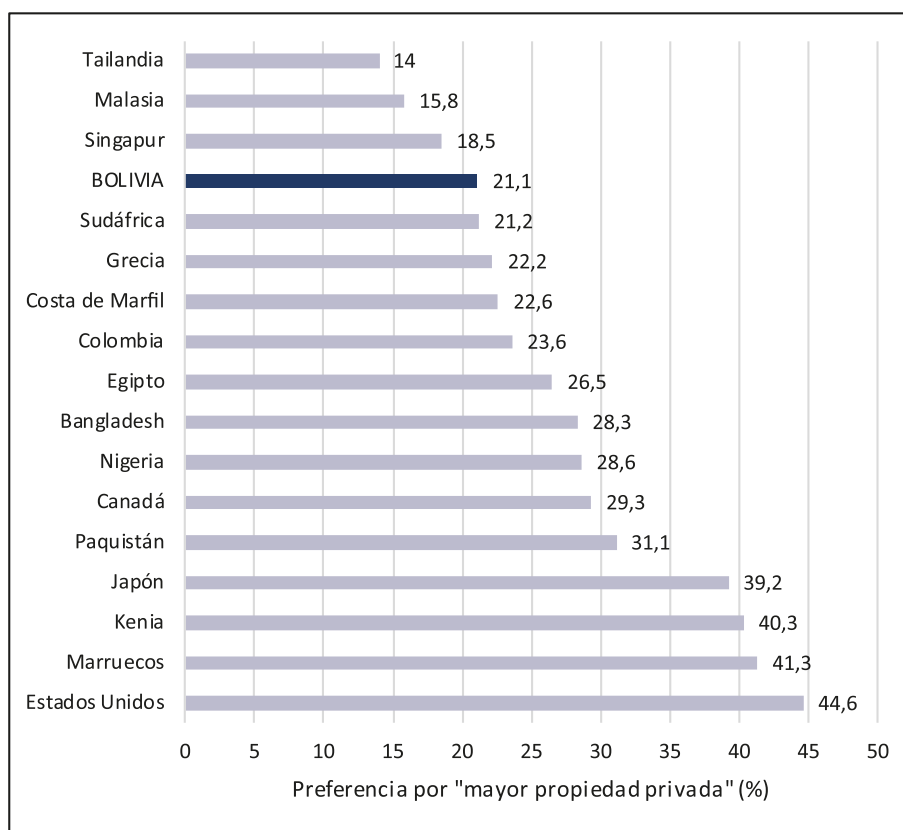
de este informe, Bolivia se encuentra entre los que tienen menor preferencia por la propiedad privada.

Esta posición sugiere que en Bolivia existe una valoración moderadamente baja hacia la expansión de la propiedad privada como principio económico. Este dato puede estar relacionado con una tradición política y cultural en la que el rol del Estado en la economía se percibe como central, y donde la propiedad privada convive con una fuerte presencia de propiedad estatal y comunitaria. El resultado también podría reflejar una menor confianza en que la ampliación de la propiedad privada se traduzca automáticamente en mayor bienestar colectivo. En el marco teórico que sustenta estos valores, este resultado podría indicar también que Bolivia sigue manteniendo valores fuertemente materialistas y de supervivencia en comparación con otros países.

En términos comparativos, los países con mayor preferencia por la propiedad privada –como Estados Unidos (44,6%), Marruecos (41,3%) o Kenia (40,3%)– suelen presentar contextos en los que el mercado ocupa un lugar significativo como organizador de la economía o en los que la propiedad privada es vista como un mecanismo clave para la generación de oportunidades y riqueza. En contraste, los países con niveles más bajos tienden a compartir características como una historia reciente de intervencionismo estatal, modelos de desarrollo más orientados a la redistribución o economías donde los bienes comunes y la propiedad pública tienen relevancia política y cultural.

En el caso boliviano, este bajo porcentaje no necesariamente implica un rechazo frontal a la propiedad privada, sino una percepción de que su fortalecimiento no es la prioridad absoluta frente a otros objetivos, como la equidad social, el acceso universal a recursos o el fortalecimiento del sector público. Esto, sumado a los hallazgos anteriores sobre la disminución del apoyo a la igualdad de ingresos y el crecimiento de posiciones intermedias, podría indicar que las percepciones económicas de la población boliviana no se alinean plenamente con marcos ideológicos clásicos, sino que responden a una combinación particular de valores distributivos, comunitarios y de mercado.

Gráfico 8. Porcentaje de personas que priorizan una mayor propiedad privada, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

1.4 ¿Es buena la competencia?

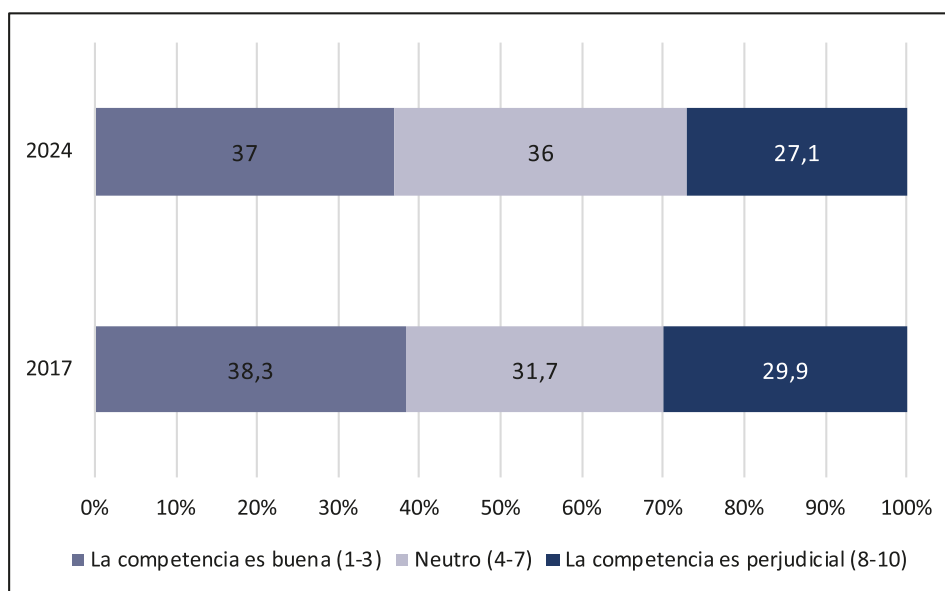
En el marco de la discusión sobre el rol estatal, en una economía donde el Estado ejerce funciones reducidas y limitadas, se espera que la libre voluntad de las personas, por medio de un mercado libre en un entorno de institucionalidad sólida, conduzca hacia el bienestar colectivo, aunque desigual, al buscar cada uno su bienestar individual en base a sus capacidades, ambiciones y a sus valores de autoexpresión. Sin embargo, esta apreciación no es compartida de manera uniforme por todos: algunas personas podrían ver la competencia como perjudicial porque puede generar desigualdades, presiones excesivas y comportamientos poco éticos al priorizar el éxito individual sobre el bienestar colectivo, sobre todo si las personas se perciben todavía en un estado crítico de supervivencia. Es por ello que una manera de identificar la percepción de la población hacia el libre mercado es consultar directamente sobre la competencia, permitiendo que expresen si la ven como algo bueno o algo perjudicial.

Específicamente, a los encuestados se les preguntó:

<i>La competencia es buena</i>					<i>La competencia es perjudicial</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El gráfico 9 muestra que la percepción sobre la competencia sigue siendo crítica. Aunque no se observan cambios drásticos respecto a 2017, una proporción importante de la población sigue viendo la competencia con desconfianza. Esta valoración puede explicarse por la percepción de que la falta de institucionalidad en el país no garantiza un mercado local con condiciones justas. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el sector privado competitivo y formal en Bolivia es muy pequeño (algunos estudios oficiales lo estiman incluso en torno al 20%²), lo que dificulta que la población perciba, de manera tangible, el beneficio de la competencia sobre la creación de riqueza, la movilidad social, el incremento en la calidad de un producto o servicio y la reducción de los precios a niveles “competitivos”.

Gráfico 9. Porcentaje de personas que considera que “la competencia es buena” vs. “la competencia es perjudicial”. Bolivia, EMV 2017-2024

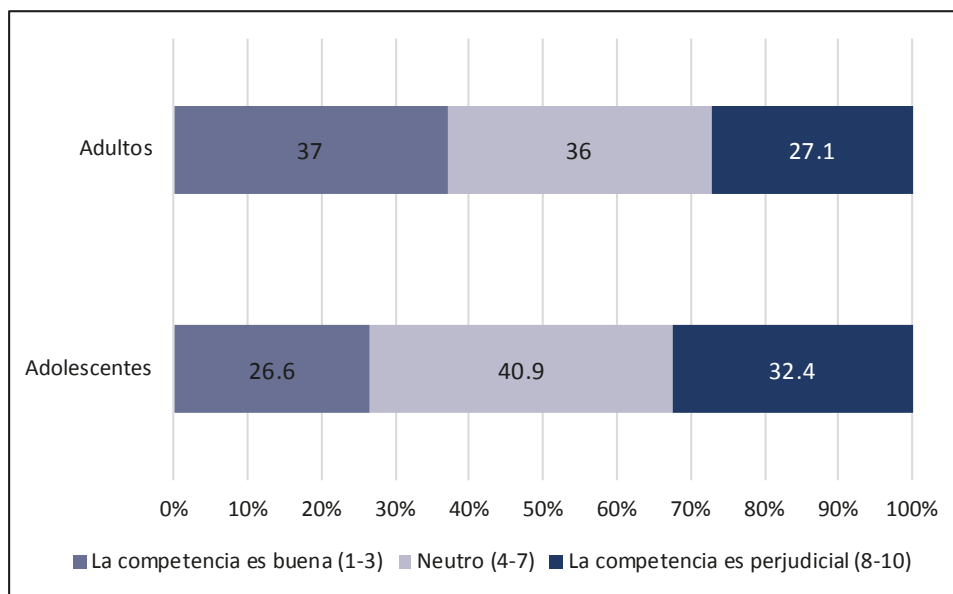


Fuente: Elaboración propia.

2. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2023). Análisis social: Situación del empleo y los ingresos en Bolivia, en: https://www.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2023-01/analisis_social_mefp.pdf

De manera coherente con lo que se ha observado a lo largo de este capítulo sobre los adolescentes, el gráfico 10 muestra que su rechazo hacia la competencia es aún mayor que el de los adultos: un 32,4% afirma que la competencia es perjudicial. Este dato muestra una leve tendencia hacia la moderación, pero también hacia un mayor rol estatal, lo cual es consistente con las anteriores líneas de análisis.

Gráfico 10. Porcentaje de personas que consideran que “la competencia es buena” vs. “la competencia es perjudicial”. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

1.5 ¿Esfuerzo o suerte?

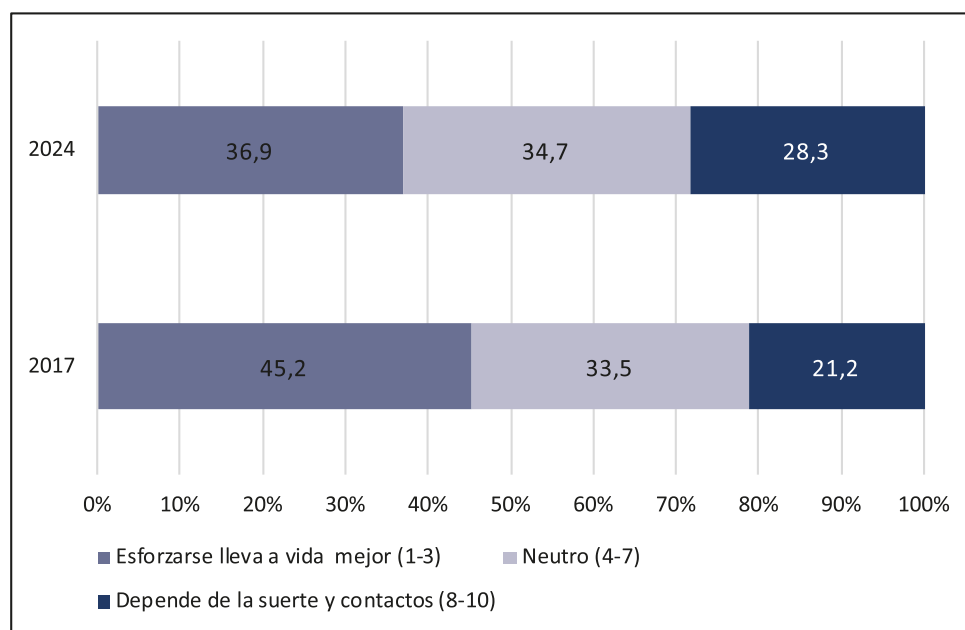
Finalmente, la última pregunta del bloque busca contraponer la apreciación del éxito o bienestar como resultado del esfuerzo en el trabajo frente a la idea de que depende principalmente de la suerte y los contactos personales. Esta contraposición se puede explicar nuevamente en términos de la polaridad entre los valores de supervivencia –donde el bienestar no se percibe como dependiente de la realización individual–, y los valores de autoexpresión.

En esta última pregunta, que indaga si el esfuerzo lleva al éxito o si todo depende de la suerte y los contactos, disminuye el apoyo absoluto al esfuerzo como garantía de movilidad social. La pregunta fue formulada de la siguiente manera:

<i>A la larga, esforzarse en el trabajo suele llevar a una vida mejor</i>					<i>Esforzarse en el trabajo no suele llevar al éxito; eso depende más de la suerte y los contactos</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El gráfico 11 muestra que la idea del “trabajo duro como camino seguro al éxito” pierde fuerza, tanto en los adultos en comparación con 2017 como entre los jóvenes respecto a los adultos (gráfico 12), en un contexto donde las oportunidades se perciben como cada vez más inciertas. Contrariamente a lo que podría esperarse a partir de las respuestas anteriores sobre el esfuerzo individual, este resultado indica que, en los últimos años, la población boliviana podría haber perdido la esperanza en la meritocracia, reconociendo que la mayoría de las grandes fortunas en el país o los casos de movilidad social más notorios, han estado ligados a formas de prebendalismo o favoritismo. Sin embargo, es importante hacer notar que esta pregunta puede también haber sido interpretada por algunos bolivianos como que la receta para el éxito económico es el éxito comunitario, puesto que, en muchas regiones del país, principalmente en el occidente, la producción económica se organiza a través de organizaciones comunitarias en la forma de cooperativas o sindicatos. No obstante, al analizar si las respuestas presentaban alguna diferencia según la región en la que viven los entrevistados, no se encuentra ninguna diferencia.

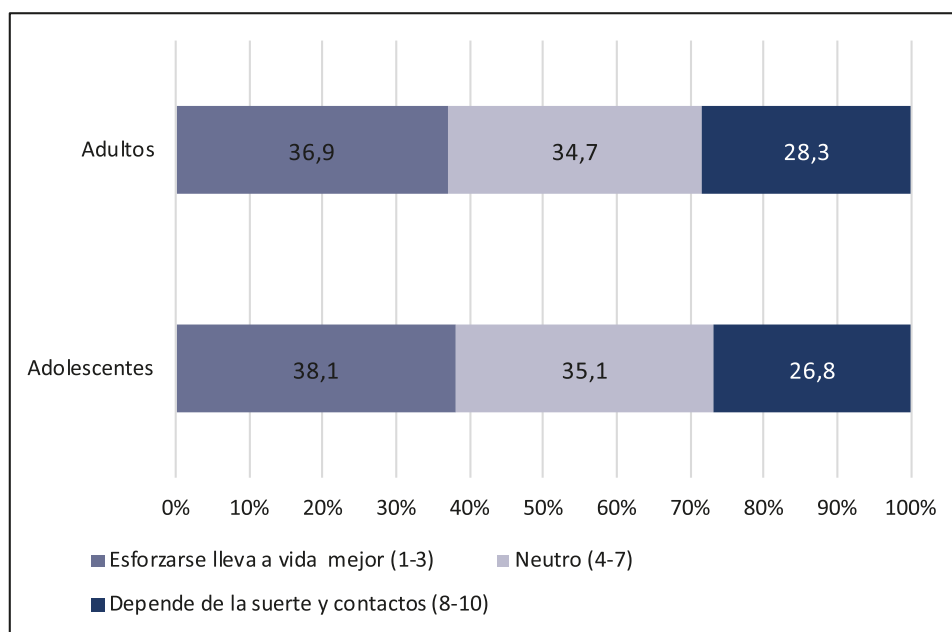
Gráfico 11. Porcentaje de personas que considera que “Esforzarse lleva a una vida mejor” vs. “Depende de la suerte y contactos”. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Vale la pena destacar que, entre los adolescentes, el valor asignado al esfuerzo individual es ligeramente mayor que al de los adultos (ver gráfico 12), lo cual también resulta contrario a lo que se podría esperar según los datos de las anteriores preguntas. Esto podría deberse a que los jóvenes mantienen cierto optimismo respecto al futuro, mientras que los adultos, con mayor experiencia, observan la realidad con un mayor cinismo o realismo.

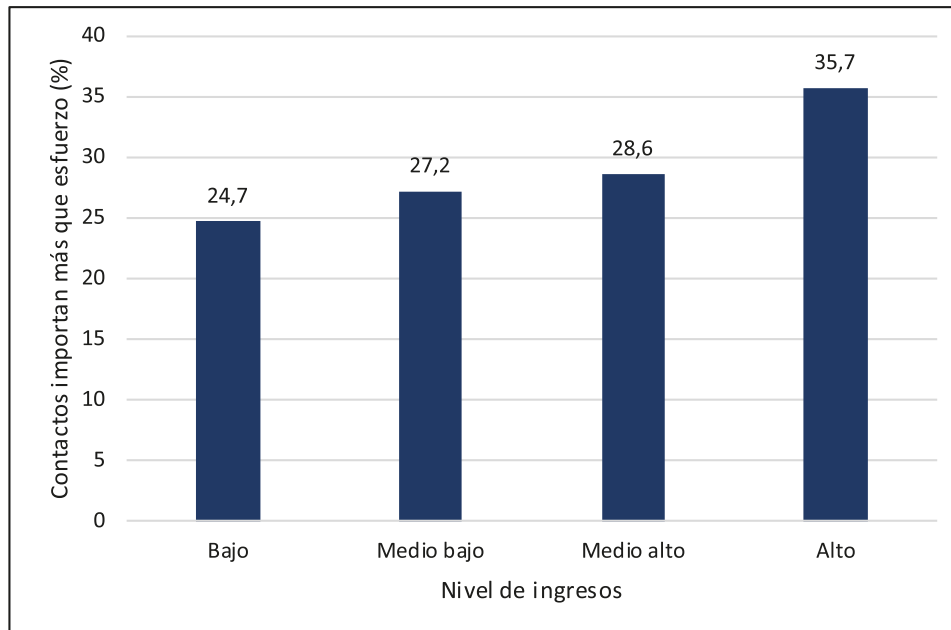
Gráfico 12. Porcentaje de adultos y adolescentes que considera que “Esforzarse lleva a una vida mejor” vs. “Depende de la suerte y contactos”. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Para confirmar lo anterior, el gráfico 13 muestra que las personas con mayores ingresos están más de acuerdo con que los contactos son más importantes que el esfuerzo individual. Esto conlleva una pregunta inevitable: ¿Así funciona efectivamente el sistema en Bolivia? De ser así, esto evidenciaría un sistema donde el ideal de la meritocracia y el ascenso social basado en el esfuerzo individual es todavía una realidad lejana, al menos en la percepción de los bolivianos.

Gráfico 13: Porcentaje de personas de acuerdo con “los contactos son más importantes que el esfuerzo”, según nivel de ingresos. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

2. Corrupción e impunidad

Según la teoría de los valores que orienta la definición de preguntas de la EMV, la corrupción aparece como un factor que tiende a erosionar la confianza social y la legitimidad de las instituciones, afectando negativamente al capital social y al desarrollo de valores postmaterialistas. Se señala que, en contextos donde la corrupción es percibida como elevada, la ciudadanía tiende a mostrar menos respaldo a la democracia y mayor tolerancia hacia liderazgos autoritarios, ya que la expectativa de imparcialidad y justicia institucional se ve socavada. Asimismo, la corrupción se vincula con niveles más bajos de confianza interpersonal y con la persistencia de valores de supervivencia, pues las personas se enfocan más en la seguridad y en la autoprotección que en la participación cívica o la autoexpresión (Inglehart, 2018).

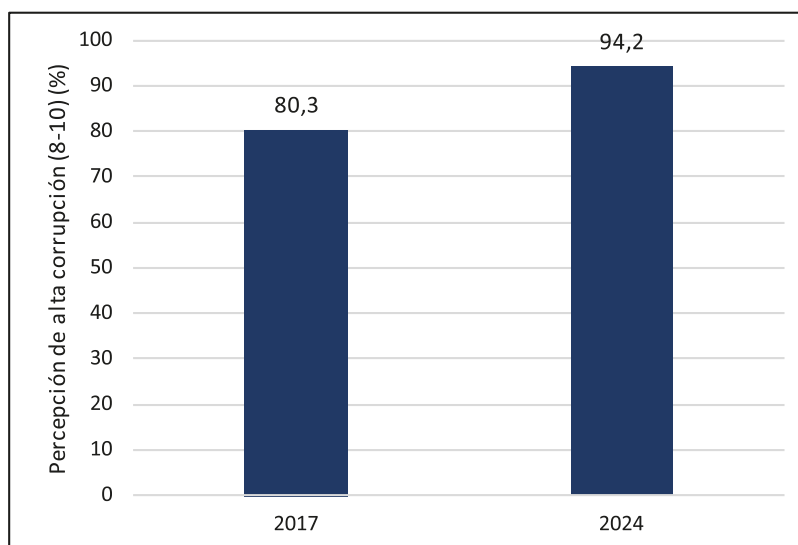
Por esta razón, resulta fundamental analizar este valor en el marco de los valores económicos. El gráfico 14 muestra que la corrupción continúa siendo una preocupación transversal y creciente en Bolivia, con un 94% de los encuestados que cree que hay mucha corrupción, lo que representa un crecimiento considerable respecto al 80% registrado en 2017. Este incremento podría reflejar una percepción de debilitamiento institucional en el país (ver gráfico 14).

La pregunta que se hizo para abordar este tema fue formulada de la siguiente manera:

Ahora quisiera que me dijera sus opiniones sobre la corrupción ¿Cuál es su opinión sobre la corrupción en Bolivia en una escala de 10 puntos, donde “1” significa “no hay corrupción en Bolivia” y “10” significa “hay mucha corrupción en Bolivia”? Si sus opiniones son intermedias, elija el número apropiado entre ellas. (Codificar sólo un número)

No hay corrupción en Bolivia					Hay mucha corrupción en Bolivia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gráfico 14. Porcentaje de personas con percepción de que hay mucha corrupción en el país. Bolivia, EMV 2017-2024



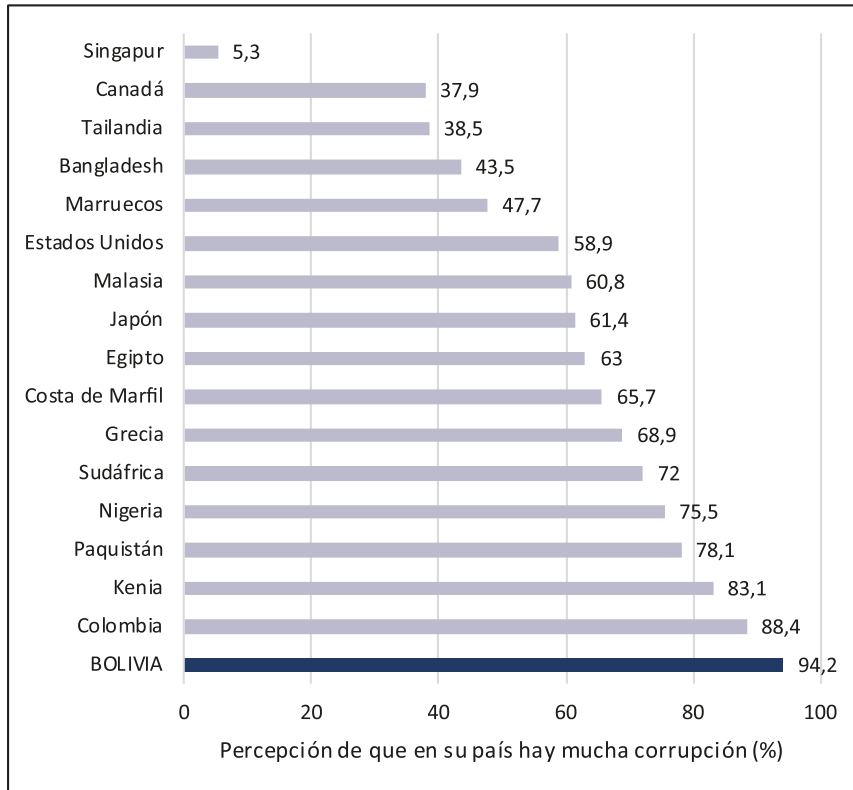
Fuente: Elaboración propia.

También es interesante destacar que, en 2024, la única variable que explica diferencias en la percepción de la corrupción es la confianza en el gobierno. Este hallazgo da a entender que casi la mayoría de la población tiene muy poca confianza hacia el gobierno, lo que permite inferir que se percibe al propio gobierno como de los principales focos e corrupción en el país (Fundación Milenio, 2021). El crecimiento de la percepción de corrupción en el país es consistente con la información generada por otros estudios (Ciudadanía, 2024).

Por si los anteriores datos no fueran lo suficientemente llamativos, el gráfico 15 muestra que, entre los países disponibles hasta la fecha para la comparación

internacional, Bolivia ocupa el primer lugar en cuanto a niveles de percepción de corrupción.

Gráfico 15: Porcentaje de personas que perciben “mucha corrupción” en su país, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

3. Justificación de prácticas ilegales

Finalmente, la tolerancia o justificación de prácticas ilegales aparece vinculada a la estructura de valores en sociedades con altos niveles de inseguridad económica y política (Inglehart, 2018).

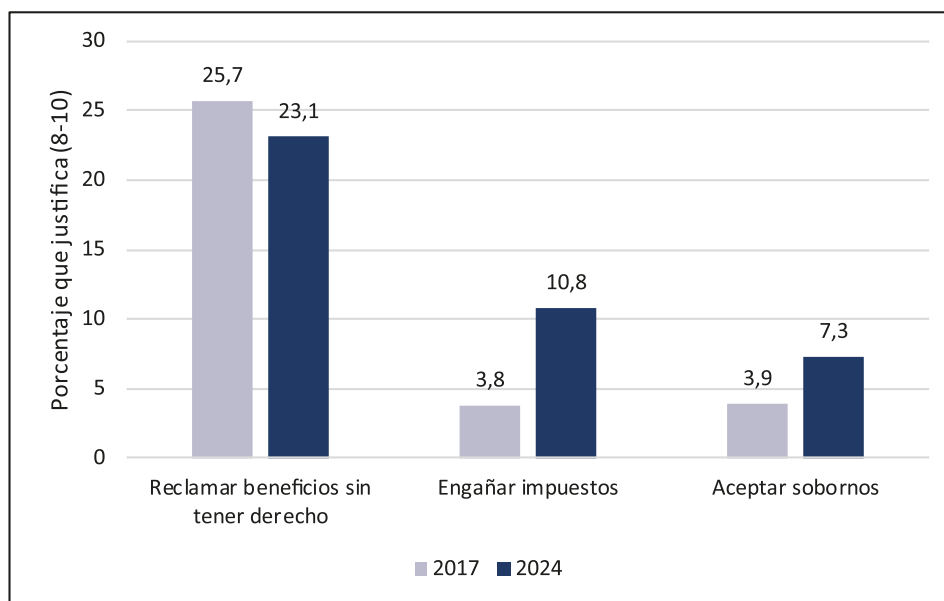
La teoría plantea que, en contextos donde predominan los valores de supervivencia (*survival values*) o materialistas, las personas tienden a priorizar la seguridad, la obediencia y la cohesión interna del grupo por encima de principios universales como el respeto a normas abstractas o la integridad institucional. En este marco, puede existir una mayor tolerancia hacia conductas ilegales –como corrupción, evasión de impuestos o favoritismo– si éstas se perciben como parte de estrategias necesarias para proteger el bienestar propio o familiar.

En cambio, en sociedades que han transitado hacia valores de autoexpresión o postmaterialistas, la estabilidad económica y la seguridad existencial permiten a las personas enfatizar la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas,

reduciendo la justificación de prácticas ilegales. En estos contextos, el respeto a normas impersonales y la crítica a la corrupción forman parte de un marco moral más amplio.

El bloque de preguntas siguiente explora la ética económica cotidiana de los bolivianos, examinando hasta qué punto se justifican prácticas como recibir beneficios del Estado sin derecho, robar, engañar en impuestos o aceptar sobornos. Los datos de 2024 indican que existe más tolerancia frente a prácticas en las cuales el principal afectado es el Estado, como declarar menos impuestos. En la pregunta sobre recibir beneficios indebidos del Estado, el grupo que justifica esta acción en alguna medida sigue siendo importante, pero ha disminuido ligeramente con respecto a mediciones anteriores.

Gráfico 16. Porcentaje de personas con nivel alto de justificación de algunas prácticas ilegales. Bolivia, EMV 2017-2024



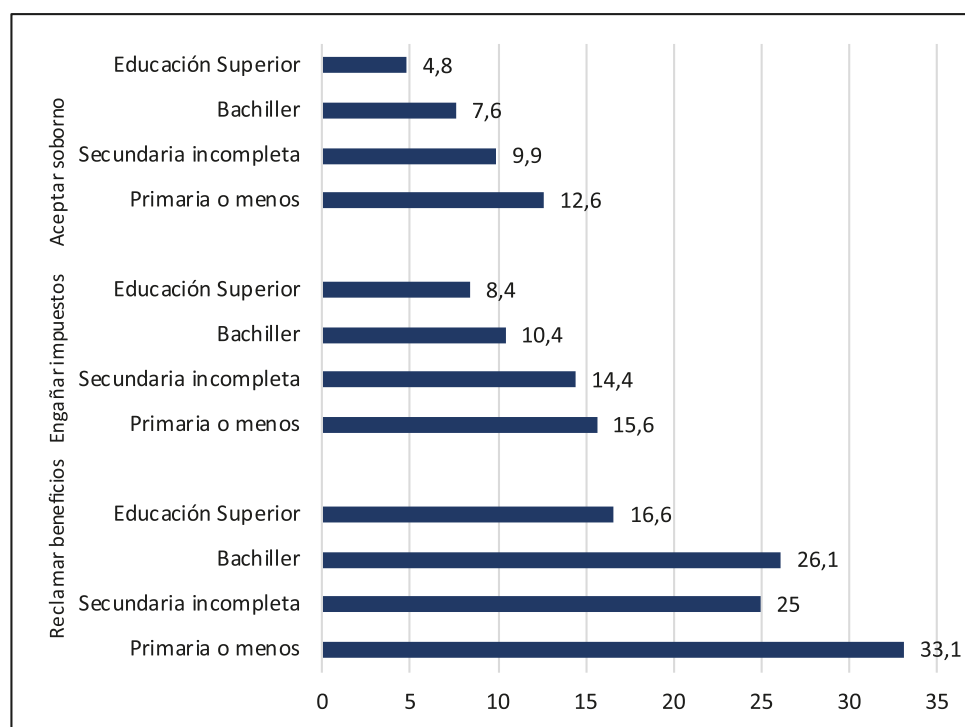
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 16 resulta llamativo que el nivel de aceptación de la evasión impositiva casi se haya triplicado, incrementándose de 3,8% en 2017 al 10,8% en 2024. Si se considera el dato previo sobre la desconfianza en el gobierno como principal determinante del incremento en la percepción sobre la corrupción, estos resultados pueden ser un indicio del nivel de desconfianza que se tiene con respecto al destino de los impuestos y la eficiencia con la que se manejan estos fondos públicos. Lo que en otros países se considera un “deber cívico” puede recibir en Bolivia una valoración menos prioritaria frente al despilfarro y abuso de fondos públicos que ha enfrentado

el país en los últimos años. Este comportamiento resulta consistente con la noción de que la población boliviana sigue presentado todavía rasgo predominante propio de los valores de supervivencia.

En un intento de explicar diferencias en los grados de justificación de estas prácticas, se observa que el único factor con incidencia clara sobre las tres variables analizadas es el nivel educativo del entrevistado. Existe una relación fuerte entre el nivel de educación y el rechazo a las prácticas ilegales, independientemente de qué tipo de práctica se trate. Esto indica que un mayor grado de educación está relacionado con valores postmaterialistas o de autoexpresión.

Gráfico 17. Efecto del nivel educativo sobre la justificación de prácticas ilegales, Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Los valores económicos de los bolivianos en 2024 dibujan un paisaje complejo y matizado, donde coexisten tendencias meritocráticas, expectativas de protección estatal, escepticismo hacia el mercado y una ética ambivalente frente a las prácticas ilegales. Este conjunto permite identificar a la población boliviana como portadora de valores predominantemente de supervivencia, o materialistas, aunque en transición hacia una mayor valoración de la autoexpresión o de valores postmaterialistas.

Aunque no se observa una transformación radical respecto a 2017, sí se observan

algunas variaciones significativas:

- Mayor valoración del esfuerzo individual, aunque sin plena fe en que éste se traduzca en éxito.
- Disminución parcial en el respaldo a la intervención estatal.
- Desconfianza persistente hacia la competencia como mecanismo de justicia económica.
- Rechazo creciente a la corrupción estructural, pero tolerancia pragmática frente a transgresiones menores.

De acuerdo al marco teórico de Inglehart, los datos sugieren que la población boliviana mantiene un perfil más cercano al materialismo o a valores de supervivencia que al postmaterialismo o a los valores de autoexpresión. En la Encuesta Mundial de Valores 2024, una mayoría relativa prioriza el reconocimiento al esfuerzo personal por encima de la igualdad de ingresos, y tiende a atribuir mayor responsabilidad económica al individuo que al Estado, aunque no de manera contundente. Asimismo, existe una proporción significativa que favorece la propiedad estatal por sobre la propiedad privada, y la valoración de la competencia económica como algo positivo es moderada, lo que revela una mezcla de orientaciones. El materialismo, según Inglehart, se asocia a la seguridad económica, la estabilidad, el control estatal y la protección frente a riesgos, mientras que el postmaterialismo valora más la autonomía, la autorrealización y la autoexpresión. En este caso, la coexistencia de actitudes favorables al esfuerzo individual con inclinaciones hacia el rol del Estado y la igualdad sugiere una sociedad en transición, con predominio de valores de supervivencia, pero con elementos incipientes de autoexpresión.

Si se hace el ejercicio de trasladar estos resultados al terreno de las ideologías económicas tradicionales, se observa que la ciudadanía boliviana no rechaza ni el capitalismo ni el estatismo de forma ideológica, sino que articula un conjunto de valores económicos adaptativos, determinados por una experiencia cotidiana de precariedad, informalidad y falta de garantías. Se trata de un sistema de valores situacional, más que doctrinario, donde la búsqueda de equilibrio entre autonomía y seguridad sigue siendo el núcleo de las decisiones económicas y políticas.

El protagonismo de la informalidad y la precariedad en la vida económica boliviana moldean una visión pragmática del rol del Estado y del mercado. En lugar de esperar soluciones estructurales duraderas, las personas desarrollan estrategias situacionales para resolver sus necesidades inmediatas. Esto se traduce en una ciudadanía que desconfía tanto del abandono estatal como del control excesivo,

y que, previsiblemente, evalúa las políticas públicas y los liderazgos según su efectividad concreta más que por su coherencia ideológica. En este escenario, la eficiencia percibida importaría más que la pertenencia doctrinal.

Es razonable suponer que esta forma de razonamiento económico también influye en el comportamiento político. Es así que, en lugar de una adhesión estable a partidos políticos o corrientes, se esperaría observar una disposición a cambiar de apoyo según el contexto, los resultados visibles y las promesas creíbles. Esta volatilidad no debe interpretarse como falta de convicciones, sino como una racionalidad adaptativa frente a un entorno inestable. Así, los valores económicos predominantes en Bolivia no serían doctrinarios, sino situacionales: es decir, buscan constantemente una fórmula de equilibrio entre libertad y protección, entre emprendimiento y contención, de acuerdo con las condiciones del momento.

Referencias

- Alesina, A. y Angeletos, G. M. (2005). *Fairness and redistribution*. *American Economic Review*, 95(4), 960-980. <https://doi.org/10.1257/0002828054825655>
- Arias Durán, I. (2011). *El estado de las empresas del Estado* (Coloquio Económico N.º 23). La Paz: Fundación Milenio. Recuperado de: <https://fundacion-milenio.org/coloquio-economico-no-23-el-estado-de-las-empresas-del-estado/>
- Candia, F. y Pacheco, N. (2009). *El péndulo del gas*. La Paz: Fundación Milenio.
- Escóbar de Pabón, S.; Arteaga Aguilar, W. y Hurtado Aponte, G. (2019). *Desigualdades y pobreza en Bolivia: Una perspectiva multidimensional*. La Paz: CEDLA.
- Fundación Milenio (2021). *Las empresas públicas bajo escrutinio: ¿Qué hacer con ellas?* (Serie Análisis N.º 33). La Paz: Fundación Milenio.
- Ciudadanía (2024). *La democracia en ojos de la gente. 25 años de cultura política en Bolivia*. La Paz: KAS – Plural. Recuperado de: <https://ciudadaniabolivia.org/publicacion/la-democracia-en-los-ojos-de-la-gente-25-anos-de-cultura-politica-en-bolivia/>
- Fundación Milenio (2021). *El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza* (H. Oporto, N. Pacheco, J. L. Evia y A. Peres Velasco, autores). Fundación Milenio. Recuperado de: <https://fundacion-milenio.org/el-capital-corrosivo-en-bolivia-y-los-retos-de-buena-gobernanza/>
- Inglehart, R. (2000). Culture and democracy. In L. E. Harrison y S. P. Huntington (Eds.), *Culture matters: How values shape human progress* (pp. 80-97). Basic Books.

- Inglehart, R. y Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge University Press.
- Laserna, R., Gordillo, J. M., y Komadina, J. (2011). *La trampa del rentismo... Y cómo salir de ella* (3.ª ed., corregida y aumentada). La Paz: Fundación Milenio.
- Linares, J. H. (2024). *Solo ruido y nada de nueces. Análisis del modelo económico y productivo del proceso de cambio 2011-2022*. La Paz: Fundación Pazos Kanki.
- López, D. (2003). Assessing Bolivia's debt relief under the Heavily Indebted Poor Countries' Initiative. *Revista de Análisis*, 7(1), 89-138. Disponible en:
http://revistasbolivianas.umsa.bo/scielo.php?Script=sci_arttextpid=S2304-88752003000200004yInng=esynrm=iso
- Medinaceli, M. (2007). *La nacionalización del nuevo milenio*. La Paz: Fundación Konrad Adenauer.
- Morales, J. A. (Ed.). (2014). *¿Dónde está la plata? Los ingresos extraordinarios de la bonanza 2006-2013*. La Paz: Fundación Milenio.
- Welzel, C. (2013). *Freedom rising: Human empowerment and the quest for emancipation*. Cambridge University Press.
- Welzel, C. e Inglehart, R. (2013). *Evolution, empowerment and emancipation: How societies ascend the utility ladder of freedoms*. HSE Working Papers WP BRP 29/SOC/2013, National Research University Higher School of Economics. Recuperado de <http://www.hse.ru/data/2013/12/30/1342090651/29SOC2013.pdf>
- World Values Survey Association. (2022). *World Values Survey Wave 7 (2017-2022) – Questionnaire and Codebook*. Disponible en: <https://www.worldvaluessurvey.org/EMVDocumentationWV7.jsp>

CAPÍTULO 5:

Democracia y valores sociales en Bolivia

Daniela Osorio Michel

Introducción

La democracia atraviesa actualmente una etapa crítica a nivel mundial, caracterizada por una erosión significativa de sus instituciones y valores fundamentales. Distintos autores han alertado sobre esta tendencia global, describiéndola con términos como “erosión democrática” (Bermeo, 2016), “retroceso democrático” (Waldner y Lust, 2018), “ascenso del autoritarismo” (Levitsky y Ziblatt, 2018) y “populismo creciente”, en alusión a un progresivo debilitamiento institucional (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). A pesar de sus diferencias analíticas, estos enfoques coinciden en que los valores democráticos, normas e instituciones que sostienen a los regímenes democráticos están siendo socavados desde dentro del propio sistema político, provocando una crisis de legitimidad generalizada.

Este fenómeno no solo plantea desafíos para el funcionamiento de las instituciones, sino que también pone en evidencia una tensión más profunda: el desfase entre lo que las élites políticas e institucionales entienden por democracia y lo que ciudadanía espera de ella. En contextos de crisis como el actual, esta distancia puede erosionar aún más la legitimidad del sistema democrático. Por ello, resulta imprescindible explorar las concepciones democráticas desde la perspectiva ciudadana, para entender cómo los valores, las experiencias y el contexto configuran sentidos diversos –y a veces contradictorios– sobre lo que significa vivir en democracia.

Esta necesidad se vuelve aún más urgente al observar el caso de Bolivia, donde también se manifiesta una significativa erosión democrática. Según el estudio *La democracia en los ojos de la gente* (Moreno Morales *et al.*, 2024), la legitimidad democrática en el país ha caído a niveles alarmantes, debido a factores como la desconfianza electoral, el deterioro de la seguridad ciudadana y a una polarización política profunda. Esta situación se agrava por motivo de un complejo escenario político, económico y social que define al país en 2024. La crisis económica se ha profundizado en un contexto de

creciente fragmentación política, marcada, además, por intensas luchas internas en el seno del partido gobernante. Estas disputas internas, junto a una presidencia con muy bajos niveles de aprobación ciudadana, han generado un ambiente de profunda incertidumbre y desconfianza generalizada hacia las instituciones democráticas.

Frente a este panorama, cobra especial relevancia explorar cómo las y los bolivianos entienden y valoran la democracia, y de qué manera sus concepciones están siendo moldeadas por este contexto crítico. Esto implica no sólo indagar el grado de adhesión a principios democráticos, sino también los significados que las y los ciudadanos atribuyen al concepto mismo de democracia en función de sus valores, expectativas y vivencias cotidianas.

Por ello, este capítulo se propone analizar empíricamente cómo se distribuyen las distintas concepciones de democracia entre la población boliviana, y cómo éstas se relacionan con la confianza institucional y el apoyo al régimen democrático, a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Valores (EMV). El objetivo es comprender de qué manera se articula el vínculo entre ciudadanía y democracia en un momento de fragilidad institucional, así como identificar qué dimensiones del ideal democrático son valoradas, cuestionadas o resignificadas por distintos grupos sociales en Bolivia.

1. Las múltiples caras de la democracia

¿Qué significa la democracia? Esta pregunta, aparentemente sencilla, revela una tensión latente entre las definiciones normativas desarrolladas desde la teoría política y las formas en que las y los ciudadanos la interpretan en su vida cotidiana. Cuando el significado que se le atribuye a la democracia desde las instituciones y el mundo académico no coincide con lo que la población espera o valora, pueden generarse desajustes significativos que afectan la legitimidad del sistema democrático. Explorar este desfase es fundamental para comprender los desafíos actuales que enfrentan las democracias, especialmente en contextos marcados por crisis y desconfianza institucional, como ocurre en Bolivia.

Sin embargo, es importante subrayar que, si bien la democracia puede ser comprendida y vivida de diversas maneras por distintos grupos sociales, no todo puede considerarse democracia. Existen límites normativos fundamentales –como la vigencia del pluralismo, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana– que definen el marco mínimo para que un régimen pueda ser calificado como democrático. Por tanto, explorar esta diversidad interpretativa no implica relativizar el concepto de democracia, sino –más bien– comprender sus desafíos contemporáneos, sin por ello diluir su significado político.

Las definiciones clásicas de democracia tienden a destacar aspectos institucionales y procedimentales. Joseph Schumpeter (1942), por ejemplo, la concibe como un método político mediante el cual las y los individuos acceden al poder de decisión a través de la competencia electoral. Robert Dahl (1971) profundiza esta idea al describir la democracia como un régimen basado en instituciones que permiten la participación inclusiva y el control efectivo de las y los ciudadanos sobre sus representantes, destacando la importancia de elecciones libres, pluralismo y libertades civiles.

Por otra parte, un cuerpo amplio de estudios ha enfatizado que los rasgos esenciales de la democracia moderna incluyen la celebración regular de elecciones libres y competitivas, así como la garantía de libertades políticas básicas (Schmitter y Karl, 1991; Linz y Stepan, 1996; Diamond, 1999; Munck, 2009). Asimismo, se ha señalado que una democracia efectiva también requiere un Estado de derecho robusto, en el que las leyes se apliquen equitativamente y las instituciones funcionen con independencia y transparencia (O'Donnell, 2004; Møller y Skaaning, 2013; Plattner, 2010). Autores más recientes también destacan la relevancia crítica de instituciones democráticas sólidas para prevenir el surgimiento de regímenes autoritarios, subrayando que la fortaleza institucional es fundamental para preservar la integridad y estabilidad del sistema democrático (Levitsky y Ziblatt, 2018; Przeworski, 2010; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2014).

Como contrapeso a estas visiones institucionalistas enfocadas en elecciones y voto, también existen concepciones de la democracia más sustantivas, que trascienden el ámbito meramente procedimental y enfatizan la realización efectiva de principios democráticos en términos de bienestar social, equidad económica y respeto pleno a los derechos humanos. En esta línea, un cuerpo importante de literatura ha planteado que la calidad democrática también debe medirse por la capacidad del sistema para garantizar inclusión social, reducir desigualdades y promover el bienestar colectivo (Scharpf, 1999; Held, 2006; Sen, 1999; Young, 2000; Santos, 2005). Estas perspectivas sostienen que una democracia no puede considerarse plena si no cumple con funciones redistributivas ni garantiza derechos más allá de los civiles y políticos formales.

Si bien las definiciones académicas sobre la democracia –tanto en su dimensión procedimental como sustantiva– han sido fundamentales para el análisis comparado, no siempre coinciden con las formas en que las y los ciudadanos entienden el concepto. La evidencia empírica muestra que las concepciones ciudadanas de la democracia son diversas y, a menudo, responden a esquemas propios que combinan elementos

institucionales con expectativas de fondo. Algunos estudios han identificado patrones comunes en estas percepciones, distinguiendo entre visiones procedimentales -centradas en el voto, las elecciones libres y los derechos civiles-, visiones sociales -que incorporan demandas de igualdad económica y bienestar material-, y posturas intermedias o indiferentes, que reflejan ambivalencia o desafección hacia el régimen democrático (Davis, Gaddie y Goidel, 2022; Seki, 2023).

Esta heterogeneidad conceptual no sólo revela una brecha entre el discurso académico y la interpretación ciudadana, sino que también plantea desafíos para la medición comparada de actitudes democráticas. Estudios realizados en distintas regiones del mundo confirman estas tendencias: en África, por ejemplo, muchas personas entienden la democracia como una combinación de reglas institucionales y resultados concretos (como empleo o justicia social) (Bratton y Mattes, 2001), mientras que en América Latina es frecuente que se asocie con la capacidad del Estado para satisfacer necesidades básicas, más que con la existencia de procesos electorales regulares (Booth y Seligson, 2009).

Esta diversidad refleja que las y los ciudadanos interpretan la democracia desde sus propios valores y experiencias. En este sentido, los valores cumplen un rol fundamental en la forma en que se concibe la democracia. Las preferencias individuales respecto a la igualdad, el orden, la libertad o el bienestar social moldean las expectativas ciudadanas sobre que debe ofrecer un régimen democrático. Sin embargo, estas expectativas no siempre se corresponden con los contenidos institucionales o normativos del concepto democrático: en muchos casos, lo que se valora no es la democracia en sentido estricto, sino lo que promete o simboliza. Así, distintas personas, influenciadas por sus orientaciones valorativas, priorizan aspectos distintos de la democracia –ya sea institucionales o sustantivos–, incluso si ello implica resignificar o distanciarse del núcleo político-institucional del término. Es importante considerar, además, que los valores también están moldeados por los contextos sociales, económicos y políticos. Las situaciones de crisis política y económica suelen impactar profundamente la cultura política democrática, incidiendo en las percepciones y actitudes ciudadanas hacia la democracia misma. Diversos estudios han señalado cómo estos escenarios pueden reducir significativamente el apoyo ciudadano hacia la democracia. En contextos de crisis política –como conflictos institucionales prolongados, rupturas del orden constitucional o polarización extrema–, la ciudadanía tiende a percibir que el sistema político no funciona, lo que alimenta la desconfianza y puede dar lugar al surgimiento de liderazgos autoritarios fundados en la promesa de orden y eficacia (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005;

Lührmann y Lindberg, 2019; Levitsky y Ziblatt, 2018).

Por otro lado, las crisis económicas –particularmente aquellas asociadas a inflación, desempleo o deterioro de servicios públicos– afectan directamente las condiciones materiales de vida, generando desilusión con el régimen democrático cuando éste es percibido como incapaz de garantizar bienestar (Kriekhaus *et al.*, 2014; Haggard y Kaufman, 2018; Singer, 2016). Ambos tipos de crisis pueden fomentar actitudes más autoritarias o populistas, así como reducir el apoyo normativo a la democracia como forma de gobierno (Mishler y Rose, 2001; Dalton, 2004).

En el contexto de crisis política y económica que atraviesa Bolivia en 2024, se vuelve especialmente necesario explorar los valores en torno a la democracia y cómo ésta es concebida por la ciudadanía. Comprender estas concepciones no sólo permite diagnosticar con mayor precisión el estado actual de la democracia, sino que también resulta clave para identificar oportunidades de fortalecimiento democrático desde las propias perspectivas ciudadanas. En escenarios de debilitamiento institucional, como el boliviano, conocer cómo las y los ciudadanos entienden y valoran la democracia puede contribuir a orientar políticas públicas y reformas que respondan a esas expectativas y refuercen la legitimidad del régimen democrático.

2. Midiendo la democracia desde la gente

Este capítulo se propone contribuir al análisis de los procesos de debilitamiento democrático en Bolivia, interrogando cómo distintas concepciones de democracia afectan las actitudes ciudadanas hacia el régimen político. Lejos de asumir que existe una definición unívoca o compartida de democracia, se parte de la hipótesis de que las y los ciudadanos operan con concepciones diversas –y en ocasiones contrapuestas– sobre el significado de vivir en democracia, y que dichas concepciones se expresan en actitudes políticas diferenciadas, particularmente, en relación con tres indicadores clave: la confianza en la democracia como régimen político, la confianza en las instituciones que la representan y la participación política.

A partir de una revisión crítica de la literatura, se identifican dos enfoques analíticos fundamentales para comprender las actitudes ciudadanas hacia la democracia:

- a. *La democracia como procedimiento institucional*: Esta visión entiende la democracia como un conjunto de normas, reglas y mecanismos que organizan la vida política. Incluye elementos como la celebración de

elecciones libres y competitivas, la separación de poderes, el respeto al Estado de derecho, y la protección de libertades civiles (Schumpeter, 1942; Dahl, 1971; Schmitter y Karl, 1991). Esta concepción ha sido ampliamente utilizada en la medición de la calidad democrática.

- b. *La democracia como garante de derechos y bienestar:* Desde una perspectiva sustantiva, esta concepción valora a la democracia por su capacidad para ofrecer resultados concretos en términos de bienestar, inclusión y justicia social (Scharpf, 1999; Sen, 1999; Young, 2000). Desde esta perspectiva, la legitimidad del régimen no se agota en el cumplimiento de procedimientos, sino que también depende de su efectividad para mejorar la vida de las personas.

Estas dos dimensiones conceptuales se pueden traducir empíricamente en tres índices analíticos, contruidos a partir de la EMV 2024. Los dos primeros índices –el electoral-procedimental y el de resguardo institucional– derivan del enfoque procedimental-institucional identificado en la literatura, mientras que el tercero –la democracia redistributiva– recoge la perspectiva sustantiva. La hipótesis de partida sugiere que distintos grupos de la población pueden priorizar una u otra de estas dimensiones, con implicaciones diferenciadas en relación a su actitud frente al régimen democrático. Las características de los índices empleados son las siguientes:

- 1) Índice electoral-procedimental: Esta dimensión se relaciona con el acto electoral como expresión fundamental de la democracia. Este índice incluye ítems que capturan la valoración del voto y de las elecciones libres como mecanismo legítimo de participación política.
- 2) Índice de resguardo institucional: Dimensión vinculada con el diseño institucional del sistema político, especialmente, con la separación de poderes y la contención de tendencias autoritarias. Agrupa preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas y el rechazo a formas de gobierno no democráticas.
- 3) Índice de democracia redistributiva: Responde a una visión sustantiva de la democracia, centrada en su capacidad para promover bienestar, igualdad y protección de derechos sociales. Se mide a través de ítems relacionados con la redistribución y la intervención estatal.

A continuación se presenta una tabla con la correspondencia entre cada índice y

las preguntas que lo componen.¹ La organización de los ítems en estos tres índices permite establecer una distinción empírica entre diferentes concepciones ciudadanas de la democracia, que será analizada en las secciones siguientes.

Tabla 1. Dimensiones de la democracia y preguntas asociadas en la EMV 2024

Índice	Preguntas utilizadas
Índice electoral-procedimental	<p>“Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor, dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia. Utilice esta escala, donde 1 significa que no es para nada esencial para la democracia y 10 significa que definitivamente sí es esencial para la democracia”.</p> <p>-“La gente elige a sus líderes a través de elecciones libres”.</p>
	<p>“Le voy a describir varios tipos de sistemas políticos y pedirle su opinión sobre cada manera de gobernar este país. Para cada uno, ¿diría Usted que es una manera muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala de gobernar este país?”.</p> <p>-“Tener un sistema político democrático”.</p>
Índice de resguardo institucional	<p>“Le voy a describir varios tipos de sistemas políticos y pedirle su opinión sobre cada manera de gobernar este país. Para cada uno, ¿diría Usted que es una manera muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala de gobernar este país?”.</p> <p>-“Tener un liderazgo fuerte que no tenga que preocuparse del Parlamento y las elecciones”.</p>
	<p>“Le voy a describir varios tipos de sistemas políticos y pedirle su opinión sobre cada manera de gobernar este país. Para cada uno, ¿diría Usted que es una manera muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala de gobernar este país?”.</p> <p>-“Que sea el Ejército el que gobierne el país”.</p>
	<p>“Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia”.</p> <p>-“El Ejército toma el poder cuando el gobierno es incompetente”.</p>
Índice de democracia redistributiva	<p>“Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia”.</p> <p>-“Los gobiernos cobran impuestos a los ricos y subsidian a los pobres”.</p>
	<p>“Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia”.</p> <p>-“La gente recibe asistencia del gobierno por desempleo”.</p>
	<p>“Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia”.</p> <p>-“El Estado hace que los ingresos de las personas sean iguales”.</p>

1. Debido a que muchas de las preguntas utilizadas en el cálculo de los índices no fueron incluidas en la muestra de adolescentes, este capítulo explora sólo los datos de adultos en Bolivia.

Antes de utilizar los índices como variables explicativas² en los modelos analíticos, es necesario examinar su comportamiento interno y su capacidad para capturar dimensiones diferenciadas de la democracia. El gráfico 1 muestra la distribución en cada tramo del índice para cada una de las tres concepciones de la democracia analizadas.³ Esta comparación permite visualizar diferencias claras en cómo se distribuyen estas visiones entre la población.

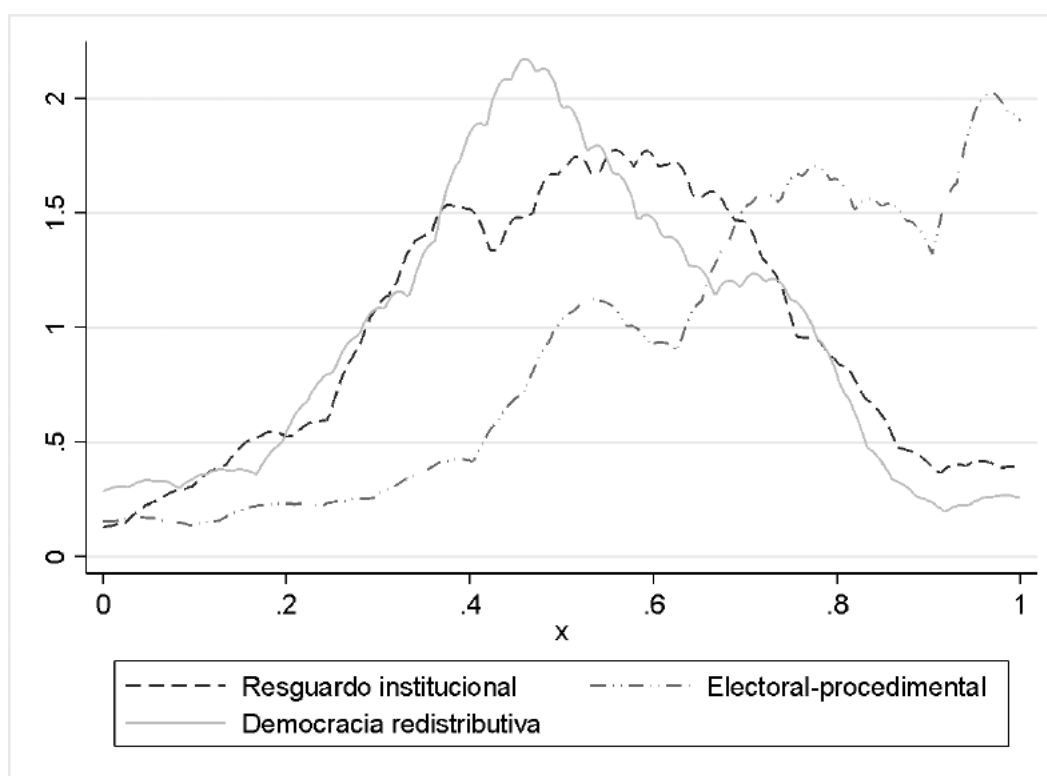
El índice electoral-procedimental tiende a concentrarse en los tramos más altos (especialmente entre los valores 8 y 10), lo que sugiere un amplio consenso ciudadano respecto al valor del voto y las elecciones libres. En cambio, el índice de resguardo institucional muestra una distribución más centrada en los valores intermedios, con mayor densidad entre los tramos 5 y 7. Esta forma indica una adhesión moderada y matizada a esta dimensión, lo que refleja que una parte importante de la ciudadanía valora ciertos principios institucionales –como la separación de poderes o el rechazo al autoritarismo–, aunque sin expresar un respaldo contundente ni un rechazo sistemático.

Finalmente, el índice de democracia redistributiva muestra una distribución algo más dispersa, pero con una concentración visible en los tramos medios y altos, lo que sugiere que una proporción significativa de personas asocia la democracia con expectativas de igualdad material, intervención estatal y provisión de bienestar. Estas diferencias en los perfiles de distribución sugieren que los índices capturan dimensiones conceptuales distintas, y refuerzan su utilidad como herramientas para explorar las diversas formas en que se concibe la democracia en Bolivia.

2. Todas las variables que componen los índices fueron recodificadas en una escala de 0 a 1. Se calcularon promedios simples para cada conjunto temático y se realizaron análisis factoriales exploratorios, a fin de verificar la consistencia interna y la validez estructural de las distintas dimensiones. Los resultados obtenidos confirmaron la agrupación conceptual de los ítems, respaldando la construcción de los tres índices como medidas diferenciadas.

3. Los valores representados en el gráfico corresponden a la distribución porcentual de respuestas por cada valor del índice (agrupado en deciles de 1 a 10), para cada una de las tres concepciones ciudadanas de la democracia: procedimental-electoral, de resguardo institucional y redistributiva. Los índices toman valores continuos entre 0 y 1. El eje Y representa el porcentaje de personas, dentro de cada concepción, cuya puntuación se ubica en cada uno de estos tramos.

Gráfico 1. Distribuciones de los índices de concepción democrática. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias conceptuales observadas en las distribuciones se reflejan también en el análisis de las correlaciones entre los índices. El índice electoral-procedimental y el índice de democracia redistributiva presentan una correlación positiva ($r = 0,2$), lo que sugiere que estas dos dimensiones tienden a alinearse: quienes valoran elementos formales del sistema democrático (como el voto libre) también suelen asignar importancia a su capacidad redistributiva. Por el contrario, el índice de resguardo institucional se correlaciona negativamente con ambos: con el índice electoral-procedimental ($r = -0,2$) y con el índice de democracia redistributiva ($r = -0,3086$). Esto indica cierta tensión entre la defensa del orden institucional y el énfasis en mecanismos participativos. En cambio, la correlación negativa entre el índice de resguardo institucional y el redistributivo es más débil ($r = -0,179$), lo que indica que estas dimensiones no se excluyen mutuamente de forma absoluta. Esto podría reflejar un patrón más complejo de actitudes, en el que la preocupación por el control del poder no impide, necesariamente, valorar también las funciones redistributivas del Estado.

Si bien los índices muestran correlaciones que sugieren posibles alineamientos valorativos, también existen combinaciones diversas entre ellos. Esto indica que

no todas las personas adhieren⁴ simultáneamente a las distintas dimensiones de la democracia, y que las formas de comprender y valorar el régimen democrático pueden diferir considerablemente entre sectores de la población.

La distribución de combinaciones (tabla 2) revela que el grupo más numeroso (42,5%) valora únicamente el índice electoral-procedimental, mientras que un 14,2% combina esta dimensión con la democracia redistributiva, y un 14,6% con el resguardo institucional. Solo un 8,7% se adhiere, simultáneamente, a las tres concepciones.

En conjunto, el 79,9% de las y los bolivianos valora el índice electoral-procedimental, ya sea de manera exclusiva o en combinación con otras dimensiones. Este dato confirma que el acto electoral y los principios procedimentales siguen siendo un componente ampliamente compartido del ideal democrático en el país, incluso en un contexto de desconfianza institucional. En contraste, un 12,2% valora exclusivamente el índice de resguardo institucional y un 5,5% sólo la dimensión social. Apenas un 2,4% combina el apoyo al resguardo institucional con la democracia redistributiva, sin valorar el procedimiento electoral.

Tabla 2. Combinaciones de las dimensiones de la democracia, 2024

Combinación	Porcentaje
Índice electoral-procedimental + Resguardo institucional + Democracia redistributiva	8,7%
Índice electoral-procedimental + Resguardo institucional	14,6%
Índice electoral-procedimental + Democracia redistributiva	14,2%
Resguardo institucional + Democracia redistributiva	2,4%
Sólo índice electoral-procedimental	42,5%
Sólo índice de resguardo institucional	12,2%
Sólo índice de democracia redistributiva	5,5%
Total	100%

Fuente: Elaboración propia.

En conjunto, estos resultados respaldan la decisión metodológica de construir los tres índices como dimensiones empíricamente diferenciadas. Reflejan la existencia de patrones de actitud distintos hacia la democracia, lo que permite analizar no solo el grado de apoyo ciudadano al régimen democrático, sino también

4. Se considera que una persona adhiere a una dimensión de la democracia cuando obtiene un valor igual o superior a 0,70 en el índice correspondiente, en una escala normalizada de 0 a 1.

las formas específicas en que dicho apoyo se estructura en torno a concepciones procedimentales, institucionales o sustantivas.

3. ¿Quién cree en qué? Perfiles sociales y dimensiones de la democracia

Después de construir los tres índices que resumen distintas formas de entender la democracia –la visión procedimental-electoral, la de resguardo institucional y la social–, el siguiente paso es tratar de responder a una pregunta clave: ¿qué tipo de personas se inclinan por cada una de estas formas de concebir la democracia?

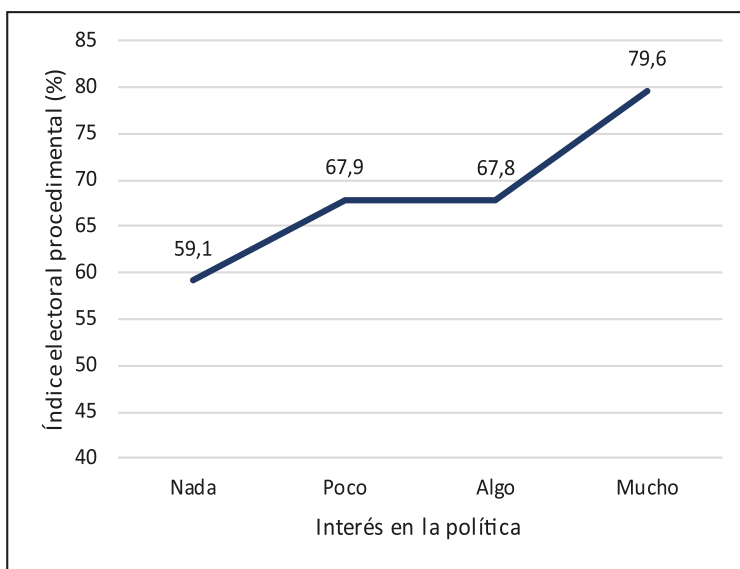
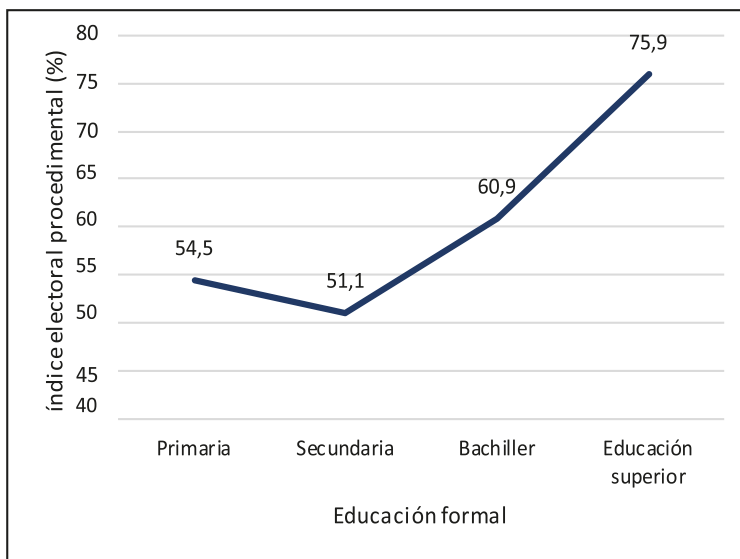
Para ello, se utilizó un modelo estadístico⁵ que permite ver cómo distintas características personales están relacionadas con una mayor o menor adhesión a cada una de las tres concepciones referidas anteriormente. En otras palabras, se busca entender si hay ciertos perfiles –por ejemplo, según el lugar de residencia, la edad o el nivel educativo– que tienden a valorar más una u otra dimensión de la democracia.

Según los resultados del modelo estadístico, en 2024 las variables que influyen en la probabilidad de concebir la democracia desde un punto de vista procedimental-electoral son la región de residencia, la edad, el nivel educativo de la entrevistada o entrevistado y el nivel de interés en la política. Una vez que se controla por otros factores, las personas que viven en los departamentos del oriente del país tienen una probabilidad significativamente mayor de valorar esta concepción de democracia en comparación con quienes viven en el occidente (67,5% de quienes viven en el oriente adhieren a esta concepción de democracia, frente al 60,9% de quienes viven en el occidente del país). Las personas de mayor edad también tienden a valorar más la democracia desde un enfoque procedimental. Por ejemplo, el 66,7% de quienes tienen 61 años o más piensan así, mientras que esta proporción baja al 60,9% entre quienes tienen entre 18 y 28 años. En cuanto al nivel educativo, en el gráfico 2a se observa una diferencia clara entre quienes tienen educación superior (el 75,9% se adhiere a esta forma de pensar la democracia), frente a un 54,5% entre quienes sólo alcanzaron estudios de nivel primario o inferior. Finalmente, el interés en la política también marca una gran diferencia: el 79,6% de quienes se declaran muy

5. Se estimaron regresiones logísticas ordinales en las que cada uno de los índices actúa como variable dependiente. Las variables independientes incluidas en el modelo fueron las siguientes: área de residencia (rural/urbana), región del país (occidente, valles, oriente), edad, sexo (mujer), nivel de ingreso, identificación con pueblo indígena, lengua materna indígena, nivel educativo alcanzado, nivel educativo de la madre e interés en la política.

interesados en la política valoran esta concepción procedimental de la democracia, frente al 59,1% entre quienes dicen no tener ningún interés en ella (gráfico 2b).

Gráficos 2a y 2b. Efecto de la educación y el interés en la política sobre la aceptación del índice de democracia procedimental. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

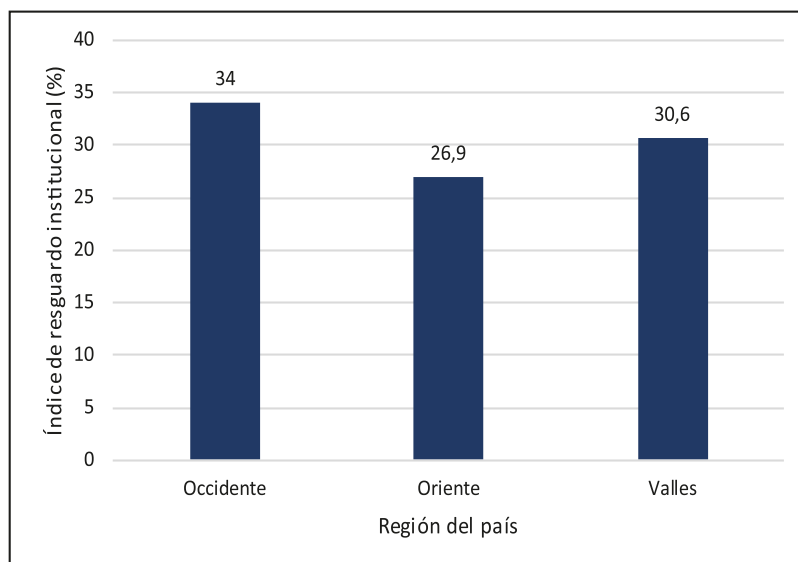
En 2024, las variables que influyen en la probabilidad de concebir la democracia como resguardo institucional –es decir, como un sistema basado en normas, derechos y en la fortaleza de las instituciones– son las siguientes: región de residencia, edad, sexo, nivel de ingreso, autoidentificación con un pueblo indígena, nivel educativo alcanzado e interés por la política. Como muestra el gráfico 3, el 34% de quienes viven en el occidente del país valoran la democracia como un resguardo institucional,

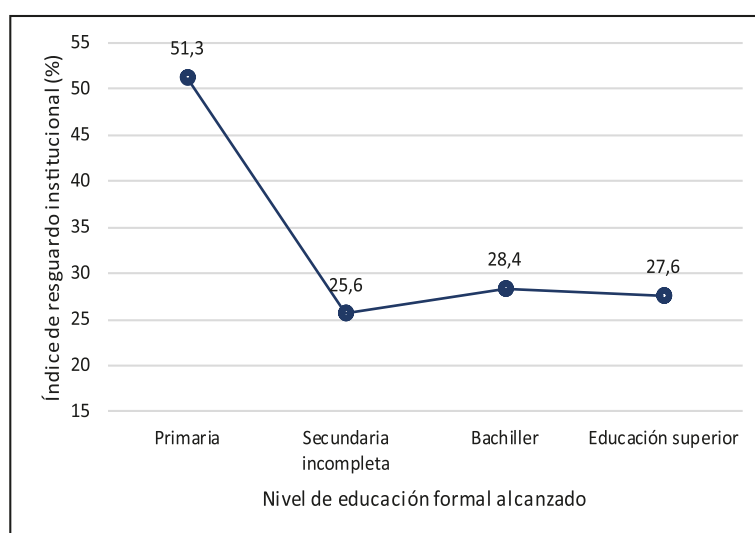
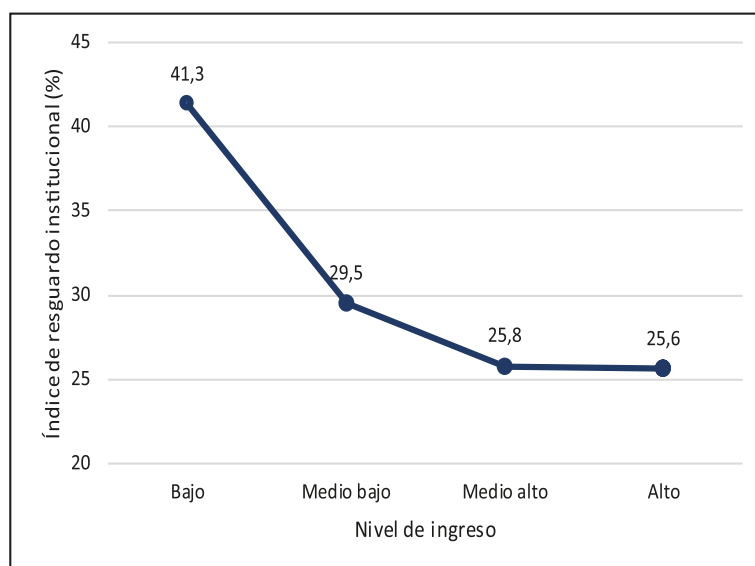
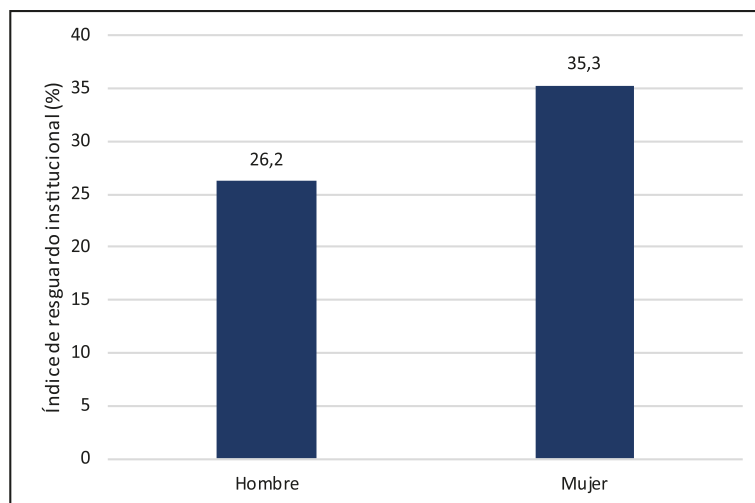
frente al 27,9% de quienes residen en el oriente y al 30,6% de quienes habitan en los valles. Asimismo, se observa una diferencia significativa por sexo: el 35,3% de las mujeres adhieren a esta visión, frente al 26,2% de los hombres.

En cuanto al nivel de ingreso, las personas con ingresos bajos muestran una mayor tendencia a pensar en la democracia como resguardo institucional (41,3%), en contraste con sólo el 25,6% entre quienes tienen ingresos altos. La autoidentificación con un pueblo indígena también influye de forma estadísticamente significativa cuando se toman en cuenta otros factores, aunque las diferencias porcentuales no sean amplias: el 29,5% de quienes se identifican como parte de algún pueblo indígena adhieren a esta perspectiva sobre la democracia, mientras que esta proporción sube ligeramente a 31,6% entre quienes no sienten esta pertenencia.

Por último, el nivel educativo de la entrevistada o el entrevistado marca una diferencia clara, aunque en sentido inverso al índice anterior: el 51,3% de quienes tienen educación primaria valoran esta forma de democracia, frente al 27,6% de quienes cuentan con educación superior. Esto sugiere que, en este caso, son los sectores con menos recursos educativos y económicos quienes más se identifican con la idea de la democracia como protección institucional.

Gráficos 3a, 3b, 3c y 3d. Relación entre región del país (a), sexo (b), ingreso (c) y nivel de educación formal (d) con la valoración de la democracia como resguardo institucional. Bolivia, EMV 2024

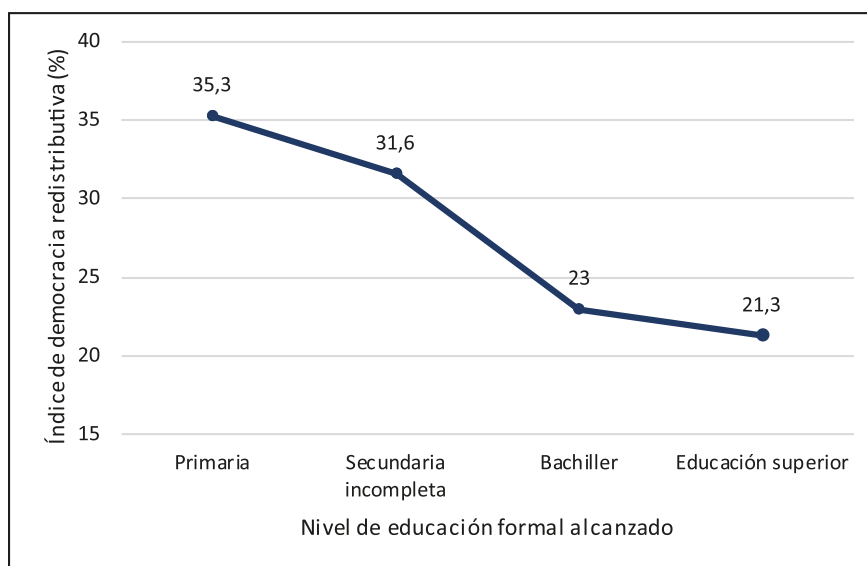




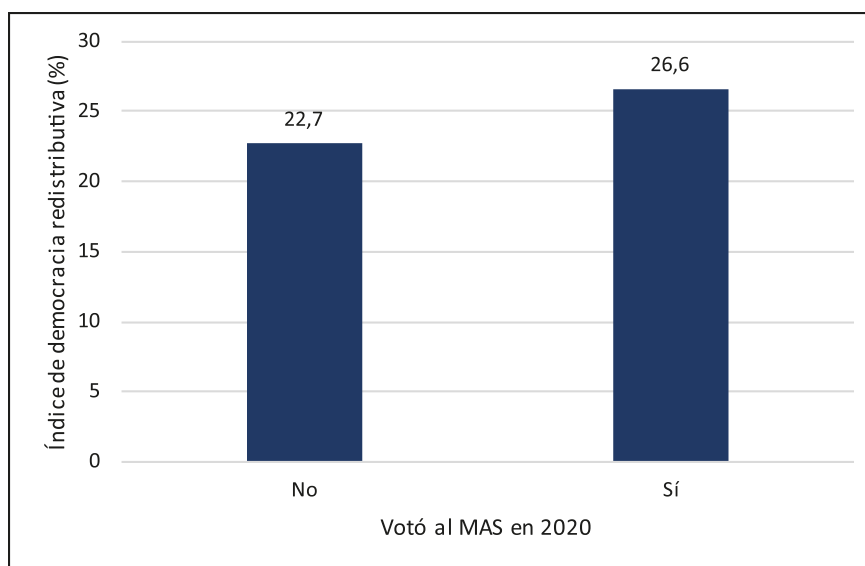
Fuente: Elaboración propia.

En contraste con las otras dimensiones, la única variable que influye de manera significativa en la probabilidad de concebir la democracia como resguardo social –es decir, como un sistema que garantiza la redistribución de recursos– es el nivel educativo de la persona entrevistada. Como muestra el gráfico 4a, hay una diferencia clara entre los distintos niveles de formación: el 35,3% de quienes sólo alcanzaron la educación primaria adhieren a esta concepción de la democracia, mientras que el 21,3% de quienes tienen educación superior piensan lo mismo. Esto sugiere que, en esta dimensión, son las personas con menor educación formal quienes tienden a valorar más una democracia centrada en la justicia social. El resto de las variables incluidas en el modelo –como el sexo, la edad, el ingreso, la región de residencia, la lengua materna, la identificación indígena, la educación de la madre o el interés en la política– no presentan efectos estadísticamente significativos.

Gráfico 4a y 4b. Relación del nivel educativo formal (a) y partido por el que votó en 2020 (b), en la valoración de la democracia redistributiva. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.



Sin embargo, las preferencias por una democracia que cumpla un rol redistributivo -ya sea mediante políticas de igualdad material o mayor intervención estatal- podrían estar también vinculadas a una orientación ideológica más amplia. Al incorporar una variable que capta la probabilidad de haber votado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2020, el modelo muestra un patrón relevante: el 26,6% de quienes votaron por el MAS adhieren a esta visión redistributiva de la democracia, frente al 22,7% de quienes no lo hicieron (gráfico 4b). Este resultado sugiere que el apego a una concepción social de la democracia se alinea, en parte, con ciertos posicionamientos políticos afines a una mayor presencia del Estado en la garantía de derechos sociales. Además, al incluir esta variable ideológica, otras dimensiones sociodemográficas adquieren significancia estadística.

En conjunto, los resultados muestran que las distintas formas de entender la democracia no se distribuyen aleatoriamente en la población, sino que se relacionan con perfiles sociales y experiencias específicas. La concepción procedimental-electoral es más común entre personas con mayor nivel educativo, mayor edad, alto interés en la política y residentes del oriente del país, lo que sugiere una asociación con sectores más politizados, formados y con mayor exposición al lenguaje institucional de la democracia. Por su parte, la concepción de resguardo institucional se asocia con los siguientes rasgos: personas de mayor edad, de menores ingresos, que no se identifican con un pueblo indígena, con menor nivel educativo, que se interesan menos por la política y que viven en el oriente o en los valles.

Dado que este índice recoge elementos como la separación de poderes y el rechazo a modelos autoritarios, estos resultados podrían reflejar una mayor preocupación

entre grupos vulnerables o ligados a la oposición política por limitar formas de poder concentrado, más que una defensa directa de sus propios derechos. Finalmente, la concepción social de la democracia se asocia principalmente con el nivel educativo alcanzado: son las personas con menor formación quienes más valoran esta visión centrada en la igualdad material. Ya que el nivel educativo suele estar fuertemente correlacionado con una posición socioeconómica más baja, esto sugiere que quienes más necesitan de una democracia que redistribuya recursos y garantice condiciones materiales básicas son precisamente quienes más tienden a pensar en la democracia en estos términos.

En suma, cada concepción democrática parece articularse desde experiencias, intereses y prioridades sociales distintas, lo que plantea desafíos importantes para construir una noción compartida de democracia en contextos marcados por la desigualdad.

4. Las dimensiones de la democracia y sus consecuencias

Luego de explorar quiénes adhieren a cada una de las tres concepciones de democracia –la procedimental-electoral, la institucional y la redistributiva–, el siguiente paso es analizar qué impacto tienen estas formas de entender la democracia en la manera en que las personas se relacionan con el sistema político. La hipótesis de fondo es que no solo importa qué se entiende por democracia, sino que esta comprensión influye en las actitudes y comportamientos políticos: en cómo las personas valoran el régimen democrático, qué tan satisfechas están con el sistema y si se sienten motivadas a participar políticamente.

El primer aspecto que permite observar el impacto de las distintas concepciones de democracia es la importancia que las personas asignan a vivir en un país gobernado democráticamente. Ante la pregunta: “¿Cuán importante es para usted vivir en un país que es gobernado democráticamente?”, la gran mayoría de las y los bolivianos (78,2%) respondió, en 2024, que esto sí es importante en algún grado,⁶ y dentro de ese grupo, un 47,8% afirmó que es absolutamente importante.

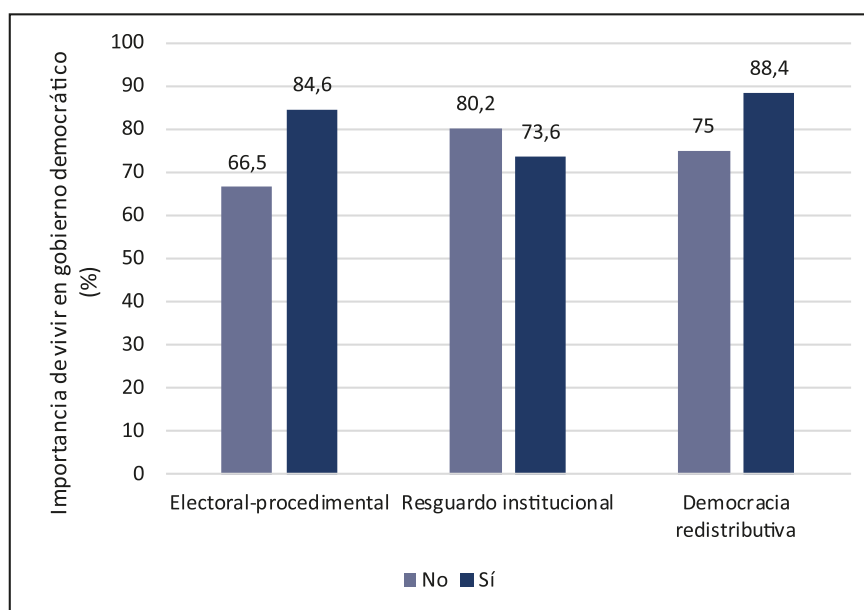
Para entender cómo esta valoración se relaciona con las distintas formas de concebir la democracia, se estimó una regresión logística que incluye todas las variables sociodemográficas utilizadas en los modelos previos (región, edad, sexo, ingresos, educación, lengua materna, entre otras), además de los tres índices que capturan las

6. Valores de 7 a 10 en una escala del 1 al 10, donde 1 significa “completamente sin importancia” y 10 “absolutamente importante”.

distintas concepciones de democracia como variables explicativas.

Los resultados muestran que las personas que adhieren a la concepción procedimental-electoral de la democracia, así como aquellas que valoran más su dimensión social, tienen una probabilidad significativamente mayor de considerar importante vivir en un gobierno democrático. En contraste, quienes se apegan a la dimensión de la democracia como resguardo institucional tienden a no conferir similar importancia. Como muestra el gráfico 5, el 84,6% de quienes adhieren a la democracia procedimental-electoral considera importante vivir en un régimen democrático, frente al 66,5% entre quienes no comparten a esta concepción. En el caso de la democracia redistributiva, la diferencia es también marcada: el 88,4% de quienes valoran esta dimensión considera importante vivir bajo un régimen democrático, frente al 75% de quienes no lo hacen. Mientras que el 73,6% de quienes conciben la democracia desde su rol como resguardo institucional considera importante vivir en un país democrático, una proporción estadísticamente menor (6,6 puntos porcentuales) que la observada entre quienes no valoran esta visión de la democracia.

Gráfico 5. Importancia de vivir en un gobierno democrático y las dimensiones de la democracia. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Pero no solo se puede observar un efecto diferenciado de las formas de concebir la democracia en su valoración abstracta, sino también en las evaluaciones concretas sobre su funcionamiento. Ante la pregunta: “¿Cuán satisfecho/a está con la forma en que el sistema político está funcionando en Bolivia actualmente?”, en 2024, sólo el 7,2% de las y los bolivianos expresó satisfacción con la democracia,⁷ mientras que un 39,7% afirmó estar completamente insatisfecho.

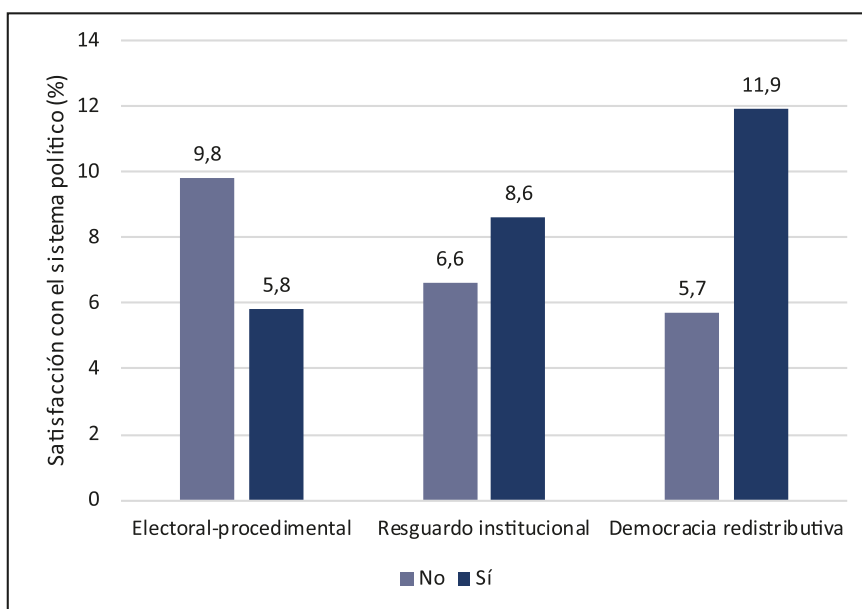
Para analizar cómo esta evaluación se relaciona con las concepciones democráticas, se utilizó nuevamente un modelo estadístico que incluye todas las variables sociodemográficas empleadas anteriormente, junto con los tres índices de concepción de la democracia como variables independientes. Los resultados muestran un patrón interesante: compartir la concepción de la democracia como procedimiento disminuye la probabilidad de estar satisfecho con el funcionamiento actual del sistema político, mientras que concebir la democracia desde su dimensión redistributiva la incrementa.

Como muestra el gráfico 6, entre quienes adhieren a la democracia como procedimientos, el 9,8% se encuentra satisfecho con el funcionamiento del sistema político, frente a un 5,8% de quienes no comparten esta valoración. En cambio, entre quienes entienden la democracia como garantía de equidad, la satisfacción con el funcionamiento del sistema político actual aumenta: el 11,9% se muestran satisfechos, frente a sólo el 5,7% de quienes no comparten esa visión.⁸ Este contraste sugiere que la manera en que se concibe la democracia no solo refleja una preferencia normativa, sino también una expectativa práctica sobre el funcionamiento de la democracia.

7. Valores del 7 al 10 en una escala del 1 al 10, donde 1 significa “completamente insatisfecho/a” y 10 significa “completamente satisfecho/a”.

8. Esta misma relación se observa al analizar los niveles de insatisfacción con la democracia (valores de 0 a 4 en la escala de satisfacción): el 35,5% de quienes no adhieren a la concepción procedimental-electoral se declara insatisfecho con la democracia, frente a un 29,2% entre quienes sí la valoran. En cambio, el patrón se invierte en el caso de la concepción redistributiva: el 30,3% de quienes no adhieren a esta visión están insatisfechos, frente al 34,7% de quienes sí la valoran, lo que sugiere que estas personas mantienen expectativas más exigentes respecto al desempeño democrático.

Gráfico 6. Satisfacción con la democracia y las dimensiones de la democracia. Bolivia, EMV 2024

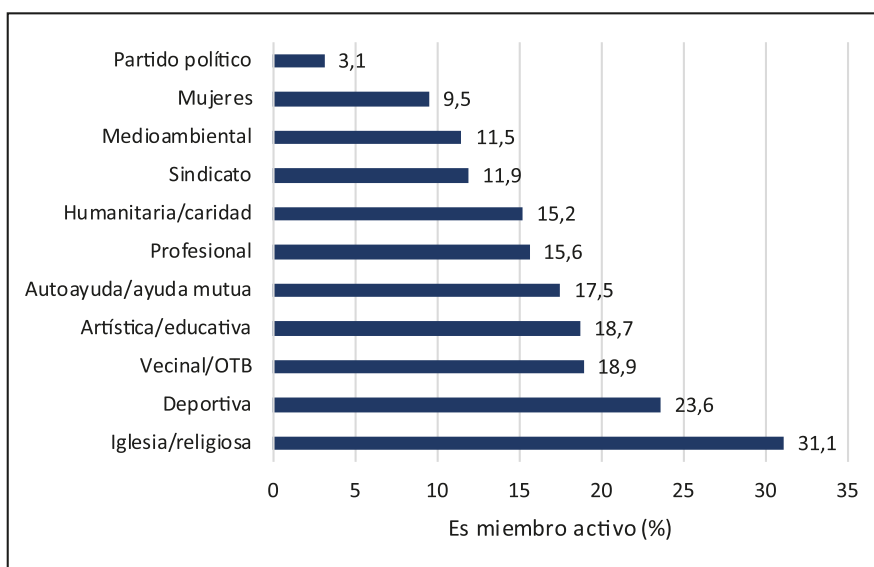


Fuente: Elaboración propia.

El impacto de las distintas formas de concebir la democracia no se limita únicamente a las percepciones o evaluaciones sobre el sistema político, también puede observarse en el comportamiento político y cívico, especialmente en la participación en organizaciones sociales (asociacionismo) y en formas más directas de involucramiento ciudadano.

La población boliviana se caracteriza, históricamente, por un alto grado de participación social organizada. En 2024, el 18,9% de las y los entrevistados declaró ser miembro activo de una organización vecinal o junta de vecinos (OTB); el 9,5% de las mujeres dijo participar en una organización de mujeres; el 17,5% pertenece a un grupo de ayuda mutua; el 15,2% a una organización humanitaria; el 15,6% a una asociación profesional; el 11,5% a una organización medioambiental; el 18,7% participa en una organización artística o educativa; y el 23,6% a una organización deportiva. El porcentaje más alto se registra en organizaciones religiosas, con un 31,8%, mientras que la participación en organizaciones específicamente políticas es más baja: sólo el 3% es miembro activo de un partido político y el 11,9% de un sindicato.

Gráfico 7. Porcentaje de personas que son miembros activos en cada tipo de organización. Bolivia, 2024



Fuente: Elaboración propia.

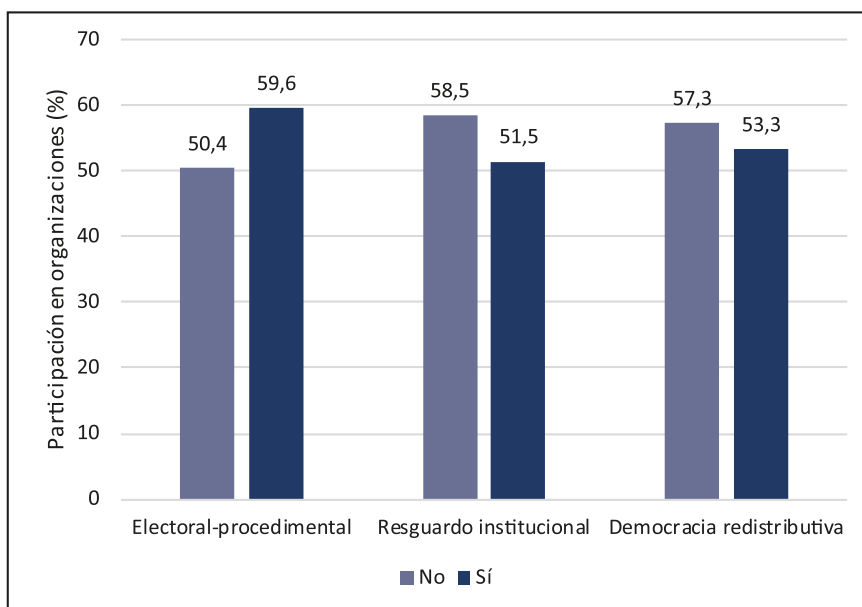
Los resultados del modelo estadístico muestran que concebir la democracia desde una perspectiva procedimental-electoral o institucional se asocia positivamente con una mayor probabilidad de participar en, al menos, una organización social.⁹ En cambio, la concepción de la democracia como resguardo institucional y como mecanismo de redistribución de recursos muestran una relación negativa y estadísticamente significativa con la participación organizativa. A primera vista, este último resultado podría considerarse contraintuitivo.

Como muestra el gráfico 8, el 59,6% de quienes adhieren a la visión electoral procedimental participa en alguna organización social, frente al 50,4% de quienes no comparten esa concepción. En el caso de la democracia como resguardo institucional, la relación va en sentido contrario: el 51,5% de quienes comparten esta visión participan en organizaciones, frente a un 58,5% entre quienes no la comparten. Una asociación similar existe respecto a la concepción de la democracia a partir de su rol redistributivo: el 53,3% de quienes adhieren a esta visión participan en alguna organización, frente al 57,3% de quienes no lo hacen. Estos resultados sugieren que las distintas formas de entender la democracia pueden

9. La variable “participación en organizaciones” toma el valor de 1 si la persona se declara miembro activo/a (código 2) en, al menos, una de las siguientes organizaciones: iglesia u organización religiosa, organización deportiva; organización artística, musical o educativa, sindicato, partido político, organización medioambiental, asociación profesional, organización humanitaria o de caridad, grupo de autoayuda o de ayuda mutua, organización vecinal/OTB. Se excluyen las organizaciones de mujeres. En caso contrario, el valor es 0.

reflejar también diferentes formas de implicarse en la vida pública, ya sea desde una lógica de compromiso institucional-normativo o de acuerdo a una expectativa más sustantiva de redistribución y bienestar.

Gráfico 8. Participación en organizaciones y las dimensiones de la democracia. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

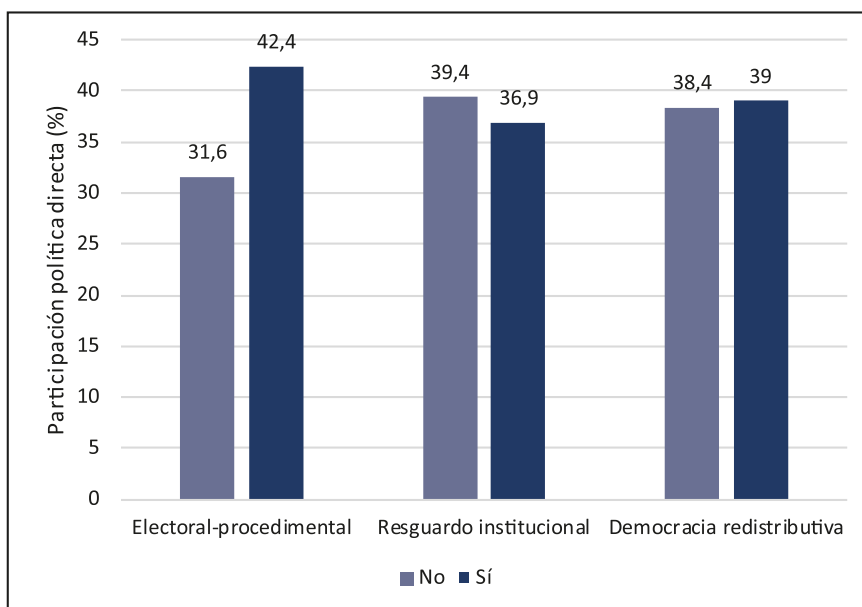
Además de participar en organizaciones sociales, las y los bolivianos también se involucran de forma directa en actividades políticas. Según la encuesta de la EMV de 2024, el 21,8% de la población declaró haber hecho donaciones a un grupo o campaña política; el 5% afirmó haber contactado a un funcionario de gobierno; el 8% presentó alguna petición formal; el 14,8% participó en una manifestación pacífica; el 1,3% en un boicot; el 7,8% tomó parte en huelgas; el 8,1% expresó sus opiniones mediante comentarios políticos en internet; e incluso un 2% declaró haber participado en alguna insurrección o revuelta.

De manera contraintuitiva, el análisis estadístico revela que solo una de las tres concepciones de la democracia tiene un efecto significativo en la probabilidad de participar en, al menos, una de estas formas de acción política directa:¹⁰ la concepción procedimental-electoral. Las personas que valoran la democracia como un sistema

10. La variable “participación política directa” toma el valor de 1 si la persona respondió positivamente a, al menos, una de las siguientes formas de acción política: hacer donaciones a un grupo o campaña, contactar a un funcionario del gobierno, firmar una petición, participar de manifestaciones pacíficas, participar en boicots, participar en huelgas, hacer comentarios políticos en internet o participar en una insurrección o revuelta política. En caso contrario, el valor es 0.

basado en elecciones libres, participación ciudadana y reglas de juego institucionales manifiestan una mayor propensión a involucrarse directamente en la vida política. Como muestra el gráfico 9, el 42,4% de quienes adhieren a la concepción electoral procedimental ha participado de al menos una de estas formas de acción política directa, frente al 31,6% entre quienes no comparten esa visión. Por el contrario, concebir la democracia como resguardo institucional o como motor de redistribución no tiene efectos significativos sobre este tipo de participación. Es probable que una comprensión más normativa y procesual de la democracia podría estar asociada con un mayor sentido de responsabilidad cívica o empoderamiento individual para actuar en el espacio público.

Gráfico 9. Participación política directa y las dimensiones de la democracia. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

El análisis presentado a lo largo de esta sección deja en claro que la forma en que las personas conciben la democracia tiene consecuencias significativas en su manera de pensar, sentir y actuar políticamente. Lejos de ser una dimensión abstracta o meramente normativa, la idea que cada quien tiene sobre lo que significa “vivir en democracia” está asociada con niveles concretos de valoración del régimen, satisfacción con la democracia y formas de involucramiento ciudadano.

Por un lado, se observa que tanto la concepción procedimental-electoral como la social están fuertemente asociadas a una mayor importancia atribuida a vivir en un país gobernado democráticamente. Esto sugiere que quienes piensan en la

democracia como un conjunto de reglas y procesos electorales –o como un sistema orientado a garantizar la redistribución de recursos–, le otorgan un valor normativo más alto al régimen democrático. En cambio, la relación es negativa en el caso de la concepción de la democracia como resguardo institucional: quienes se alinean con esta visión tienden a otorgar menor importancia a vivir en un sistema democrático. Esto podría reflejar una mayor disposición a aceptar medidas autoritarias o regímenes no democráticos.

Por otro lado, cuando se analizan las evaluaciones sobre el desempeño de la democracia, los efectos se bifurcan: quienes adhieren a una concepción procedimental de la democracia –centrada en normas, reglas y procesos institucionales– tienden a mostrar menor satisfacción con el funcionamiento del sistema. En contraste, las personas que valoran la dimensión redistributiva tienden a expresar una actitud más favorable hacia el régimen. Esto puede estar relacionado con el contexto político reciente en Bolivia, marcado por el conflicto en torno a las elecciones de 2019 y la persistente desconfianza hacia el sistema electoral y los resultados de las elecciones. En este escenario, es comprensible que quienes conciben la democracia, principalmente, como un conjunto de procedimientos y reglas formales, tiendan a mostrar mayor insatisfacción con el funcionamiento del régimen democrático, al percibir que esos principios han sido vulnerados. Por el contrario, quienes votaron por el actual partido de gobierno tienden a mostrar una actitud más favorable hacia el sistema, posiblemente porque su visión de la democracia como promotora de equidad social se alinea con las promesas discursivas y políticas del gobierno en ejercicio, generando una mayor identificación entre su concepción normativa e ideológica y el desempeño institucional percibido.

En cuanto al comportamiento político, los efectos también son diferenciados. La participación en organizaciones sociales se asocia positivamente con las concepciones procedimental e institucional, mientras que quienes entienden la democracia desde un enfoque de equidad o de resguardo institucional participan menos, en términos estadísticos, de este tipo de organizaciones. Finalmente, la participación política directa –que incluye desde donaciones a campañas hasta protestas e insurrecciones–, se relaciona de forma significativa solo con la concepción procedimental-electoral, lo cual refuerza la idea de que esta visión más normativa y reglada de la democracia podría estar asociada con mayores niveles de compromiso cívico.

Una posible explicación de estos patrones es que la concepción procedimental de la democracia fomenta una visión más activa de la ciudadanía, basada en normas, deberes cívicos y canales institucionales de participación. En cambio, quienes

valoran la democracia desde su dimensión redistributiva o de resguardo podrían tener expectativas más centradas en la función protectora o prestadora del Estado, lo cual no necesariamente se traduce en formas organizadas de involucramiento colectivo. Además, en contextos de desconfianza institucional, estos grupos podrían percibir que la participación no tiene un impacto real, lo que desincentiva su involucramiento.

En conjunto, estos hallazgos subrayan que no todas las formas de creer en la democracia tienen los mismos efectos políticos. La manera en que las personas entienden la democracia estructura sus actitudes hacia el régimen y su disposición a participar. En contextos socialmente desiguales y políticamente tensos, estas diferencias no son menores: pueden ser clave para comprender los límites y posibilidades de una cultura democrática compartida.

5. Las democracias frente al espejo de la crisis

Hasta aquí, el análisis ha mostrado que existen formas diferenciadas de concebir la democracia en Bolivia, y que estas concepciones tienen consecuencias manifiestas sobre cómo las personas evalúan el régimen político y cómo participan en él. Sin embargo, persiste una pregunta clave: ¿en qué medida el momento histórico –sus condiciones económicas, políticas y sociales– influye en cómo las y los ciudadanos entienden la democracia? Para explorar esta dimensión contextual, se utilizan datos comparables de las rondas 2017 y 2024 de la EMV.

El contraste entre ambos momentos no es menor. En 2017, Bolivia atravesaba una etapa de relativa estabilidad económica, con un gobierno que mantenía niveles de aprobación relativamente altos y una confianza institucional más extendida (aunque ya se evidenciaban señales de descomposición institucional). Para 2024, en cambio, el país enfrenta una crisis económica aguda, con un gobierno debilitado, bajos niveles de aprobación y una desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas. Este cambio de contexto permite indagar si los perfiles democráticos que observamos hoy son resultado de condiciones estructurales persistentes o si están siendo moldeados, al menos en parte, por el deterioro del entorno político y económico reciente.

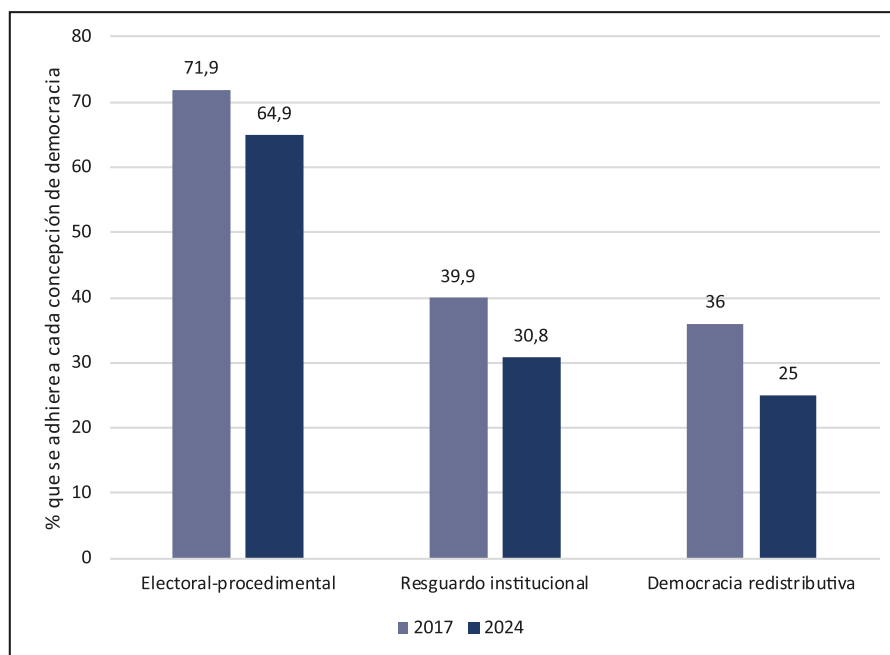
Para examinar esta relación entre contexto y concepciones democráticas, se estimó un modelo de regresión logística con los datos conjuntos de 2017 y 2024. El modelo conserva las mismas variables sociodemográficas de control utilizadas en los análisis anteriores (edad, sexo, ingresos, educación, región, entre otras), pero incorpora una nueva variable: el año de la encuesta, que permite capturar posibles efectos del

contexto histórico.

Los resultados son contundentes: haber respondido en 2024 reduce significativamente la probabilidad de adherirse a cualquiera de las tres concepciones de la democracia analizadas en este capítulo. Es decir, en un contexto marcado por crisis económica, baja aprobación gubernamental y desconfianza institucional, la adhesión a valores democráticos –ya sean normativos, institucionales o sociales– se debilita. Es posible que el contexto de crisis genere un clima de frustración generalizado que impacta de forma negativa las expectativas cívicas y desacredita a la democracia en sus distintas expresiones.

Como muestra el gráfico 10, en 2017 el 71,9% de las y los bolivianos asumía una concepción electoral procedimental de la democracia, frente al 64,9% en 2024. La caída también es visible en las otras dos dimensiones: el 39,9% concebía la democracia como resguardo institucional en 2017, mientras que en 2024 esta proporción bajó al 30,8%. Finalmente, la visión de la democracia como garantía de redistribución también se redujo notablemente, del 36% en 2017 al 25% en 2024.

Gráfico 10. Porcentaje de personas que se adhiere a las distintas concepciones de la democracia. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

En contextos en los que las condiciones materiales de vida se deterioran, las promesas de equidad y redistribución asociadas a la democracia pierden fuerza. Al mismo

tiempo, la polarización política y la inestabilidad institucional socavan la confianza en los procedimientos y reglas del juego democrático, lo que afecta negativamente tanto a la concepción procedimental como a la institucional. Esto sugiere que las crisis afectan las bases culturales que sostienen el ideal democrático, debilitando el apego ciudadano a los principios que definen el sistema democrático en sus distintas expresiones. La democracia, entonces, no sólo enfrenta desafíos en su práctica institucional, sino también en su legitimidad simbólica entre la ciudadanía.

Las comparaciones entre 2017 y 2024 permiten observar no sólo cambios en la magnitud de la adhesión a las distintas concepciones de democracia, sino también transformaciones en los perfiles sociales que las sostienen. Estas comparaciones se derivan de análisis de regresión logística con estructuras equivalentes en ambos años, lo que permite identificar tanto persistencias como cambios sustantivos en los factores que explican quiénes tienden a valorar más cada una de las dimensiones analizadas.

La concepción procedimental-electoral de la democracia muestra un cambio notorio en su base social. En 2017, esta visión se asociaba con sectores rurales, de lengua indígena, mayores y con trayectorias educativas familiares más altas, lo cual sugiere un apoyo a la democracia formal por parte de sectores populares socializados políticamente en procesos de inclusión reciente. Para 2024, este patrón se invierte parcialmente: la adhesión a esta concepción se concentra en personas con mayor nivel educativo, residentes del oriente, con más edad e interés en la política. Esta transformación puede reflejar un proceso de desafección de sectores populares ante la percepción de que las reglas democráticas han sido debilitadas, y una apropiación de esta visión por parte de sectores más escolarizados y politizados, que buscan reafirmar el valor de las instituciones frente a la crisis.

En ambos años, la concepción de resguardo institucional de la democracia se asocia positivamente con mayor edad y con las mujeres, lo que puede sugerir una mayor valoración del orden institucional y la protección frente a abusos de poder entre sectores históricamente más vulnerables. Sin embargo, hay una transformación en otros factores: mientras en 2017 esta concepción era más fuerte en el área rural, entre hablantes de lenguas indígenas y personas de menor educación, en 2024 pierde parte de ese anclaje y se vuelve más común en los valles, entre personas de bajos ingresos, desvinculándose de la lengua y la autoidentificación indígena. Esta variación puede estar asociada a una relativa resignificación de esta concepción, desde una expectativa de protección del poder hacia una mirada más crítica sobre su ejercicio, o incluso hacia una expresión de oposición pasiva.

La dimensión redistributiva muestra los cambios más marcados entre ambos años. En 2017, esta concepción se anclaba en sectores populares y culturales tradicionalmente excluidos: mujeres, hablantes de lenguas indígenas, personas con menor educación y provenientes de los valles. Para 2024, si bien el nivel educativo sigue siendo un determinante importante (a menor educación, mayor adhesión), el peso de otros factores cambia. Por ejemplo, el efecto positivo del género y de la lengua indígena desaparecen y, en cambio, aparece el voto por el MAS. Esto podría obedecer a un desplazamiento ideológico: la concepción de la democracia como garante de equidad deja de ser transversalmente popular para articularse más claramente con identificaciones partidarias, especialmente entre quienes apoyan un modelo redistributivo estatal. También podría indicar un cierto cansancio o desencanto entre los sectores históricamente más marginados, que ya no encuentran en esta concepción una respuesta efectiva a sus demandas.

Además, más allá de la caída general en la adhesión a las distintas concepciones de democracia entre 2017 y 2024, los datos muestran que el contexto no sólo influye en cuántas personas valoran la democracia, sino también en cómo esta valoración se relaciona con sus percepciones y comportamientos políticos. La comparación entre ambos años revela tanto continuidades como rupturas.¹¹

Por un lado, la concepción procedimental-electoral mantiene un efecto positivo y estable sobre la importancia atribuida a vivir en un país democrático, así como sobre la participación política directa, lo que confirma su rol central como anclaje normativo del compromiso cívico, incluso en contextos de crisis. Sin embargo, en 2017, esta concepción se relacionaba positivamente con la satisfacción con el régimen, pero en 2024 ese vínculo se vuelve negativo, lo que sugiere una ruptura entre el ideal normativo y la percepción del desempeño institucional, posiblemente alimentada por la desilusión generada tras las elecciones de 2019.

La dimensión redistributiva, por su parte, muestra una continuidad en su asociación positiva con la importancia atribuida a la democracia y con la satisfacción con el régimen, lo que sugiere que el deseo de equidad sigue siendo un componente valorado del ideal democrático. Pero su relación con la participación también se transforma: mientras en 2017 se asociaba positivamente con la participación política directa, en 2024 ese efecto desaparece, y su relación con la participación en organizaciones se vuelve incluso negativa. Esto podría ser producto de un creciente desencanto con los canales colectivos tradicionales, y con una expectativa de que el Estado –más que la ciudadanía organizada– sea el agente encargado de garantizar la equidad.

11. En base a resultados de análisis de regresión logística similares a los de 2024 para la muestra de 2017.

En cuanto al resguardo institucional, esta dimensión presenta en ambos años una relación negativa con la valoración de la democracia y con la satisfacción respecto de su funcionamiento. Si bien una primera lectura podría interpretarla como una expresión de escepticismo hacia el régimen democrático, otra interpretación plausible –especialmente en el contexto boliviano– es que este patrón refleje una mayor apertura hacia formas de gobierno no democráticas. Es decir, quienes no valoran la democracia como un sistema de normas e instituciones que limitan el poder pueden estar más dispuestos a aceptar liderazgos autoritarios, centralización del poder o mecanismos de excepción. Esta hipótesis gana fuerza si se considera que el índice de resguardo institucional incluye ítems relacionados con el respaldo a actores autoritarios (como el Ejército o líderes sin control parlamentario). En 2024, a diferencia de 2017, esta dimensión se asocia negativamente con la participación organizativa, lo que podría reflejar una desafección más profunda respecto a las prácticas colectivas y deliberativas que caracterizan la vida democrática. El contexto de crisis parece revelar que, lejos de tratarse simplemente de una actitud crítica, esta forma de concebir la democracia podría estar más próxima a una preferencia por el orden, la autoridad y el control, en detrimento de principios pluralistas y participativos.

Conclusiones

Este capítulo ha mostrado que las concepciones ciudadanas de la democracia en Bolivia son múltiples, y que cada una de ellas –procedimental, de resguardo institucional y redistributiva– se articula con perfiles sociales y valoraciones políticas diferenciadas. Lejos de tratarse de una noción unívoca, la democracia es interpretada de formas diversas, en función de experiencias concretas, condiciones socioeconómicas e intereses colectivos.

Quienes comparten una concepción procedimental-electoral de la democracia suelen ser más mayores, con niveles educativos más altos y un fuerte interés por la política. Este perfil se asocia también con una participación activa en organizaciones sociales y en prácticas directas de acción política, así como con una alta valoración normativa de la democracia, aunque acompañada de una crítica al modo en que funciona. Este grupo representa una ciudadanía más politizada, consciente de los procedimientos y socializada a través de una visión clásica de la democracia que se centra en el voto y en las reglas del juego institucional. Su adscripción a los principios normativos parece fortalecer su compromiso con la participación democrática, tanto organizada como directa. Sin embargo, también se acompaña de una mirada crítica

sobre el funcionamiento real del sistema, lo que sugiere que una mayor conciencia institucional puede traducirse no sólo en mayor involucramiento, sino también en expectativas más exigentes hacia la democracia en la práctica.

En contraste, la concepción de la democracia como resguardo institucional convoca con mayor fuerza a sectores sociales que enfrentan condiciones de exclusión o vulnerabilidad: personas con menor nivel educativo e ingresos, de mayor edad y, en particular, mujeres marginalizadas. Estos colectivos tienden a valorar la democracia como una herramienta para limitar el poder y prevenir abusos, aunque le otorgan menor importancia normativa y presentan niveles bajos de satisfacción al valorar su funcionamiento. Su participación organizativa también es más baja, lo que podría reflejar una actitud defensiva o escéptica frente al sistema político. Más que una defensa activa del orden institucional, esta visión parece reflejar una necesidad de protección frente a un entorno percibido como inestable o amenazante.

Al mismo tiempo, resulta fundamental observar el perfil de quienes no se adscriben a esta concepción, que representan el 69,2% de la muestra. Aunque este grupo tiende a valorar la democracia como ideal y muestra mayores niveles de participación política, no necesariamente integra en su visión la dimensión institucional como mecanismo clave para limitar el poder. Esta ausencia puede derivar en una cierta tolerancia hacia liderazgos fuertes o estilos autoritarios, siempre que éstos se perciban como eficaces o capaces de canalizar demandas. El riesgo no es menor: una ciudadanía activa, pero sin un compromiso claro con los principios institucionales puede terminar debilitando los frenos democráticos, incluso desde posturas bien intencionadas. Si esta desatención hacia el resguardo institucional persiste, podría debilitar los límites que frenan avances autoritarios, aunque se trate de actores con alto nivel de movilización.

Finalmente, en 2024 la concepción redistributiva de la democracia es sostenida por una proporción muy reducida de la población (25%). Esta baja adhesión podría estar vinculada a una visión extendida en la sociedad boliviana que prioriza el esfuerzo individual por sobre el rol del Estado como garante de derechos y bienestar, lo que limita la legitimidad de una perspectiva centrada en la igualdad material. Quienes sí se identifican con esta dimensión tienden a tener menor nivel educativo y se asocian más estrechamente con la posición política (específicamente, al voto por el MAS). Aunque este grupo valora altamente el ideal democrático y muestra mayores niveles de satisfacción con su funcionamiento, no exhibe un patrón consistente de participación política activa. Esto sugiere que la expectativa redistributiva está menos anclada en la acción colectiva y más en una demanda dirigida al Estado, sin

una intermediación organizativa clara.

Sin embargo, 2024 no es un año cualquiera, sino que se inscribe en una coyuntura marcada por una profunda crisis política, económica y social. Este contexto no solo afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas, sino que también parece estar desgastando el vínculo afectivo de la ciudadanía con la democracia misma. En comparación con 2017, se observa una transformación significativa en los perfiles sociales que adhieren a cada concepción democrática, así como en las expectativas y formas de participación asociadas. La democracia procedimental se aleja de los sectores populares y se concentra en grupos más educados y politizados; la concepción institucional pierde fuerza entre los sectores rurales e indígenas y gana espacio en grupos con menor involucramiento político; y la redistributiva, antes más transversal, se reduce y se vincula estrechamente al voto oficialista. Estas transformaciones no sólo revelan un reordenamiento del mapa democrático, sino que también plantean un escenario preocupante: a medida que las crisis erosionan las condiciones materiales y simbólicas de la democracia, se debilita su legitimidad social y se diversifican las formas de desafección. Comprender este desplazamiento es clave para evitar que las tensiones actuales se traduzcan en rupturas futuras.

En este contexto, entender cómo distintos grupos sociales conciben la democracia no es sólo un ejercicio analítico, sino que resulta clave para enfrentar los desafíos actuales y repensar estrategias de fortalecimiento democrático. Las concepciones diferenciadas evidencian que no existe una única idea de lo democrático, y que las demandas ciudadanas se construyen desde posiciones diversas en términos de experiencia, expectativa y participación. Frente a una ciudadanía fragmentada, movilizadora de forma desigual y con vínculos erosionados con respecto al régimen democrático, cualquier esfuerzo de fortalecimiento debe partir del reconocimiento de esa pluralidad. Sólo políticas que articulen procedimientos, resguardo institucional y justicia social podrán responder a las tensiones acumuladas, reconstruir legitimidad y evitar que la crisis derive en una ruptura aún mayor.

Referencias

Bermeo, N. (2016). *On democratic backsliding*. *Journal of Democracy*, 27(1), 5-19.

<https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>

Booth, J. A. y Seligson, M. A. (2009). *The legitimacy puzzle in Latin America: Political support and democracy in eight nations*. Cambridge University Press.

- Bratton, M. y Mattes, R. (2001). *Support for democracy in Africa: Intrinsic or instrumental?* British Journal of Political Science, 31(3), 447-474.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies*. Oxford University Press.
- Davis, N. T., Gaddie, K. y Goidel, K. (2022). *Democracy's meanings: How the public understands democracy and why it matters*. University of Michigan Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Haggard, S. y Kaufman, R. R. (2018). *Development, democracy, and welfare states: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. Princeton University Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Kriekhaus, J., Son, B., Bellinger, N. y Wells, J. (2014). *Economic inequality and democratic support*. The Journal of Politics, 76(1), 139-151.
- Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing Group.
- Linz, J. J. y Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Johns Hopkins University Press.
- Lührmann, A. y Lindberg, S. I. (2019). *A third wave of autocratization is here: What is new about it?* Democratization, 26(7), 1095-1113.
- Mainwaring, S. y Pérez-Liñán, A. (2005). *Latin American democratization since 1978: Democratic transitions, breakdowns, and erosions*. In F. Hagopian y S. Mainwaring (Eds.), *The third wave of democratization in Latin America* (pp. 14-59). Cambridge University Press.
- Mainwaring, S., y Pérez-Liñán, A. (2014). *Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence, survival, and fall*. Cambridge University Press.
- Mishler, W. y Rose, R. (2001). *What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies*. Comparative Political Studies, 34(1), 30-62.

- Moreno Morales, D. *et al.* (2024). *La democracia en los ojos de la gente*. Fundación Friedrich Ebert.
- Møller, J. y Skaaning, S. E. (2013). *Democracy and democratization in comparative perspective: Conceptions, conjunctures, causes, and consequences*. Routledge.
- Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Munck, G. L. (2009). *Measuring democracy: A bridge between scholarship and politics*. Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, G. (2004). Why the rule of law matters. *Journal of Democracy*, 15(4), 32-46.
- Plattner, M. F. (2010). Populism, pluralism, and liberal democracy. *Journal of Democracy*, 21(1), 81-92.
- Przeworski, A. (2010). *Democracy and the limits of self-government*. Cambridge University Press.
- Santos, B. de S. (2005). *Democratizing democracy: Beyond the liberal democratic canon*. Verso.
- Scharpf, F. W. (1999). *Governing in Europe: Effective and democratic?* Oxford University Press.
- Schmitter, P. C. y Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers.
- Seki, K. (2023). Assessing the public understanding of democracy through conjoint analysis. *Frontiers in Political Science*, 5.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Singer, M. M. (2016). *Delegating away democracy: How good representation leads to bad responsiveness*. *Latin American Politics and Society*, 58(1), 1-26.
- Waldner, D. y Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with democratic backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21, 93-113.

Welzel, C. (2013). *Freedom rising: Human empowerment and the quest for emancipation*. Cambridge University Press.

Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.

CAPÍTULO 6:

Ciencia, tecnología y religión

Eduardo Córdova

Introducción

Hoy las relaciones personales dependen más de la ciencia y la tecnología que hace tan sólo una década. La comunicación dentro de las familias se da, en gran medida, a través de los teléfonos inteligentes. Los *chatbots* de inteligencia artificial son parte de la cotidianidad en la educación. El sistema de posicionamiento global satelital facilita la movilización en áreas urbanas y rurales. Parte de la vida transcurre en ámbitos virtuales. La vida social se ha *smartphonizado*. El teléfono inteligente es una ventana de salida al “océano de internet” desde la vida cotidiana; también es parte fundamental de la vida cotidiana y, más allá, es la puerta de acceso de ideologías e intereses de grupos y corporaciones a la vida cotidiana (Radetich, 2022).

El hecho de que exista una mayor dependencia personal respecto de la tecnología no equivale a una mayor valoración de la ciencia, ni como base de la tecnología ni en su calidad de conocimiento sustentado. Tampoco equivale, lógicamente, a la pérdida de la importancia de las creencias ni al abandono de las prácticas religiosas. En el plano científico, es posible observar una convergencia entre una mayor dependencia en relación con los avances científicos –expresados en la tecnología–, y una mayor desconfianza hacia la autoridad del saber científico. De forma inédita, las plataformas digitales permiten la propagación de discursos anticientíficos y pseudocientíficos, desde certezas sobre la pretendida planitud de la Tierra o la supuesta inexistencia del cambio climático, hasta “batallas culturales” sobre la naturaleza humana, la economía, la religión o la política.

En este capítulo se examinarán las opiniones de la población boliviana sobre la ciencia, la tecnología y la religión, con base en la Encuesta Mundial de Valores (EMV), a partir de los datos de la octava ronda para el país (2024). El anterior *Informe de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia* (Moreno, 2019) dedicó sendos capítulos a la ciencia y tecnología, por un lado, y a la religión, por el otro. En el presente informe ambos temas se abordan en este capítulo, conjuntamente, debido precisamente a la

aparente contradicción –observada también en otras regiones del mundo–, entre una predominancia de visiones postseculares, afines a la modernización y a los avances científicos, y una tendencia a otorgar mayor validez a la religión que a la ciencia en el caso de conflictos entre ambas (Lee, 2023). Para adoptar una perspectiva comparada, se considerarán además los datos de los países que ya han participado en esta ronda de la encuesta, así como los datos de la séptima ronda para Bolivia (2017). Entre 2017 y 2024 ocurrieron en Bolivia varios acontecimientos y procesos relevantes. Aunque el número de mediciones y el tiempo transcurrido no permiten afirmar la existencia de tendencias claras en los valores y orientaciones de las y los bolivianos, deben considerarse los posibles efectos de la crisis política de 2019-2020, la pandemia de COVID-19 y la crisis económica.

La relación entre ciencia y religiosidad

La religiosidad puede entenderse como la forma en que los individuos y las colectividades se relacionan con lo sagrado, y la importancia que asignan a la religión en sus vidas (Sherkat 2015). La relación entre ciencia y religiosidad ha sido examinada en términos de las teorías de la secularización, bajo la presunción de que una mayor expansión de la científicidad contribuiría a una disminución de la religiosidad. Desde sus formulaciones iniciales en los años sesenta, las teorías de la secularización asumieron que factores como la diferenciación social, la difusión de la racionalidad científica, el pluralismo o la consolidación de la esfera privada provocarían un abandono paulatino de la religiosidad, en términos de creencias y prácticas religiosas y de demanda de servicios religiosos –o bien en términos de su confinamiento a la esfera privada (Tschannen, 1991; Gorski y Altinordu, 2008; Norris e Inglehart, 2011, 2015; Inglehart, 2021a)–.

En respuesta a las críticas sobre su probable carácter unidireccional y teleológico –y al hecho de que en algunas regiones la religión se había revitalizado sobre todo desde los años noventa– las teorías de la secularización se hicieron más complejas. Así, Ronald Inglehart y Pippa Norris propusieron una versión en que la secularización no depende de la científicidad ni de la modernización, sino más bien de la seguridad existencial: a mayor seguridad, menor recurrencia a la religión. En segundo lugar, la modernización se concibe como un proceso con dependencia de trayectoria, a partir de herencias históricas nacionales particulares. Además, la religión compensaría la inseguridad existencial psicológica (por ejemplo, la percepción del riesgo de caer en la pobreza) en momentos de cambio político y económico. Finalmente, pueden darse puntos de inflexión más allá del simple

cambio generacional (Inglehart 2021a; Norris e Inglehart 2011).

Desde esta perspectiva, en 2020 se observaba a escala global una declinación generalizada de la religiosidad atribuida a una mayor seguridad existencial, con países como Chile y Australia mostrando una mayor disminución en la importancia de Dios en la vida de la gente (Inglehart, 2020, 2021a, 2021b; Inglehart *et al.*, 2021).

La relación entre religiosidad y racionalidad científica es, por tanto, compleja y no excluyente. Tampoco reviste carácter universal, ya que depende de las circunstancias y las trayectorias de cada sociedad. Como se verá a continuación, en las opiniones y actitudes de la población boliviana frente a la ciencia intervienen, además de la religión, factores como la edad, el nivel de educación, la región geográfica de residencia y el nivel de ingresos.

1. La sociedad boliviana, la ciencia y la tecnología

Este apartado se dedica a las orientaciones de las y los bolivianos respecto de la ciencia y la tecnología. Se enfocará, por un lado, en la autoridad cultural de la ciencia convencional como expresión de la modernización y, por el otro, en las percepciones sobre la tecnología, principalmente en relación con la inteligencia artificial.

No se atribuirá a la ciencia rasgos de verdad absoluta ni primacía automática sobre otras formas de conocimiento. La autoridad de la ciencia puede definirse como “una aspiración, al mismo tiempo que un hecho social en cualquier sociedad, de ser una institución de prestigio general capaz de decir verdades al poder” (Bauer, Pansegrau y Shukla 2019: 7). Se asumirá que en la actualidad elementos como la desinformación por medios digitales y la posverdad amenazan esa aspiración de validez objetiva del conocimiento científico.

El *Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia*, de 2019, halló que factores como tener un nivel alto de ingresos, ser hombre, haber cursado educación superior y haber aprendido a hablar en castellano (en lugar de una lengua indígena) influían favorablemente en las actitudes hacia la ciencia y la tecnología. El informe ubicaba a Bolivia como uno de los países con menor percepción de que el mundo es mejor gracias a la ciencia y la tecnología (Moreno, 2019). Coincidentemente, los resultados preliminares de un reciente estudio realizado por el proyecto Confianza en los Científicos y Populismo Relacionado con la Ciencia en 68 países ubican a Bolivia como uno de los tres países con menos confianza en los científicos (Cologna *et al.*, 2024).

La octava ronda de la EMV en el país incluye preguntas sobre las actitudes respecto

de la ciencia en general y su importancia en el mundo; sobre el cambio climático y la posible oposición entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico; sobre la pertinencia del sustento científico para la formulación de políticas públicas; el conflicto entre ciencia y religión; y la valoración de la inteligencia artificial. Se trata de preguntas que pueden develar creencias vinculadas con valores sociales específicos, lo que se discute con mayor profundidad a continuación.

1.1 ¿El mundo es mejor o peor gracias a la ciencia y la tecnología?

La EMV formuló la siguiente pregunta:

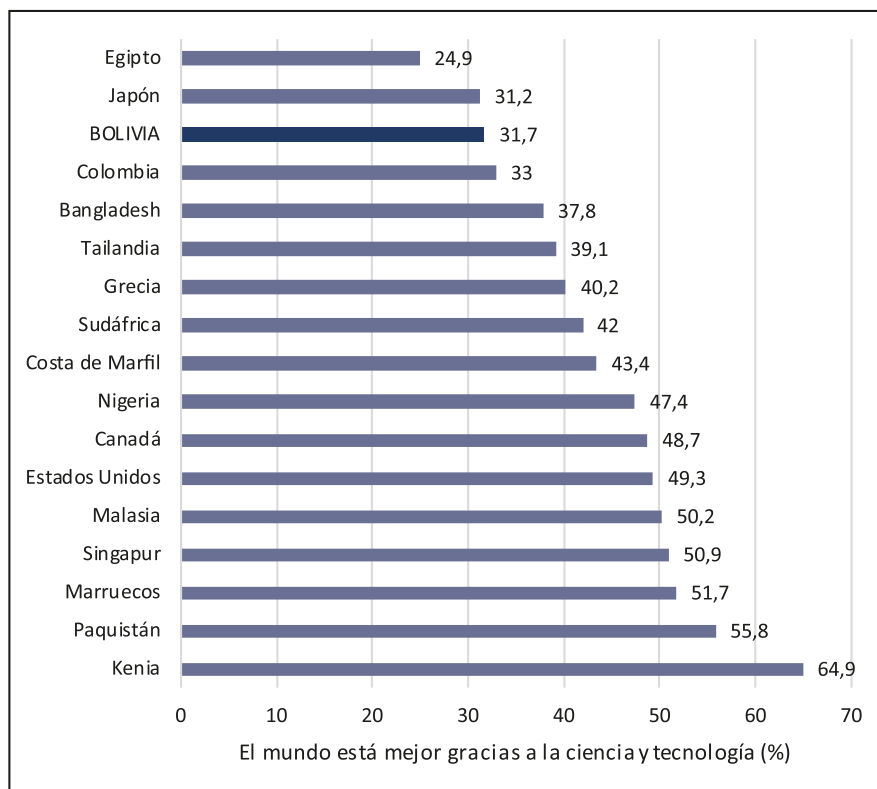
En general, ¿diría Usted que el mundo es peor o mejor gracias a la ciencia y la tecnología?

Entre los países que, a la conclusión de este informe, ya habían ejecutado las encuestas de la octava ronda de la EMV, Bolivia aparece como uno de los menos convencidos de los beneficios de la ciencia, con un porcentaje de 31,6% de opiniones abiertamente favorables (gráfico 1).¹ Este resultado puede estar relacionado con las capacidades limitadas del sistema científico nacional, expresadas en instrumentos de política pública comparativamente deficientes frente a otros países latinoamericanos (UNESCO, 2016) y en una debilidad en la producción científica y escasos vínculos con la industria (Confraria y Vargas 2017).

También influye la difusión de percepciones negativas sobre el valor de la ciencia frente a los saberes tradicionales en Bolivia, junto con la difusión de ideas anticientíficas y antiintelectuales a escala global (Cf. Hotez, 2023). Debe tomarse en cuenta que el confinamiento obligatorio durante las primeras olas de la pandemia de COVID-19 facilitó la propagación de percepciones poco sustentadas relativas a la medicina, sobre todo, y a las posibles causas y curas de la enfermedad (aunque la valoración de las virtudes de la ciencia en Bolivia era baja ya en la EMV de 2017). La similitud en los porcentajes con Japón responde a experiencias históricas y culturales distintas respecto de la ciencia y la tecnología: en Bolivia, desde una sociedad con escaso desarrollo científico y tecnológico; y en Japón, desde una sociedad altamente tecnologizada, pero con otros riesgos percibidos en torno a la vigilancia, la inteligencia artificial o el uso de alimentos genéticamente modificados.

1. La pregunta presentaba opciones de 1 a 10. Para este informe, las respuestas del 8 al 10 se recodificaron como abiertamente favorables.

Gráfico 1. Porcentaje de personas que responde que “el mundo es mejor gracias a la ciencia y la tecnología”, por países. EMV 2024



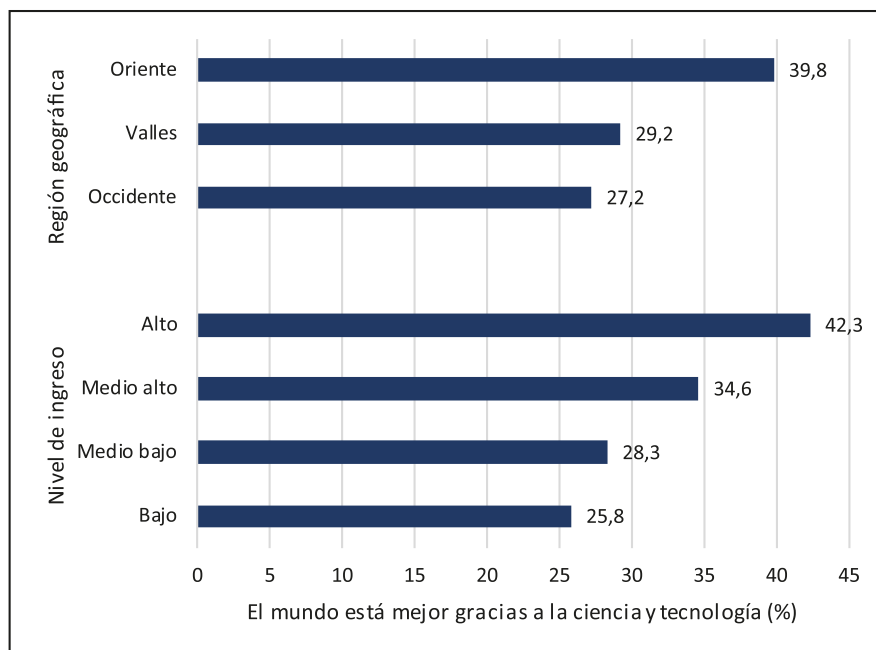
Fuente: Elaboración propia.

A nivel nacional, si se agrupan las respuestas en dos opciones (“el mundo está peor” y “el mundo está mejor”), entre 2017 y 2024 no se observan cambios significativos en la percepción sobre de la influencia de la ciencia y tecnología en la situación del mundo: el 31,4% de 2024 es prácticamente indistinto del 31,1% de 2017.

Bolivia es uno de los países latinoamericanos más fragmentados geográficamente: un índice de fragmentación geográfica –análogo a los índices de fragmentación electoral, pero considerando las ecozonas de cada país– reveló que Bolivia se encuentra entre los países más fragmentados, junto con Ecuador, Colombia, Perú y Honduras (Gallup, Gaviria y Lora 2003). Si se toma en cuenta esta dimensión, distinguiendo las zonas del occidente andino, los valles y las tierras bajas orientales, se observa que los encuestados del oriente son quienes más de acuerdo están con la idea de una influencia positiva de la ciencia en el mundo (lo que resulta de un análisis estadístico multivariado, cuya especificación general se presenta en el capítulo introductorio de este estudio). En el gráfico 2a se presentan los porcentajes de población abiertamente favorable a la ciencia. Se observa una diferencia significativa

entre el 39,8% del oriente respecto de las otras dos regiones. Si se toma en cuenta el nivel de ingreso de los encuestados, la valoración de la ciencia es menor en los grupos de menores ingresos. Las diferencias entre el grupo de ingreso bajo y todos los demás grupos son estadísticamente significativas (gráfico 2b).

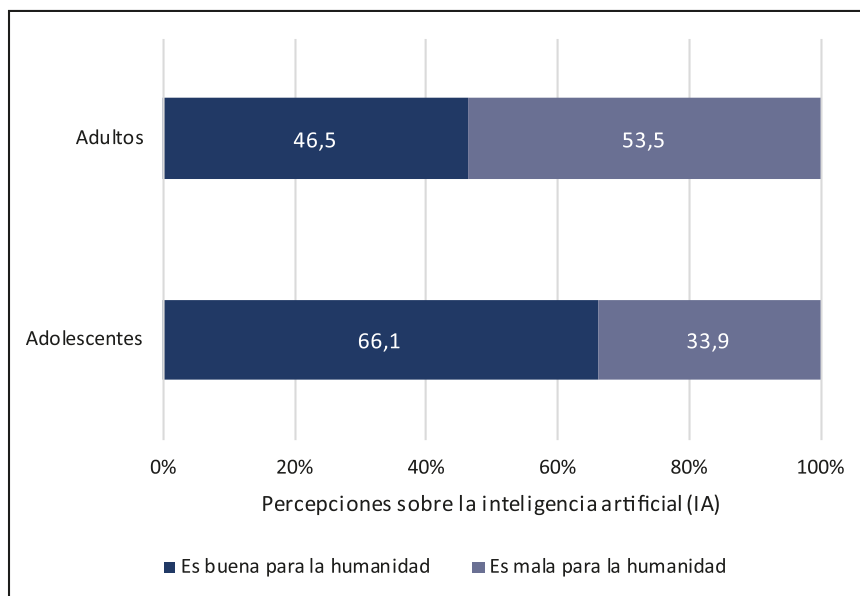
Gráfico 2a y 2b. Porcentaje de personas que responde que “el mundo es mejor gracias a la ciencia y la tecnología”, por región (a) y nivel de ingreso (b). Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Uno de los temas actualmente más relevantes de la influencia de la tecnología en la vida humana tiene que ver con la inteligencia artificial (IA). En la encuesta de 2024 se preguntó: “¿Diría usted que la inteligencia artificial es buena o mala para la humanidad?”. Las respuestas muestran que la mayor parte de la población boliviana considera que esta nueva forma de inteligencia es buena (58,9% frente al 41,1%), con una diferencia generacional clara: los adolescentes son quienes más destacan las bondades de la IA (66,1% de favorabilidad frente a un 46,5% en el caso de los adultos) (gráfico 3).

**Gráfico 3. Percepciones sobre la inteligencia artificial entre adultos y adolescentes.
Bolivia, EMV y EVA 2024**



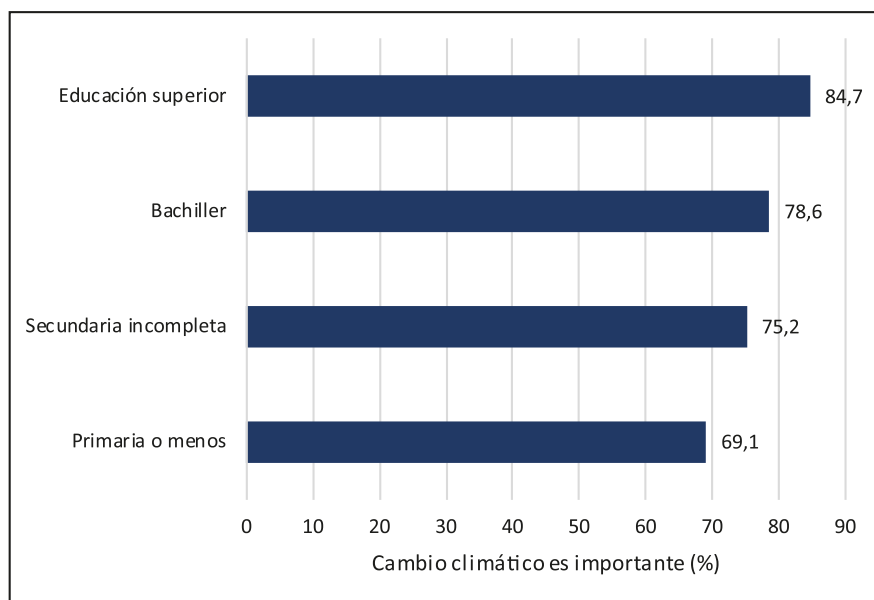
Fuente: Elaboración propia.

También se observan diferencias por sexo: los hombres ven mayores beneficios en la inteligencia artificial que las mujeres (62,5% frente a 55,2%, respectivamente). Lo mismo se observa en relación con la adscripción religiosa: los protestantes perciben que esta tecnología es negativa en mayor medida que los católicos y que quienes no pertenecen a ninguna iglesia ni confesión (54%, frente a 43,2% y 44,6%, respectivamente).

1.2 Medio ambiente y cambio climático

Entre los aspectos relacionados con el conocimiento científico, en la EMV se incluye la mayor o menor importancia atribuida al cambio climático. La pregunta fue formulada de esta manera: “¿Qué tan importante es el tema del cambio climático, para usted personalmente?”. Los resultados muestran que el nivel de educación formal influye positivamente en el reconocimiento de la importancia del cambio climático. El 84,7% de quienes cursaron educación superior considera que el tema es importante, proporción que difiere significativamente de la observada en los demás niveles educativos. Tal como se observa en el gráfico 4, a medida que se asciende en el nivel de educación, mayor es la importancia atribuida al cambio climático.

Gráfico 4. Importancia del cambio climático en función del nivel de educación. Bolivia, EMV 2024



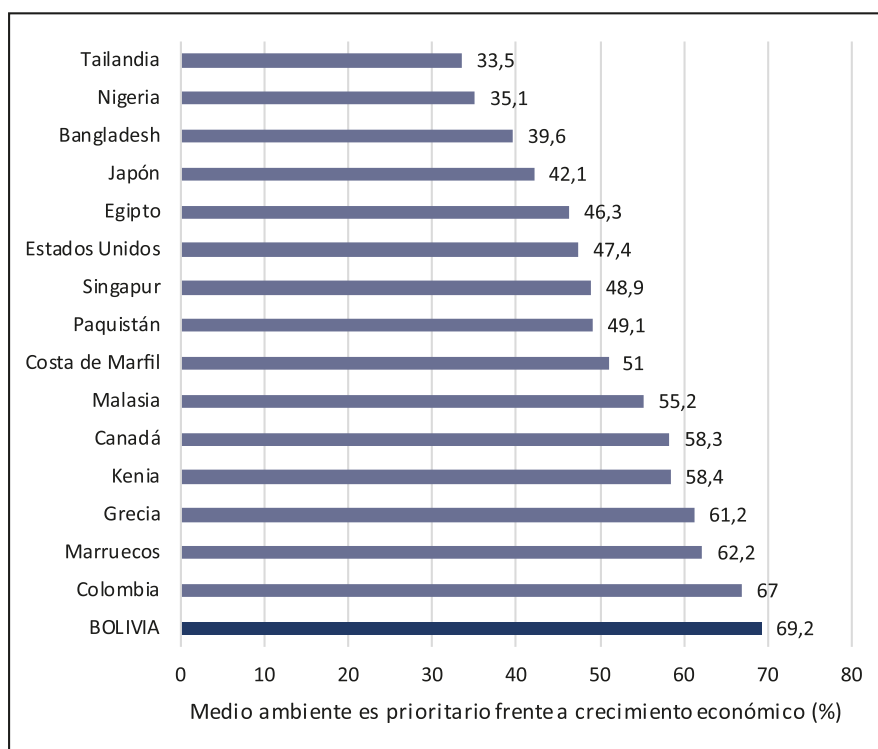
Fuente: Elaboración propia.

Uno de los aspectos en que Bolivia respecto al resto de los países que participaron en la octava ronda de la EMV se refiere a la oposición entre medio ambiente y crecimiento económico. Se pidió a los encuestados manifestar su acuerdo con una de las dos afirmaciones siguientes:

Debería darse prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si provoca un crecimiento económico más lento y pérdida de puestos de trabajo, o: Debería darse prioridad al crecimiento económico y a la creación de empleo, incluso si el medio ambiente se ve afectado.

Del conjunto de países en los que se llevó a cabo la octava ronda de la EMV; Bolivia se sitúa como el país que más preferencia otorga a la protección del medio ambiente, con un 69% de adscripción a esta opción, cifra significativamente superior a los niveles registrados en resto de los países incluidos en esta ronda (gráfico 5).

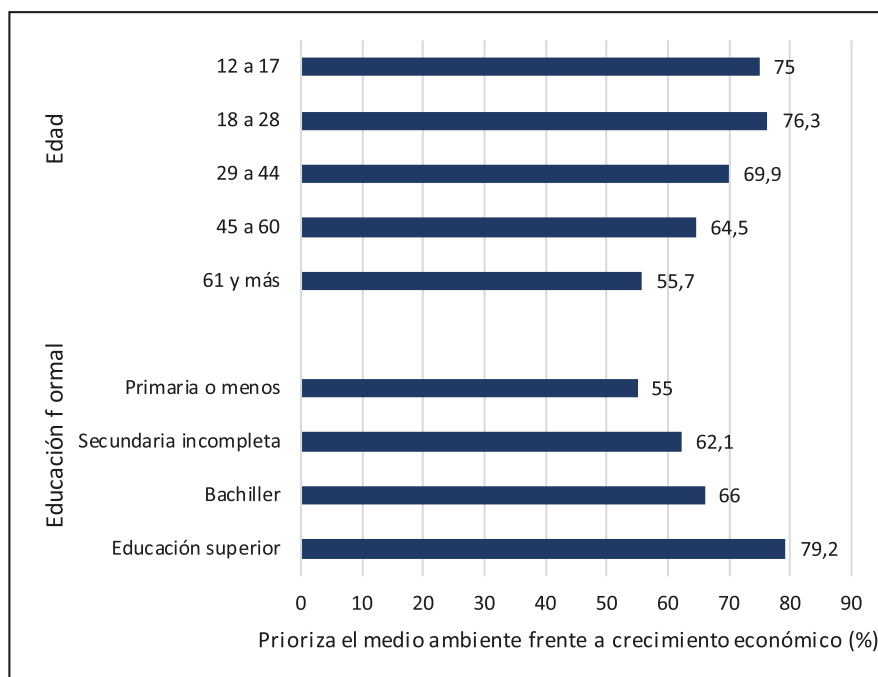
Gráfico 5. Prioridad de la protección del medio ambiente sobre el crecimiento, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Este porcentaje comparativamente elevado es, sin embargo, menor al observado en 2017 a nivel nacional. En esa oportunidad, un 74,6% de los adultos encuestados manifestaban su preferencia por la protección del medio ambiente. Si para 2024 además de los adultos se toma en cuenta también a los adolescentes, se puede observar que los grupos etarios más jóvenes son los que más apuestan por la ecología, mientras que, por el contrario, los encuestados mayores de 60 años son quienes más prefieren el crecimiento económico y el empleo, con diferencias relevantes respecto de los adultos jóvenes y los adolescentes (gráfico 6a). Otro aspecto en el que se registran diferencias significativas es el nivel educativo. El porcentaje de personas que priorizan el medio ambiente entre quienes cursaron educación superior es significativamente más alto que el de los que comparten la misma opinión, pero tienen niveles de educación inferiores. La diferencia con aquellos que, como máximo, concluyeron solamente la educación primaria es de 24 puntos porcentuales (gráfico 6b).

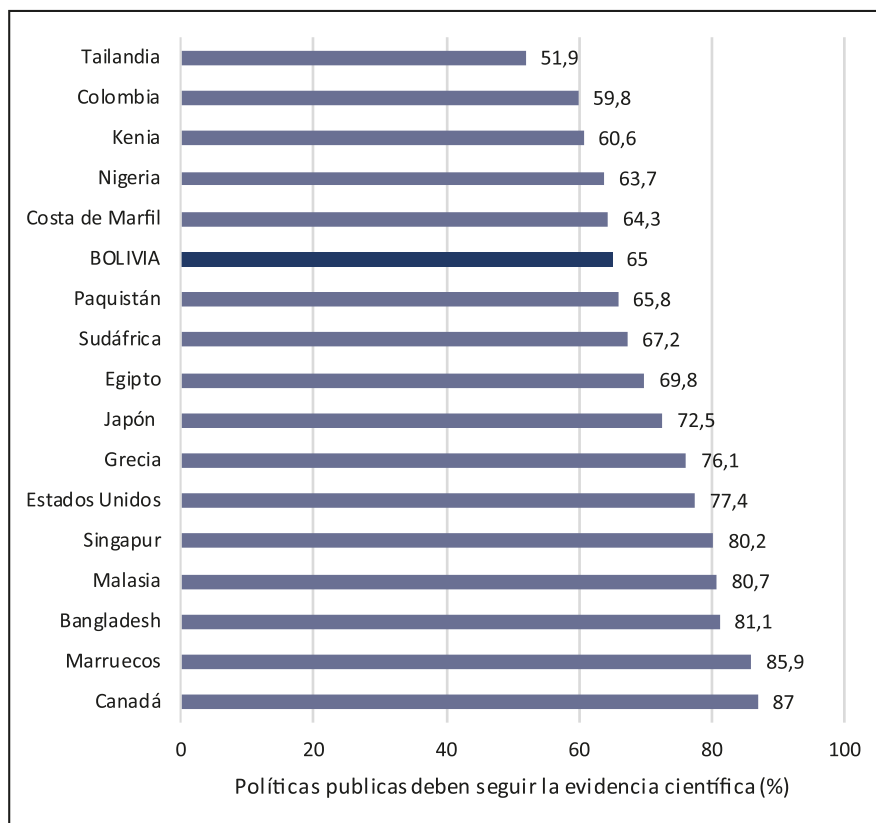
Gráfico 6a y 6b. Porcentaje que prioriza la protección del medio ambiente sobre el crecimiento económico, por grupo de edad (a) y por nivel de educación (b). Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

La prioridad otorgada al medio ambiente o al crecimiento económico está estrechamente vinculada al desarrollo de políticas públicas. En relación con este asunto, en el cuestionario de la octava ronda de la EMV se pidió opinión respecto de la siguiente afirmación: “Las políticas públicas deberían responder a la evidencia científica, no a las preferencias políticas”. Entre los países en los que se llevó a cabo la octava ronda de la EMV, Bolivia ocupa un lugar comparativamente bajo en la proporción de personas que creen que las políticas públicas deberían basarse en datos científicos más que en criterios políticos (gráfico 7, que reúne el porcentaje de las respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo”).

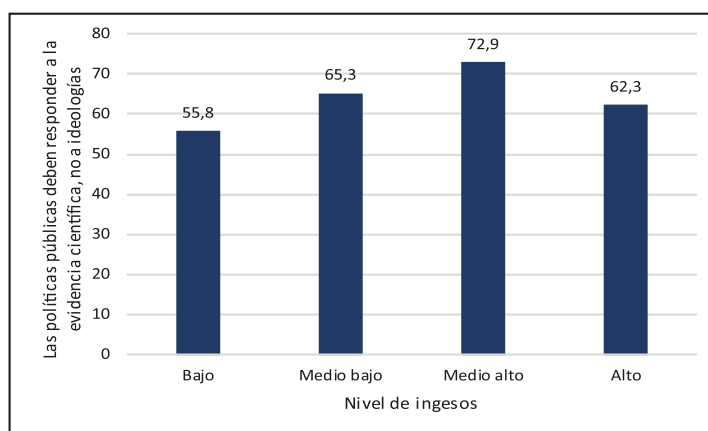
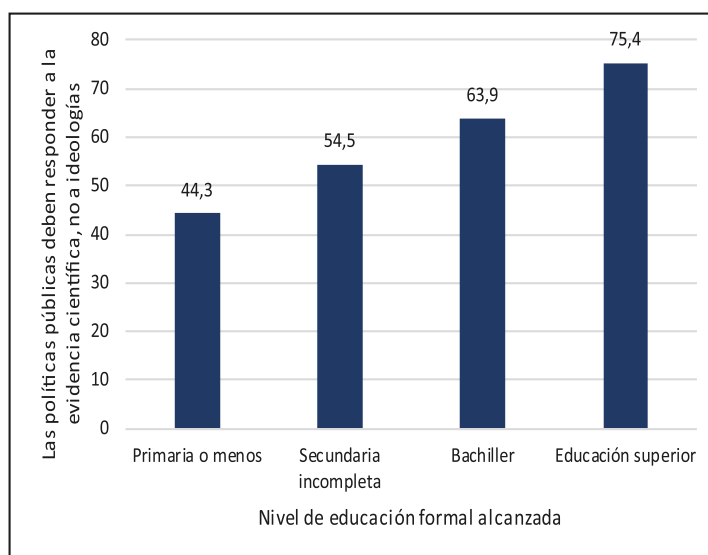
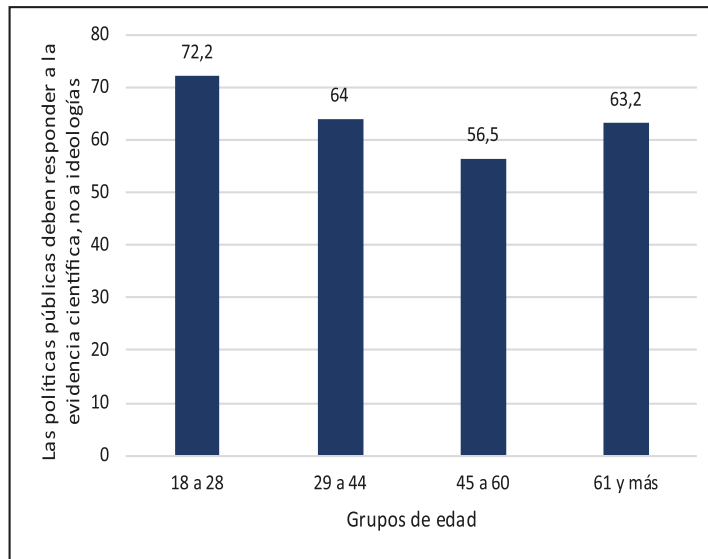
Gráfico 7. Las políticas públicas deberían responder a la evidencia científica, no a las preferencias políticas, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

A nivel nacional, en la población adulta se observan diferencias significativas por edad. Los más jóvenes están de acuerdo con la afirmación anterior en mayor proporción que otros grupos etarios: 72,2%, frente a 56,5% registrado entre quienes tienen entre 45 y 60 años. Las diferencias son más claras si se considera el nivel educativo: quienes cursaron educación superior muestran un acuerdo significativamente mayor (75,4%) en comparación con quienes tienen educación primaria o menos (44,8%), como se puede observar en el gráfico 8b. También se presentan diferencias en función de los ingresos. Los que se ubican en el grupo de ingreso medio alto manifiestan en mayor medida su acuerdo con que las políticas públicas se sustenten en información científica, con diferencias significativas respecto del grupo de menores ingresos (gráfico 8c).

Gráfico 8a, 8b, 8c. Las políticas públicas deberían responder a la evidencia científica, no a las preferencias políticas, por edad (a), nivel de educación (b) y nivel de ingreso (c). Bolivia, EMV 2024



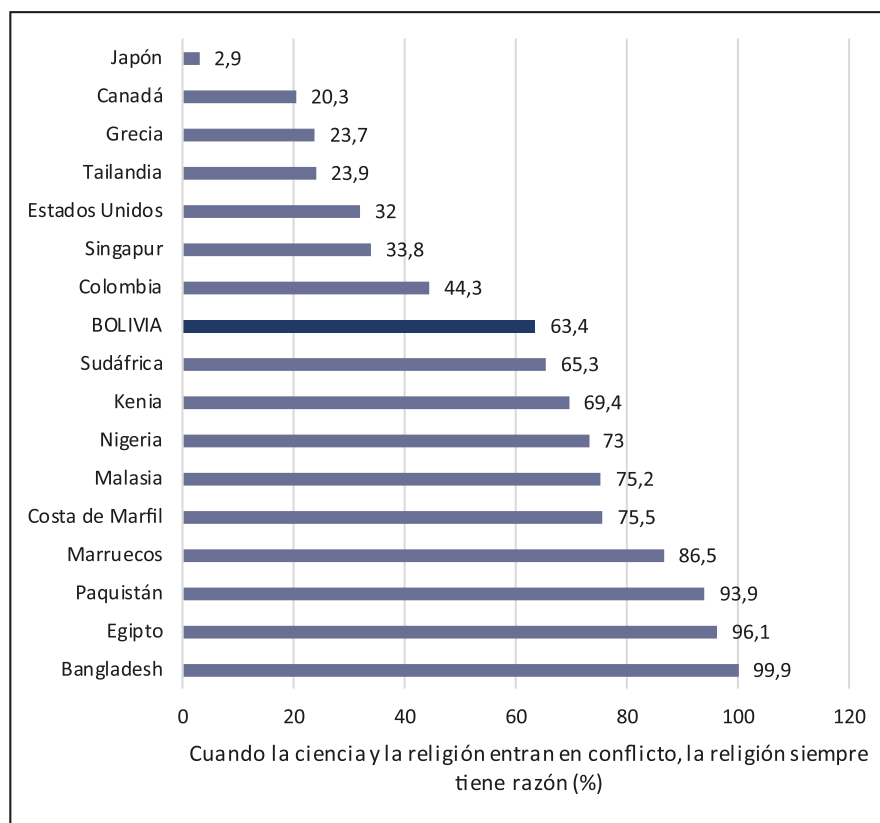
Fuente: Elaboración propia.

2. Conflictos entre la ciencia y la religión

Tal como se indicó, la relación entre religiosidad y ciencia no es mecánica: la racionalidad científica no es el opuesto de la razón religiosa. Entre los estudios recientes realizados con datos de la EMV sobre la ciencia y la religión, destaca uno dedicado a la religiosidad y la confianza en cinco orientaciones respecto de la ciencia: credibilidad en la capacidad de la ciencia (*confidence*), confianza (*trust*) en la autoridad científica en condiciones de conflicto con la religión, fe en la ciencia, percepciones sobre los efectos morales de la ciencia e interés en el conocimiento científico. Este estudio usó información de 52 países y concluyó que la religiosidad está asociada negativamente con la confianza en la autoridad de la ciencia en todos los países, y también con las otras cuatro orientaciones en las sociedades occidentales; además, identificó variaciones en función del contexto religioso de cada país (Chan, 2018).

La EMV presenta algunas preguntas sobre los posibles conflictos entre ciencia y religión. Se pidió a los entrevistados manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “Cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene razón”. Al adoptar una perspectiva comparada con los demás países en que se realizaron las encuestas de esta ronda, Bolivia se ubica entre aquellos países en que la mayoría de la población da mayor validez a la religión: un 63,4% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que la religión tiene siempre la razón (gráfico 9).

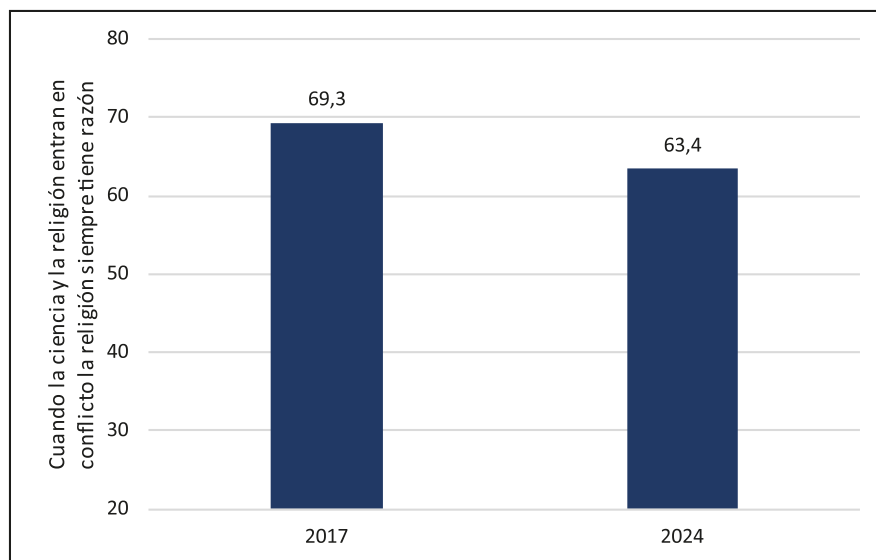
Gráfico 9. Cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene razón, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Si se comparan los resultados de 2017 con los de 2024, se observan diferencias estadísticamente significativas. En 2017, un 69,3% de los encuestados adultos estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación referida anteriormente; para 2024 ese porcentaje se redujo al 63,4% (gráfico 10).

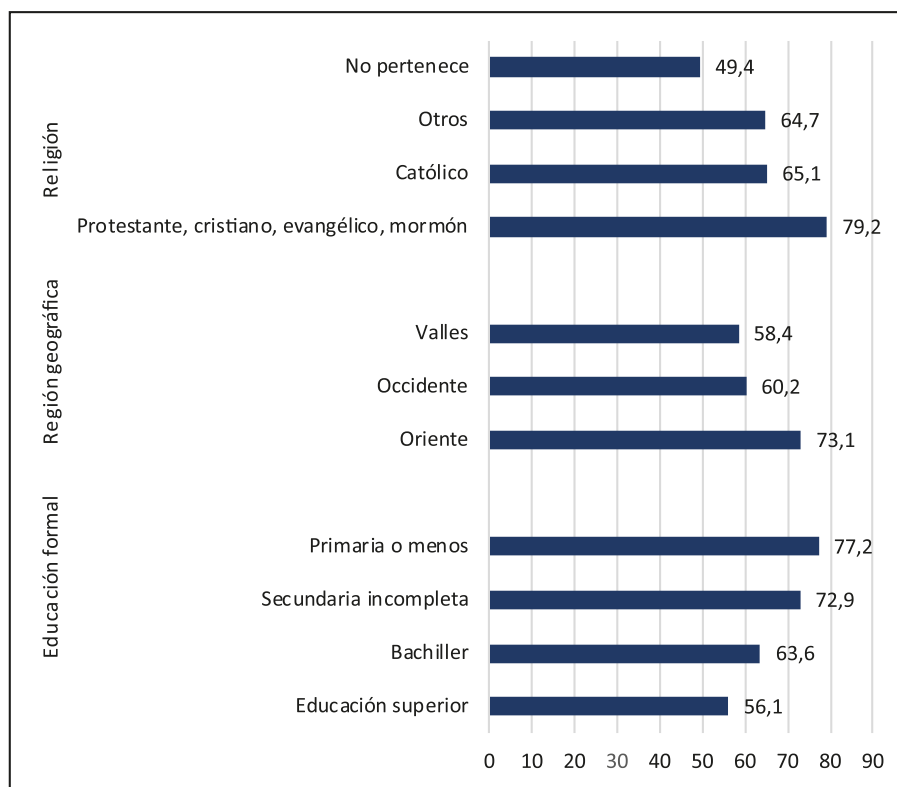
**Gráfico 10. Cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene razón.
Bolivia, EMV 2017-2024**



Fuente: Elaboración propia.

En 2024, los cristianos no católicos (protestantes, evangélicos, mormones) sobresalen por el peso que confieren a la religión frente a la ciencia. Tal como se observa en el gráfico 11a, las diferencias respecto de los católicos y de los que no pertenecen a ninguna religión son sustanciales, además de ser estadísticamente significativas. Si se considera el nivel de educación formal, quienes cursaron educación superior dan menos importancia a la religión, con diferencias relevantes frente a los de secundaria incompleta y de primaria o menos (gráfico 11b). En una perspectiva geográfica, los encuestados del oriente son quienes más se inclinan por dar la razón a la religión, en caso de conflicto con la ciencia (gráfico 11c).

Gráfico 11. Porcentaje de personas que cree que cuando la ciencia y la religión entran en conflicto, la religión siempre tiene razón. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

En 2024 no se observan diferencias relevantes cuando se examinan las respuestas en función de la percepción de que la ciencia y la tecnología hacen mejor al mundo. La alta proporción de no respuestas, tanto en relación con el carácter positivo de la ciencia como en relación con la primacía de la religión hace que los márgenes de error sean mayores. Tampoco se encuentran diferencias significativas a partir de la autoidentificación con algún pueblo indígena u originario.

Cabe señalar que en 2024 no se formuló esta pregunta en la EVA, por lo que no se puede comparar a los adolescentes con los adultos.

3. La sociedad boliviana, la religión y la religiosidad

La religiosidad es reconocida como uno de los elementos más importantes para entender y distinguir las sociedades a escala global. Varios estudios basados en datos de la EMV la incluyen como dimensión determinante. Por ejemplo, una propuesta de tipología para caracterizar a los diferentes países –basada en la ciencia de datos a partir de información de la EMV y del uso de modelos multidimensionales de teoría

de respuesta a los ítems (MIRT)– define las siguientes dimensiones: religiosidad, neutralidad, imparcialidad, escepticismo y tranquilidad social (Allison, Wang y Kaminsky 2021). A continuación se examinan las respuestas de los bolivianos sobre la importancia atribuida a la religión, así como sobre sus prácticas y creencias religiosas.

En Bolivia, la religiosidad forma parte de la diversidad cultural. El sincretismo de las religiosidades populares con las iglesias y denominaciones occidentales es un fenómeno de larga data que está afirmado en la sociedad. Así, la idea de que la religión es algo inherentemente tradicional se complejiza por la existencia y mixtura de una amplia variedad de creencias y prácticas en todo el país.

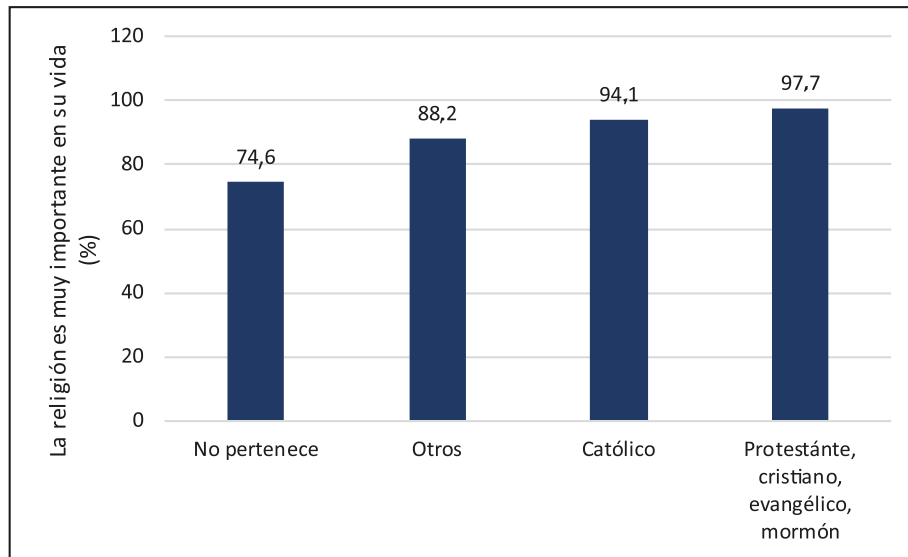
Algunas encuestas realizadas anteriormente revelan una declinación del catolicismo, un incremento del protestantismo y, sobre todo, un crecimiento del número de personas no afiliadas a ninguna religión. También se observa la adopción de posturas críticas frente a las políticas del gobierno entre los sectores más religiosos (Diagnosis, 2023).

3.1 Importancia de la religión

El cuestionario de la EMV incluye preguntas sobre la importancia de diversos aspectos de la vida, incluida la religión, con la siguiente formulación: “Dígame qué importancia tiene en su vida la familia, los amigos, el tiempo libre, la política, el trabajo, la religión, la comunidad”. Los entrevistados de 2024 en Bolivia declararon, en mayor proporción que los de 2017, que la religión es importante o muy importante en su vida. Para los adultos, el porcentaje subió de 84,5% a 89,3%; para los adolescentes, de 84,5% a 92%. No es posible señalar una tendencia, pero acontecimientos tales como las crisis política y económica, así como el curso de la pandemia de COVID-19, podrían haber incidido en un reconocimiento mayor de estos aspectos de la vida personal.

En 2024, las mujeres adultas afirman en mayor proporción que los hombres –y con diferencias estadísticamente significativas– que la religión es importante o muy importante en su vida (92,6% frente a 85,2%). Esta diferencia es menor que la registrada en la encuesta de 2017: 88,7% frente a 79,5%. Los católicos y cristianos no católicos (protestantes, evangélicos, mormones) dan mayor importancia a la religión que los que no pertenecen a ninguna iglesia o confesión (gráfico 12).

Gráfico 12. Porcentaje de personas que dice que la religión es “muy importante” en su vida, por pertenencia religiosa. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

La EMV incluye un grupo de preguntas relacionadas con los valores que deberían inculcarse a los niños: “Aquí hay una lista de cualidades que pueden fomentarse en el hogar para que los niños y las niñas las aprendan. ¿Cuál considera usted que es especialmente importante para enseñar a los niños y a las niñas?”. En 2024 no se registra diferencia estadística entre la proporción de adolescentes y adultos que mencionaron que se debe enseñar a los niños la fe religiosa (41,3% frente a 39,9%), a diferencia de lo que sucede con otros valores como la responsabilidad (69,7% vs. 57%), la imaginación (11,6% vs. 22,2%), el altruismo (44,1% vs. 55,4%) y la perseverancia (21,3% vs. 13,3%).

3.2 Pertenencia religiosa y religiosidad

En relación con las iglesias o confesiones religiosas a las que la gente pertenece –algo que, como se ha visto más arriba, influye en las actitudes–, se formuló la siguiente pregunta:

¿Pertenece usted a alguna religión o denominación religiosa?

En el cuestionario se distinguen las siguientes opciones: no pertenece; católico; protestante; cristiano, evangélico o adventista; ortodoxo; judío; musulmán; hinduista; budista; y otra religión. Esta pregunta reviste importancia particular en América Latina porque esta región alberga el 40% de los católicos del mundo. Por otra parte, las investigaciones realizadas sobre la religiosidad en los países

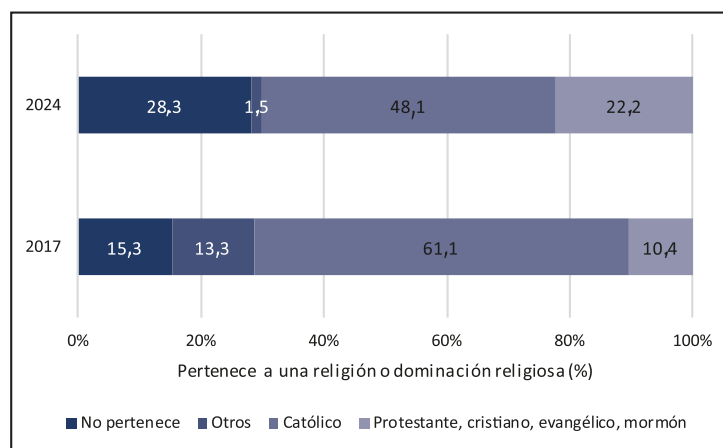
latinoamericanos muestran un descenso en la autoidentificación con el catolicismo y un incremento de las religiones y denominaciones protestantes (Pew Research Center, 2014; Morello, 2021).

Aunque en este estudio no es posible establecer esa tendencia con precisión –debido a la falta de mediciones comparables–, se observa que, entre los entrevistados adultos, el 61,1% declaraba pertenecer a la religión católica en 2017, frente al 48,1% en 2024. Se observa también un crecimiento entre los que afirman que no pertenecen a ninguna religión (de 15,3% a 28,3%). No es posible medir el incremento de quienes se declaran miembros de alguna religión o confesión protestante, ya que la codificación de la variable fue distinta en 2017.²

Por la importancia histórica del catolicismo en Bolivia y por el escaso número de practicantes de otras religiones, en este informe se usan cuatro categorías de pertenencia religiosa: no perteneciente; católico; cristiano no católico (protestante, evangélico, adventista, mormón); y otros.

En términos de pertenencia religiosa, se observan algunos cambios entre 2017 y 2024. Hay una disminución de 13 puntos porcentuales en la proporción de católicos y casi una duplicación de la proporción de quienes declaran que no pertenecen a ninguna religión (gráfico 13). Si bien en esta ronda de la encuesta no se hizo esta consulta a los adolescentes, es posible conjeturar un cambio generacional en la religiosidad, como se verá más adelante.

Gráfico 13. Pertenencia a una religión o denominación religiosa. Bolivia, EMV 2017-2024



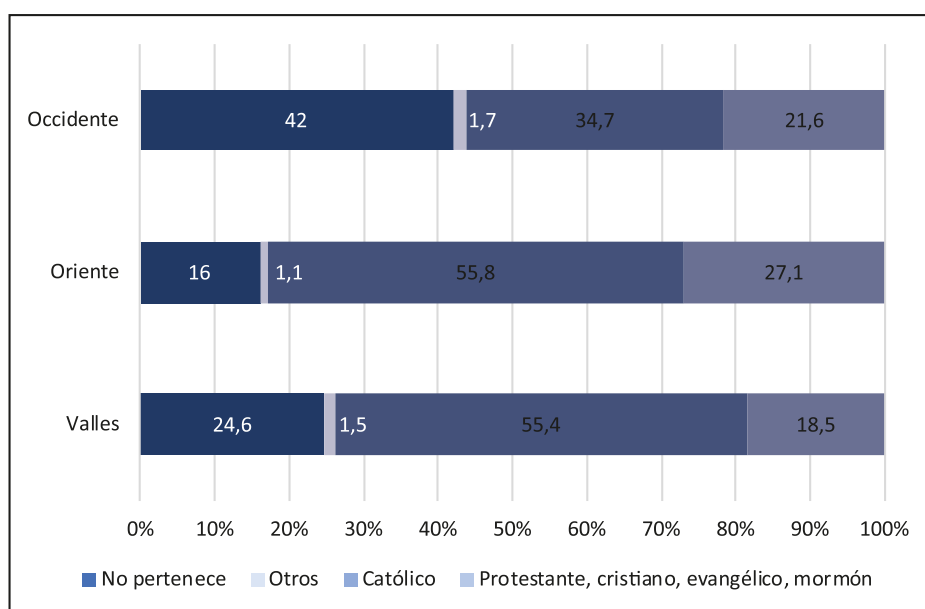
Fuente: Elaboración propia.

2. Las categorías de respuesta disponibles en las encuestas de 2017 y 2024 son distintas respecto a “protestantes, cristianos, evangélicos, ...” y “otros”. La mayor parte de los que se adscriben a “otros” en 2017, en realidad son cristianos de alguna denominación (lo que resulta del análisis de la pregunta abierta sobre cuál es la denominación a la que pertenece).

En 2024, la distribución de la pertenencia religiosa por región geográfica muestra que en el occidente la proporción de personas que declararon no estar afiliadas a ninguna iglesia o confesión es mayor que la de católicos. En contraste, el porcentaje de no afiliados es significativamente menor en el oriente (gráfico 14). Si se considera la autoidentificación étnica, entre quienes se reconocen como parte de un pueblo indígena u originario, el porcentaje de católicos se reduce y el de protestantes se incrementa (43,2% de católicos y 24,4% de protestantes entre los que sí se identifican, frente a 51,4% y 20,7% de los que no lo hacen).

Asimismo, entre los autoidentificados como indígenas u originarios es más elevada la proporción de personas no afiliadas a ninguna iglesia o confesión (31,4%, frente a un 26,1% para el resto de los encuestados).

Gráfico 14. ¿Pertenece usted a alguna religión o denominación religiosa? Por región geográfica. Bolivia, EMV 2024

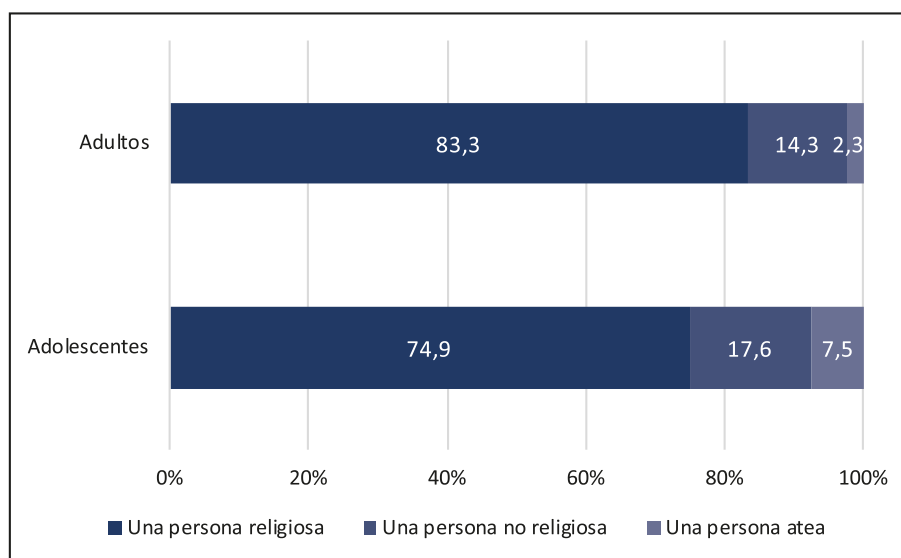


Fuente: Elaboración propia.

El aumento del porcentaje de personas que declaran no pertenecer a ninguna religión o confesión se refiere exclusivamente a la afiliación institucional, y no implica necesariamente un abandono de la religiosidad. También se incluyó en el cuestionario la siguiente pregunta: “Aunque Usted asista o no a la iglesia, ¿diría Usted que es una persona religiosa?”. En las respuestas de la ronda de 2024 se observa que la mayor parte de los que no pertenecen a ninguna religión o confesión se autodefinen como personas religiosas (64,2%). En la misma ronda de 2024,

los adolescentes (entre 12 y 17 años) se autodefinen menos como religiosos que los adultos (17,6% no religiosos y 7,5% ateos, frente a 14,3% y 3,3% de todos los adultos, respectivamente, y especialmente frente a 9,2% y 1,5% de los mayores de 60 años). Esto podría deberse a un cambio generacional a escala nacional, a los acontecimientos que sucedieron entre 2017 y 2024, y también a la conexión de las generaciones más jóvenes y a las formas de compartir y difundir ideas a través de la tecnología (gráfico 15).

Gráfico 15. ¿Diría usted que es una persona religiosa? (en función de la edad). Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

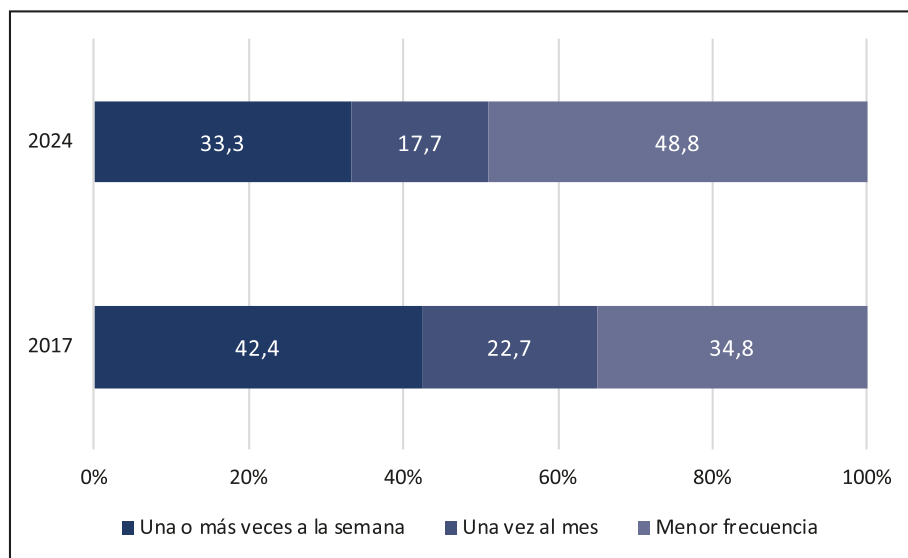
Cuando se pregunta a los encuestados sobre la frecuencia con que realizan oraciones (“¿Con qué frecuencia ora o reza Usted a Dios?”), se observan pocos cambios, entre 2017 y 2024, en el porcentaje de los creyentes que oran una o varias veces al día (con una leve disminución del 60,6% a 58%). Los cambios relativos se registran, sin embargo, entre quienes oran varias veces a la semana –que pasaron del 22,3% a 17,5%–, y entre quienes oran menos de una vez al año (con un aumento del 10% a 14,3%).

En relación con la pregunta: “¿Con qué frecuencia va usted a la iglesia?”, se observa también una disminución general. El cambio más marcado se da entre los más asiduos –quienes asisten una o más veces a la semana–, cuya proporción bajó de 42,4% a 33,3% y entre los que asisten una vez al mes.

En conjunto, entre quienes asistían a la iglesia una vez a la semana o al menos una vez al mes, en 2017 sumaban dos tercios de la población (67,1%), porcentaje que se

redujo a poco más de la mitad del total (51,1%) en el año 2024. Esta disminución se corresponde con el aumento de aquellos que nunca asisten a la iglesia o lo hacen con menos frecuencia que la vinculada a festividades especiales, quienes pasaron del 34,8% a 48,8% de los entrevistados (gráfico 16).

Gráfico 16. Frecuencia con la que asiste a la iglesia. Bolivia, EMV 2017-2024

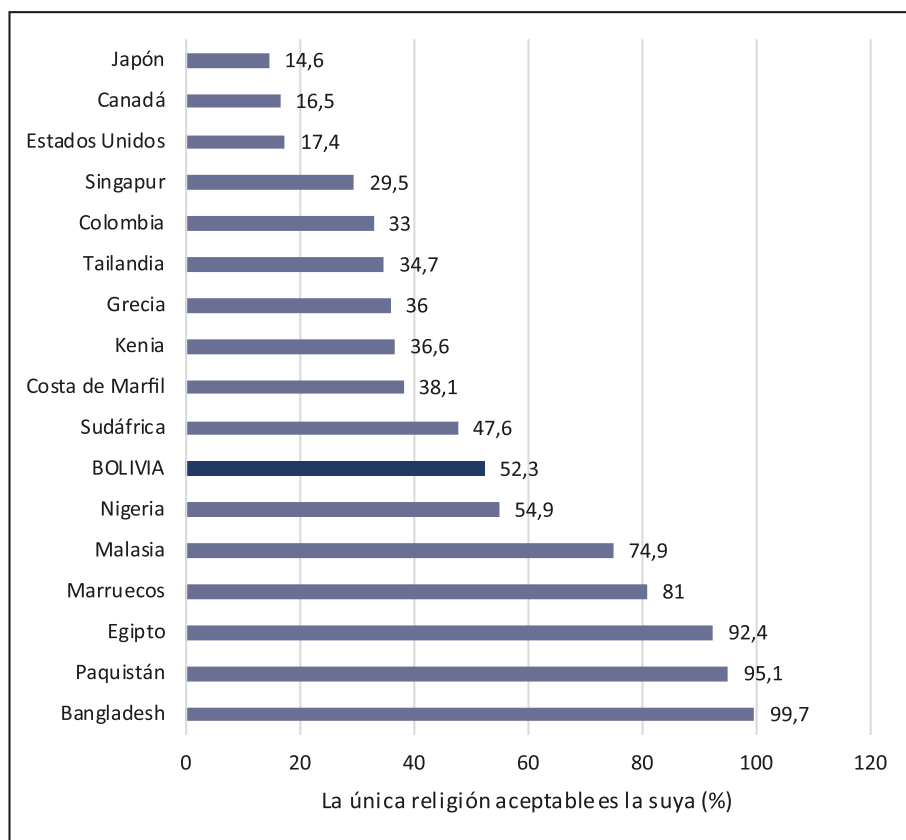


Fuente: Elaboración propia.

4. Tolerancia hacia otras religiones

Se consultó a la población cuán de acuerdo está con la afirmación de que la única religión aceptable es la suya propia. Las opciones iban de “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. En el gráfico 17 se comparan los porcentajes de encuestados que manifestaron “estar de acuerdo” o “muy de acuerdo” en los países en que se realizaron las encuestas de la octava ronda de la EMV. Destaca que las respuestas de cerca de la mitad de los encuestados en Bolivia expresan intolerancia religiosa.

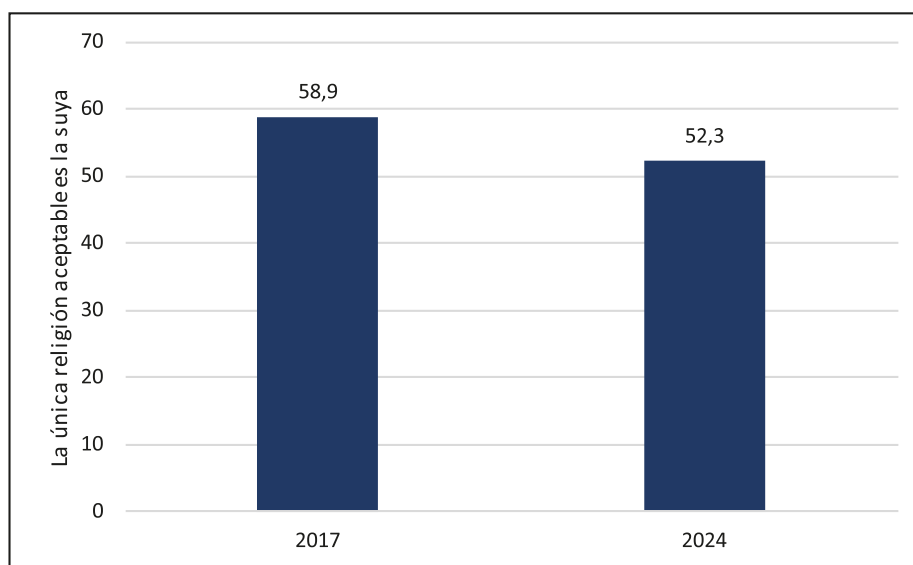
Gráfico 17. Porcentaje de personas que están muy de acuerdo con la afirmación de que la única religión aceptable es la suya propia, por país. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

A nivel nacional, entre 2017 y 2024 se aprecian diferencias en relación con la apertura a la pluralidad religiosa. Las respuestas de los adultos encuestados en 2024 se dividen casi en partes iguales entre quienes están a favor y quienes están en contra de la afirmación de que la única religión aceptable es la suya propia. Por otra parte, disminuyó el porcentaje de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con ese enunciado (de 58,9% a 52,3%) (gráfico 18).

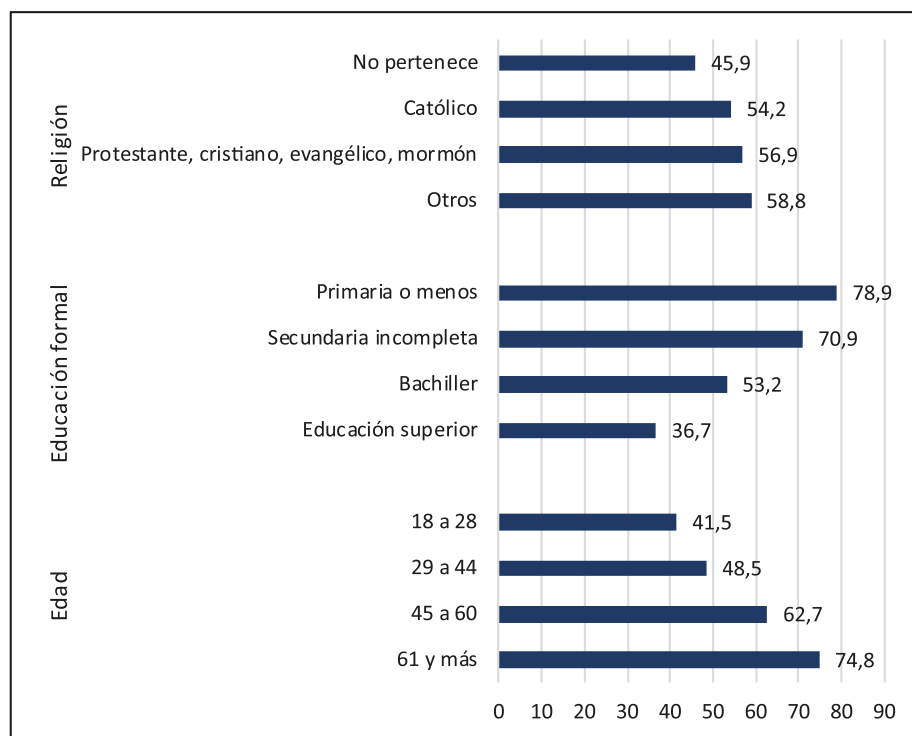
Gráfico 18. La única religión aceptable es su religión. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de 2024 no muestran variaciones significativas en relación con el enunciado referido entre los practicantes de alguna religión (gráfico 18a). Los porcentajes de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo en cada grupo son muy similares (54,2% para los católicos, 56,9% para los protestantes y 58,8% para los de otras religiones). Las únicas diferencias estadísticamente significativas que se observan son entre protestantes (56,9%) y quienes no pertenecen a ninguna religión (45,9%). El nivel de educación formal y la edad influyen en la aceptación de otras religiones. Por otra parte, a medida que se incrementa el nivel educativo, disminuye el grado de acuerdo con la afirmación de que la única religión válida es la propia. Las diferencias son significativas entre todos los otros grupos (gráfico 19b). Respecto a los rangos etarios, a mayor edad de los encuestados, mayor es también el grado de intolerancia con respecto al enunciado planteado (gráfico 19c).

Gráfico 19a, 19b y 19c. La única religión aceptable es su religión, por religión profesada (a), nivel de educación formal (b) y edad (c). Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Una de las posibles relaciones entre la ciencia, la tecnología y la religión asocia la modernización con una mayor confianza en la ciencia y en el uso de los avances científicos en la tecnología, así como con una menor importancia de las creencias y prácticas religiosas. Desde ese punto de vista, la científicidad se opondría a la religiosidad. En Bolivia, se observan valoraciones bajas de la ciencia y la tecnología en comparación con otros países, así como también una disminución de la religiosidad entre 2017 y 2024.

A partir de la constatación de esta constatación, puede afirmarse que la científicidad no es un valor compartido por la mayor parte de los encuestados en Bolivia. Las personas con ingresos más altos reconocen en mayor proporción un carácter positivo en la ciencia y la tecnología. Sucede lo propio con los habitantes de la región oriental y con las personas que alcanzaron mayores niveles de educación. La edad también es relevante en las actitudes hacia el medio ambiente y en relación al sustento científico de las políticas públicas: los más jóvenes expresan una mayor preocupación por la protección ambiental y por la formulación de las políticas públicas.

Es necesario explorar en qué medida la valoración de la científicidad –expresada en

una mayor o menor percepción de los beneficios de la ciencia y la tecnología para el mundo– se relaciona con la creencia en la primacía de la religión cuando entra en conflicto con la ciencia. De acuerdo con los resultados de la encuesta para 2024, los que más beneficios ven en la ciencia y la tecnología creen menos en la primacía de la religión, pero no es posible señalar una diferencia estadísticamente relevante al respecto.

En estos conflictos entre ciencia y religión, los encuestados de 2024 en Bolivia optan mayoritariamente por dar la razón a la religión, aunque en menor proporción que los de 2017. Esto podría indicar una tendencia a la secularización.

En cuanto a la religiosidad, la religión es más importante para la población adulta que para los más jóvenes –lo cual podría expresar un cambio generacional que debería investigarse en futuras mediciones– y también es más relevante para las mujeres que para los varones. En este aspecto no existen diferencias sustanciales entre quienes pertenecen a alguna iglesia o confesión, pero sí entre quienes no pertenecen y el resto de los encuestados.

La religión católica sigue siendo la más importante, aunque se puede advertir una declinación de su proporción entre 2017 y 2024 respecto de la población total. Aunque el porcentaje de personas no afiliadas a ninguna religión o confesión casi se duplicó en el período –y también se redujeron algunas prácticas religiosas–, la mayor parte de este segmento se reconoce como personas religiosas. Los jóvenes marcan la disminución de la religiosidad en general; constituyen el grupo con menor adscripción religiosa y en el que menos personas se reconocen como religiosas. La tolerancia religiosa en el país sigue siendo comparativamente baja, aunque disminuyó respecto de 2017. Nuevamente, la edad más joven y el nivel más alto de educación influyen favorablemente en la aceptación de otras religiones.

Entre los factores que intervienen tanto en la valoración de la ciencia como en la religiosidad sobresale la región a la que se pertenece. La población de la región oriental es comparativamente más proclive a ver beneficios en la ciencia; también se autodefine como más religiosa y en general asume más valores modernos. Esto expresa que la modernización en Bolivia no tiene que ver con el abandono de los valores religiosos. En el país, también la religión es un elemento en el proceso de modernización, ya que interactúa no sólo con la científicidad, sino también con los saberes tradicionales de los pueblos indígenas y su transformación colonial.

No se observa una variación general notable entre 2017 y 2024 respecto de la valoración de la ciencia y la tecnología, aunque los más jóvenes son más proclives a las propuestas sustentadas en la ciencia. En el caso de la religión, sí se advierte

una disminución en la pertenencia a iglesias y confesiones, pero estos cambios no afectan la valoración general de la ciencia y la tecnología. En Bolivia, la existencia y vigencia de otras formas de conocimiento y también de otras expresiones de religiosidad complejizan esta relación. No es posible oponer la religiosidad –como elemento tradicional– frente a la racionalidad científica, cuya difusión expresaría la modernización. Tal como se indicó, la religión también ha sido una forma de modernización desde la Colonia. En la actualidad, los discursos anticientíficos difundidos gracias a tecnologías de comunicación coinciden con creencias religiosas y políticas que no son exclusivas de Bolivia.

Referencias

Allison, Leigh; Chun Wang; Jessica Kaminsky (2021). “Religiosity, neutrality, fairness, skepticism, and social tranquility: A data science analysis of the World Values Survey”. *PLoS ONE*, 16 (1), e0245231.

Bauer, Martin; Petra Pansegrau; Rajesh Shukla (2019). *The cultural authority of science. Comparing across Europe, Asia, Africa and the Americas*. Abingdon y Nueva York: Routledge.

Chan, Esther (2018). “Are the religious suspicious of science? Investigating religiosity, religious context, and orientations towards science”. *Public Understanding of Science*, 27(8), 967-984.

Cologna, Viktoria, Niels G. Mede, Sebastian Berger, John C. Besley, Cameron Brick, Marina Joubert, Edward Maibach, *et al.* (2024). “Trust in Scientists and Their Role in Society Across 68 Countries”. OSF Preprints. January 25. doi:10.31219/osf.io/6ay7s.

Confraria, Hugo; Fernando Vargas (2017). “Scientific systems in Latin America: performance, networks, and collaborations with industry”. *Journal of Technology Transfer*, 44, 874-915.

Diagnosis (2023). “Identidades y prácticas religiosas en Bolivia”. <https://informes.diagnosisestudios.com/43-23-identidades-y-practicas-religiosas-en-bolivia#slide-2142>

Gallup, John Luke; Alejandro Gaviria; Eduardo Lora (2003). *Is geography destiny? Lessons from Latin America*. Washington: IADB y Stanford Social Sciences.

Gorski, Philip; Ateş Altinordu (2008). “After secularization?” *Annual Review of Sociology*, 34, 55-85.

Hotez, Peter (2023). *The deadly rise of anti-science*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Inglehart, Ronald (2020). “Giving up on God. The global decline of religion”. *Foreign Affairs*, 99(5), 110-118.

Inglehart, Ronald (2021a). *Religion’s sudden decline. What’s causing it, and what comes next?* Nueva York: Oxford University Press.

Inglehart, Ronald (2021b). “‘Giving up on God’, revisited”. <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.jsp?ID=421>

Inglehart, Ronald; Jon Miller; Michael Dennis; Stephanie Jwo; Gergely Rosta (2021). “*Religion’s sudden decline, revisited*”. World Values Survey.

Lee, John (2023). “Measuring cross-national variations in religiosity and attitudes toward science and technology using machine learning”. *The Sociological Quarterly*, 64(3), 423-444.

Morello, Gustavo (2021). *Lived religion in Latin America. An enchanted modernity*. Nueva York: Oxford University Press.

Moreno, Daniel (coord.) (2019). *Informe de la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia*. La Paz: WVS; UNFPA; Ciudadanía; CIS; UNICEF, OXFAM.

Norris, Pippa; Ronald Inglehart (2011). *Sacred and secular. Religion and politics worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press (2ª edición).

Norris, Pippa; Ronald Inglehart (2015). “Are high levels of existential security conducive to secularization? A response to our critics”, en S. Brunn (ed.), *The Changing World Religion Map* (3389-3408). Heidelberg y Nueva York: Springer.

Pew Research Center (2014). *Religion in Latin America: widespread change in a historically catholic region*. Washington, DC: Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2014/11/Religion-in-Latin-America-11-12-PM-full-PDF.pdf>.

Radetich, Natalia (2022). “La *smartphonización* de la vida social”. *Cuestiones de Sociología*, 27, e148, Universidad de La Plata.

Sherkat, Darren (2015). “Religiosity”, en J. D. Wright, *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (377-380). Ámsterdam: Elsevier.

Tschannen, Olivier (1991). “The Secularization Paradigm: A Systematization”. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 30(4), 395-415.

UNESCO, 2016. *UNESCO Science Report. Towards 2030*. Luxemburgo: UNESCO.

CAPÍTULO 7:

Valores para la igualdad de género.

El papel de las ideas y actitudes sobre roles de género

Vivian Schwarz Blum

Una mujer superior
en elecciones no vota,
Y vota el pillo peor (...)
con solo saber firmar
puede votar un idiota,
porque es hombre.

Adela Zamudio (1913)

Introducción

Este capítulo explora los valores y las actitudes de las y los bolivianos hacia prácticas, acciones y estereotipos que contribuyen o facilitan el avance hacia la igualdad de género o que, por el contrario, representan obstáculos para alcanzarla.

Así, se analizan valores que entran en juego en el espacio íntimo, en el privado y en el público, así como sus esferas de acción, incluyendo el efecto de la violencia como limitante del ejercicio de sus derechos y libertades individuales. También se examinan valores y actitudes que orientan comportamientos relacionados con la reproducción, la autonomía personal y el rol de las mujeres en la familia, así como los que expresan igualdad de género en emprendimientos económicos, en política o en educación. También aquellos que fijan a las mujeres en su rol familiar y les obstaculizan o penalizan por ocupar otros roles.

El capítulo está organizado en cuatro secciones: A. Valores para la igualdad de roles y jerarquías entre mujeres y hombres, y de género; B. Valores para la igualdad de género en el espacio privado e íntimo; C. Valores para la igualdad entre mujeres y hombres: el espacio público vs. el espacio privado; D. Rol de la prevalencia de violencia en la igualdad de género. En cada sección se presenta de manera detallada los hallazgos de la EMV, de manera comparativa entre la primera (2017) y la segunda ronda (2024) en Bolivia, con distinciones por sexo y generacionales, cuando sea relevante.

Las conclusiones resumen brevemente los hallazgos y proponen líneas de reflexión sobre las consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas de las actitudes, posicionamientos y valores para la igualdad de género que tienen las y los bolivianos y del tipo de sociedad que es posible construir a partir de los mismos.

1. La importancia de los valores para la igualdad de género

¿Por qué necesitamos tener una conversación sobre los valores para la igualdad de género? Porque reconocemos y aceptamos que, en la actualidad, la relación entre mujeres y hombres –tanto en la sociedad boliviana como en el mundo– es una relación desigual, fundada en desigualdades y, por lo tanto, que genera desventajas para quienes no ocupan la cima de la jerarquía social, es decir, las mujeres.¹

Por tanto, esta conversación no es filosófica ni teórica, ni de principios abstractos, sino, más bien, es una conversación eminentemente práctica y estratégica sobre las condiciones reales de vida de más de la mitad de la población mundial. Es una conversación sobre la sociedad que hemos construido y que estamos construyendo, sobre el poder de decidir cómo se reparte el trabajo, las responsabilidades y las recompensas sociales, los privilegios y ventajas. Es, en suma, una conversación sobre la desigualdad –que se expresa frecuentemente como una brecha entre las condiciones de vida de las mujeres y los hombres–, sus expresiones y sus consecuencias.

Esta desigualdad se canaliza a través de estructuras sociales, culturales, políticas y económicas que perpetúan y reproducen las ventajas para los hombres y las desventajas, especialmente en: i) la tensión entre los roles de mujeres y hombres en el espacio privado y el espacio público; y ii) la tensión entre los derechos individuales (incluyendo la autonomía personal) y las necesidades colectivas socioculturales, económicas y políticas de la sociedad.

Esta estructura tiene impactos profundos y permanentes sobre la vida de las mujeres y sobre su posibilidad de acceder a las mismas oportunidades que los hombres o de competir en igualdad de condiciones por oportunidades laborales, económicas, de educación, de progreso, de ejercicio y representación política, de control sobre sus cuerpos y sobre su ciclo reproductivo.

1. Junto con ellas, las personas con identidades sexuales diversas también sufren los efectos de las desigualdades, pero no se estudian directamente en este capítulo porque la información de la EMV sobre este grupo social es muy limitada.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), específicamente el ODS 5, establecen como meta alcanzar la igualdad de género hasta 2030. Una dimensión fundamental para lograrlo es la igualdad económica y de oportunidades entre mujeres y hombres. El Foro Económico Mundial (2023) y un informe del grupo Women Political Leadership (WPL) (2023) establecen que los países que invierten más en las condiciones de las mujeres y aquellos que tienen más mujeres en el gobierno son más prósperos.

El Informe Global sobre la Brecha de Género 2023 (FEM, 2023) reporta que América Latina y el Caribe es la región que más ha avanzado en el cierre de la brecha de género. Sin embargo, este informe estima que, al ritmo actual, se necesitarán más de 50 años para alcanzar paridad en las dimensiones de rendimiento escolar, salud y supervivencia, empoderamiento político y participación y oportunidades económicas.

A pesar de los avances, la pobreza de las mujeres en el mundo y en Bolivia sigue siendo diferente a la de los hombres (UNWomen, UNDESA, 2023) cuando se toma en cuenta las desigualdades en acceso a oportunidades, ejercicio de derechos, instituciones, protección y distribución de recursos y beneficios.

Las desigualdades de género se traducen, de manera muy importante, en desigualdades económicas y en pobreza. La feminización de la pobreza continúa siendo un fenómeno persistente en Bolivia, en América Latina y en todo el mundo (Paz, 2022). La incidencia de la pobreza es más alta y persistente entre las mujeres (UN Women, 2020). La pobreza femenina tiene efectos de más largo plazo que la masculina e incrementa la brecha económica de género, generando cada vez más mujeres pobres a nivel mundial (UN Women, 2018).

A pesar de que, comparativamente con la región, las mujeres bolivianas tienen mayores tasas de participación en el mercado laboral (UNDP, ILO),² la brecha de ingreso entre mujeres y hombres se mantiene en torno al 25% a nivel global. El Banco Mundial reporta que en 2024 las mujeres, a nivel global, ganaron sólo 77 centavos por cada dólar que ganaron los hombres; diferencia confirmada por el índice de igualdad de género del Foro Económico Mundial,³ que en 2025 reporta un promedio de 0,67 para la participación y oportunidad económica de las mujeres (WEF, 2024). A la pobreza económica se añade el tiempo que las mujeres dedican a las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, así como las diferencias en el ejercicio

2. Descargado de Latinometrics, con fuente UNDP/ILO, 2025:
<https://mail.latinometrics.com/p/participation>

3. El índice se mide en una escala de 0 a 1. Un valor de 1 indica igualdad entre mujeres y hombres en las dimensiones específicas de medición.

de la maternidad y la paternidad (Royo, 2011). Esto genera grupos de mujeres con menores ingresos que también son más pobres que los hombres si se analiza el balance general de tiempo dedicado entre el empleo y el trabajo en el hogar (Garrido *et al.*, 2018).

El enfoque desde el cuidado visibiliza las grandes desigualdades de distribución de responsabilidades y tiempos entre mujeres y hombres, tanto en el trabajo formal, como en el cuidado y hasta en el autocuidado y el tiempo de descanso. A pesar de que las mujeres se han incorporado masivamente al empleo en el espacio público, las responsabilidades domésticas y de cuidado en el espacio privado siguen recayendo abrumadoramente sobre ellas.

Por otra parte, la violencia sexual, física y psicológica, y aquella facilitada por la tecnología, afecta desproporcionalmente a las mujeres, y sus efectos desventajosos son un obstáculo adicional para la igualdad de género. Las mujeres bolivianas son tres veces más vulnerables a la violencia física y psicológica que los hombres (Ciudadanía, 201) y casi tres veces más vulnerables a la violencia psicológica. También enfrentan la ausencia de respuesta de las instituciones de justicia para protegerlas y castigar a los agresores.

Estos datos y estadísticas muestran que la desigualdad de género está instalada en las condiciones de vida y oportunidades de mujeres y hombres. Para cambiar esta situación; es decir, para “desinstalar” estas condiciones adversas y transformar comportamientos, es importante trabajar en las percepciones y valores de las personas, con información que priorice la igualdad como valor individual y colectivo. En la actualidad, algunas posiciones conservadoras promueven el “retorno” a valores tradicionales referidos, entre otros, al núcleo familiar heterosexual, el matrimonio, y al rol doméstico, familiar y restringido al espacio privado de las mujeres. Incluso, en culturas más extremas o tradicionales, se plantea abiertamente la subordinación de todas las decisiones de las mujeres a las de su marido, no sólo como valores para una sociedad “buena”, sino también para la protección de las mujeres ante la violencia. Phyllis Schlafly,⁴ por ejemplo, se oponía a los postulados del movimiento feminista en los años setenta, con el argumento de que la sociedad tradicional y sus instituciones protegían mejor a las mujeres que su “liberación” de las normas sociales de la época. La pregunta sobre si las mujeres están mejor “protegidas”⁵ o “liberadas” sigue siendo,

4. Phyllis Schlafly era una abogada y activista conservadora estadounidense que lideró una campaña exitosa en oposición a la Enmienda por la Igualdad de los Derechos, promovida por el movimiento feminista estadounidense a inicios de los años 70.

<https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/phyllis-schlafly>

5. Por las instituciones tradicionales como el matrimonio, la familia y el patriarcado.

en el primer cuarto del siglo XXI, parte del debate de los valores para la igualdad de género, directamente relacionados con la autonomía individual de las mujeres para sus decisiones sobre su cuerpo y su vida en el espacio privado e íntimo.

Algunos efectos de suprimir la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y su derecho a decidir incluyen la invisibilización de las consecuencias de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, bajo el argumento de que las niñas y adolescentes son suficientemente mujeres para tener relaciones sexuales y ser madres, pero no son suficientemente maduras para decidir si quieren casarse, tener hijos y cuántos o cuánto tenerlos. En otras esferas tampoco pueden decidir si quieren votar o por quién votar. En este modelo patriarcal, las adolescentes, niñas –y, por extensión, las mujeres– requieren tutelaje social, económico y político de los hombres en su vida: maridos, padres, hermanos, hijos y hasta nietos.

En la estructura patriarcal de la sociedad, muy presente en Bolivia, el tutelaje de las mujeres obstaculiza o directamente impide el acceso de las mujeres a recursos de salud, y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir y acceder al aborto. El ejercicio libre de la sexualidad, sin sanción social y sin propósitos reproductivos, también se limita o prohíbe en las estructuras conservadoras y patriarcales, como un mecanismo de control de la reproducción de las mujeres, usurpando su autonomía de decisión sobre el cuerpo, no sólo en la reproducción, sino en todas las esferas de vida. Esta estructura patriarcal de relaciones y jerarquías sociales no sólo vulnera los derechos individuales de las mujeres, sino que es esencialmente autoritaria, en tanto suprime libertades y derechos.

Todos estos factores inciden simultáneamente en la construcción de los valores para la igualdad de género. Cada uno puede representar una oportunidad o un obstáculo, dependiendo de cómo se lo trabaje.⁶

En su forma constructiva, la reflexión sobre los valores de género es una conversación sobre la construcción de igualdad. La aspiración de generar estructuras y condiciones favorables para la igualdad de género, y de promover valores conducentes a ella, se adopta a lo largo de este capítulo como meta y criterio de evaluación para la lectura de las percepciones, actitudes y valores expresados por la sociedad boliviana.

6. Entiéndase que las desigualdades referidas en este capítulo derivan de normas sociales de género, de estereotipos, mitos y prejuicios, y que causan desventajas para las mujeres y las diversidades sexuales. Por ello, las desigualdades mencionadas no son diversidades que enriquezcan el tejido social.

1.1. Contexto de la construcción de valores para la igualdad de género

El argumento de este capítulo propone que la estructura de desigualdades entre mujeres y hombres está anclada en dos tensiones fundamentales:

i) Tensión del ordenamiento del espacio público y el espacio privado

El movimiento mundial feminista y de mujeres cuestiona desde hace décadas la dicotomía entre lo público y lo privado, argumentando que limita los roles disponibles para las mujeres en las distintas esferas de vida en ambos espacios, y que tiene un impacto negativo sobre sus derechos. Esta dicotomía se refiere a la manera en que las sociedades están ordenadas, con diferentes esferas de actividad y con roles asignados para hombres y mujeres. El orden tradicional asocia el espacio público (política, empleo, educación formal, vida pública) con roles masculinos, y el espacio privado (la familia, el cuidado, el hogar, lo doméstico) con las mujeres. Los movimientos conservadores defienden este orden como un “orden natural”, mientras que el movimiento de mujeres lo denuncia como una construcción social que refuerza las diferencias de género.⁷

Esta tensión se expresa en la disputa por los canales de incursión del espacio privado al público, en los espacios de liderazgo y en las oportunidades para la permanencia de las mujeres en el ámbito público. Se manifiesta, también, en las condiciones estructurales y en los obstáculos instalados para la incursión de las mujeres en las diferentes esferas del espacio público: la política, la educación básica y la educación superior; el mercado laboral y las oportunidades económicas.

Aunque son menos frecuentes en el discurso, estos obstáculos persisten en la práctica. Sistemáticos y frecuentes, dificultan y limitan la inserción de las mujeres en las esferas del espacio público, en condiciones de igualdad y con las mismas aspiraciones que los hombres. Al mismo tiempo, la dedicación de los hombres a las actividades y roles del espacio privado también enfrentan obstáculos y sanciones sociales: en muchos casos se les marginaliza y se pone en duda su masculinidad, sancionándoles por transitar desde el espacio público hacia el espacio privado.

ii) Tensión entre el ejercicio de derechos y libertades individuales y las demandas y necesidades colectivas de reproducción y de cuidado

7. “En este sistema binario los roles de los hombres se perciben como activos y [...] alineados con el poder y toma de decisiones, mientras que los roles de las mujeres se perciben como pasivos y asociados al cuidado. [...] No se trata solo del espacio físico; se trata del valor y legitimidad del trabajo realizado en estos espacios” (traducción propia de: <https://gender.study/gender-sensitization/gendered-spaces-impact-womens-rights/>).

Esta tensión se expresa en la resistencia a extender a las mujeres y otros grupos de identidades sexuales los mismos principios y derechos a la autonomía y la individualidad que los Estados democráticos y los Estados de derecho liberales promueven, protegen y garantizan para los hombres. Dicha resistencia se basa en una priorización de lo colectivo –las necesidades sociales– por encima de los derechos individuales de las mujeres y de personas con otras identidades sexuales, especialmente en el ámbito privado e íntimo de las relaciones, el cuerpo y la reproducción.

Con frecuencia, esta resistencia se justifica recurriendo a discursos en nombre de la vida, la tradición, la “normalidad”, la religión y los valores tradicionales. En la última década, esta posición se ha visibilizado en el fortalecimiento de un movimiento mundial “antivalores” y en el resurgimiento o fortalecimiento de movimientos y proyectos sociales, políticos y culturales conservadores y tradicionalistas que han desatado una guerra de valores en el escenario mundial. En el centro estratégico de esta guerra de valores se instala una disputa por los espacios, libertades, derechos y valores para la igualdad de hombres y mujeres, y de las diversas identidades sexuales. Esta disputa cuestiona también la validez intrínseca del principio de igualdad por sí mismo, al mismo tiempo que no favorece ni promueve la pluralidad ni la diversidad, sino la tradición y el conservadurismo, que requieren:

- a) Garantizar y controlar la reproducción a través de la prohibición del aborto y la obstaculización de la autonomía de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres (este control es un obstáculo fundamental para la ciudadanía igualitaria de las mujeres).
- b) Garantizar el cuidado de la fuerza de trabajo futura, a través de las obligaciones familiares, el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico.
- c) Garantizar el orden social para el control y reproducción de la fuerza de trabajo mediante el matrimonio y la pareja heterosexual.
- d) Garantizar la reproducción indefinida de la fuerza de trabajo ejerciendo control sobre la autonomía de decisión sobre la vida, a través de la prohibición del aborto, el suicidio y la eutanasia (es decir, a través de la sacralidad de la vida).

Para resolver y disolver ambas tensiones es fundamental fortalecer el sistema democrático porque es el único que ofrece un enfoque de derechos a sus ciudadanas y ciudadanos, con recursos, canales y protecciones. Es fundamental promover el ejercicio de derechos y la ocupación de espacios como parte del ejercicio ciudadano

en general, incluyendo el espacio privado y el espacio íntimo, que también están protegidos por los principios y garantías democráticas.

1.2. Elementos relevantes del contexto entre 2017 y 2024 para los valores de igualdad de género

Entre las rondas de 2017 y 2024 en Bolivia, se identifican dos fenómenos que indudablemente han afectado –y continúan afectando– las percepciones y actitudes hacia valores de género, y las relaciones entre mujeres y hombres (o, como mínimo, que informan y contextualizan la construcción de normas sociales de género y de valores en las generaciones jóvenes). Estos fenómenos son la pandemia de COVID-19 y sus sucesivas cuarentenas –que en Bolivia se extendieron hasta 2022– y el auge o fortalecimiento de los movimientos conservadores “antiderechos”, que atacan desde la sociedad civil a los movimientos pro derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres y derechos de las diversidades sexuales, y que abiertamente se oponen a políticas de diversidad e igualdad de género. Veamos estos dos fenómenos con mayor detalle:

- a) La pandemia de COVID-19 alteró el balance de las relaciones entre mujeres y hombres en el espacio privado y en el espacio público –así como el balance entre ambos–, en detrimento de las condiciones de vida de las mujeres y con el incremento de muchas brechas de desigualdad de género. En el espacio privado, el COVID-19 intensificó la demanda de cuidado en el ámbito familiar inmediato y familiar extendido mayormente sobre las mujeres de la familia (Ciudadanía y We Effect, 2020; CEPAL, 2021). En Bolivia, el cierre de escuelas incrementó la demanda de cuidado para las mujeres, así como también el apoyo y asistencia de actividades escolares para los niños en el hogar.

La necesidad de atender requerimientos de salubridad, higiene y asepsia en el hogar también incrementó la demanda de cuidado, sobre todo para las mujeres del hogar. En esta nueva división de labores, los datos muestran que los hombres incrementaron sus horas de dedicación al cuidado en actividades de conexión entre el hogar y el espacio público: adquisición de alimentos, trámites, generación de ingresos, entre otros (Ciudadanía y We Effect, 2020). El impacto del COVID-19 fue devastador para las oportunidades de inserción de las mujeres en el ámbito laboral a largo plazo. La CEPAL indica que, en 2021, en América Latina las mujeres fueron las que perdieron más puestos de trabajo y las que más están tardando en retornar a los mismos. De hecho, muchas de ellas no han retornado aún al trabajo en el espacio público tres

años después de la última ola de COVID-19 (CEPAL, 2021).

- b) Aunque carecen de un objetivo político común, los movimientos antiderechos abanderan un discurso que está dominado por un rechazo a lo que llaman “ideología de género”, a la que consideran una imposición cultural del enfoque de vida feminista y de las diversidades sexuales, especialmente en el ámbito del espacio privado e íntimo. El movimiento antiderechos promueve cambios en los roles y jerarquías en las relaciones entre mujeres y hombres, la estructura de la familia, el ejercicio de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos postulando un retorno a los valores sociales tradicionales en todas estas dimensiones (Morán F, 2023a; Bárcena, 2022).

Con lemas como *Menos Estado, Más Familia* o *Con mis hijos no te metas*, reclaman jerarquía y poder para ordenar el espacio privado e íntimo, lo que implica altos costos para las mujeres, quienes se enfrentan a la supresión o pérdida de sus derechos individuales, libertades y autonomía para definir y vivir en el espacio privado e íntimo de acuerdo a sus preferencias personales. En su peor versión, elementos de estos movimientos han recurrido a la violencia física y psicológica –facilitada por la tecnología–, económica y de otros tipos para promover sus posturas e ideologías y ocupar espacios de representación y decisión política, y para la definición de políticas públicas (Morán F, 2022 y 2023b).

Con un incremento notable de miembros de estos movimientos en candidaturas políticas locales y regionales, además de su presencia en liderazgos sociales, culturales y económicos, y su alineación con propuestas derechistas y tradicionales, se registra un avance desde este frente de discursos, actitudes y valores que apuntan a mantener –o incluso a profundizar– las desigualdades entre mujeres y hombres, que alejan a la sociedad como colectivo de la construcción de valores propicios para la igualdad.

La base de datos de la EMV no contiene variables ni ítems que permitan medir directamente el efecto del COVID-19 sobre las actitudes y percepciones hacia la igualdad de género ni tampoco que pregunten directamente sobre movimientos antiderechos. Sin embargo, los cambios registrados en los valores estadísticos –como variaciones en los valores promedio de 2017 y 2024– incluyen e implican el efecto de estos dos fenómenos importantes.

En primera instancia, el análisis de los valores en este capítulo busca señales de haber

avanzado hacia actitudes y configuraciones de valores conducentes a una mayor igualdad o de un retroceso hacia posturas que favorecen el mantenimiento del *statu quo* de desigualdades y relaciones asimétricas. En el peor escenario, se buscan señales de un retroceso que refuerza e incrementa las desigualdades entre mujeres y hombres. En segundo lugar, además de las diferencias temporales, el capítulo explora diferencias de posicionamiento entre mujeres y hombres con respecto a estos temas, con la intención de explorar si la “guerra de valores de género” es también una “guerra de sexos” o si obedece, más bien, de proyectos sociales divergentes. Finalmente, el estudio explora diferencias generacionales de posicionamiento con respecto a los valores hacia la igualdad de género, bajo el supuesto de que las generaciones más jóvenes suelen ser incrementalmente más liberales que sus padres y sus abuelos, particularmente en temas que tienen que ver con la autonomía personal y sus derechos en los espacios privado e íntimo.

2. Valores para la igualdad de roles y jerarquías entre mujeres y hombres y de género

Esta sección introduce la medición de variables vinculadas a las prioridades socioculturales del marco normativo de género en la sociedad, que funcionan como *proxy* (indicadores indirectos) de las actitudes hacia la igualdad entre roles de género y entre mujeres y hombres en el espacio privado e íntimo. Estas actitudes son fundamentales para entender los valores que sustentan la igualdad entre mujeres y hombres, ya que éstos constituyen esqueleto del ordenamiento social y la jerarquización de prioridades colectivas, que contraponen libertad y autonomía individual de decisión en el espacio privado *versus* el mantenimiento del orden social establecido en las normas o tabúes sobre temas como el aborto, la eutanasia y el suicidio –cuestiones que en sociedades tradicionales son rechazadas en favor de recursos centrados en la supervivencia social–.

En los últimos años, el flujo global de información y conocimiento ha acompañado un cambio de actitud hacia la ampliación de los márgenes de libertad de decisión individual en todos los espacios de vida, incluyendo el espacio íntimo y la valoración de la vida y la muerte. Este avance en valores significa una opción entre el respeto por la vida por encima de cualquier libertad o autonomía individual o una opción por priorizar y ampliar los espacios de libertad individual para decidir sobre acciones que incluyen la reproducción humana y el cuidado de las actuales y siguientes

generaciones.

Abandonar el marco tradicional de valores para la supervivencia y cambiar con los tiempos –lo que Inglehart y Norris (2003) denominan modernizar los valores en consonancia con la modernización de la sociedad– es el punto de inflexión del cambio cultural y social más importante en los últimos 50 años, especialmente para las mujeres, por su rol central en la reproducción y el cuidado. Al mismo tiempo, quizás sean las mujeres quienes pueden ganar más con este cambio.

Las actitudes menos tradicionales, definidas como “actitudes liberales”, son las que favorecen la igualdad de género e implican un cuestionamiento de las estructuras socioculturales vigentes, especialmente en dos espacios importantes: el espacio privado y el ámbito de libertades y autonomía individual. Aun cuando estas decisiones afectan instituciones sociales establecidas y centrales para el mantenimiento del orden social, cuestionan el *statu quo* de los principios que estructuran las jerarquías entre valores, y de los valores mismos que subyacen y normalizan las estructuras sociales que causan o perpetúan desigualdades.

Si bien las prácticas representadas en el gráfico 1 no constituyen, en sí mismas, instituciones de género o de igualdad entre mujeres y hombres, son parte integral de una actitud subyacente que informa la construcción de valores para la igualdad de género y que se vinculan con la estructura de normas sociales de género en relación con:

- a) La mantención o disrupción del *statu quo* de las estructuras y jerarquías socioculturales que regulan las relaciones de género y que pertenecen al espacio privado y de autonomía individual para decidir sobre condiciones de vida, como la situación de pareja y el ejercicio de la sexualidad: el divorcio, las relaciones prematrimoniales;
- b) La disrupción de la aceptación de estructuras alternativas de relaciones de pareja (la homosexualidad) y;
- c) Las actitudes hacia un principio central de ordenamiento de jerarquías socioculturales de vida: la autonomía de decisiones individuales, sobre el cuerpo y sobre la vida, como el aborto, el suicidio y la eutanasia.

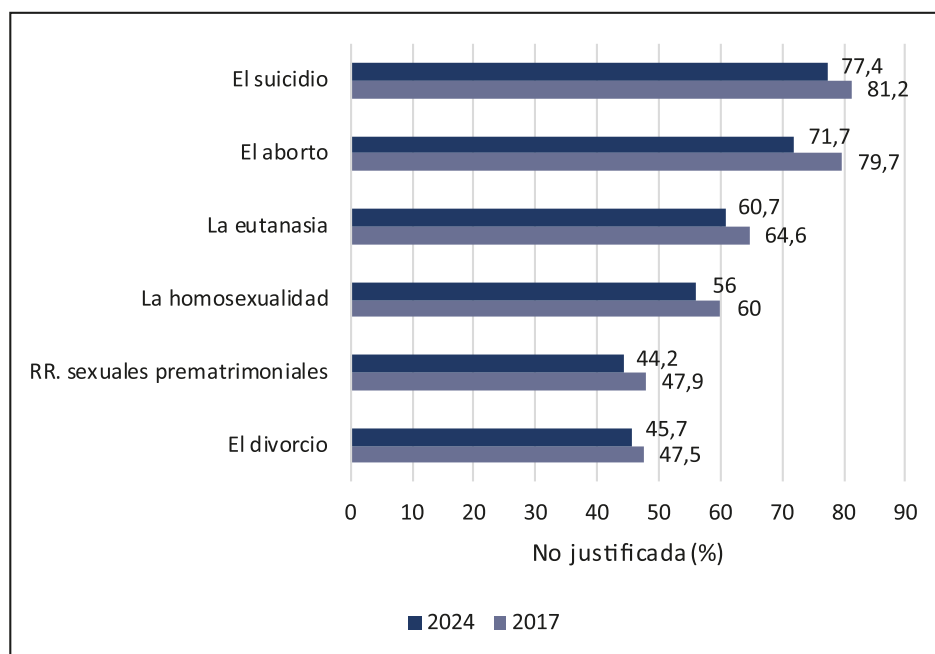
Las preguntas de la encuesta para esta sección son:

Para cada una de las siguientes afirmaciones, dígame, por favor, si Usted piensa: Que siempre están justificadas, que nunca están justificadas o algún otro punto en la escala.

	<i>Nunca justificada</i>					<i>Siempre justificada</i>				
<i>La homosexualidad</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>El aborto</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>El divorcio</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Relaciones sexuales prematrimoniales</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>El suicidio</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>La eutanasia</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El gráfico 1 presenta los porcentajes de respuestas del 1 al 3 en la EMV (no justifican las prácticas).

Gráfico 1. Porcentaje de personas que NO justifica las siguientes prácticas. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Para los objetivos de este capítulo, las actitudes que no justifican estas prácticas se interpretan como una postura conservadora, mientras que las justifican tienen una perspectiva más liberal y posiblemente más conducente a la igualdad de género. En una sociedad en transición hacia la modernidad y hacia la igualdad de género podría esperarse encontrar actitudes más favorables hacia la justificación de estas prácticas.⁸ La sociedad boliviana aún está lejos de ser una sociedad progresista en

8. Es evidente que el suicidio tiene connotaciones particulares y no puede equipararse a las otras prácticas que se consideran en la encuesta. Sin embargo, representa la decisión extrema de autonomía individual, que es el centro de esta discusión.

valores de género, aunque para las seis prácticas analizadas se registra un porcentaje de rechazo algo menor en 2024 que en 2017.

La reducción más importante se observa en el caso del aborto, con una caída de ocho puntos porcentuales (de 79,7% a 71,7%). Cabe recordar que el aborto es ilegal en Bolivia, con excepciones muy limitadas que en la práctica rara vez se aplican. Incluso en casos de embarazos producto de violación en niñas, con riesgo para su salud física y mental, el acceso a un aborto seguro y legal es difícil. Además, cuando se logra proceder con el aborto se produce una sanción social muy fuerte, no para el agresor, sino para la víctima y su familia y, presumiblemente, para él o la médica que realiza la interrupción del embarazo, aun estando protegido por la ley. El capítulo 9 de este libro discute con mayor profundidad las actitudes de los bolivianos hacia la interrupción del embarazo en distintas situaciones.

Por otra parte, la práctica más rechazada es el suicidio, tal y como también ocurre en la mayor parte del mundo: en 2024, el 77% de la población boliviana considera que el suicidio es injustificable, frente a más de un 80% en 2017. En contraste, las prácticas menos rechazadas –o más justificables– son el divorcio y las relaciones sexuales prematrimoniales. No obstante, en ambos casos persisten bolsones de población que las consideran injustificadas: 45% no justifica el divorcio y 44% no justifica las relaciones sexuales prematrimoniales. En ambos casos se registra un avance hacia la autonomía entre 2017 y 2024, pero el rechazo aún es amplio.

3. Valores para la igualdad de género en el espacio privado e íntimo

Los factores que representan los valores para la igualdad de género en el espacio íntimo y privado son aquellos que tienen que ver con decisiones que las personas toman sobre sus vidas privadas y su autonomía: decidir sobre si quieren o no casarse, si quieren o no quieren tener hijos, acceder o no a un aborto y optar por vivir una vida satisfactoria en el espacio doméstico o no.

La pregunta utilizada para esta sección es la siguiente:

“¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes frases? Por favor use esta escala en la que 1 significa “completamente en desacuerdo” y 4 significa “completamente de acuerdo”:

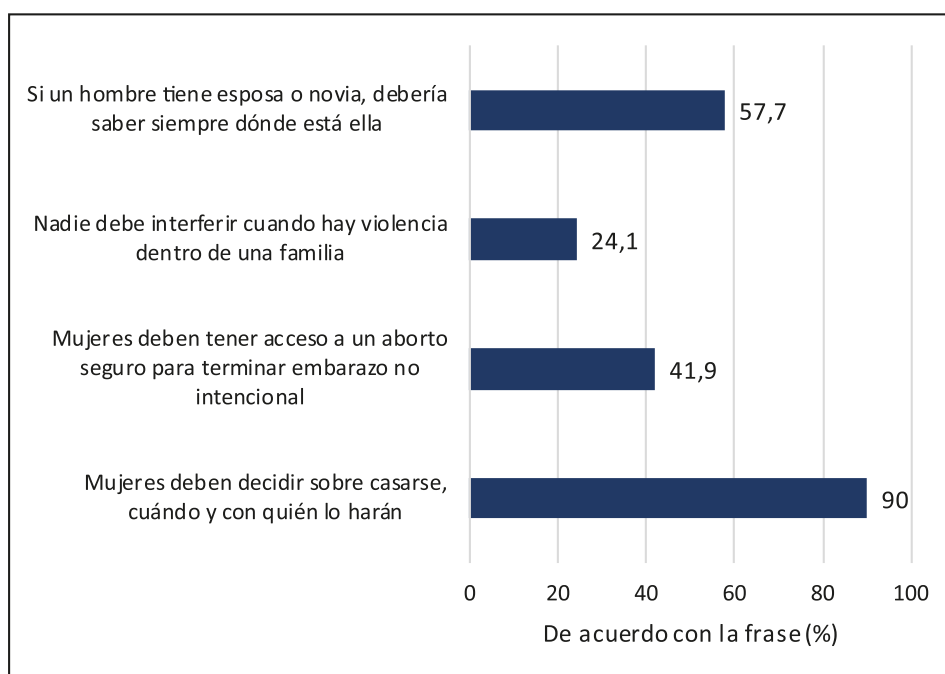
Las chicas y las mujeres deberían decidir por sí mismas si se van a casar, cuándo y con quién lo harán.

*Si un hombre tiene esposa o novia, debería saber siempre dónde está ella.
Nadie debe interferir cuando hay violencia dentro de una familia.
Las mujeres deberían tener acceso a servicios de aborto seguro para terminar embarazos no deseados.*

Estos ítems no constituyen una medida exhaustiva ni completa de las actitudes en el espacio íntimo y privado; son los ítems disponibles en la EMV. Las variables están medidas en una escala de 1 a 4 puntos: un puntaje cercano a 1 indica que se está en desacuerdo con la premisa propuesta y un puntaje cercano a 4 significa que se está de acuerdo.

El gráfico 2 presenta los porcentajes de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con estas afirmaciones.

Gráfico 2. Porcentaje de personas que están de acuerdo con frases relacionadas con la autonomía de las mujeres. Bolivia, EMV 2024



3.1 Autonomía de decisión sobre el matrimonio

La decisión sobre el matrimonio es el primer factor de autonomía en las decisiones de vida que se analizan en el espacio privado. Esta decisión, junto con la de ejercer la propia sexualidad y el control de la reproducción, implica tomar decisiones sobre un amplio rango de variables, tanto para las mujeres como para los hombres, incluyendo la cesión de espacios y libertades en la autonomía de planificar y mantener el control

sobre la reproducción.

En sociedades tradicionales la opción de decidir sobre el matrimonio y construir una familia nuclear frecuentemente no es una decisión propia, sino que está dictada por las normas sociales de género. Para los hombres, esta decisión puede significar consolidar el poder para decidir por sí mismos y por toda la familia, mientras que para las mujeres significa subordinar su facultad de decidir sobre el resto de las dimensiones de su vida –educación, economía, posicionamiento social, sexualidad y reproducción–, a las decisiones tomadas por su pareja, el marido, el nuevo jefe de familia.

Con tanto en juego, la afirmación: “Las chicas y las mujeres deberían decidir por sí mismas si se van a casar, y cuándo y con quién lo harán”, obtiene un acuerdo de más del 80% de la población. Los datos no registran diferencias significativas entre mujeres y hombres ni de tipo regional (las personas en el oriente del país no tienen actitudes más tradicionales ni más progresistas que la población en los valles o el área andina del país). Tampoco se observa una división entre áreas urbanas y rurales, lo que contradice el mito frecuente de que las poblaciones en espacios rurales son la porción conservadora de la sociedad y las poblaciones urbanas son más progresistas. Los datos confirman también el rol fundamental de la educación para avanzar hacia actitudes más conducentes a la igualdad de género. Contrariamente a lo que podría esperarse, tampoco se registran diferencias generacionales en la actitud hacia la decisión del matrimonio entre jóvenes y adultos o personas mayores.

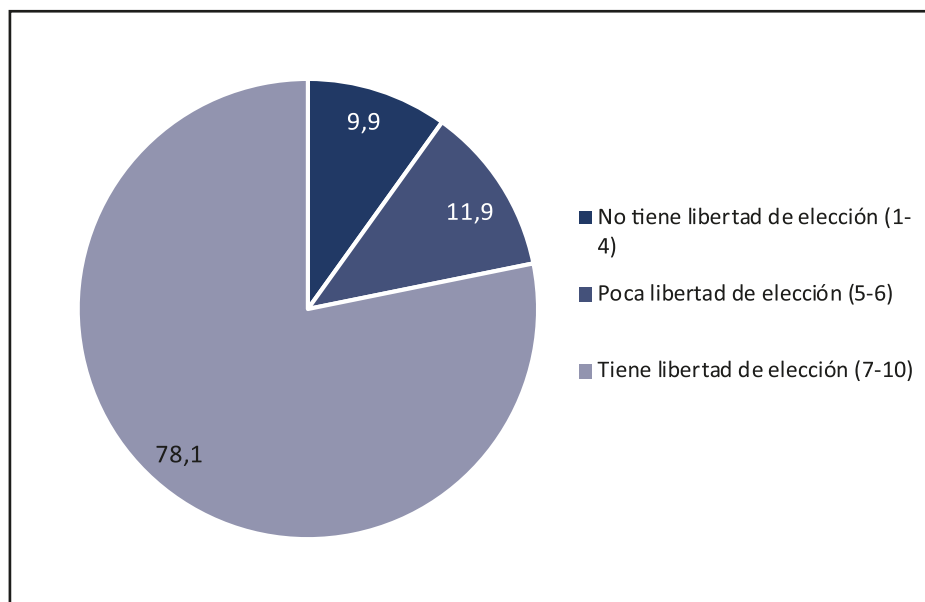
Si bien ser mujer no implica que se piense diferente que los hombres en este aspecto, ser mujer tiene una influencia menos directa sobre esta decisión. En cambio, el nivel educativo de la madre sí influye sobre la probabilidad de promover que las mujeres y las niñas decidan por sí mismas si se van a casar o cuándo se van a casar.

3.2 Autonomía de decisión sobre la reproducción

En el mismo espacio de autonomía y toma de decisiones fundamentales para la vida personal, y usando la misma escala del 1 al 10, se consultó:

¿Cuánta libertad de elección tiene usted sobre la planificación familiar, es decir, si es que usted decide cuándo y cuántos hijos tener?

Gráfico 3. Percepciones sobre libertad de elección en planificación familiar (en porcentajes). Bolivia, EMV 2024

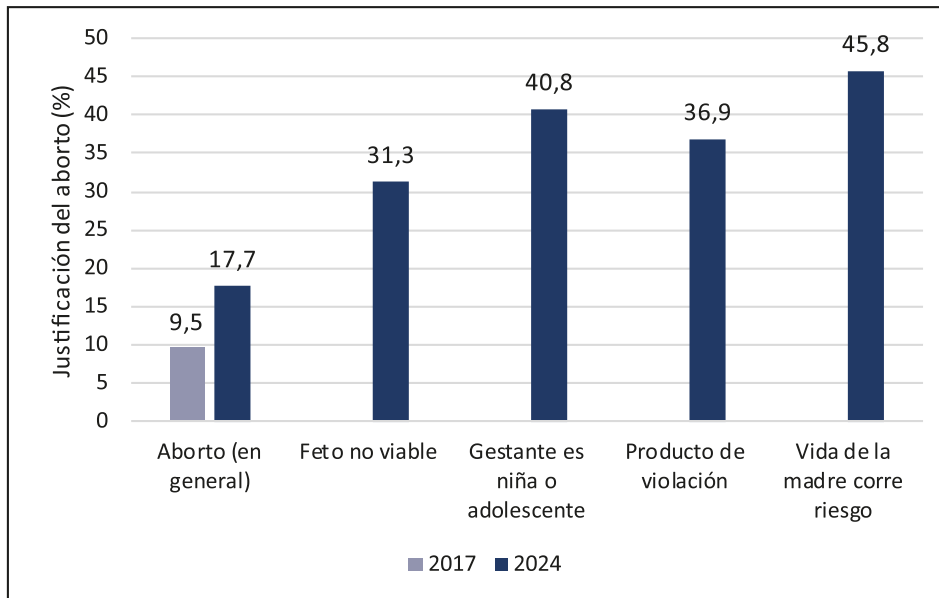


Fuente: Elaboración propia.

Pese al carácter conservador de la sociedad boliviana registrado en los datos anteriores, una gran mayoría de la población (78%) siente que tiene libertad de decidir y elegir sobre su planificación familiar. Sólo el 22% indica que tiene poca o ninguna libertad de elección sobre la planificación familiar, es decir, sobre si tener o no hijos, cuántos tener y en qué momento tenerlos.

Un elemento importante que ha cambiado en el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda ronda de la EMV es la actitud social hacia el aborto. La inclusión de cuatro nuevas variables que registran actitudes hacia distintas causales de aborto, muestra niveles de justificación significativamente más altos que los observados ante la idea general del aborto en la sociedad.

Gráfico 4. Justificación del aborto por causales. Bolivia, EMV 2017-2024



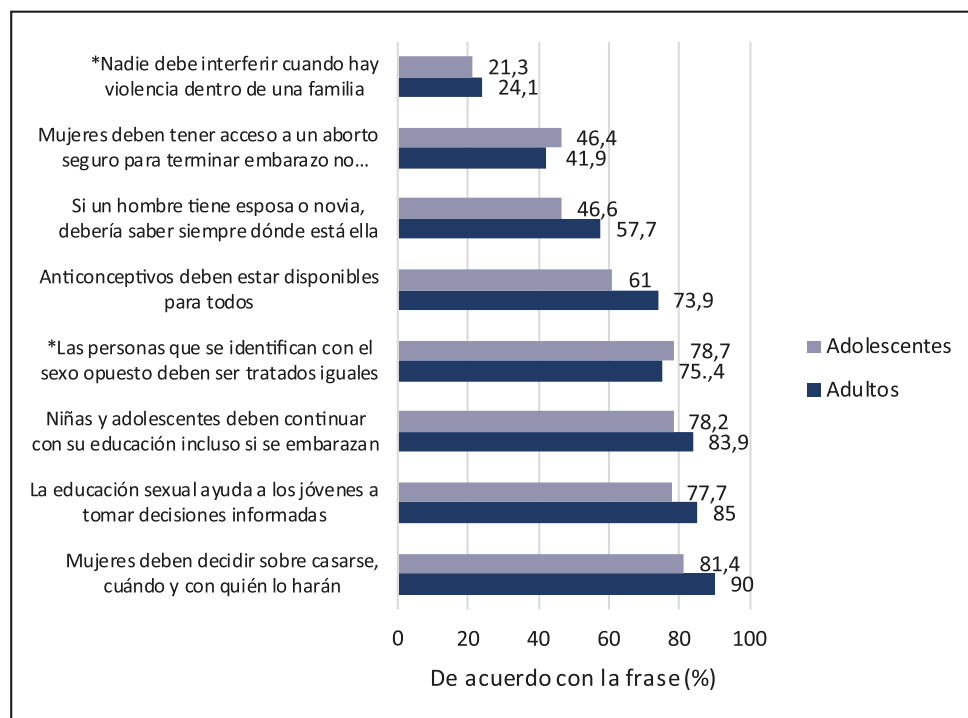
Fuente: Elaboración propia.

Esto quiere decir que, aunque, en 2024, más población está abierta a la opción del aborto libre (17,7%) en comparación a 2017 (9,5%), la sociedad boliviana todavía rechaza masivamente la idea general o abstracta del aborto. Sin embargo, cuando la opción se sitúa fuera del ámbito teórico y se instala en situaciones específicas reales, –como la maternidad adolescente, el riesgo para la vida de la madre o la consecuencia de la violencia sexual– una proporción mucho mayor de población encuentra que el aborto es justificable: 45,8% lo justifica en el primer caso y 40,8% en el segundo. En suma, entre la primera y la segunda ronda de la EMV, se registran avances en la transición hacia una sociedad con valores favorables a la igualdad de género: mayor apertura a la autonomía de decisión sobre el matrimonio, mayor aceptación del aborto como una opción para las mujeres y las jóvenes, y satisfacción con la autonomía para planificar la reproducción.

3.2.1. Valores para la igualdad de género en el espacio privado

En muchos países se espera que, en estos temas, las generaciones jóvenes adopten valores más progresistas que las generaciones que les preceden, particularmente en su apoyo o apertura hacia formas alternativas de construir la vida privada, la vida de pareja, el ejercicio de la sexualidad y la evolución de la vida de pareja. Bolivia no es una sociedad diferente en este sentido, como muestra el gráfico 5.

Gráfico 5. Porcentaje de personas de acuerdo con frases relacionadas con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos entre adolescentes y adultos. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Las y los jóvenes bolivianos presentan actitudes diferenciadas de las de sus padres y sus abuelos en varios de los valores y posicionamientos para la igualdad de género. Están más de acuerdo que los adultos en que todos deben ser tratados por igual y también con que las mujeres deben tener acceso al aborto, aunque sólo sea algo menos de la mitad de los jóvenes de entre 12 y 17 años (46%) que están de acuerdo con esta opción (frente a 41% en la muestra de adultos). Asimismo, rechazan en mayor proporción el control masculino en las relaciones de pareja: 46% de los jóvenes está de acuerdo con que “un hombre siempre debe saber dónde está su pareja”, frente a un 57,7% de adultos.

Sin embargo, resulta notorio que la generación joven es más conservadora que las generaciones anteriores en los valores que promueven la igualdad de género. En este sentido, menos jóvenes están de acuerdo con las siguientes afirmaciones: los anticonceptivos deben estar disponibles para todos, las mujeres deben decidir sobre el matrimonio, la educación sexual es útil para los jóvenes. Llama la atención que, incluso, los jóvenes muestren menos acuerdo que los adultos en que las adolescentes embarazadas deben continuar o terminar su educación.

4. Valores para la igualdad entre mujeres y hombres: espacio público vs. espacio privado

En esta sección se analiza un conjunto de factores relevantes para la construcción de igualdad de género en la sociedad boliviana, en el marco de la tensión estructural entre el espacio privado y el espacio público. Un escenario de mayor igualdad de género en este marco implicaría eliminar los obstáculos estructurales que interrumpen el flujo entre ambos espacios. Esto implica desmontar las barreras que dificultan la inserción laboral de las mujeres, como las “justificaciones” que afirman que “las mujeres causan sufrimiento a sus hijos cuando trabajan fuera de casa”, o las sanciones sociales hacia las mujeres que participan en política, incluyendo su obstrucción mediante violencia o el uso de prejuicios como “las mujeres no saben hacer negocios”. También se incluyen limitaciones estructurales como los permisos cortos de lactancia, la penalización de mujeres jóvenes en el mercado laboral por los costos asociados al embarazo, y la persistente brecha de ingresos entre mujeres y hombres.

De igual manera, existen obstáculos y sanciones sociales para el flujo desde el espacio público hacia el privado, dirigidos principalmente a hombres que desean priorizar su rol de padres o cuidadores, que se dedican a tareas domésticas o consideradas “femeninas”, especialmente aquellas vinculadas al cuidado.⁹

En esta sección se revisan los valores reportados en la muestra de adultos y jóvenes de ambas rondas de la EMV (2017 y 2024), en relación con estos roles de género y para un flujo más igualitario entre ambos espacios. La pregunta analizada es la siguiente:

Para cada una de las siguientes frases, ¿podría usted decirme si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?:

Cuando una madre tiene un trabajo fuera de casa, los hijos sufren.

Ser un ama de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado.

En general, los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.

Una educación universitaria es más importante para un hombre que para una mujer.

En general, los hombres son mejores ejecutivos de empresas que las mujeres.

9. Por ejemplo, enfermeros que no son médicos, cocineros que no son chefs, cuidadores en general o padres de familia que se dedican más tiempo a sus hijos que las mujeres en la casa son socialmente sancionados y esas opciones no están igual de abiertas a ellos que a las mujeres.

Cuando los puestos de trabajo escasean, los hombres deberían tener más derecho que las mujeres a un puesto de trabajo.

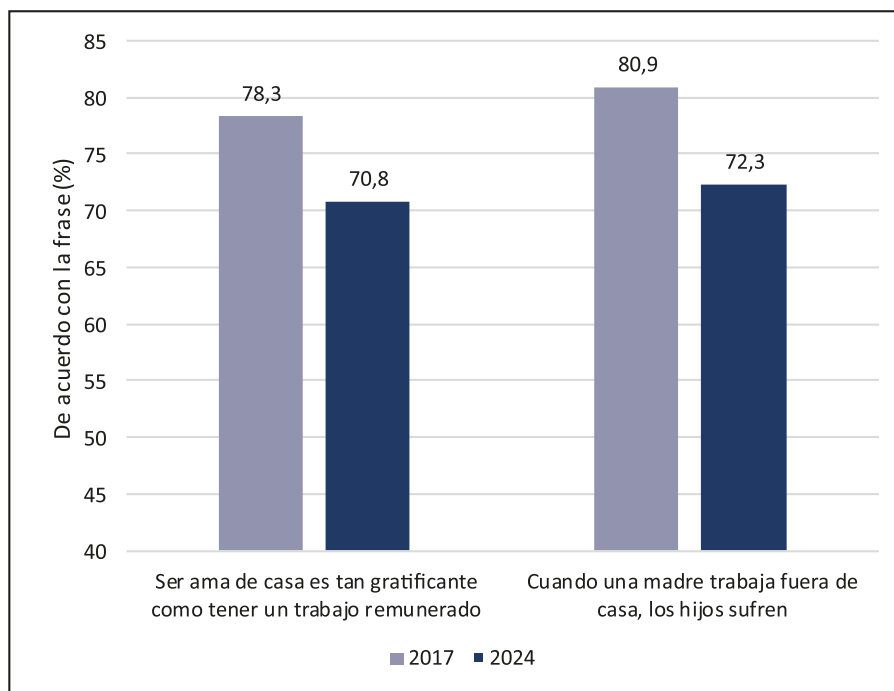
4.1 Roles en el espacio doméstico

En esta sección se analizan las variables que indican la posibilidad de un flujo libre de las mujeres desde el espacio privado hacia el público, a partir de las ideas de que ser ama de casa es igual de gratificante que tener un trabajo remunerado y de que las mujeres causan sufrimiento a los hijos cuando trabajan fuera de casa. Junto con el mito de la sacralidad de la maternidad como acto natural e intuitivo, se pone a prueba el mito del carácter intuitivo y natural de las mujeres en la responsabilidad del trabajo doméstico a través de la siguiente pregunta:

“Ser ama de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado”.

El análisis se concentra en quienes se colocan en el polo tradicional en la escala de respuestas y responden “de acuerdo” o “muy de acuerdo” a la premisa. Este grupo representa al elemento más conservador de la sociedad en cuanto a la concepción del rol de las mujeres en el trabajo doméstico.

Gráfico 6. Porcentaje de acuerdo con distintas actitudes en torno al rol de mujeres en el espacio doméstico. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

La comparación entre las rondas de 2017 y 2024 de la EMV muestra una tendencia hacia una mayor igualdad en relación con el rol tradicional de las mujeres en el espacio privado. Se ha reducido la proporción de población que considera que ser ama de casa es igual de gratificante que tener un trabajo remunerado fuera del hogar, así como la proporción que cree que los hijos sufren cuando las madres trabajan fuera de casa.

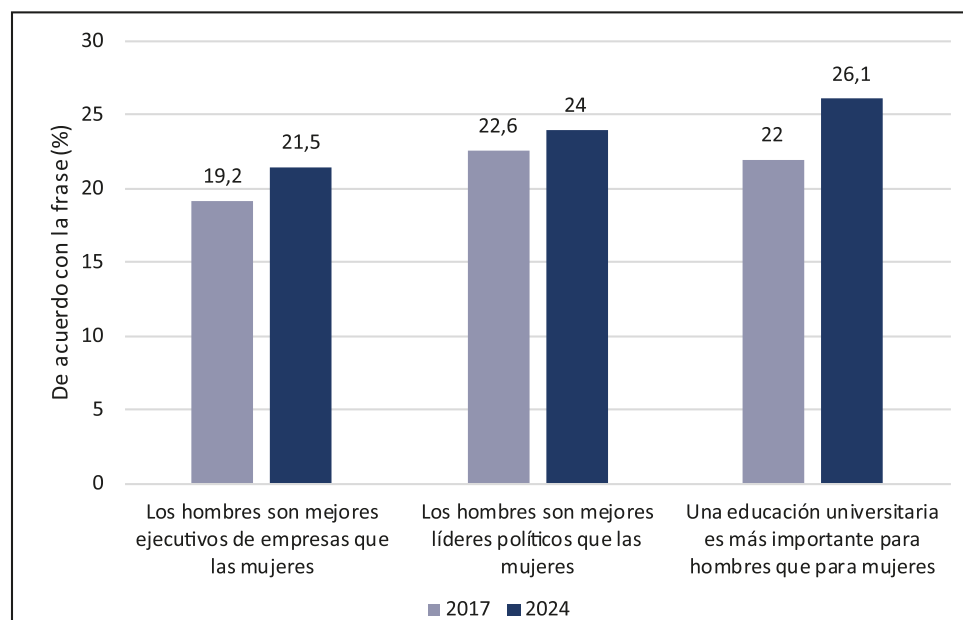
Sin embargo, es importante señalar que, en términos absolutos, casi tres cuartas partes de la población aún expresan valores que refuerzan el rol tradicional de las mujeres en el espacio doméstico, priorizando la maternidad por encima de las aspiraciones laborales individuales. Este dato indica que, si bien hay señales de cambio, el camino hacia la difusión de valores que prioricen la igualdad de género en el espacio doméstico sigue siendo largo.

4.2. Roles de género en el espacio público

En cuanto a la inserción de las mujeres en el espacio público, la postura se mide con tres variables:

- Los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres.
- Los hombres son mejores empresarios que las mujeres.
- Una educación universitaria es más importante para los hombres que para las mujeres.

Gráfico 7. Porcentaje de acuerdo con distintas actitudes en torno a inserción de las mujeres en el espacio público. Bolivia, EMV 2017-2024



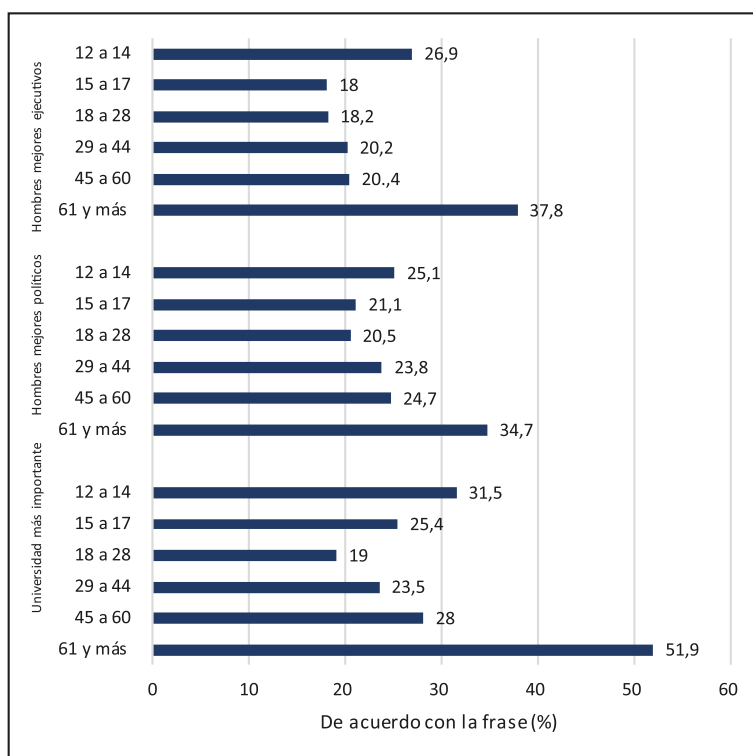
Fuente: Elaboración propia.

En 2025, habiendo transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, con un mundo globalizado, la inminencia del dominio de la inteligencia artificial y una juventud que vive cada vez más en un entorno virtual, podría pensarse que la sociedad ha superado ideas antiguas y comprobablemente falsas sobre las capacidades diferenciadas de mujeres y hombres en las esferas política, laboral y educativa.

Sin embargo, si bien es cierto que sólo un cuarto de la población nacional está de acuerdo con estas premisas, la evidencia señala una tendencia persistente a reforzar actitudes conservadoras sobre el rol de las mujeres en el espacio público, un espacio que muchas consideraban ya conquistado.

La comparación intergeneracional con los datos de la Encuesta de Valores a Adolescentes (EVA) muestra que los adolescentes más jóvenes que están de acuerdo con afirmaciones como “los hombres son mejores empresarios y políticos que las mujeres” o “la educación universitaria es más importante para los hombres” representan un porcentaje mayor que en la muestra de adultos –con excepción del grupo de más de 61 años. Esto sugiere que, en general, los adolescentes son más conservadores que los adultos en su postura sobre el rol de las mujeres en el espacio público.

Gráficos 8a, 8b y 8c. Efecto de la edad sobre las actitudes en torno a la inserción de las mujeres en el espacio público. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Cuando se desagregan las actitudes hacia la igualdad entre mujeres y hombres en esferas del espacio público por grupos de edad, se observa un fenómeno particularmente interesante: los más jóvenes y los más mayores en la muestra son los menos abiertos a reconocer la igualdad en ámbitos como la educación, los negocios y la política. Este patrón se manifiesta como una curva en “U” en el promedio de las respuestas, tomando en cuenta la edad.

En el caso del grupo de 61 años y más, es comprensible que las generaciones mayores mantengan opiniones conservadoras, considerando el espacio público como un ámbito eminentemente masculino. También sería esperable que los adolescentes y jóvenes mostraran actitudes más liberales, reconociendo a mujeres y hombres en condiciones de igualdad en estos espacios.

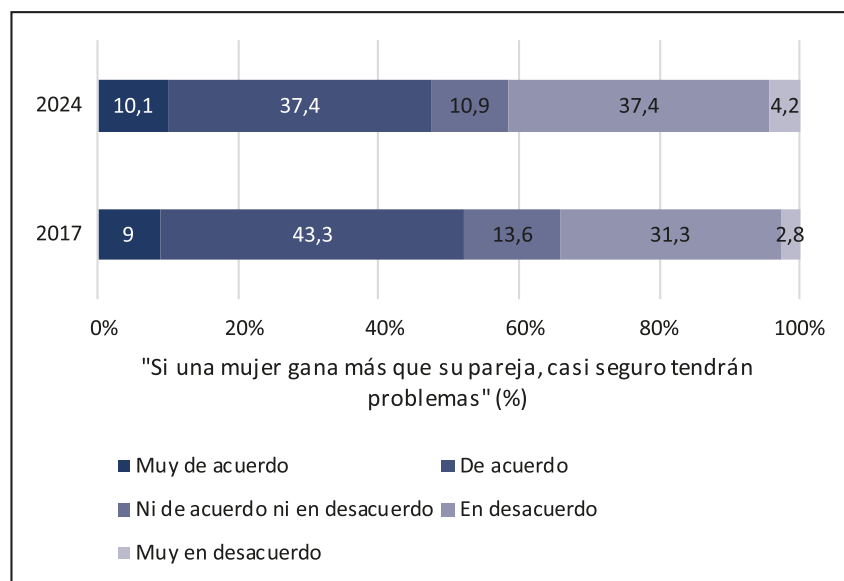
No obstante, el grupo más joven de la muestra, de entre 12 y 14 años, presenta actitudes más conservadoras que otros adolescentes y adultos jóvenes. A primera vista, esto puede explicarse por el proceso de aprendizaje social: los valores y actitudes que se internalizan en la escuela y en la familia y que, con el paso del tiempo, se enriquecen con experiencias propias en el espacio público y con la socialización entre pares, en contextos educativos y laborales más allá del entorno escolar.

Este fenómeno de mayor conservadurismo en el grupo de 12 a 14 años se mantiene desde la encuesta de 2017 y no se limita únicamente a los valores para la igualdad de género, sino que se reproduce en otros capítulos de este informe.

Al mismo tiempo, las y los jóvenes son menos tradicionales que los adultos en cuanto al rol de las mujeres en la transición entre el espacio privado y el público, especialmente en lo que se refiere a la penalización de las mujeres cuando su maternidad se contrapone al trabajo fuera del hogar. Esto los hace más inclinados a la igualdad de género en los roles domésticos y en el balance entre lo privado y lo público.

En cuanto a la inserción de las mujeres en la esfera económica y la definición de roles y jerarquías, se analizan las actitudes hacia el derecho de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones y hacia la brecha de ingresos entre mujeres y hombres.

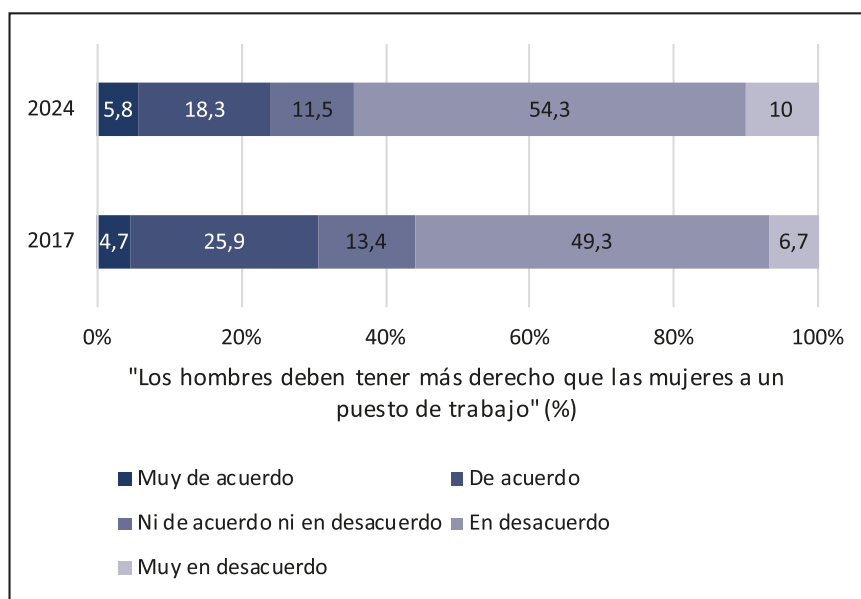
**Gráfico 9. Actitudes en torno a la inserción de las mujeres en la esfera económica.
Bolivia, EMV 2017-2024**



Fuente: Elaboración propia.

A este respecto, los datos de ambas rondas de la EMV no revelan un movimiento significativo hacia la igualdad, aunque se observa una reducción de cinco puntos porcentuales en la proporción de población que está muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que el hecho de que una mujer tenga un nivel de ingreso mayor que su pareja es una fuente de problemas en la relación. Esta afirmación implica que el balance “natural” esperado sigue siendo que el hombre tenga mayores ingresos que la mujer. Al mismo tiempo, en una sociedad conservadora como la boliviana, esta apreciación puede ser más una constatación de la realidad que una postura normativa.

Gráfico 10. Actitudes sobre la inserción de las mujeres en el ámbito laboral. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

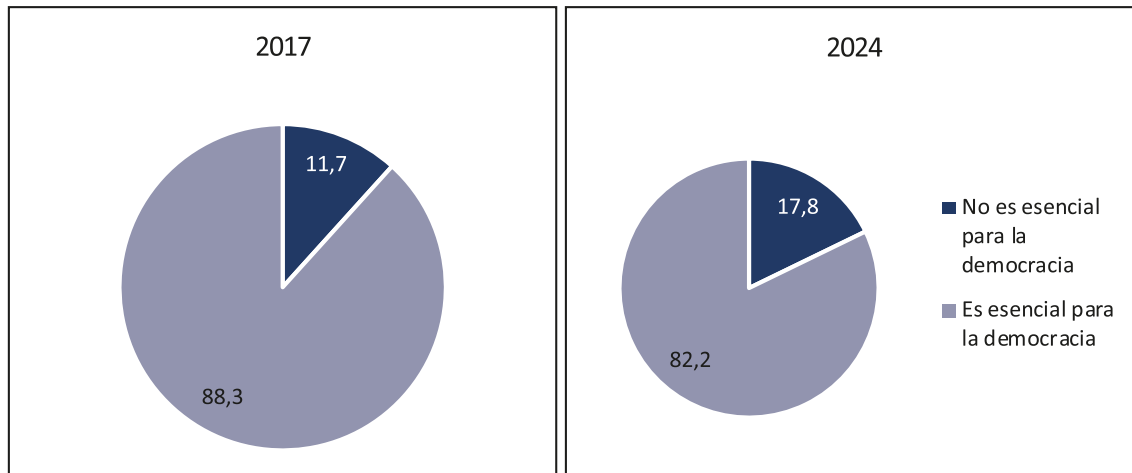
Complementariamente, la proporción de población que está de acuerdo o muy de acuerdo con la idea de que los hombres tienen más derecho que las mujeres a tener un trabajo en el mercado laboral se ha reducido en siete puntos porcentuales entre 2017 y 2024. Este cambio representa un avance relevante, especialmente en el contexto de la postpandemia de COVID-19, que provocó una mayor pérdida de empleos entre las mujeres, quienes además están retornando más lentamente al mercado laboral y, con mayor frecuencia, reingresan al mercado informal, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y social.

En relación con el ejercicio político, la EMV incluye una pregunta orientada a explorar las actitudes hacia la ciudadanía en condiciones de igualdad y la importancia de la igualdad política de las mujeres para la democracia boliviana. La pregunta es la siguiente:

Muchas cosas son deseables, pero no todas son características esenciales de la democracia. Por favor dígame en qué medida cada una de las siguientes cosas es esencial para la democracia. Utilice esta escala, en donde 1 significa que no es para nada esencial para la democracia y 10 significa que definitivamente sí es esencial para la democracia:

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

Gráficos 11a y 11b. Percepción de que es esencial para la democracia que las mujeres tengan mismos derechos que los hombres. Bolivia, EMV 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

La respuesta mayoritaria al ejercicio de ciudadanía en condiciones de igualdad es rotundamente positiva: en 2024, el 82% de la población afirma que es esencial para la democracia que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, no se debe dejar de notar que este resultado representa un retroceso, ya que la proporción de población que rechaza la idea de igualdad de derechos se ha incrementado en seis puntos porcentuales entre 2017 y 2024.

5. Rol de la prevalencia de violencia sobre la igualdad de género

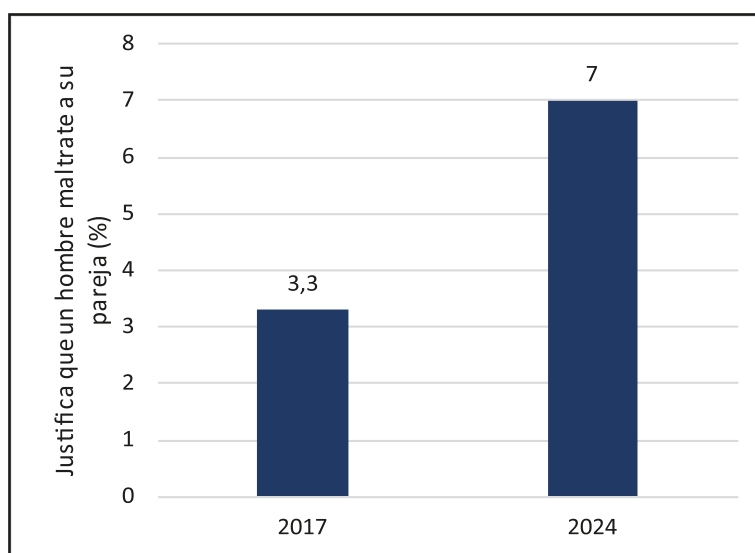
En el caso del rol de las mujeres en la política, muchos estudios han evidenciado que la violencia política es un recurso utilizado para obstaculizar el acceso de las mujeres a puestos de decisión y autoridad. Otras formas de violencia, como la psicológica, física, sexual, el acoso y la violencia facilitada por la tecnología, aunque mayormente no se infligen intencionalmente para impedir el acceso de las mujeres al espacio público, muy frecuentemente tienen ese efecto.¹⁰

La tasa general de prevalencia de violencia física, psicológica y sexual en Bolivia es de aproximadamente un tercio de las mujeres en el país (EDSA, 2023). Pero ¿qué tanto está la sociedad boliviana dispuesta a justificar esta violencia?

10. Ante las altísimas tasas de prevalencia de violencia de todo tipo contra las mujeres, adolescentes y niñas en el país, es imperativo considerar que esta violencia juega también un papel en el mantenimiento del statu quo de los roles y valores para la igualdad de género en las esferas privadas, íntimas y públicas más allá de la política.

Empleando la escala de justificación presentada más arriba, la encuesta preguntó el nivel de justificación de “que un hombre maltrate a su pareja”. El gráfico 12 muestra el porcentaje de respuestas que justifican que un hombre maltrate a su pareja (8, 9 y 10) entre los adultos de Bolivia, en 2017 y 2024.

Gráfico 12. Porcentaje de personas que justifica que un hombre maltrate a su pareja. Bolivia, EMV 2017-2024

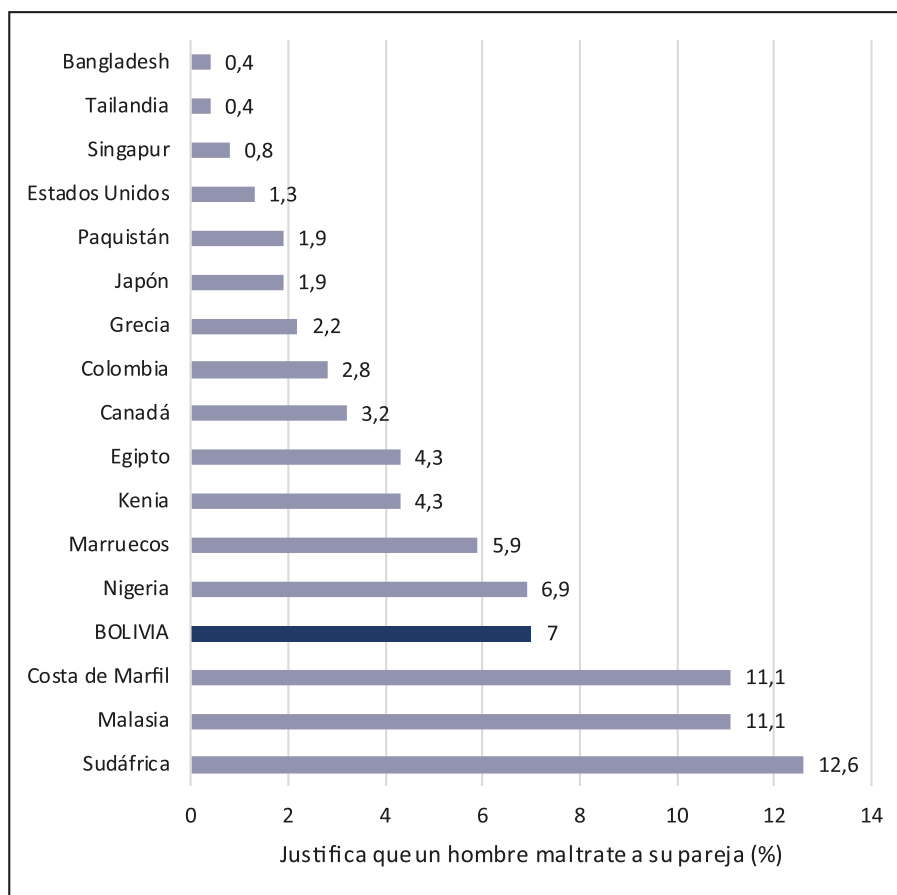


Fuente: Elaboración propia.

Es positivo que una fracción pequeña de la población considere justificable la violencia del hombre hacia la mujer en una relación de pareja. Al mismo tiempo, este grupo se ha duplicado desde 2017, cuando solamente un 3,3% de la población consideraba justificable la violencia en la pareja.

Comparando con los otros países para los que ya existen datos disponibles para la octava ronda de la EMV, Bolivia se encuentra entre los cuatro países con niveles más altos de justificación de la violencia contra las mujeres en la relación de pareja. Solamente tres países –Sudáfrica, Malasia y Costa de Marfil– tienen tasas más altas de justificación, y Colombia, el único país andino y sudamericano en la muestra, tiene sólo 2,8% de población que encuentra esta violencia justificable. Así, aunque 7% es, efectivamente, un porcentaje pequeño de población, es más del doble que hace siete años y es alto en comparación con otros países.

Gráfico 13. Porcentaje de personas que justifica que un hombre maltrate a su pareja, por países. EMV 2024

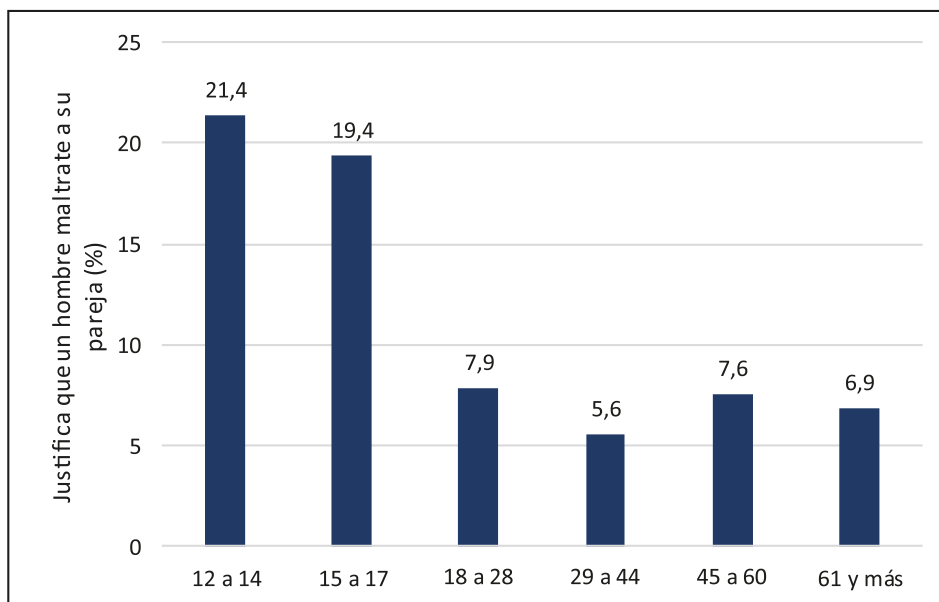


Fuente: Elaboración propia.

Los hallazgos de la EMV indican que es menos probable que las mujeres encuentren una justificación para la violencia (en comparación con los hombres); como también es menos probable que la población con mayores niveles de educación formal o la población en el oriente del país justifique la violencia contra las mujeres, en comparación con la población de la región andina. También es más probable que este tipo de violencia encuentre una mayor justificación en personas que tienen una lengua indígena como lengua materna.

La generación joven no rechaza la justificación eventual de la violencia contra las mujeres, al menos no con significancia estadística en el modelo. Los adolescentes son particularmente conservadores en su posición ante la violencia de género y son un buen ejemplo de la naturalización de esta violencia en la sociedad. Las y los adolescentes de entre 12 y 14 años que consideran justificable esta violencia triplican el porcentaje nacional, y las y los adolescentes entre 15 y 17 años que justifican la violencia en la pareja son más del doble que el dato nacional.

Gráfico 14. Porcentaje de personas que justifica que un hombre maltrate a su pareja, por grupos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Desde el punto de vista de una sociedad que garantiza y protege los derechos humanos de las personas, que una quinta parte de la población más joven considere que la violencia se puede justificar es demasiado, y probablemente una de las consecuencias más dañinas de ser una sociedad conservadora que apuesta por mantener el *statu quo* de desigualdad y asimetría entre los roles de las mujeres y los hombres en el espacio privado y en el espacio público.

Conclusiones

En el planteamiento de este capítulo se habían propuesto tres cuestionamientos centrales sobre las actitudes de las y los bolivianos en relación con los valores para la igualdad de género:

- i) En vista de que son directamente afectadas por los efectos de estos valores en las relaciones sociales, ¿tienen las mujeres valores efectivamente diferentes que los de los hombres con respecto a la igualdad de género? La respuesta corta es que no. No hay evidencia en la encuesta que sugiera que ningún tipo de “guerra de sexos” se esté librando en la sociedad

boliviana. De hecho, en promedio, las mujeres bolivianas son igual de conservadoras que los hombres en prácticamente todas las variables analizadas en este capítulo, ya sea sobre la igualdad en el espacio público, en el espacio privado o en el espacio íntimo y de autonomía de decisión sobre el cuerpo.

- ii) Las diferencias generacionales que se habían hipotetizado no se han encontrado. Las y los jóvenes bolivianos no son necesariamente más liberales ni tienen actitudes claramente más conducentes a la igualdad de género que los y las jóvenes, adultos o personas mayores en el país. Las actitudes de las y los jóvenes hacia los valores para la igualdad de género son conservadoras, pero el grado de conservadurismo varía según el espacio, la esfera y el tema específico de que se trate. La evidencia sugiere fuertemente que las y los adolescentes, especialmente el grupo de entre 12 y 14 años, son más conservadores que los jóvenes y adultos en la muestra, en particular en la justificación de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja.

Al mismo tiempo, se advierte una resistencia fuerte a cambiar los roles de género en el espacio íntimo y privado, y a colocarlos en un plano de igualdad entre mujeres y hombres: los jóvenes son menos conservadores ante la idea del control en las relaciones personales, pero más conservadores en sus actitudes ante el embarazo adolescente o la continuidad de la educación de las madres adolescentes. También son más conservadores respecto a la idea de que los anticonceptivos deben estar accesibles para todos.

- iii) El tercer cuestionamiento es ¿cómo han cambiado estas actitudes en los siete años que han transcurrido entre la primera y la segunda ronda de la EMV? Esta pregunta es relevante por dos razones. Por una parte, la globalización, el acceso a las tecnologías y, por lo tanto, a mayor información y la creciente visibilización de las problemáticas de las mujeres podrían tener el efecto de cuestionar los valores conservadores y patriarcales sobre las relaciones entre mujeres y hombres. Por otra parte, la combinación de los efectos de la pandemia de COVID-19 y el discurso y acciones de los movimientos antiderechos también pueden haber producido cambios en las actitudes y valores para la igualdad de género en la sociedad.

Los hallazgos de la EMV sugieren que entre 2017 y 2024 las actitudes y

creencias de las y los bolivianos han avanzado algo hacia la aceptación de más igualdad entre mujeres y hombres en el espacio privado; sin embargo, la proporción de población que aún entiende el espacio privado como esencialmente femenino sigue siendo más del 70%. En el mismo periodo, la proporción de población que considera el espacio público como principalmente masculino, aunque no supera un cuarto de la población nacional, se ha incrementado junto con la población que considera justificable la violencia en la relación de pareja. Esto podría entenderse como un primer paso hacia una intensificación del sello conservador de la sociedad boliviana. Finalmente, la proporción de población que considera que es esencial para la democracia que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres se ha incrementado. Ésta es una opinión mayoritaria entre mujeres y hombres, y es un signo positivo. Al mismo tiempo, es importante entender que “los mismos derechos” no se limitan a votar, postularse a cargos públicos y estudiar en la universidad. De hecho, “los mismos derechos” incluyen ir a la universidad con los mismos obstáculos y libertades que los hombres y con las mismas oportunidades laborales que ellos; incluyen acceso igualitario a servicios de salud y educación, a la autodeterminación individual y a la identidad, a la libertad de expresión y de tránsito, que, por ejemplo, frecuentemente es limitada por la violencia en sus diferentes expresiones, por estereotipos o por expresiones de tutelaje naturalizadas en las instituciones sociales.

Los hallazgos de la EMV revelan que la sociedad boliviana tiene estructuras patriarcales fuertes, conservadoras y en algunos casos hasta de corte autoritario. El hecho de que las mujeres bolivianas no sean menos conservadoras que los hombres no favorece la igualdad entre mujeres y hombres, y no es conducente tampoco a iniciar un cambio en esa dirección. El hecho de que las y los adolescentes más jóvenes sean el grupo más conservador en muchas de las variables analizadas, pero especialmente en las que expresan la inserción de las mujeres en el espacio público en condiciones de igualdad, contribuye a reforzar las actitudes conservadoras que reproducen la desigualdad desventajosa para las mujeres en el país.

Este contexto es particularmente desventajoso para un ejercicio pleno de derechos para las mujeres bolivianas. Las actitudes conservadoras que refuerzan las desigualdades y las traducen en desventajas cierran

espacios para sus oportunidades en todas las esferas, vulnerando sistemáticamente sus derechos como un orden natural de las cosas. Peor aún, el fortalecimiento de los roles de género tradicionales o conservadores roba a las mujeres su derecho a decidir cómo y cuándo ejercer su sexualidad, les dificulta controlar su proceso reproductivo, incluso obstaculizando su acceso a servicios de salud; en suma, les roba su derecho a decidir y a construir su propia identidad. Porque no se trata de que todas las mujeres bolivianas sean liberales, empoderadas y sigan el mismo molde. Se trata de que tengan la libertad de ser lo que quieren ser y de decidir lo que quieran ser. Importa la libertad de decidir, el espacio para ejercer sus derechos y su identidad con las mismas protecciones, derechos y oportunidades que los hombres.

Referencias

- Bárceñas Barajas, Karina B., ed. (2022). *Movimientos antigénero en América Latina: cartografías del neoconservadurismo* (Primera edición). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales.
- CEPAL (2021). Informe especial COVID 19 N.º 9. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Santiago de Chile: CEPAL.
- Ciudadanía, We Effect (2020). Encuesta nacional de COVID y cuidados. <https://ciudadaniabolivia.org/dashboard-cuidados/>
- Ciudadanía (2017). Segunda Encuesta Nacional de Percepciones sobre Situación de Violencia contra las Mujeres en Bolivia. Datos comparativos 2015-2017.
- Garrido-Luque, A., Álvaro-Estramiana, J. L., y Rosas-Torres, A. R. (2018). Estereotipos de género, maternidad y empleo: un análisis psicológico. *Pensando Psicología*, 14(23). doi: <https://doi.org/10.16925/pe.v14i23.2261>
- Gaytán Alcalá, Felipe (2022). “De la wiphala a la Biblia: la fuerza del neoconservadurismo religioso en Bolivia frente a la ambigüedad de la laicidad del Estado”. En: *Movimientos antigénero en América Latina: cartografías del neoconservadurismo*. Ciudad de México: UNAM.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising tide: Gender equality and cultural change around the world*. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.

- Morán Faúndes, José Manuel (2023a). “La tercera ola neoconservadora en Latinoamérica: ofensivas contra los derechos sexuales y reproductivos”. En: *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 95, año 44, julio-diciembre de 2023, pp. 349-376
- Morán Faúndes, José Manuel (2023b). “¿Cómo cautiva a la juventud el neoconservadurismo? Rebeldía, formación e influencers de extrema derecha en Latinoamérica”. En: *Methodos. Revista de Ciencias Sociales* (2023) 11(1).
- Moran Faúndes, José Manuel (2022). “Ensamblajes entre el activismo neoconservador y el neoliberalismo: mirada desde el sur”. En: *Estudios Sociológicos del Colegio de México*. 40(119), mayo-agosto, 391-422.
- Paz, Jorge (2022). Feminización de la pobreza en América Latina. En: *Notas de Población* N.º 114; págs. 11-36. CEPAL
- PNUD-LAC (2023). Índice de Pobreza Multidimensional con enfoque en mujeres para América Latina y el Caribe. Estado de Situación para 10 países en la región. Nueva York.
- Raquel Royo (2011) Maternidad, paternidad y conciliación en la CAE: ¿es el trabajo familiar un trabajo de mujeres?, Bilbao, Universidad de Deusto.
- Thomasz, Gretel (2022). “Espacio público, espacio doméstico y cuerpo femenino. Una revisión crítica de la espacialidad moderna y el derecho a la ciudad desde una perspectiva de género”. En: *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales* Vol. 9 N.º 2, Año 2021, pp. 94-112.
- UN Women and United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. Women Count (2023). Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2023.
- World Bank (2015). Bolivia: Challenges and Constraints to Gender Equality and Women’s Empowerment. Poverty and Equity Global Practice (GPVDR). New York.
- World Economic Forum (2024). Global Gender Gap 2024. Insight Report. June 2024.
- World Economic Forum (2023). Informe Global sobre la Brecha de Género 2023.
- Women Political Leadership (2023). Representation Matters.

CAPÍTULO 8:

Confianza social general y asociacionismo

Gonzalo Vargas V.

Introducción

Los estudios que analizan la interacción entre confianza social general, asociacionismo y capital social en Bolivia, han contribuido a comprender las múltiples relaciones socioculturales, institucionales y políticas que la caracterizan, en dos dimensiones relevantes: aquella que acontece entre diversos grupos sociales y aquella propia del vínculo entre sociedad y Estado. Este artículo reflexiona sobre la confianza social, considerada como una relación vital entre los ciudadanos y observada contextualmente, con el propósito de destacar algunas de sus influencias en el conjunto social boliviano.

El enfoque asumido corresponde a la comprensión del fenómeno de la confianza social general, en su interacción y sus efectos sobre las dimensiones socioeconómica, política, generacional y de género de las colectividades socioterritoriales, así como en su interrelación con la confianza particular y general. En el análisis estadístico de los datos y en su interpretación discurre un planteamiento subyacente derivado de la discusión teórica actual sobre el horizonte sociopolítico de la desconfianza; más precisamente, sobre las dimensiones sociales y políticas de la vinculación entre confianza y desconfianza sociales como modos de relacionamiento entre las personas en entornos socioeconómicos, culturales e institucionales concretos.

La confianza social, desde una perspectiva teórica, ha sido conceptualizada de maneras diversas que destacan diferentes características de su amplia y variada comprensión. Los estudiosos de la confianza social se ocupan de sus múltiples manifestaciones, refiriéndose a ellas de formas específicas: confianza en endogrupo (interna) y confianza en exogrupo (externa) (Dehley y Welzel, 2012; Dinesen y

Sønderskov, 2018);¹ confianza débil y confianza consistente (Granovetter, 1973; Amaral *et al.*, 2019); confianza particularizada (Luhmann, 1979; Offe, 1999; Hardin, 2000; Camussi y Mancini, 2018); confianza generalizada (Robinson y Jackson, 2001; Paxton, 2007; Rothstein y Stolle, 2008); confianza interpersonal (Muller y Seligson, 1994; Brehm y Rahn, 1997; Putnam, 2000); confianza institucional (Mishler y Rose, 2001; Zmerli y Newton, 2008; Newton y Zmerli, 2011, Sønderskov y Dinesen, 2014); microconfianza y macroconfianza (Uslaner, 2008); culturas de alta y de baja confianza (Fukuyama, 1995; Hofstede, 2001; Putnam, 2000); en fin, confianza transcultural (Lewis, 2006).

Este artículo tiene un doble propósito, comparativo y analítico, a partir de datos provenientes de la octava ronda de la EMV: por una parte, comparar generacional y temporalmente el estado de situación de la confianza social en Bolivia; y, por otra, observar y analizar la interacción entre confianza general, confianza externa y confianza interna, considerando factores socioeconómicos, institucionales y políticos propios de la situación boliviana actual, que caracterizan y afectan esta relación.

1. Confianza y desconfianza en clave sociopolítica

La confianza es un atributo humano y un fenómeno social amplio, complejo y altamente influyente en las sociedades. Su importancia como factor que interviene en la estabilidad del orden social, la actividad económica, el bienestar, el progreso social y el sistema democrático está ampliamente reconocida y respaldada por la producción académica en las ciencias sociales. El interés de los estudiosos en este tema se orienta por una visión compartida que considera la confianza como un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad, resumido en el claro convencimiento de Simmel (2013): sin la confianza general que tienen las personas entre sí, la sociedad se desintegraría.

¿Cómo se entiende la confianza en su imprescindible dimensión social? Una definición básica de confianza social la concibe como la expectativa de que los miembros de una sociedad seguirán normas reconocidas común y públicamente, es decir, reglas morales ordinarias, esenciales para la vigencia del orden social (Vallier, 2020). En general, la confianza es una acción moral práctica, requisito para la interacción y el

1. En este artículo, para facilitar la lectura y comprensión del texto, se hace referencia a la confianza en el endogrupo o endogrupos (ingroup trust, in-groups trust) como confianza interna y, a la confianza en el exogrupo o exogrupos (outgroup trust, out-groups trust) como confianza externa. Confianza interna es igual a confianza social particular; confianza externa, tanto como confianza generalizada, es igual a confianza social general Newton y Zmerli (2011).

orden sociales, así como para la legitimidad y estabilidad del orden político (Lahusen, 2024). En la medida en que las personas reconocen y siguen las normas sociales, con la expectativa de que los demás también lo harán, la confianza social se afianza y adquiere una dimensión práctica que se proyecta hacia el futuro.

La confianza social está vinculada con la fiabilidad atribuida a personas desconocidas o abstractas (Robinson y Jackson, 2001). Aunque no se aplique deliberadamente, se activa mediante la experiencia personal en la interacción con otros individuos anónimos; por ello, las personas confiadas tienden a captar positivamente las intenciones ajenas (Stolle, 2001). Desde una perspectiva empírica, considerando diversos ámbitos de la vida social, se ha confirmado que la confianza social genera resultados comunes deseables (Sønderskov y Dinesen, 2016). Siendo esto así, los investigadores han explorado las raíces de la confianza tomando dos perspectivas de abordaje: la cultural y la fundada en la experiencia. En el enfoque cultural, la confianza es un rasgo estable y perdurable, aprendido desde la infancia y resistente a experiencias posteriores (Uslaner, 2002); en el enfoque experiencial, la confianza es flexible y moldeable, construida a lo largo de la vida mediante experiencias vividas (Dinesen, 2012; Glanville y Paxton, 2007).

El abordaje experiencial de la confianza tiene, a su vez, dos elementos diferenciados para su análisis empírico: la sociedad civil, a través de sus organizaciones voluntarias, y la influencia de las instituciones estatales. Con relación al sinnúmero de estudios empíricos sobre la interacción positiva de la participación en organizaciones sociales y voluntarias, los resultados han mostrado un efecto limitado en la promoción de la confianza social (Nannestad, 2008). En cambio, desde la perspectiva institucional, se ha destacado que la eficacia de ciertas instituciones estatales redundan positivamente en el cumplimiento común de las normas sociales.

La confianza interpersonal se entiende como la percepción de que otros no actuarán en perjuicio de los intereses individuales. Implica tanto una valoración sobre la fiabilidad de los demás (confianza dependiente de otros) como una aceptación del riesgo asociado a la incertidumbre (confianza dependiente de uno mismo). Supone situaciones de interdependencia entre participantes dispuestos a coordinar e intercambiar, favoreciendo la interacción orientada a intereses comunes e individuales (Simpson, 2007; Zhang, 2021). La confianza interpersonal está definida por la vulnerabilidad y la expectativa.

Para la confianza particularizada (individual) y la confianza generalizada (interpersonal), se ha optado por dos tipos de explicación: la confianza como una inclinación o disposición individual o como una respuesta a experiencias personales

(Dinesen y Bekkers, 2017).

Cuando se la califica como generalizada o social, la confianza se refiere al ámbito de lo no conocido, lo distinto, lo ajeno. Su comprensión requiere visualizar a los desconocidos, aquellos que no pertenecen al espacio cotidiano de lo usual, consabido y doméstico. La confianza generalizada se traduce en expectativas positivas hacia quienes no se conocen directamente, ya sea por pertenecer a otras comunidades o por no interactuar cotidianamente con ellos (Putnam, 2000; Uslaner, 2002). La normatividad social, expresada en reglas con reconocimiento público que guían el comportamiento, constituye el fundamento de la confianza generalizada.

¿De dónde surge la confianza generalizada? La respuesta se encuentra en los enfoques que indagan, analizan y explican sus raíces, poniendo de relieve el papel del desarrollo institucional en la transformación de los valores ciudadanos.

Desde la comprensión institucional del capital social y la confianza generalizada, se distinguen dos propuestas: un enfoque actitudinal y un enfoque institucional-estructural. El primero examina la relación entre confianza institucional/política y confianza generalizada, buscando establecer una vinculación causal. Algunos estudios sostienen que el desempeño del gobierno depende del capital social; otros afirman que la confianza en las instituciones tiene efectos en la confianza interpersonal. Sin embargo, el recorrido causal no está claramente definido.

El segundo enfoque atribuye al Estado un papel central en la generación de capital social, destacando su rol en la conformación de la capacidad cívica (Tarrow, 1996). Aunque las contribuciones desde este enfoque han sido notables, persiste la limitación de identificar qué instituciones son clave y cómo crean o destruyen confianza generalizada (Rothstein y Stolle, 2008).

Un aspecto adicional requiere ser considerado. Reconociendo el rol del Estado y su arquitectura institucional que integra una enorme cantidad de instituciones políticas y combinaciones sistémicas, Rothstein y Stolle sostienen que es indispensable precisar qué tipo de instituciones (electorales, judiciales, policiales, militares, administrativas) son relevantes en la generación de capital social.

Cuando las instituciones políticas fallan en su funcionamiento y desempeño, obstaculizan el desarrollo de la confianza social. En tales casos, la sociedad intenta superar los problemas derivados, y la falta de confianza institucional puede incentivar el fortalecimiento de la confianza interpersonal. La cooperación social se convierte en respuesta a las carencias institucionales.

En contextos distintos, se suele agrupar a las instituciones políticas bajo el término “confianza en el gobierno”. Según Rothstein y Stolle (2008), este recurso analítico

presenta problemas, ya que no distingue entre la confianza en instituciones representativas del sistema político y la confianza en aquellas que lo hacen funcionar, y proponen que la confianza generalizada está influida por la confianza en instituciones político-administrativas estatales –como tribunales y policía, entre otras– encargadas de la gestión pública. La confianza en instituciones representativas está vinculada al partidismo, mientras que la confianza en funcionarios depende de su imparcialidad (Rothstein y Teorell, 2008). Estas instituciones emiten mensajes que reflejan la cultura política predominante e influyen en los valores ciudadanos. Ahora bien, la discusión sobre cómo se conceptualiza y operativiza la confianza general contribuye a precisar su comprensión empírica. Fukuyama (1999) propuso distinguir entre nivel y alcance (radio) de la confianza: el nivel se refiere a la intensidad de la cooperación, y el alcance a la amplitud del círculo de cooperación. Un alcance amplio y un nivel alto son elementos propios de una confianza general elevada.

Siguiendo estas ideas, Dehley, Newton y Welzel (2011) consideran que la confianza interpersonal, en un sentido amplio, está relacionada con el nivel y el alcance de la confianza. El nivel de confianza está definido por la confianza general; en tanto que el radio de confianza es resultado de la relación entre confianza interna y confianza externa. Estos autores trabajaron este asunto para lograr mayor precisión en la cifra promedio que clasifica y permite comparar la confianza general entre diversos países, argumentando que la pregunta sobre la confianza general tiene un problema: su referencia a la “mayoría de las personas” como el sujeto en el que se puede (o no) confiar. Ante la dificultad y diferente valoración que tienen los entrevistados acerca de esos otros en los que se puede confiar, es necesario apoyarse en otras variables que contribuyen a dimensionar adecuadamente la confianza general referida a la otra gente.

La confianza social está concebida como la confianza en el otro en general: incluye grupos de pertenencia propia llamados endogrupos, así como grupos sin pertenencia propia conocidos como exogrupos; por lo tanto, la confianza social no puede explicarse solamente en términos de uno u otro grupo. La confianza social, conceptual y empíricamente, difiere de la confianza en exogrupos y endogrupos, tanto como de aquella hacia grupos específicos (Freitag y Bauer, 2013). En este artículo se maneja la propuesta y aplicación metodológica que recurre a la confianza interna y externa para comprender la confianza social. La confianza interna tiene como elementos constitutivos a la confianza en la familia, en la vecindad y en la gente que se conoce personalmente; en tanto que la confianza externa tiene como

elementos constitutivos a la confianza en gente que uno conoce por primera vez, en gente de otra religión y en gente de otra nacionalidad (Dehley y Welzel, 2012).

1.1 La desconfianza

La confianza está vinculada a la desconfianza de múltiples formas. En la perspectiva de este artículo, destacan dos aspectos principales de tal interrelación: la concepción del mundo y las relaciones sociales que supone, y la práctica social que de tal concepción se deriva. La desconfianza no es algo (un elemento, sustancia o entidad) negativo o destructivo; su existencia no se define, necesariamente, por la ausencia de confianza. Si la desconfianza no se concibe como la falta de algo positivo, definido como confianza, entonces se abre la posibilidad de observar y tomar en cuenta el rol social y político que puede llegar a tener (Reemtsma, 2008).

La desconfianza ha estado a la sombra de la confianza, ha sido su lado feo, negativo (Schehr, 2016); y, por lo tanto, se la ha tratado de entender desde la comprensión de la confianza. Se ha mantenido, de alguna manera, confinada a la sombra de la confianza: casi siempre hemos actuado como si existiera un continuo entre estas dos nociones, como si bastara comprender una (la confianza) para comprender la otra, como si no se relacionaran con procesos sociales específicos.

La carencia de investigaciones sobre la desconfianza sólo es comprensible a partir de un sentido común que la entiende y clasifica como el lado negativo de la confianza, que ha prevalecido en las ciencias sociales y la ha arrinconado a un rol irrelevante en la dinámica de la sociedad actual. En consecuencia, subalterna de la confianza, la desconfianza ha sido entendida como derivada de la comprensión positiva de la confianza; permaneciendo así, conceptual y analíticamente, al margen de los procesos sociales.

La desconfianza se manifiesta de maneras diferentes que, aunque concretas, se adaptan a contextos sociales, culturales y políticos diversos. Y es que la desconfianza, considerada como una disposición social, constituye un fenómeno que requiere recursos conceptuales y metodológicos que faciliten la comprensión de su múltiple rol e influencia en la economía, la institucionalidad y la política de la sociedad actual. Para mencionar algunos de los atributos de este fenómeno social, cultural y político, la desconfianza tiene dimensión interpersonal, institucional y competencial, que requiere explicación desde las ciencias sociales (Allard, Carey y Renault, 2016).

La desconfianza, aun si asume una expresión generalizada y recurrente, no es incompatible con la confianza, por lo que no es posible caracterizarla por su ausencia.

La desconfianza es bastante más que no-confianza; ambas están articuladas, pero no son parte de un proceso común (Balsa, 2005). Más aún, no es que la desconfianza sea lo opuesto a la confianza; es la ansiedad que reclama la presencia de seguridad (Giddens, 1990).

Ahora bien, ¿se llega a entender algo acerca de la desconfianza en las sociedades, en este caso en la boliviana, identificando el alcance de la confianza social y sus interacciones? Ciertamente que sí; lo que depende de qué manera se entienda el vínculo entre desconfianza y confianza. En general, los estudiosos identifican tres formas de relacionamiento entre ambas: i) como contrarios, mutuamente excluyentes; ii) como opuestos extremos en una línea continua; y iii) como distintos, aunque conectados (Erickson y Biedenweg, 2024). Se sugiere para la lectura de este artículo considerar la segunda opción, que facilita una reflexión en términos de confianza/desconfianza, algo más amplia que tratándolas como antónimos.

1.2 El sistema político y la confianza social

Finalmente, desde el enfoque institucional y normativo de la confianza social, se considera la influencia de la esfera política y sus instituciones, entendidas en el marco de la institucionalidad democrática. La cultura de confianza es, según propuso Sztompka (1998), una clase de recurso o capital disponible para apostar al accionar contingente de personas desconocidas, de los otros. Las personas, motivadas culturalmente, son proclives a la confianza en su sociedad, sus organizaciones, instituciones, otros ciudadanos y también en sus oportunidades de vida. Sin embargo, este recurso no está a disposición de toda sociedad; al contrario, hay evidencia empírica suficiente que conduce a identificar una cultura paralela de desconfianza. ¿De qué depende que florezca una cultura de confianza? Este autor argumenta que hay condiciones sociales, políticas e institucionales cuya clara presencia y vigencia fomentan la confianza; y su ausencia o reducida vigencia fortalece la desconfianza. La paradoja que identifica Sztompka consiste en que la democracia supone la vigencia y fortaleza de la cultura de confianza que, para su buena salud, depende parcialmente de una acción social fundamentada en la desconfianza institucional respecto al funcionamiento de las instituciones democráticas.

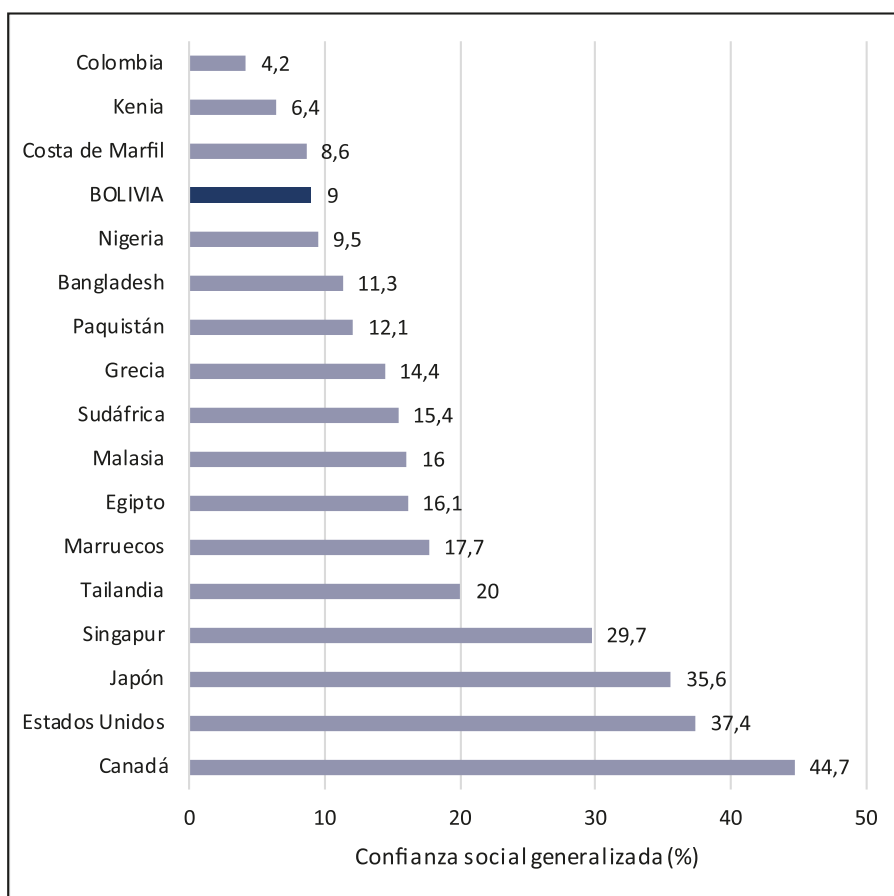
Nannestad (2008), por otro lado, luego de analizar los resultados de estudios empíricos sobre la confianza generalizada y las posibilidades de su ampliación, concluye que es necesario tomar en cuenta otros factores para profundizar en las fuentes que tendrían efecto en la confianza generalizada. Desde el enfoque institucional, reviste mucha importancia la calidad de las instituciones para la

preservación de la confianza social; entre ellas, las instituciones políticas. Al respecto, como argumentan Rothstein y Stolle (2008), tienen mayor importancia las instituciones político-administrativas de gobierno que las de representación política. Este artículo presenta un aspecto concreto sobre la interacción entre la confianza social y el sistema político: la referida a la institución policial y al sistema de administración de justicia.

2. Radiografía de la confianza social en Bolivia

Los resultados de la EMV 2024 exponen los rasgos relevantes de Bolivia acerca de la confianza general, la confianza interna y la confianza externa, y constituyen el punto de partida del análisis cuantitativo para identificar sus interacciones con aspectos socioeconómicos, culturales e institucionales. A continuación, se presenta esta información básica.

Gráfico 1. Porcentaje de personas que expresa confianza social generalizada, por países. EMV 2024



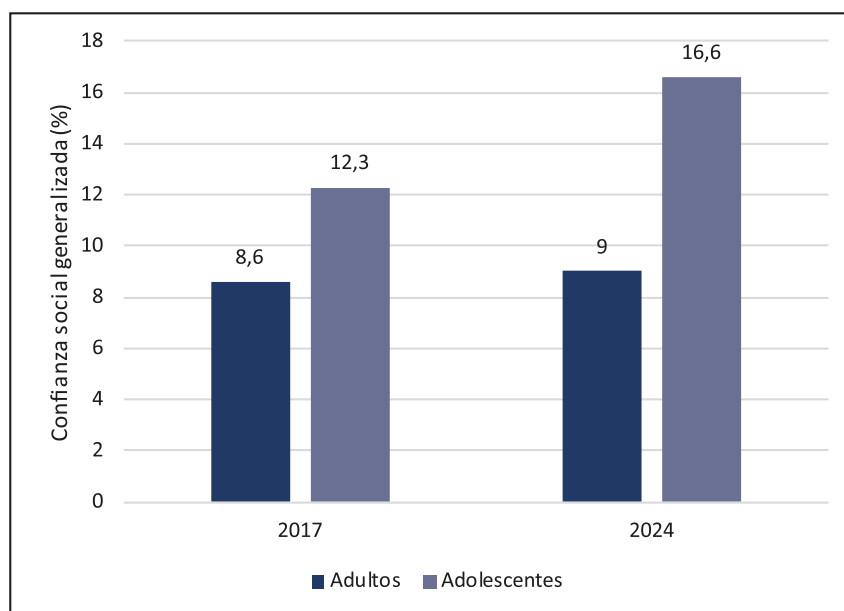
Fuente: Elaboración propia.

La pregunta que se incluye en la EMV es la siguiente:

“En términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas o que nunca se es demasiado cuidadoso al tratar con la gente? 1. Se puede confiar en la mayoría de la gente; 2. Nunca se es demasiado cuidadoso”.

Al momento de concluir la redacción de este capítulo, se tiene información de 15 países de la octava ronda de la EMV, como se observa en el gráfico 1. Bolivia ocupa el onceavo lugar en el conjunto de países, con una diferencia de 36 puntos porcentuales respecto a Canadá, que ocupa el primer lugar (44,7%) y, 5 puntos porcentuales sobre Colombia, que está en el último lugar (4,2%). De la comparación temporal de los datos que presenta Bolivia, se evidencia que el año 2024 los bolivianos que afirmaban que se puede confiar en la mayoría de la gente llegaron al 9% del total, valor apenas mayor al 8,5%, registrado en 2017.

Gráfico 2. Porcentaje de personas que muestra confianza social generalizada, comparada entre población adulta y adolescente. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024

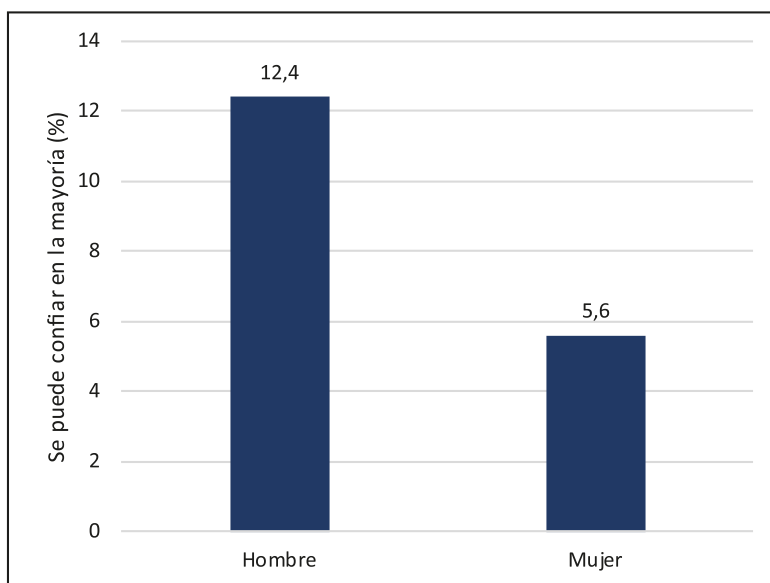


Fuente: Elaboración propia.

El bajo nivel que registra actualmente este índice en el país advierte sobre el rol de la desconfianza como un rasgo sociocultural de la sociedad boliviana que requiere más atención y estudio. Con relación a la confianza generalizada, si se observa el gráfico 2, la comparación temporal de los segmentos poblacionales muestra un incremento para ambos, aunque mayor en la población adolescente (4 puntos porcentuales frente

a medio punto). La consecuencia de este resultado se manifiesta en la ampliación de la brecha de confianza generalizada de los adolescentes respecto a los adultos: en 2017, era de 4 puntos porcentuales favorable a la población adolescente; en tanto que, en 2024, la diferencia supera los 7 puntos porcentuales a favor del segmento más joven de la población.

Gráfico 3. Confianza social generalizada entre adultos, por sexo. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

En general, como se constata en los resultados de la mayoría de estudios empíricos, los hombres tienen mayor confianza generalizada que las mujeres, y los adolescentes muestran confianza más alta que la población adulta. Las tablas 1 y 2 comparan estos datos para Bolivia en 2024.

Tabla 1. Confianza social contrastada entre población adulta y adolescente (%). Bolivia, EMV y EVA 2024

	Confianza social	Adultos	Adolescentes
Q43	Confianza generalizada	9,0	16,6
	Confianza interna	51,8	63,4
Q44	Confía en familia	76,6	85,9
Q45	Confía en vecinos	33,1	39,0
Q46	Confía en personas conocidas	45,7	65,2
	Confianza externa	16,6	25,0
Q47	Confía en personas por primera vez	10,2	13,8
Q48	Confía en personas de otra religión	25,1	36,9
Q49	Confía en personas de otra nacionalidad	14,5	24,4

Fuente: Elaboración propia.

Al comparar, entre la población adolescente y la adulta, la confianza social generalizada y otras manifestaciones agrupadas de confianza, tales como confianza interna y confianza externa,² se constata que la confianza promedio del estrato de población adolescente en Bolivia es, en todos los casos, mayor que el promedio de la confianza de la población adulta. La confianza generalizada de los adolescentes es superior, en casi 8 puntos porcentuales promedio, a la del conjunto de la población adulta, y llega casi a duplicarla. La confianza interna promedio de los adolescentes es 11 puntos porcentuales mayor que la de los adultos; en tanto que la confianza externa promedio de los adolescentes es superior en 8 puntos porcentuales a la de los adultos.³

Tabla 2. Confianza social contrastada por género y generación (%). Bolivia, EMV y EVA 2024

Confianza social	Adultos		Adolescentes	
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre
Confianza generalizada	5,5	12,5	12,2	21,1
Confianza interna	48,8	54,8	58,7	68,1
Confía en familia	74,8	78,3	82,4	89,3
Confía en vecinos	29,2	37,0	30,7	47,3
Confía en personas conocidas	42,3	49,2	62,9	67,6
Confianza externa	15,0	18,1	22,2	32,2
Confía en personas por primera vez	7,4	13,1	10,0	17,6
Confía en personas de otra religión	24,8	25,5	33,6	40,1
Confía en personas de otra nacionalidad	13,0	16,0	22,9	26,0

Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias registradas en el nivel de confianza entre mujeres y hombres adultos son relevantes, aunque menos acentuadas. La confianza generalizada (que muestra un promedio de 9 puntos porcentuales) es 7 puntos más alta en los hombres; la confianza interna es también mayor en los hombres (6 puntos de diferencia). La diferencia en la confianza externa entre hombres y mujeres adultas es más reducida y llega a los 3 puntos.

Cuando el foco de atención se centra en la dimensión generacional, las diferencias

2. Los valores que alcanzan la confianza interna y externa corresponden al promedio de sus respectivos tres componentes, de acuerdo a la propuesta de Dehley y Welzel (2012) ya presentada en la Sección 1.

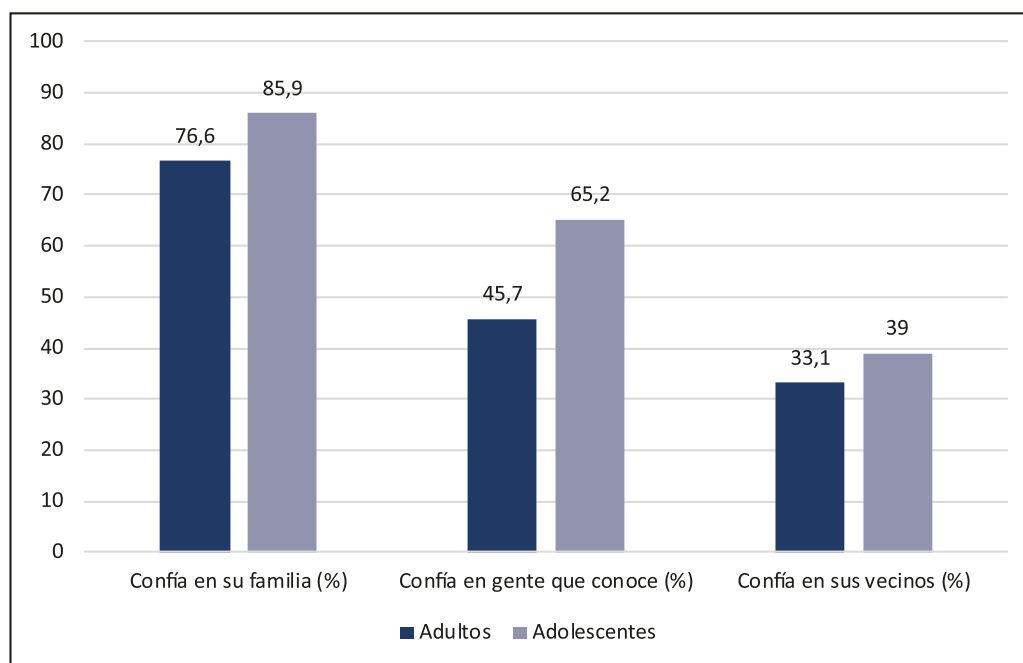
3. La confianza interna es un indicador agregado que promedia los resultados del nivel de confianza que declaran tener las personas en los siguientes ámbitos: su familia, la gente de su vecindario, y la gente que conoce personalmente. La confianza externa, por su parte, agrega las respuestas a las preguntas sobre confianza en gente que no conoce, personas de otra nacionalidad y personas de otra religión. Estos indicadores son analizados con mayor profundidad en la siguiente sección del capítulo.

en el promedio de la confianza social son relevantes. Entre la población masculina, la confianza generalizada en los adolescentes es mayor en 9 puntos porcentuales respecto a la de los adultos; la diferencia en la confianza interna llega a 13 puntos porcentuales; en tanto que, observando la confianza externa, los adolescentes alcanzan una diferencia de 14 puntos sobre los hombres adultos.

También se observan diferencias generacionales, a favor de las más jóvenes, en los niveles de confianza de las mujeres. Comparativamente, son menores que aquellas que alcanzan los hombres. La diferencia a favor de las mujeres adolescentes respecto a la confianza generalizada es de 6 puntos porcentuales; de 10 puntos porcentuales para la confianza interna y de algo más de 7 puntos porcentuales en la confianza externa.

La confianza interpersonal es muy baja. Observando los componentes de la confianza interna (tabla 2), se constata que está situada en un nivel medio, destacando el valor de la confianza en la familia. Por el contrario, aunque la confianza en personas que profesan otra religión está en el segmento que corresponde al tercio de la escala, la confianza externa se mantiene en un nivel bajo, siendo notorio el valor que registra la confianza en personas que se encuentran por primera vez.

Gráfico 4. Porcentaje de personas que confía en su familia, en gente que conoce y en sus vecinos, entre adultos y adolescentes. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Como se ha visto, la confianza de los adolescentes en personas con quienes tienen familiaridad, que pertenecen a su endogrupo, es mayor que la confianza de los adultos. El gráfico 4 muestra estas diferencias en grupos de confianza interna: la más destacable, con casi 20 puntos porcentuales, es aquella referida a la gente conocida; en tanto que es considerablemente menor la diferencia respecto a la familia y la vecindad que hay entre estos grupos de población. Esta característica destaca la notable preferencia que tienen los adolescentes con su círculo de amistades frecuentes; confianza que va reduciéndose con el transcurso de la edad.

3. Capital social y asociacionismo

Como concepto de las ciencias sociales y la ciencia política, el capital social se refiere a las formas en que las personas interactúan en redes sociales basadas en la confianza y la reciprocidad, generando recursos que constituyen un tipo específico de capital. Existen distintas manifestaciones del capital social: asociaciones sociales homogéneas (parentesco, religión, vecindad) y asociaciones voluntarias autosuficientes (de procedencia plural y diversos ámbitos socioculturales). Asimismo, el capital social se concibe como la articulación de organizaciones que facilitan la conformación y el funcionamiento de redes colaborativas; y también se lo conceptualiza como la interrelación con otras formas de capital: económico, cultural y simbólico.

El capital social es considerado un recurso valioso para enfrentar y resolver problemas sociales. Para que esta capacidad atribuida sea efectiva, es indispensable que la confianza social generalizada desempeñe un rol determinante. Por lo tanto, se entiende que el capital social está estrechamente vinculado a la presencia de confianza para el funcionamiento de relaciones de cooperación que aportan positivamente al conjunto social. Así, una definición de capital social puede establecer que es, a la vez, confianza, acceso y pertenencia a redes y normas reconocidas de reciprocidad: la confianza generalizada es un componente crucial del capital social.

La participación en asociaciones u organizaciones voluntarias se considera uno de los indicadores clave del capital social, en tanto que persigue objetivos que contribuyen al avance de la sociedad o de parte de sus miembros, genera vínculos y enriquece la vida cívica. La interrelación de esta variable con la confianza general la ha convertido en un eje central de la teoría del capital social.

El asociacionismo, entendido como la participación en organizaciones o asociaciones sociales voluntarias, es un concepto claramente vinculado al capital social. En efecto,

si se considera que dicha participación tiene un impacto positivo en la confianza general, es plausible que también incida en el fortalecimiento del capital social.

Tabla 3. Comparación porcentual de membresía y miembros activos de la población adulta y adolescente en organizaciones sociales, voluntarias y políticas (%). Bolivia, EMV y EVA 2024

Organización social, voluntaria, política	Adultos		Adolescentes	
	Miembro	Activo	Miembro	Activo
Iglesia o alguna organización religiosa	44,7	31,2	48,8	29,5
Organización deportiva	34,8	23,7	46,9	19,4
Organización artística, musical o educativa	27,9	18,7	45,9	20,3
Sindicato	19,1	12,0	23,7	20,7
Partido Político	9,6	3,1	20,5	16,9
Organización medioambiental	18,0	11,6	31,1	18,4
Asociación profesional	23,4	15,7	-----	-----
Organización humanitaria o de caridad	22,4	15,2	31,5	21,3
Grupo de autoayuda o de ayuda mutua	23,3	17,6	32,8	19,0
Organización de mujeres	15,1	9,5	25,3	15,0
Organizaciones vecinales u OTBs	26,7	19,0	26,5	21,3

Fuente: Elaboración propia.

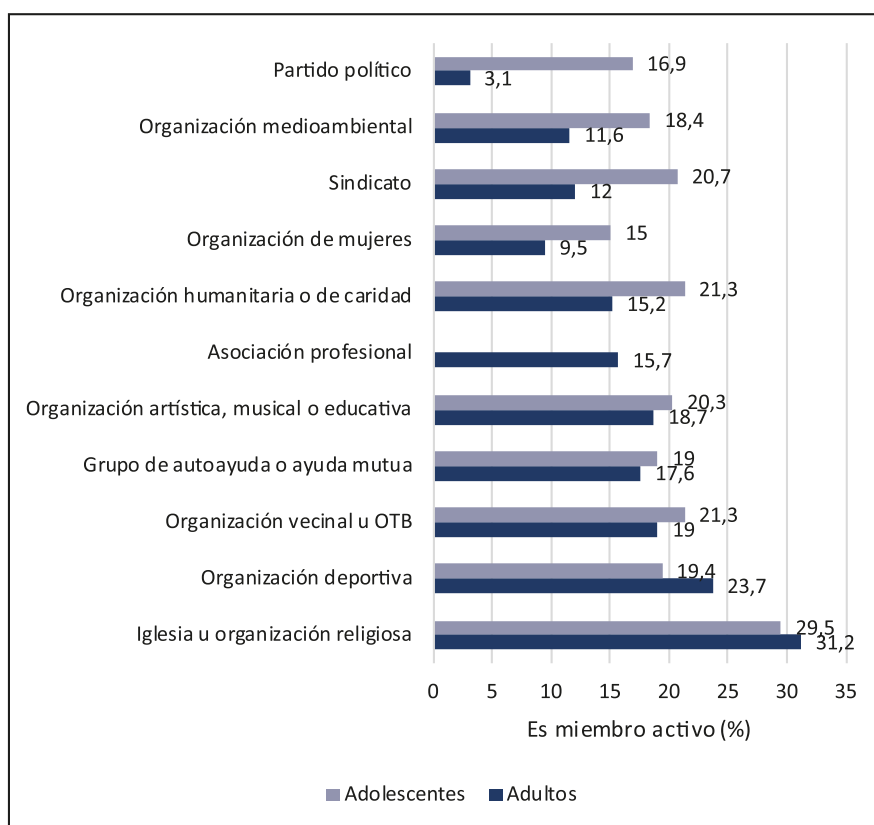
El nivel de membresía de los bolivianos en organizaciones territoriales, políticas, sociales y voluntarias es notable. Al observar el número de organizaciones incluidas en la consulta sobre el grado de participación en dichas entidades, los resultados muestran lo siguiente: la membresía declarada por las personas adultas, superior al 20%, alcanza a siete de las once organizaciones; en tanto que la participación de los adolescentes abarca la totalidad de las organizaciones. La participación adolescente supera el 30% en seis de las diez organizaciones consultadas. La membresía en organizaciones sociales es considerable en la población boliviana, y proporcionalmente mayor entre los adolescentes.

Sin embargo, al considerar la participación activa declarada por los miembros afiliados, se observa que la participación de los adolescentes disminuye considerablemente en el conjunto de organizaciones: la diferencia alcanza hasta 27 puntos porcentuales entre los adolescentes y hasta 13 puntos en la población adulta. En todas las organizaciones sociales, la membresía adolescente es mayor que la de los adultos; pero, al considerar la membresía activa, esta resulta comparable en ambos segmentos poblacionales en tres organizaciones, y es mayor entre los adultos en dos de ellas (organizaciones religiosas y deportivas).

En el gráfico 5 se muestran las diferencias en la participación activa de miembros

adolescentes y adultos para cada una de las organizaciones sociales consideradas representativas de la sociedad boliviana, así como motivadoras de la participación ciudadana y aglutinadoras de la acción social orientada al logro de objetivos compartidos relacionados con el bienestar común.

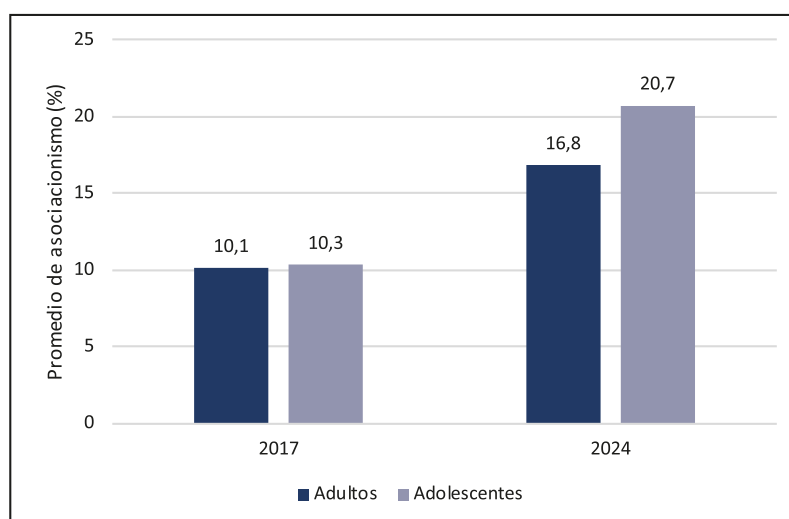
Gráfico 5. Promedio de participación activa en organizaciones sociales, voluntarias y políticas. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 5 permite visualizar cuales son las organizaciones sociales, voluntarias y políticas que, en 2024, atraen prioritariamente a la población más joven: organización humanitaria, sindicato, organización medioambiental, partido político y organización de mujeres.

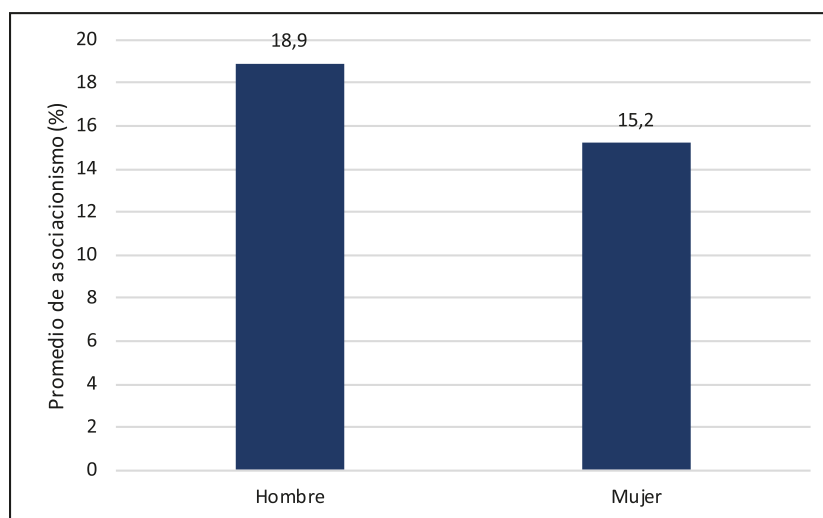
Gráfico 6. Comparación temporal del asociacionismo por generación. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

La diferencia en el asociacionismo⁴ de la población adolescente con relación a la adulta es un aspecto destacable: en el año 2017, la diferencia entre estos grupos poblacionales era irrelevante; en tanto que el año 2024 se registra un mayor promedio de asociacionismo en los adolescentes respecto al conjunto de la población: la diferencia llega a 4 puntos porcentuales para un nivel de 16,8% en los adultos.

Gráfico 7. Promedio de asociacionismo adultos por sexo. Bolivia, EMV 2024

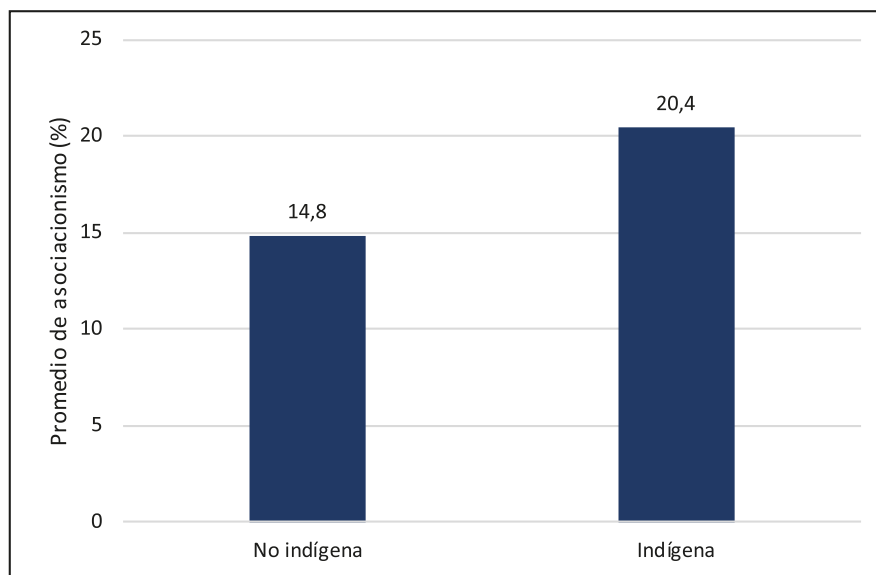


Fuente: Elaboración propia.

4. El índice de asociacionismo se calcula promediando la participación en todos los tipos de organizaciones propuestos en la pregunta. Promedios más altos representan una mayor participación en asociaciones civiles.

Según el sexo de las personas y, en menor medida, su autoidentificación con un pueblo indígena, se diferencian las motivaciones de las personas para incorporarse y participar como miembro de las organizaciones sociales, voluntarias y políticas. La diferencia entre el promedio de hombres respecto al de las mujeres alcanza 4 puntos porcentuales a favor de los hombres en el segmento de población adulta.

Gráfico 8. Promedio de asociacionismo según autoidentificación con pueblos indígenas. Bolivia, EMV 2024

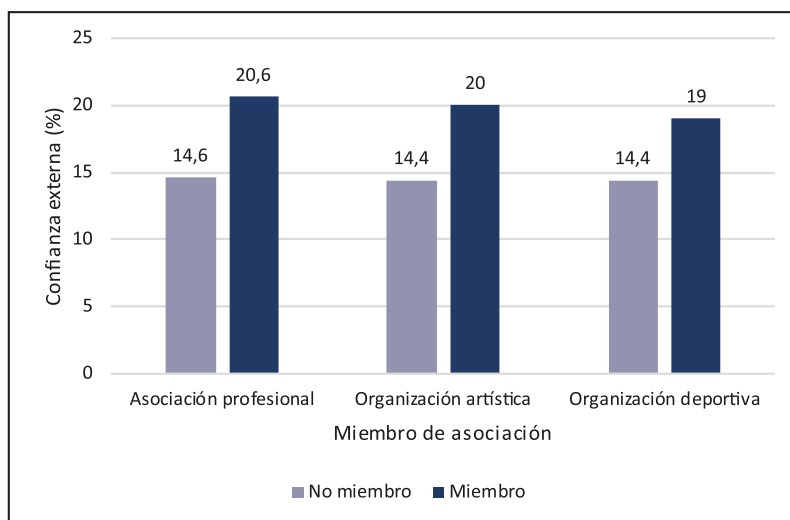


Fuente: Elaboración propia.

La tendencia a asociarse a organizaciones sociales, voluntarias y políticas es mayor entre quienes se autoidentifican con un pueblo indígena, alcanzando el 20%, con una diferencia que supera los 5 puntos porcentuales respecto a quienes no lo hacen. Adicionalmente, quienes se autoidentifican con el pueblo indígena quechua tienen, en términos generales, mayor tendencia a asociarse y participar en alguna de estas organizaciones.

El gráfico 9 pone en evidencia la influencia de la membresía en distintos tipos de organizaciones sobre la confianza externa. En la población adulta, la pertenencia a una asociación profesional y a organizaciones artísticas y deportivas ejerce una influencia positiva en la confianza hacia grupos de personas que no pertenecen a su círculo habitual y cotidiano. Ser miembro de asociaciones profesionales, organizaciones artísticas y deportivas influye positivamente en la confianza externa: aunque la magnitud del efecto es reducida, la membresía en asociaciones profesionales es mayor que en las otras.

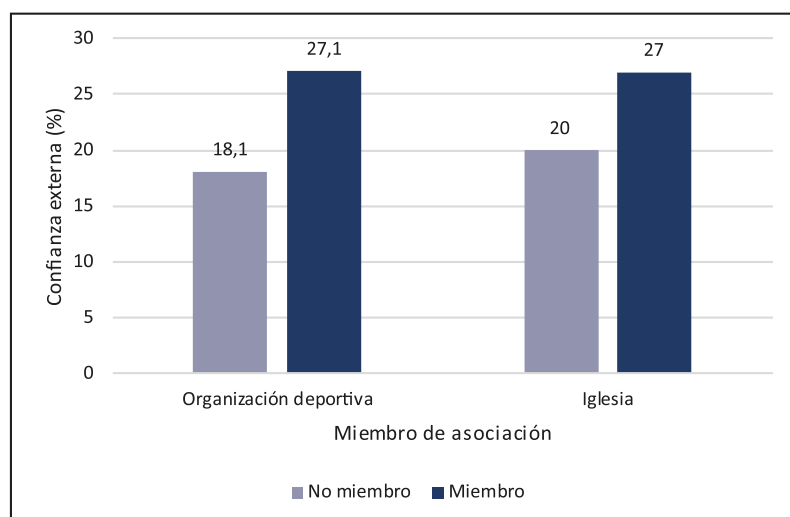
Gráfico 9. Relación entre asociacionismo y confianza externa en adultos, según tipo de organización. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

De manera análoga, en la población adolescente, la pertenencia a una asociación profesional y a organizaciones artísticas y deportivas también ejerce una influencia positiva en la confianza hacia grupos de personas ajenas al círculo habitual de conocidos. La influencia positiva de esta membresía sobre la confianza externa se constata, para la población adolescente, en el caso de las organizaciones deportivas y de las iglesias, siendo mayor en las primeras.

Gráfico 10. Relación entre asociacionismo y confianza externa en adolescentes, según tipo de organización. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

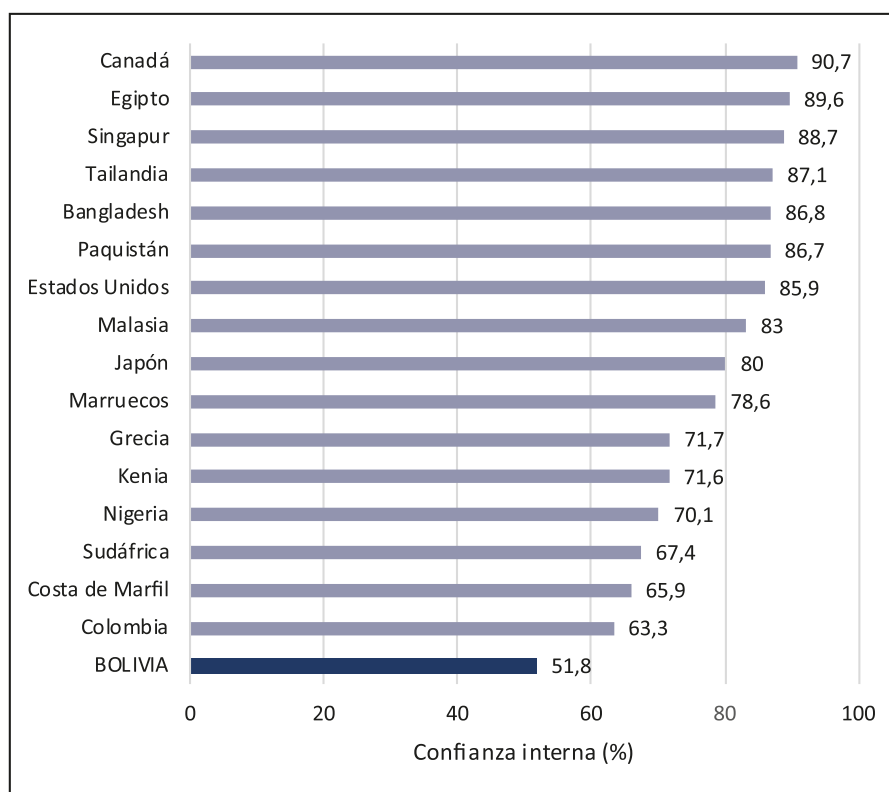
4. Confianza social generalizada, confianza externa y confianza interna

Un aspecto que tiene particular importancia para apreciar las particularidades de la confianza social generalizada en Bolivia consiste en analizar la interacción entre confianza interna y confianza externa, en relación con los factores socioeconómicos, institucionales y políticos propios de la situación boliviana actual, que afectan esta relación. El análisis de estas categorías, ya mencionadas más arriba, se desarrolla con mayor profundidad en esta sección.

4.1 La confianza interna

La confianza de las personas en los endogrupos (interna) es, de manera general, mayor que la que tienen en los exogrupos (externa). Las personas suelen confiar más en quienes mantienen una relación cercana que en el resto de la población.

Gráfico 11. Confianza interna en el mundo, por países. EMV, 2024

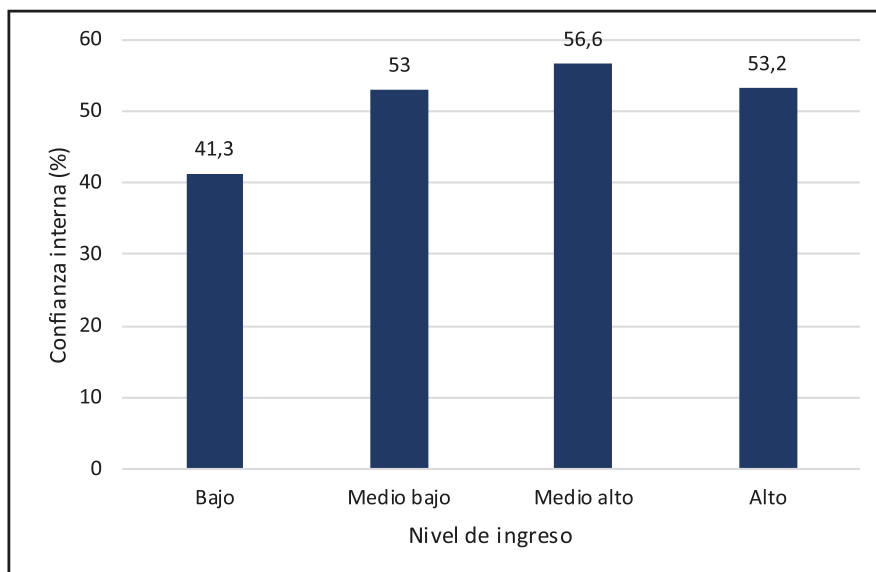


Fuente: Elaboración propia.

Al observar el gráfico 11, que compara el grado de confianza interna entre los países para los cuales se dispone de información de la ronda 8 de la EMV, Bolivia aparece en el último lugar (52%), con una diferencia cercana a los 12 puntos porcentuales

respecto a Colombia, país clasificado como penúltimo. Asimismo, la diferencia entre Bolivia y Canadá, país que ocupa el primer lugar, alcanza los 39 puntos porcentuales.

Gráfico 12. Grado de confianza interna, adultos según nivel de ingreso familiar. Bolivia, EMV 2024



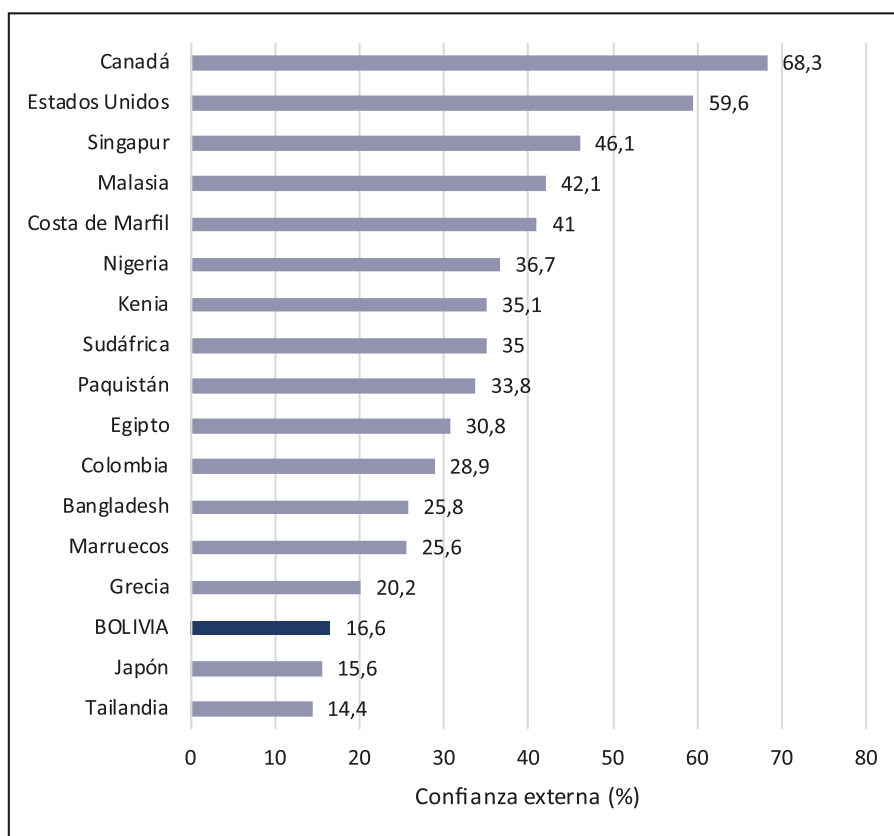
Fuente: Elaboración propia.

El nivel de ingreso familiar mensual está positivamente relacionado con el grado de confianza interna. Un bajo ingreso familiar mensual debilita la confianza interna de las personas. El gráfico 12 muestra este efecto reductor: el grado de confianza en las personas adultas de bajo ingreso es menor, en 15 puntos porcentuales, respecto al que alcanzan quienes declaran disponer de un ingreso clasificado como medio alto.

4.2 La confianza externa

La confianza externa, o confianza exogrupal, se entiende como aquella que se experimenta hacia extraños, es decir, personas que no pertenecen a ningún espacio social particular conformado por iguales. Si los extraños no son considerados dignos de confianza en la medida en que no pertenecen a la misma clase que uno mismo, la confianza externa implica el convencimiento de que se puede confiar en cualquier persona, sea desconocida, de otra religión o clase social. Por definición, la confianza externa es socialmente inclusiva.

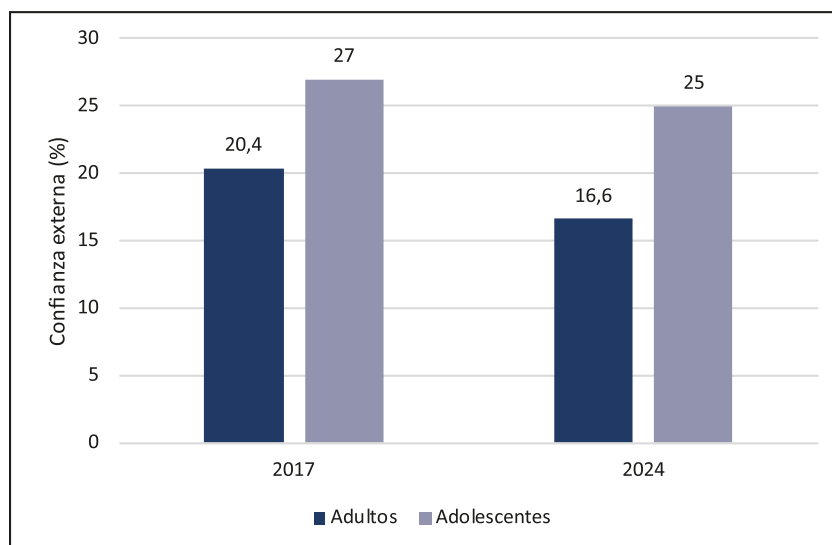
Gráfico 13. Confianza externa en el mundo, por países. EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

La comparación internacional del grado de confianza externa, expuesta en el gráfico 13, ubica a Bolivia como uno de los países con menor confianza externa, sólo superado por Japón y Tailandia, que ocupa el último lugar. Respecto a Colombia, que comparte con Bolivia los últimos lugares en el grado de confianza interna (gráfico 11), la diferencia porcentual en la confianza externa supera los 12 puntos.

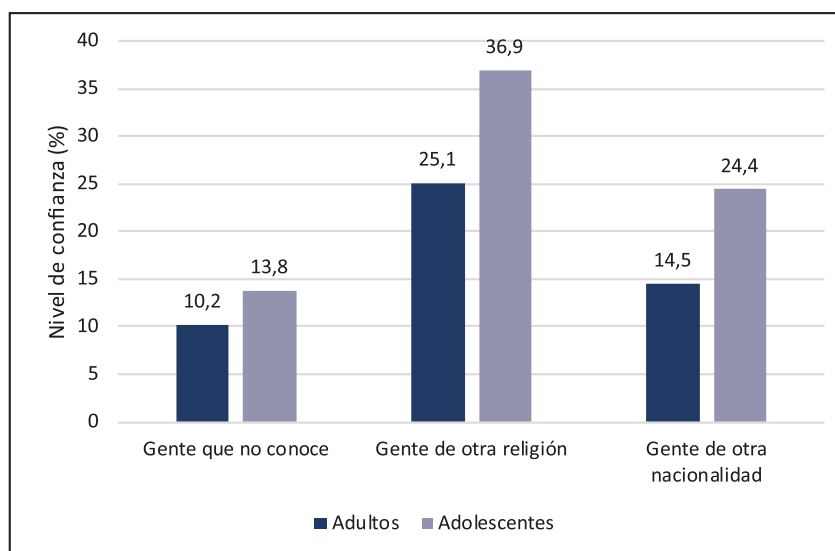
Gráfico 14. Comparación de la confianza externa entre la población adulta y adolescente. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Es interesante que la confianza externa haya disminuido entre 2017 y 2024 tanto en adultos como en adolescentes (la confianza interna se ha mantenido estable). Esta reducción afecta a ambos grupos poblacionales, aunque con menor intensidad a la población adolescente. Así, la diferencia en este segmento alcanza 2 puntos porcentuales, la mitad de la disminución observable en la población adulta.

Gráfico 15. Comparación generacional de los componentes de la confianza externa. Bolivia, EMV y EVA 2024



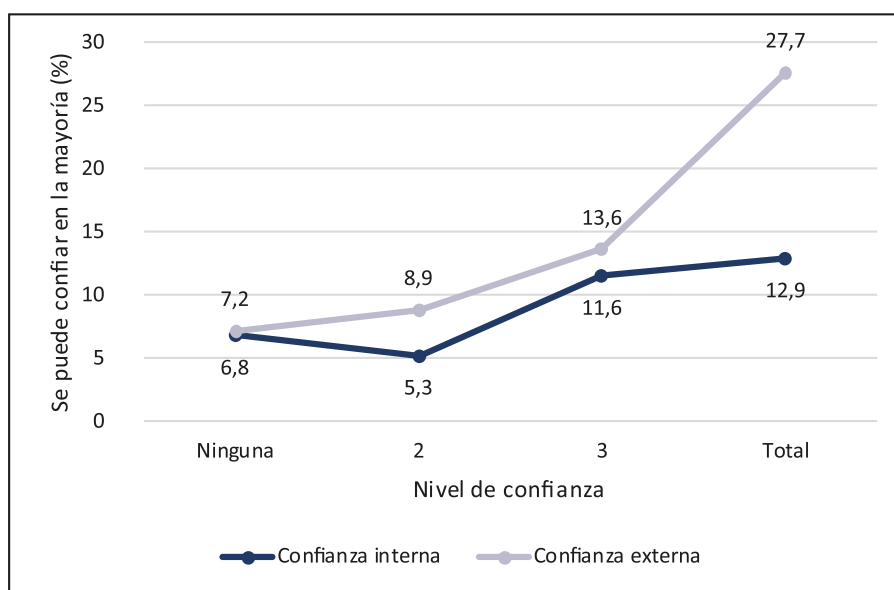
Fuente: Elaboración propia.

Los componentes del grado de confianza externa evidencian una considerable sensibilidad generacional. La mayor diferencia entre adolescentes y adultos está relacionada con la confianza hacia personas que profesan otra religión (cerca de 12 puntos porcentuales); mientras que, respecto a personas de otra nacionalidad, la diferencia alcanza los 10 puntos porcentuales.

4.3 La interrelación entre confianza social generalizada, confianza externa y confianza interna

La confianza interna y externa, tanto por sí mismas como en su interacción, influyen en la configuración de la confianza social. De manera general, se identifican tres formas en que su vinculación incide e impacta en la confianza general: la confianza interna predomina sobre la externa; ambas proceden de una misma capacidad sociocultural de confiar, desarrollada mediante la educación y la experiencia social; y la confianza interna constituye una condición necesaria, aunque no suficiente, para la existencia y el desarrollo de la confianza externa. La interrelación entre la confianza interna, externa y generalizada se analiza considerando las distintas formas de su articulación, en particular aquellas que destacan una vinculación positiva entre ellas.

Gráfico 16. Relación de la confianza social generalizada con la confianza interna y externa en adultos. Bolivia, EMV 2024

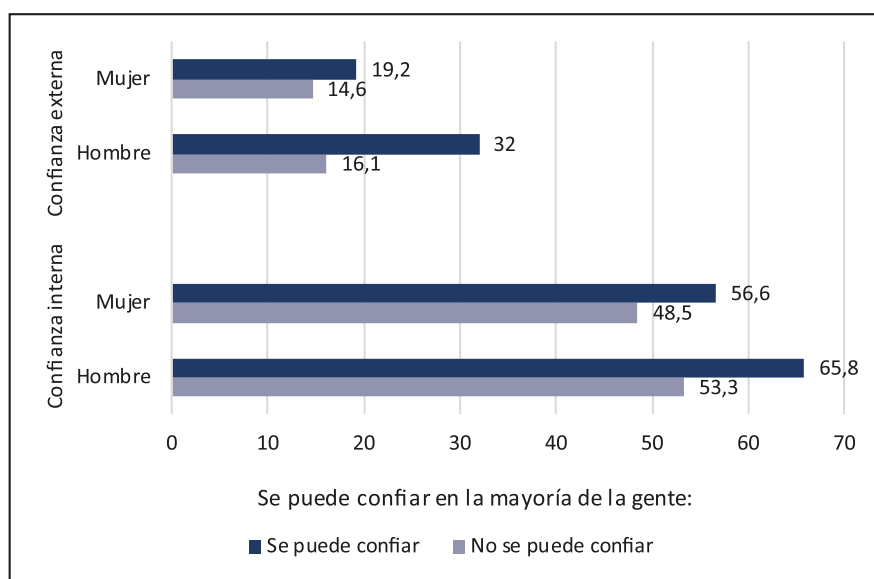


Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 16 se observa claramente la influencia que ejercen la confianza interna y la confianza externa sobre la confianza social generalizada. Una mayor confianza externa incide directamente en la confianza social generalizada en una proporción

significativamente mayor que la confianza interna. Sin embargo, el efecto favorable de la confianza externa sobre la generalizada, considerando su bajo promedio (13,3%, frente al 48,8% de la confianza interna), se traduce en un impacto relativamente menor en el nivel global de confianza social generalizada.

Gráfico 17. Relación de la confianza social generalizada con la confianza interna y externa en adultos por sexo. Bolivia, EMV 2024



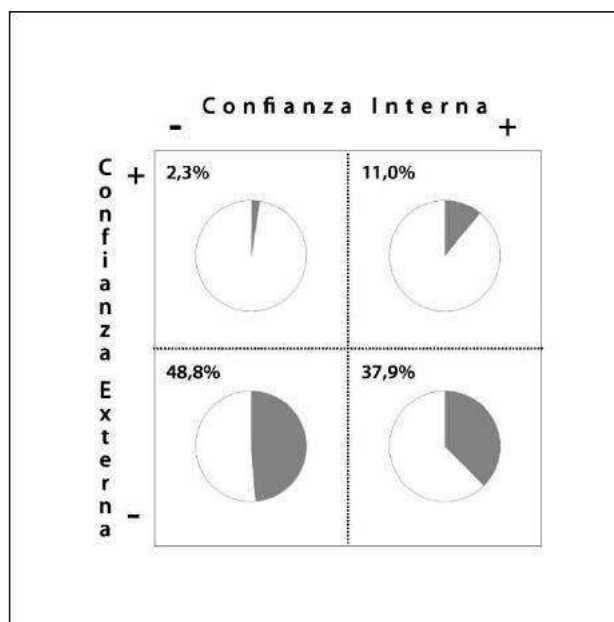
Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 17 expone las diferencias entre hombres y mujeres en los niveles de confianza interna y externa, según la confianza generalizada. Diferencias similares se registran a favor de la población urbana respecto a la rural: 64,8% vs. 52,2% en confianza interna; 30,6% vs. 15,5% en confianza externa. También se observan diferencias a favor de la población autoidentificada como indígena frente a la no autoidentificada como tal: 63% vs. 46,5% en confianza interna; 34% vs. 15,6% en confianza externa. Tanto la confianza interna como la externa muestran sensibilidad generacional, de género, de lugar de residencia y de autoidentificación con pueblos indígenas.

Finalmente, los gráficos 18 y 19, que se presentan a continuación, corresponden al espacio de confianza utilizado por Dehley y Welzel (2012) para representar la distribución individual entre confianza en endogrupos y confianza en exogrupos, a partir de datos de 50 países incluidos en la quinta ronda de la EMV. Constituido por la confianza endogrupal y la confianza exogrupal, este espacio divide ambas dimensiones en el punto medio de la escala (1-100), dando lugar a cuatro cuadrantes que corresponden a los siguientes tipos ideales de personas: i) quienes confían

solamente en el endogrupo; ii) quienes confían solamente en el exogrupo; iii) quienes no confían; y iv) quienes confían en general (Dehley y Welzel, 2012).

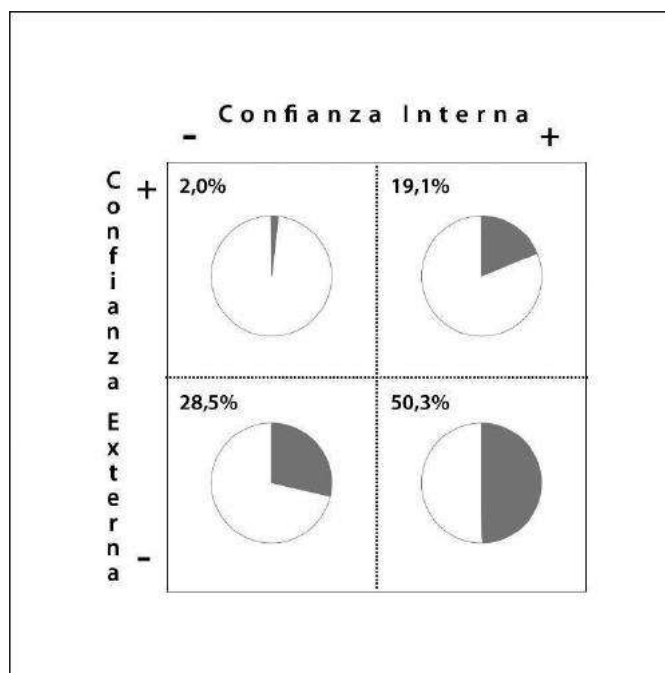
Gráfico 18. Clasificación de combinatoria entre confianza externa y confianza interna en adultos. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

La población adulta en Bolivia presenta una combinación relevante al considerar la relación entre confianza interna y confianza externa. En efecto, el 48,8% de esta población muestra baja confianza interna combinada con baja confianza externa; mientras que la situación opuesta –alta confianza interna y externa– alcanza solo el 11%. En conjunto, la configuración que combina baja confianza externa con alta confianza interna resulta algo diferenciada, llegando casi al 37,9%.

Gráfico 19. Clasificación de combinatoria entre confianza externa y confianza interna en adolescentes. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

La población adolescente en Bolivia presenta un 28,5 % al observar la interrelación entre baja confianza interna y baja confianza externa; en tanto que la situación opuesta, que asocia alta confianza interna con alta confianza externa, alcanza un 19,1%. El cuadrante que refleja la combinación de baja confianza externa con alta confianza interna alcanza el 50,3 % y debe considerarse como especialmente relevante.

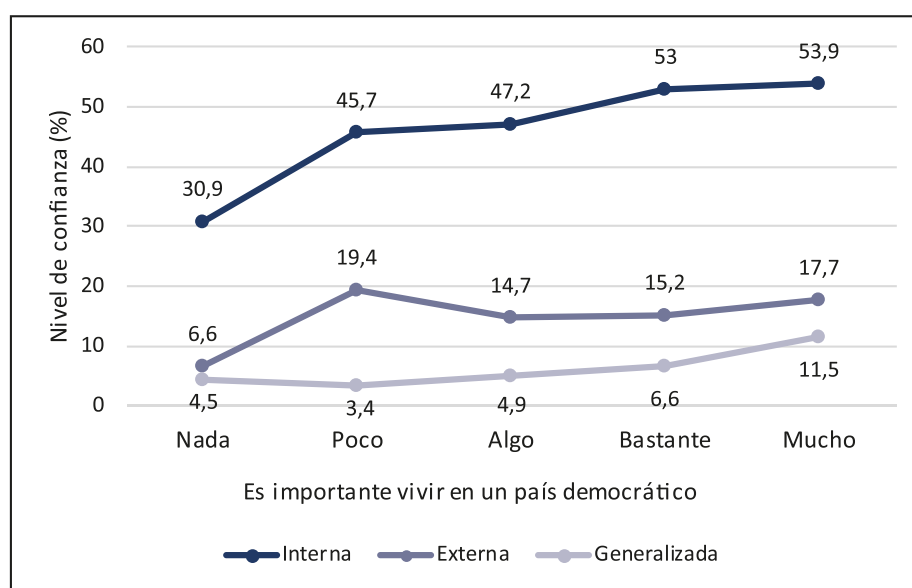
5. Confianza social generalizada e institucionalidad política

Según Rothstein y Stolle (2008), es posible identificar diversos mecanismos mediante los cuales la eficiencia institucional influye en la confianza generalizada: i) la percepción sobre la seguridad individual afecta la confianza en otras personas; ii) la valoración de quienes asumen la responsabilidad de garantizar el interés público incide en la confianza interpersonal; iii) las prácticas corruptas deterioran la confianza generalizada; y iv) la experiencia con instituciones ineficaces y corruptas impacta negativamente en dicha confianza.

Las características propias de un adecuado desempeño de las instituciones

gubernamentales constituyen un factor clave al observar los niveles de confianza social que predominan en distintos países. La aplicación efectiva de normas y procedimientos por parte de las organizaciones estatales contribuye a mantener y fortalecer la percepción de atención, seguridad y garantías, lo que tiene un efecto positivo en la confianza general de la población. En Bolivia también se evidencia esta influencia, aunque marcada por los bajos niveles promedio de confianza que registran instituciones estatales fundamentales para el funcionamiento de la institucionalidad democrática.

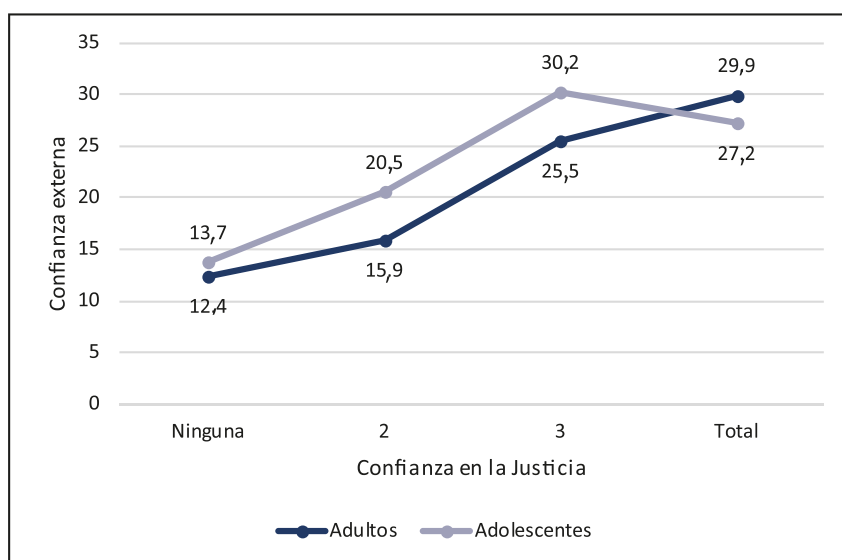
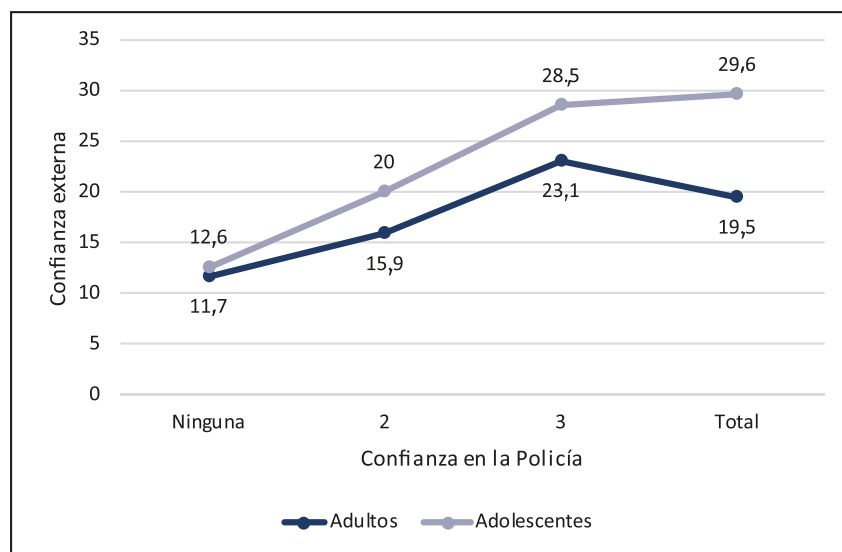
Gráfico 20. Interrelación de la importancia del sistema democrático con la confianza social generalizada, la confianza interna y externa en adultos. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 20 se observa la interrelación entre la importancia atribuida al sistema democrático –en términos de cuán relevante es vivir en un país democrático– y los niveles de confianza interna, confianza externa y confianza social generalizada. La influencia más notable se registra sobre la confianza interna, la cual aumenta progresivamente a medida que se incrementa la valoración del sistema democrático, alcanzando una diferencia de 20 puntos porcentuales entre el grado menor y el mayor. En cuanto a la confianza externa y la confianza social generalizada, la interrelación positiva es innegable, aunque de menor magnitud.

Gráficos 21a y 21b. Relación de la confianza en la Policía (a) y en la Justicia (b) con la confianza externa en adultos y adolescentes. Bolivia, EMV 2024



Fuente: Elaboración propia.

Como ilustra el gráfico 21, la confianza en la justicia, en términos institucionales, presenta una interrelación positiva y creciente con la confianza externa en la población adulta; mientras que, en la población adolescente, dicha interrelación se observa entre la confianza en la policía y la confianza externa. Esta interacción positiva evidencia que bajos niveles de confianza en la justicia y en la policía –en tanto instituciones estatales– se corresponden con bajos niveles de confianza externa. Esta dimensión de la institucionalidad política estatal está directamente correlacionada con la confianza externa y con la confianza social generalizada.

Conclusiones

En una visión comparativa global, Bolivia se mantiene en los últimos lugares en 2024 en cuanto a confianza social generalizada, así como en los niveles de confianza interna y confianza externa. En términos temporales, la confianza externa ha disminuido en ambos grupos poblacionales, aunque de forma más marcada entre la población adulta. Estos resultados muestran continuidad respecto a la situación global; sin embargo, la comparación temporal evidencia una reducción en los promedios alcanzados.

El asociacionismo, entendido como la membresía en organizaciones sociales, voluntarias y políticas, tiene un efecto positivo sobre la confianza externa tanto en la población adulta como en la adolescente. No obstante, el grado de influencia es limitado y restringido a un número reducido de organizaciones. Las organizaciones sociales y políticas no ejercen una influencia significativa en la ampliación de la confianza externa.

La confianza externa presenta una alta sensibilidad generacional, lo que evidencia la ductilidad de la población adolescente en su disposición a aceptar y valorar como confiables a personas ajenas a sus grupos sociales de referencia. La confianza en extraños tiende a ser un atributo distintivo de la población adolescente en Bolivia. Constituido por la confianza endogrupal y exogrupal, el espacio de confianza –según Dehley y Welzel (2012)– divide la combinación entre confianza interna y externa en cuatro cuadrantes que agrupan a las personas según las siguientes características: i) grupo con predominio de confianza interna; ii) grupo con predominio de confianza externa; iii) grupo con la menor combinación posible entre ambas; y iv) grupo con la mayor combinación posible. Así definido, el espacio de confianza revela notables diferencias entre la población adulta y la adolescente en Bolivia. La diferencia más marcada entre ambos grupos se registra en la combinación de baja confianza interna con baja confianza externa, con una brecha de 20 puntos porcentuales mayor en la población adulta. Esta diferencia confirma que la confianza externa declina con la edad y que dicha declinación tiene un efecto relativamente mayor sobre el nivel y alcance de la confianza social generalizada.

Rothstein y Stolle (2008) sostienen que las instituciones encargadas de mantener el orden y administrar el cumplimiento de las leyes tienen, desde una perspectiva comunitaria, la tarea de identificar y sancionar a quienes no son dignos de confianza. La confianza en el sistema judicial (tribunales de justicia) y en la institución policial está positivamente relacionada con la confianza externa: la confianza en los tribunales tiene mayor influencia en la población adolescente, mientras que la

confianza en la policía repercute más en la población adulta. En el caso de Bolivia, esta interrelación positiva está condicionada por dos aspectos que los datos de la EMV 2024 evidencian: bajos niveles de confianza en la justicia y en la policía como instituciones estatales, y bajo nivel de confianza externa. Este hallazgo coincide con la propuesta de Rothstein y Stolle (2008), que advierte sobre la dimensión política de la institucionalidad estatal, en términos de su capacidad para aplicar normas y procedimientos que inciden en la confianza social externa de la población.

Referencias

- Allard, O., Carey, M. y Renault, R. (2016). De l'art de se méfier. *Tracés: Revue de Sciences Humaines* 36, 7-20. <https://doi.org/10.4000/traces.6684>
- Amaral, G.C.M., Sales, T.P., Guizzardi, G. y Porello, D. (2019). Towards a Reference Ontology of Trust. En G. Guizzardi, T.P. Sales, G. Amaral, y D. Porello (Eds.), *On the Move to Meaningful Internet Systems - OTM 2019 Conferences* (pp. 3-21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33246-4_1
- Balsa, C. (2005). Rapports de confiance et reconfiguration du lien social. En C. Balsa (éd.), *Confiance et lien social* (pp. 13-28). Academic Press Fribourg.
- Brehm, J. y Rahn, W. (1997). Individual-level evidence for causes and consequences of social capital. *American Journal of Political Science* 41(3), 999-1023. <https://doi.org/10.2307/2111684>
- Camussi, S. y Mancini, A.L. (2018). Individual trust: does quality of local institutions matter? *Journal of Institutional Economics* 15(3), 487-503. <https://doi.org/10.1017/S1744137418000279>
- Delhey, J. y Welzel, C. (2012). Generalizing Trust: How Outgroup-Trust Grows Beyond Ingroup-Trust. *World Values Research* 5(3), 46-69.
- Delhey, J., Newton, K. y Welzel, C. (2011). How General Is Trust in "Most People"? Solving the Radius of Trust Problem. *American Sociological Review* 76(5) 786-807, <https://doi.org/10.1177/0003122411420817>
- Dinesen, P.T. (2012). Does generalized (Dis)Trust Travel? Examining the impact of cultural heritage and destination-country environment on trust of immigrants. *Political Psychology* 33(4), 495-511. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2012.00886.x>

- Dinesen, P.T. y Bekkers, R. (2017). The foundations of individuals' generalized social trust: a review. En P. Van Lange, B. Rockenbach y T. Yamagishi (Eds.) *Trust in Social Dilemmas* (pp. 77-100). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190630782.003.0005>
- Dinesen, P.T. y Sønderskov K.M. (2018). Ethnic Diversity and Social Trust: A Critical Review of the Literature and Suggestions for a Research Agenda. En E.M. Uslaner (Ed.), *The Oxford Handbook on Social and Political Trust* (pp.175-204). Oxford University Press.
- Erickson, B.D. y Biedenweg, K. (2024). Does Measuring Trust in Groups Also Measure Distrust? It Depends. *Society & Natural Resources* 37(4), 545-563. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2294850>
- Freitag, M. y Bauer, P.C. (2013). Testing for Measurement Equivalence in Surveys: Dimensions of Social Trust Across Cultural Contexts. *Public Opinion Quarterly* 77(1), 24-44. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs064>
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Hamish Hamilton.
- Fukuyama, F. (1999). *Social Capital and Civil Society*. Presented at the IMF Conference on Second Generation Reforms, IMF, Washington, DC.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Glanville, J.L. y Paxton, P. (2007). How do we learn to trust? A confirmatory tetrad analysis of the sources of generalized trust. *Social Psychology Quarterly* 70(3), 230-247. <https://doi.org/10.1177/019027250707000303>
- Granovetter, M.S. (1973). The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology* 78(6), 1360-1380. <https://doi.org/10.1086/225469>
- Hardin, R. (2002). *Trust and Trustworthiness*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hofstede, G. (2021). *Culture's consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations*. SAGE Publications.
- Lahusen, C. (2024). Trust and Distrust in Political Institutions: Conceptual and theoretical reassessments. *Journal of Political Sociology* 2, 80-109. <https://doi.org/10.54195/jps.19659>

- Lewis, R. D. (2006). *When Cultures Collide: Leading Across Cultures*. Nicholas Brealey Publishing.
- Luhmann, N. (1973). *Vertrauen*. Ferdinand Enke Verlag.
- Mishler, W. y Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. *Comparative Political Studies* 34(1), 30-62. <https://doi.org/10.1177/0010414001034001002>
- Muller, E.N. y Seligson, M.A. (1994). Civic culture and democracy: The question of causal relationships. *American Political Science Review* 88(3), 635-652. <https://doi.org/10.2307/2944800>
- Nannestad, P. (2008). What have we learned about generalized trust, if anything? *Annual Review of Political Science* 11, 413-436. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060606.135412>
- Newton, K. y Zmerli, S. (2011). Three forms of trust and their association. *European Political Science Review* 3(2), 169-200. <https://doi.org/10.1017/S1755773910000330>
- Offe, C. (1999). How can we trust our fellowships? En M. Warren (Ed.). *Trust and Democracy* (pp. 42-87). Cambridge University Press.
- Paxton, P. (2007). Association Memberships and Generalized Trust: A Multilevel Model Across 31 Countries. *Social Forces* 86(1), 47-76, <https://doi.org/10.1353/sof.2007.0107>
- Putnam, R.D. (2000). *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Reemtsma, J.P. (2008). *Vertrauen und Gewalt- Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne*. HIS Verlagsgesellschaft mbH.
- Robinson, R.V. y Jackson, E.F. (2001). Is trust in others declining in America? An age-period-cohort analysis. *Social Science Research* 30(1), 117-145. <https://doi.org/10.1006/SSRE.2000.0692>
- Rothstein, B. y Stolle, D. (2008). The State and Social Capital: An Institutional Theory of Generalized Trust. *Comparative Politics* 40(4), 441-459. <https://doi.org/10.5129/001041508X12911362383354>
- Rothstein, B. y Teorell, J. (2008). What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions. *Governance* 21(2), 165-190. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x>

- Schehr, S. (2016). L'expérience ordinaire de la méfiance. *Tracés: Revue de Sciences Humaines* 36, 151-167. <https://doi.org/10.4000/traces.6743>
- Simmel, G. (2013). *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*. Duncker & Humblot GmbH.
- Simpson, J. A. (2007). Foundations of interpersonal trust. En A. W. Kruglanski y E. T. Higgins (Eds.), *Social psychology: Handbook of basic principles* (pp. 587-607). The Guilford Press.
- Sønderskov, K.M. y Dinesen, P.T. (2014). Danish Exceptionalism: Explaining the Unique Increase in Social Trust over the Past 30 Years. *European Sociological Review* 30(6), 782-795. <https://doi.org/10.1093/esr/jcu073>
- Sønderskov, K.M. y Dinesen, P.T. (2016). Trusting the State, Trusting Each Other? The Effect of Institutional Trust on Social Trust. *Political Behavior* 38(1), 179-202. <https://doi.org/10.1007/s11109-015-9322-8>
- Stolle, D. (2001). Clubs and Congregations: The Benefit of Joining Organizations. En K.S. Cook (Ed.) *Trust in Society* (pp. 202-244). Russell Sage Foundation.
- Sztompka, P. (1998). Trust, distrust and two paradoxes of democracy. *European Journal of Social Theory* 1(1), 19-32. <https://doi.org/10.1177/136843198001001003>
- Tarrow, S. (1996). Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflection on Robert Putnam's Making Democracy Work. *American Political Science Review* 90(2), 389-397. <https://doi.org/10.2307/2082892>
- Uslaner, E.M. (2002). *The Moral Foundations of Trust*. Cambridge University Press.
- Uslaner, E.M. (2008). The foundations of trust: macro and micro. *Cambridge Journal of Economics* 32(2), 289-294 <https://doi.org/10.1093/cje/bem039>
- Uslaner, E.M. (2008). The Study of Trust. En E.M. Uslaner (Ed.), *The Oxford Handbook on Social and Political Trust* (pp. 3-13). Oxford University Press.
- Vallier, K. y Weber, M. (2021). Social Trust Introduction. En K. Vallier y M. Weber (Eds.) *Social Trust* (pp. 1-6). Routledge.
- Vallier, K. (2020). *Trust in Polarized Age*. Oxford University Press.

Zhang, M. (2021). Assessing Two Dimensions of Interpersonal Trust: Other-Focused Trust and Propensity to Trust. *Frontiers in Psychology* 12, 654735. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.654735>

Zmerli, S. y Newton, K. (2008). Social trust and attitudes towards democracy. *Public Opinion Quarterly* 72(4), 706-724. <https://doi.org/10.1093/poq/nfn054>

CAPÍTULO 9:

Adolescencia, cuerpos y decisiones: una mirada a los Derechos sexuales y reproductivos en Bolivia

*Zarina Aruzamén Z.
Vivian Schwarz Blum*

Introducción

La autonomía corporal es un derecho fundamental de todas las personas, que incluye el derecho a decidir en libertad y sin coacción sobre el propio cuerpo, el futuro, la salud y la sexualidad. Esto abarca la capacidad de decidir cuándo, cómo, con quién y en qué condiciones ejercerla, incluyendo las decisiones sobre la reproducción.

Frecuentemente, este derecho les es negado a las y los adolescentes bajo el pretexto de que, por ser menores de edad, requieren aún tutelaje y orientación de adultos responsables para tomar decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas. Sin embargo, este no es un derecho humano que se adquiere con la mayoría de edad: es un derecho fundamental. Suprimirlo o ignorarlo constituye una vulneración de los derechos de las y los adolescentes, tanto si lo hace el Estado (a través de cualquier institución o funcionario), como si lo hace la familia o la comunidad.

Este comportamiento está normalizado en Bolivia, una sociedad aún tradicional y conservadora, que asigna un alto valor a la obediencia en la educación de niñas, niños y adolescentes, y poco valor a su independencia.¹ Por ello, en lugar de brindarles información y apoyo para tomar decisiones informadas, las y los adolescentes suelen recibir prejuicios, dogmas, silencio, miedo y vergüenza.

El costo de esta normalización de la vulneración de la autonomía corporal para adolescentes es alto, tanto a nivel individual como social. A nivel individual, las consecuencias se manifiestan en el ejercicio de la sexualidad sin información ni protección; la exposición innecesaria a Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS);

1. Estas preferencias de valores para la educación de las y los niños están detalladas con mayor profundidad en el capítulo 2 de este informe.

una alta vulnerabilidad a la violencia sexual; embarazos y uniones tempranas y forzadas; abortos ilegales riesgosos; interrupción de la educación; riesgos para la salud fisiológica y emocional; limitación de oportunidades laborales y profesionales; extensión de las jornadas laborales sin incremento de ingreso personal; y supresión de la libertad de elegir.

A nivel social, se refuerzan rasgos de una sociedad desigual e injusta que no garantiza ni protege los derechos de las personas; se reduce el logro educativo y el potencial productivo de la sociedad en su conjunto; se evidencian ineficiencias en los servicios de salud y educación que no cumplen con su mandato (educación integral en sexualidad, salud sexual y reproductiva); se incrementa el nivel de riesgo colectivo; y se amplía la demanda de cuidado.

El costo de suprimir la autonomía corporal de las y los adolescentes no es únicamente la vulneración de un derecho fundamental, sino también la pérdida de un futuro sano, libre y sin violencia para las generaciones actuales y futuras. Por ello, resulta imperativo que la sociedad boliviana reexamine los valores y prioridades que sostiene colectivamente. Como población más afectada y como apuesta para transformar comportamientos y reducir los costos actuales de la obstaculización de la autonomía corporal y del ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), este capítulo explora las creencias, percepciones y valores de las y los adolescentes bolivianos sobre estos temas. ¿Qué valor le dan a su autonomía? ¿Cuáles son sus valores respecto a sus DSDR? ¿Consideran que sus derechos están adecuadamente garantizados? ¿Las condiciones para su ejercicio son adecuadas? ¿Tienen acceso suficiente a educación e información relevante para tomar decisiones? ¿Cuentan con los servicios que la normativa nacional debería garantizarles?

Este capítulo está organizado en cuatro secciones: i) Una discusión sobre el ejercicio de la autonomía y de los DSDR por parte de adolescentes en Bolivia; ii) Una descripción de la situación actual y del marco normativo nacional relevante sobre autonomía y DSDR; iii) Hallazgos de la EVA y la EMV, presentados en cinco subsecciones: 1) Valores y percepciones sobre autonomía del cuerpo; 2) Derechos de las y los adolescentes: DSDR y ejercicio de la sexualidad; 3) Educación Integral en Sexualidad (EIS): percepciones y actitudes hacia la EIS; 4) Eliminación de prácticas nocivas que obstaculizan el ejercicio de derechos; 5) Acceso adecuado y oportuno a servicios de salud y educación relevantes; y iv) Una sección de conclusiones y reflexiones finales sobre la complejidad del ejercicio de autonomía y DSDR por parte de las y los adolescentes en Bolivia, y primeros pasos para remover obstáculos.

1. Autonomía y DSDR de adolescentes en Bolivia

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) se definen como el conjunto de derechos humanos que garantizan a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad y reproducción, sin discriminación ni violencia (ONU, 1994; UNFPA, 2014). La adolescencia, definida por organismos internacionales como el período comprendido entre los 10 y 19 años,² representa una etapa crítica de transición entre la infancia y la adultez, caracterizada por cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que determinan la trayectoria vital (UNFPA/OMS, s.f.). Durante esta etapa, el ejercicio de los DSDR permite avanzar hacia la construcción de la identidad, la agencia personal y la autonomía progresiva. Los DSDR en la adolescencia incluyen el acceso a información y Educación Integral en Sexualidad (EIS), a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) seguros y confidenciales, así como la protección frente a prácticas nocivas como el matrimonio infantil temprano, la maternidad forzada o la violencia sexual.

El análisis de los DSDR en la adolescencia parte del reconocimiento de que estos constituyen derechos humanos habilitantes, en tanto permiten ejercer otras libertades fundamentales como la salud, la educación, la participación y la integridad personal. Lejos de ser experiencias privadas, los DSDR se expresan en la capacidad concreta de las y los adolescentes para conocer, habitar y decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida. En esta etapa de transición hacia la adultez se activa la agencia personal y la autonomía progresiva, aunque su ejercicio suele estar condicionado por estructuras normativas, sociales y culturales que responden a lógicas adultocéntricas.³

La Ley N.º 342 de la Juventud reconoce a las y los adolescentes como actores estratégicos del desarrollo, con derecho a participar activamente en la construcción de políticas públicas. Sin embargo, su autonomía, junto con su participación en la formulación de políticas relacionadas con sus necesidades y el ejercicio de sus DSDR, sigue limitada por normas adultocéntricas que no los incluyen en la conversación y, por ende, restringen el ejercicio de sus derechos.

En contextos como el boliviano, donde conviven avances normativos con resistencias culturales al cambio, el reconocimiento legal y simbólico de los DSDR requiere

2. La Ley 548 en Bolivia caracteriza a la adolescencia como la etapa entre los 12 y los 18 años.

3. El adultocentrismo en la gestión de los DSDR supone que sólo las personas adultas son plenamente capaces de decidir, lo que restringe la autonomía de las y los adolescentes e impide reconocerlos como sujetos de derechos.

habilitar procesos de exigibilidad social y canales efectivos para su ejercicio. Su carácter habilitante implica que, cuando son reconocidos, los DSDR permiten el acceso efectivo y no discriminatorio a información, educación, recursos y servicios. Cuando estos derechos se niegan o relativizan, se transforman en privilegios condicionados que profundizan las desigualdades. La ausencia de EIS, el estigma, la desinformación y las prácticas sociales conservadoras refuerzan barreras estructurales que limitan la autonomía corporal y restringen de manera desproporcionada a adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+ y comunidades rurales o indígenas.

En este marco, los valores sociales se convierten en un eje clave para garantizar el ejercicio de derechos. Mientras que en entornos marcados por normas y roles de género rígidos o tradicionales se tiende a restringir la autonomía y el acceso a información y servicios, los contextos que promueven la igualdad y la pluralidad favorecen un mayor reconocimiento de los DSDR como parte del bienestar colectivo y de una ciudadanía plena. Esta tensión entre valores y derechos explica gran parte de las brechas que persisten en Bolivia y constituye el punto de partida para el análisis empírico que desarrolla este capítulo.

2. Situación actual del ejercicio de autonomía y DSDR de parte de adolescentes en Bolivia

En Bolivia, el ejercicio de los DSDR por parte de adolescentes refleja un escenario ambivalente: aunque existen avances normativos y de acceso, persisten factores estructurales e institucionales, así como barreras culturales y de valores, que generan vulneraciones en el ejercicio de derechos. Los datos muestran que los Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranas Forzadas (MUITF) siguen siendo una realidad para adolescentes bolivianos. La Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2023 indica que el 2,5% de mujeres entre 20 y 24 años se unió antes de los 15 años, y el 15% antes de los 18 años, pese a la prohibición legal del matrimonio⁴ establecida en el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548, 2014). Estas uniones, muchas veces naturalizadas socialmente, encubren situaciones de violencia sexual y maternidades forzadas.

El Ministerio de Salud y Deportes (MSyD), a través del Sistema Único de Información

4. La ley prohíbe específicamente los “matrimonios infantiles”, pero deja sin regulación las “uniones tempranas”, que son más frecuentes y más numerosas en Bolivia, incrementando la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes y adolescentes al carecer de protecciones cuando están en unión temprana.

en Salud (SUIS), reportó que entre 2015 y 2023 los embarazos adolescentes (10-19 años) se redujeron de 82.416 a 32.660, mostrando un descenso significativo en casi una década. La cifra de 2018 (58.823 casos) ilustra que la disminución ha sido sostenida y progresiva, aunque aún persisten niveles altos de maternidad temprana (MSyD/SUIS, 2024).

La EDSA 2023 revela que la fecundidad adolescente ha mostrado una reducción sostenida en las últimas dos décadas: en 1998 y 2003 se registraban 84 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años; en 2023 se había reducido a 48 nacimientos por cada mil adolescentes en el promedio nacional. Sin embargo, la brecha entre el área urbana y rural es significativa: 35 nacimientos por cada mil adolescentes en áreas urbanas frente a 88 en áreas rurales. Adicionalmente, representantes de la sociedad civil boliviana presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) datos del SUIS que registraron 2.738 partos en niñas menores de 14 años en 2024, incluyendo 240 partos en menores de 10 años, “lo que significa que cada dos días una niña pequeña se convierte en madre en Bolivia” (Ipas Bolivia, 2025). Aunque el nivel actual de maternidad adolescente sigue siendo muy alto, esta tendencia descendente en el promedio nacional refleja avances importantes en la efectividad de políticas de reducción de la maternidad temprana, principalmente en áreas urbanas, pero menos efectivas en áreas rurales.

El aborto forma parte de los DSDR de las y los adolescentes, aunque no es legal en Bolivia. El Código del Sistema Penal reconoce en su artículo 157 el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo causales específicas, expresadas en la Sentencia Constitucional 0206/2014. La inclusión de este artículo representa un avance en la expansión de los DSDR para adolescentes y mujeres en Bolivia. Su implementación requiere consolidar una normativa técnica integral (consentimiento informado, objeción de conciencia, deberes del personal, modalidades ambulatorias y medicamentosas, entre otros) y su difusión efectiva en toda la cadena de atención, “por tratarse de un derecho cuya garantía incide directamente en la vida y la salud de mujeres y especialmente de niñas y adolescentes” (UNFPA, 2023: 272). Sin embargo, la brecha entre la norma y el acceso real a la atención y servicios es considerable. Las cifras oficiales sobre la ILE reflejan un acceso muy limitado para adolescentes, en parte debido a que se privilegia, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia de los prestadores de servicios de salud por encima de los DSDR de las adolescentes. En 2022, el SNIS reportó 913 procedimientos de ILE, de los cuales el 78 % correspondió a niñas y adolescentes menores de 15 años, lo que visibiliza la gravedad de la maternidad infantil forzada en el país (UNFPA, 2023; MSyD citado en CLADEM

y Observatorio de DSDR, 2023).⁵ De estas 913 ILE, el 60% se realizaron por causal de riesgo a la salud, el 38% por violación y el 2% por malformaciones incompatibles con la vida, con una proporción importante de niñas y adolescentes entre las usuarias (UNFPA, 2023; MSyD citado en CLADEM y Observatorio de DSDR, 2023).

Es importante tener presente que los datos oficiales sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y los DSDR no siempre son consistentes entre diferentes instituciones, lo que agrega una dimensión de complejidad a la implementación adecuada de políticas en esta materia. Por ejemplo, en 2019 la Defensoría del Pueblo informó 32 casos, mientras que el monitoreo de IPAS registró 128 en el mismo año, evidenciando inconsistencias en la aplicación del protocolo y en los sistemas de información (Defensoría del Pueblo, 2019; IPAS Bolivia, 2021).

Los datos oficiales pueden contener un subregistro de la realidad, ya que las cifras de ILE documentadas por el sistema de salud registran únicamente a quienes han acudido al servicio y recibido atención, excluyendo a quienes fueron rechazadas. Este vacío estadístico constituye una de las principales limitaciones para dimensionar el problema y conecta directamente con la discusión más amplia sobre el aborto en general y su expresión mayoritaria en condiciones de clandestinidad e inseguridad. Monitoreos nacionales e internacionales estiman que cada año ocurren entre 67.000 y 110.000 abortos en condiciones inseguras (IPAS Bolivia, 2024; Guttmacher Institute, 2022), lo que evidencia que la gran mayoría de mujeres y adolescentes que enfrentan embarazos no deseados no accede a los servicios que por ley les corresponden, viéndose forzadas a recurrir a prácticas clandestinas. Como resultado, el aborto inseguro se mantiene como una de las principales causas de mortalidad materna en Bolivia (CLADEM y Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, 2023).

Al mismo tiempo, diagnósticos del MSyD y de UNFPA señalan que la edad de inicio de la actividad sexual puede situarse alrededor de los 12 años, particularmente en contextos de vulnerabilidad. El estudio de UNFPA (2021) sobre MUITF recoge testimonios de adolescentes que relatan cómo la decisión no siempre es propia, sino impuesta por presiones familiares o sociales: “Yo no quería, pero mi papá me dijo que me tenía que ir con él... yo tenía 12” (UNFPA, 2021). Estos casos ilustran que, más allá de los promedios nacionales, la vulneración del derecho a decidir sobre el propio cuerpo se expresa de manera dramática en niñas y adolescentes sometidas

5. Entre 2014 y 2021 se documentaron solamente 559 ILE en total en los servicios de salud (MSyD/SNIS, cit. en UNFPA, 2023).

a relaciones y maternidades forzadas. Este dato, aunque estimativo y no recogido en encuestas como la EDSA, refleja la crudeza de la iniciación sexual temprana en el país y su asociación con relaciones desiguales, presión social o violencia (UNFPA Bolivia, 2022; Ministerio de Salud y Deportes, citado en prensa, 2022).

En cuanto al acceso a servicios diferenciados –otro pilar de los DSDR–, el MSyD reportó en 2024 la existencia de 247 centros de Atención Integrada de Adolescentes (AIDA), de los cuales 115 cuentan con certificación de calidad (MSyD, 2024). Estos servicios ofrecen anticoncepción gratuita, consejería y atención en salud sexual y reproductiva, pero la cobertura sigue siendo insuficiente frente a la demanda adolescente, especialmente en áreas rurales e indígenas. La EDSA 2023 confirma la existencia de una brecha significativa en el acceso a anticoncepción entre mujeres adultas (de 19 a 49 años) y adolescentes (de 15 a 19 años), así como entre mujeres casadas o unidas y mujeres solteras. El 65,1% de las mujeres casadas o unidas y sexualmente activas usa métodos anticonceptivos, mientras que en el caso de las mujeres sexualmente activas pero “no unidas” los usa el 91% (INE, 2025: 27).

Estos contrastes revelan que el acceso a la anticoncepción no depende únicamente de la existencia de servicios, sino también de factores sociales y culturales que limitan con especial fuerza la autonomía de las adolescentes casadas o convivientes. En tales contextos, la presión de la pareja, los mandatos tradicionales sobre la maternidad temprana y la falta de poder de decisión actúan como barreras que perpetúan la vulnerabilidad frente a embarazos no planificados, reforzando así los círculos de exclusión y desigualdad de género.

En el plano educativo, la EIS en Bolivia se encuentra normada en el Currículo Base 2023 y reforzada por la Resolución Ministerial 0001/2023, que establece su incorporación obligatoria en todas las unidades educativas del subsistema regular (Ministerio de Educación, 2023). No obstante, la EIS no funciona como asignatura independiente, sino de manera transversal, lo que deja su implementación a la iniciativa y capacidades docentes. Esto ha generado heterogeneidad en la aplicación y una falta de sistematicidad, particularmente en contextos rurales (UNFPA, 2025). Aunque organismos como UNICEF y UNFPA han acompañado con materiales y procesos de formación docente, los avances siguen siendo parciales y persisten resistencias culturales que obstaculizan su despliegue (UNICEF, 2022; UNFPA, 2025). Como resultado, muchos adolescentes continúan recurriendo a fuentes informales para informarse sobre sexualidad. Según UNICEF Bolivia, en el sistema educativo aún subsisten lagunas significativas en la información sexual adecuada, lo que lleva a que jóvenes busquen orientación en pares, medios de comunicación o incluso en

la pornografía, prácticas que a menudo refuerzan estigmas, prejuicios y riesgos (UNICEF, 2022). Esta tendencia de “autoaprendizaje” refleja una falla institucional que impide que los adolescentes accedan de manera segura y fundamentada a conocimientos clave para su bienestar sexual y reproductivo.

En síntesis, las vulneraciones a los DSDR en la adolescencia se explican por factores institucionales (cobertura insuficiente de servicios AIDA, limitaciones en la EIS, falta de aplicación de protocolos de ILE, ausencia de un plan de DSDR actualizado) y culturales (adultocentrismo, valores conservadores, estigma, vergüenza y miedo); estos últimos son foco de atención de la EMV y la EVA. Existen testimonios que muestran que muchas adolescentes prefieren callar antes que enfrentar la estigmatización familiar y comunitaria (Defensoría del Pueblo, 2018), lo que reproduce un círculo de silencio y vulneración.

Desde una perspectiva de valores, los patrones culturales determinan cómo los adolescentes comprenden y ejercen su sexualidad. El adultocentrismo, la moral conservadora y la naturalización de la maternidad temprana limitan la autonomía y legitiman la desinformación como forma de control social. Analizar estas dinámicas permite visibilizar cómo ciertos imaginarios reproducen desigualdades de género y restringen la capacidad de decisión juvenil.

Desde una perspectiva de derechos, los DSDR son derechos humanos habilitantes que permiten el ejercicio de otras libertades fundamentales, pero en la adolescencia suelen verse limitados por la falta de servicios accesibles, la débil implementación de políticas y el estigma. Investigar esta problemática es clave para evidenciar las brechas entre el marco legal y la realidad, aportando insumos para la exigibilidad social y política, y reforzando el reconocimiento de las y los adolescentes como sujetos plenos de derechos y autonomía.

2.1. Marco normativo para el ejercicio de DSDR por adolescentes en Bolivia

El ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) requiere tanto de valores y comportamientos sociales que prioricen la autonomía de decisión y la garantía de derechos por parte de la sociedad civil, como de una estructura institucional de servicios y políticas públicas en salud, educación y prevención, orientadas desde un enfoque de derechos, que protejan y garanticen adecuadamente los DSDR y la autonomía de las y los adolescentes, así como de la población en general. El marco normativo que sustenta los DSDR en Bolivia combina compromisos internacionales y disposiciones nacionales que, en conjunto, reconocen la autonomía

corporal, el derecho a la salud y el acceso a la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Sin embargo, la distancia entre la norma y su aplicación persiste: aunque el país ha avanzado en la adopción de tratados, leyes y resoluciones progresistas, su implementación efectiva sigue siendo parcial, limitada por debilidades institucionales, resistencias culturales y un déficit en la exigibilidad social. La reciente aprobación en Comisión del proyecto de ley que prohíbe los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) refleja una tendencia positiva, pero también evidencia que la plena garantía de los DSDR continúa siendo un desafío pendiente.

A continuación, se presenta una tabla resumen del marco normativo vigente, con una columna que evalúa el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales, como insumo para el análisis de los recursos y servicios necesarios para el ejercicio efectivo de los DSDR.

Tabla 1. Marco normativo general para el ejercicio de DSDR y autonomía de adolescentes en Bolivia

Instrumento	Contenido relevante	Cumplimiento⁶
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979).	Obliga a los Estados a garantizar igualdad de acceso a servicios de salud, incluida la planificación familiar.	Parcial – Marco legal reconoce derechos, pero persisten barreras en servicios y aplicación efectiva.
Convención de los Derechos del Niño (CDN, 1989).	Derecho de niñas/os y adolescentes a la salud, a la información y a la protección frente a violencias.	Parcial – Persisten uniones tempranas y embarazos adolescentes sin respuesta suficiente.
Consenso de Montevideo (2013)	Agenda regional sobre población y desarrollo: acceso universal a salud sexual y reproductiva, aborto seguro, EIS, eliminación de MUITF.	Parcial – Bolivia ha incorporado lineamientos, pero hay brechas grandes en aborto seguro, EIS y servicios diferenciados.
Constitución Política del Estado (CPE, 2009), art. 66.	Reconoce el derecho de hombres y mujeres a decidir sobre su sexualidad y reproducción.	Parcial – Marco legal avanzado, pero limitado en la práctica.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014.	Elimina autorización judicial previa para ILE por violación, incesto o riesgo a la salud/vida.	Parcial – Se mantiene criminalización y obstáculos institucionales.
Resolución Ministerial 027/2015	Procedimiento técnico para prestación de servicios de ILE.	Parcial – Poco conocida y aplicada; existen barreras de objeción de conciencia y desconocimiento.
Código del Sistema Penal 2017 Artículo 157.	Establece las causales para el aborto y la ILE, responsabilidades institucionales y castigos para aborto fuera de las causales.	Precario – No se respetan los parágrafos V, VI y VII de obligatoriedad de provisión del servicio.

6. La evaluación del cumplimiento de la normativa nacional es estimación de las autoras.

Resolución Ministerial 0001/2023	Ordena incorporar la EIS en todas las unidades educativas.	Parcial – Marco vigente, implementación heterogénea y con resistencias.
Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente (2014)	Prohíbe el matrimonio antes de los 18 años.	Parcial – Persisten uniones tempranas y forzadas no registradas.
Proyecto de Ley contra MUITF (2024)	Prohíbe matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas. Aprobado en Comisión de DD.HH. de Diputados en 2024.	Pendiente – En trámite legislativo; de aprobarse reforzará la prohibición ya existente en el Código

Fuente: Elaboración propia.

El marco normativo nacional que debe garantizar los DSDR de adolescentes en Bolivia es relativamente reciente. Más allá de los convenios internacionales firmados por el Estado para la protección de estos derechos, la primera vez que se reconoce este cuerpo normativo en la legislación nacional es en 2009, con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que establece de manera genérica “el derecho de hombres y mujeres sobre su sexualidad y su reproducción”.

Para remover obstáculos al acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) han sido necesarias una Sentencia Constitucional (0206/2014) y una Resolución Ministerial (027/2015). El renovado Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548) prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, pero no contempla instrumentos específicos para prevenir las uniones tempranas. Tres años después, se amplían las causales para la ILE, mediante el artículo 157 del Código Penal (2017), y actualmente continúa en trámite legislativo el Proyecto de Ley contra los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF).

Sin duda, estas inclusiones y reformas representan avances hacia la protección de los DSDR de niñas, niños y adolescentes (NNA) en Bolivia. Todas ellas reconocen principios fundamentales de protección, pero carecen de herramientas preventivas y de recursos claros para implementar integralmente el contenido normativo.

El cumplimiento en la implementación de estas leyes está limitado por la insuficiencia de recursos financieros y humanos, y frecuentemente obstaculizado por elementos de la sociedad civil, como la persistencia de valores tradicionales, prejuicios y prácticas culturales. Estos obstáculos se aprovechan de “áreas grises” en la formulación de políticas públicas para subvertir sus principios, priorizando elementos culturales como la objeción de conciencia por encima de la obligación de garantizar la salud pública. Además de construir nuevas políticas públicas, es urgente mejorar la implementación de las que ya existen.

3. Hallazgos de la EVA y la EMV

A continuación, se presentan los hallazgos de la EVA y la EMV para una serie de preguntas dirigidas exclusivamente a la población adolescente (entre 12 y 17 años) del país, sobre diversas actividades y prácticas vinculadas al ejercicio de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). Cuando la información lo permite, estas percepciones y actitudes se comparan con las de la población adulta y con los datos registrados en la primera ronda de la EVA en 2017, lo que permite iniciar el seguimiento de posibles tendencias en la transformación de los valores relacionados con el ejercicio de los DSDR.⁷

Los hallazgos se organizan en cinco secciones interconectadas: i) actitudes y valores sobre la autonomía del cuerpo y de decisión; ii) condiciones para un ejercicio más pleno de los DSDR; iii) acceso a una Educación Integral en Sexualidad (EIS) adecuada; iv) eliminación de prácticas nocivas que obstaculizan el ejercicio de derechos; y v) acceso garantizado a servicios de salud sexual y reproductiva (SSR). La articulación de estos cinco elementos resulta indispensable para avanzar hacia una garantía más amplia y plena de DSDR para la población adolescente en el país.

3.1. Autonomía corporal y de decisión

Se analizan las percepciones, opiniones y actitudes hacia elementos que afirman espacios de libertad de decisión en todos los ámbitos de la vida, y que pueden contribuir a consolidar el principio de autonomía también en el ámbito privado y en el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). La adolescencia constituye un momento decisivo en la configuración de la agencia, entendida como la capacidad de actuar estratégicamente en función de objetivos propios dentro de estructuras que pueden habilitar o restringir dicha acción (Kågesten *et al.*, 2016; Lee, 2001; UNFPA, 2022). Implica no solo tomar decisiones, sino también dotarlas de sentido, ejercer voz y disputar el orden normativo que regula cuerpos y sexualidades (Kabeer, 1999; Van Reeuwijk y Singh, 2014).

En contextos adultocéntricos, ejercer agencia requiere condiciones institucionales, afectivas y simbólicas que reconozcan a las y los adolescentes como actores

7. Como se explica en el capítulo introductorio de este estudio, los cuestionarios empleados en la EMV y en la EVA no son idénticos; la mayoría de preguntas sobre DSDR se hacen solamente en la EVA. Los hallazgos reportados en este capítulo se concentran, específicamente, en las opiniones y actitudes de la población menor de edad, de 12 a 17 años, porque así se les prioriza como actores centrales de sus DSDR. Incluso cuando se presentan los hallazgos de manera comparativa con la población nacional es para relevar la realidad de las y los adolescentes en este campo.

legítimos. La autonomía progresiva –principio jurídico y ético– sostiene que las y los adolescentes pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, salud y sexualidad en función de su madurez, sin tuteladas innecesarias (Comité de los Derechos del Niño, 2016; UNFPA, 2021). Este enfoque vincula dignidad, libertad corporal y desarrollo integral con el reconocimiento de una ciudadanía en construcción.

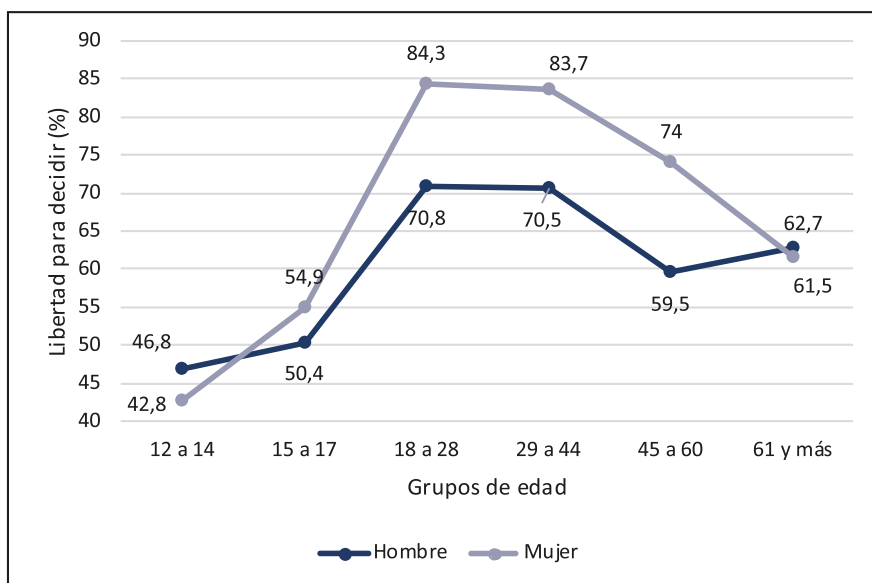
Lejos de concebir la ciudadanía como atributo exclusivo de la adultez, los marcos normativos y teóricos la entienden como una práctica en formación, alimentada por experiencias de participación y liderazgo (Murillo, 2020). Desde el enfoque de empoderamiento integral, la agencia personal se define como la capacidad de tomar decisiones significativas sobre la propia vida; el propósito, como la orientación de esas decisiones hacia proyectos vitales propios; y la acción colectiva, como la posibilidad de incidir junto a otros en los entornos sociales. Articulado con el enfoque de derechos, este marco permite reconocer a las y los adolescentes no sólo como receptores de protección, sino como sujetos plenos de derechos, capaces de ejercer autonomía, exigir condiciones que garanticen su dignidad y participar activamente en la transformación de las estructuras que los limitan.

La EMV y la EVA incluyeron la siguiente pregunta para medir la percepción de libertad para elegir en la vida que tienen las personas:

Algunas personas sienten que tienen total libertad de elegir y control sobre sus vidas, mientras que otras sienten que lo que hacen no tiene un efecto real en lo que les ocurre. Por favor, usa esta escala, en la cual 1 significa “ninguna posibilidad de elegir” y 10 significa “amplias posibilidades de elegir” para indicar cuánta libertad de elección y control sientes que tienes sobre tu vida.

El gráfico 1 presenta los porcentajes de personas que respondieron con las opciones 8, 9 y 10, correspondientes a niveles altos de libertad percibida.

Gráfico 1. Porcentaje de personas que percibe mucha libertad de elección en sus vidas, por edad y sexo. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

El primer elemento para ejercer autonomía es contar con un espacio de libertad para tomar decisiones. El gráfico anterior ilustra una distribución casi natural de esta libertad: es menor entre los menores de edad, se incrementa con la edad, en paralelo al desarrollo profesional, la generación de ingresos y oportunidades, y se reduce ligeramente en la etapa final de la vida, entre la población mayor de 61 años. Dos elementos llaman particularmente la atención. En primer lugar, las mujeres, en todos los grupos de edad, reportan mayores niveles de libertad para decidir que los hombres, con excepción de los grupos de 12 a 14 años y de más de 61 años. Esta diferencia es significativa durante toda la vida adulta, especialmente entre los 30 y 60 años. Más del 80 % de las mujeres entre 18 y 44 años reportan sentir libertad para tomar decisiones.

Además de la libertad para decidir, el ejercicio de la autonomía requiere un nivel saludable de respeto a la diversidad, en este caso, a las diversidades sexuales. La EMV y la EVA incluyeron la siguiente pregunta para medir esta actitud:

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases? Por favor use esta escala en la que 1 significa “completamente en desacuerdo” y 4 significa “completamente de acuerdo”: Las personas que se visten, que actúan o se identifican con el sexo opuesto deben ser tratados igual que cualquier otra persona.

El primer elemento para ejercer autonomía es contar con espacio de libertad para tomar decisiones. El gráfico ilustra una figura casi natural de la distribución de libertad para decidir: es menor entre los menores de edad, se incrementa con la edad con el desarrollo profesional, la generación de ingresos, oportunidades y se reduce algo al final de la vida en la población mayor de 61 años.

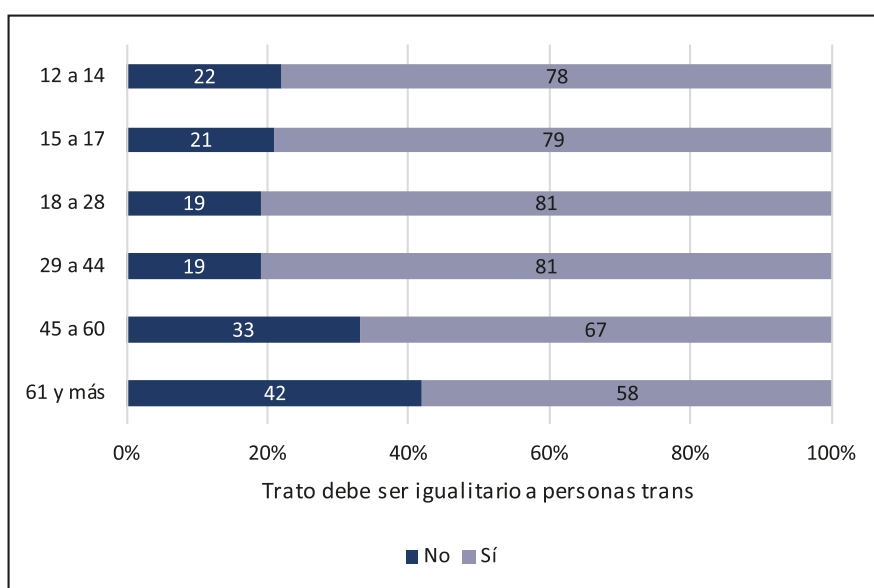
Dos elementos llaman la atención en este caso. En primer lugar, las mujeres en todos los grupos de edad reportan que tienen más libertad para elegir que los hombres, con las únicas excepciones de los grupos de 12 a 14 años y de más de 61 años. Esta distancia es importante durante toda la vida adulta y especialmente entre 30 y 60 años. Por su parte, más del 80% de las mujeres entre 18 y 44 años reportan libertad para decidir.

Además de la libertad para decidir, el ejercicio de autonomía requiere un nivel saludable de respeto a la diversidad, en este caso a las diversidades sexuales. La EMV y la EVA plantearon la siguiente pregunta:

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases? Por favor use esta escala en la que 1 significa “completamente en desacuerdo” y 4 significa “completamente de acuerdo”: Las personas que se visten, que actúan o se identifican con el sexo opuesto deben ser tratados igual que cualquier otra persona.

El gráfico 2 presenta el porcentaje de personas que está “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” con la frase planteada, por grupo de edad.

Gráfico 2. Respeto a la diversidad y al “otro”. Bolivia, EMV y EVA 2024

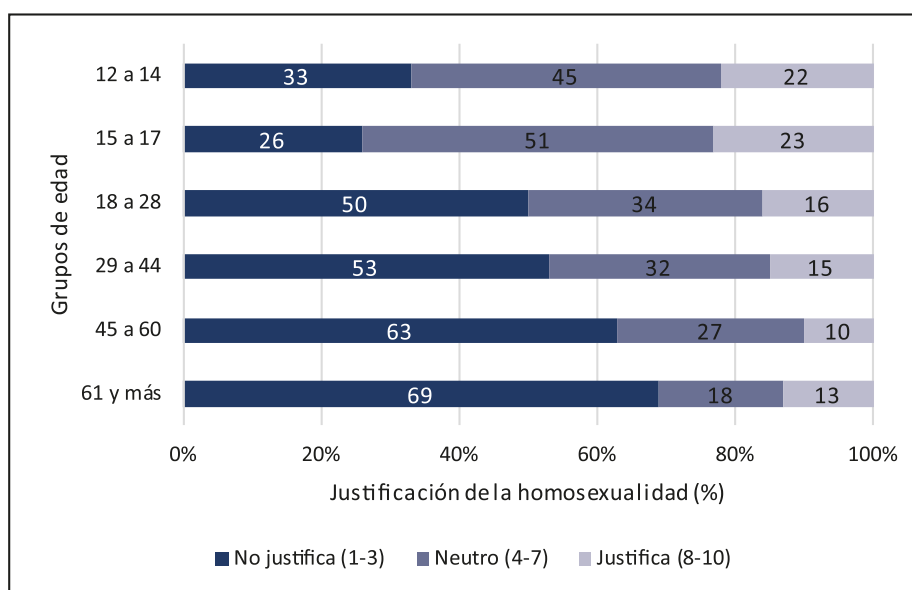


Fuente: Elaboración propia.

Las personas que se visten, actúan o se identifican con el sexo opuesto suelen representar, en términos generales, una figura del “otro” diferente de uno mismo. El grado de respeto hacia personas distintas y lejanas en una escala de valores constituye un indicador de una actitud favorable al ejercicio de la autonomía de decisión, en la medida en que reconoce y afirma el derecho a la autodeterminación. La población joven –tanto adolescentes como adultos jóvenes– muestra mayores niveles de tolerancia hacia estos grupos.

A la pregunta “¿Hasta qué punto se justifica la homosexualidad? (1: Nunca – 10: Siempre)”, la EVA y la EMV confirman que la población adolescente es la más inclusiva del país: el 23% justifica la homosexualidad. Sin embargo, en términos generales, la aceptación de la homosexualidad sigue siendo baja en Bolivia y tiende a disminuir a medida que avanza la edad.

Gráfico 3. Justificación de la homosexualidad, por grupos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2024

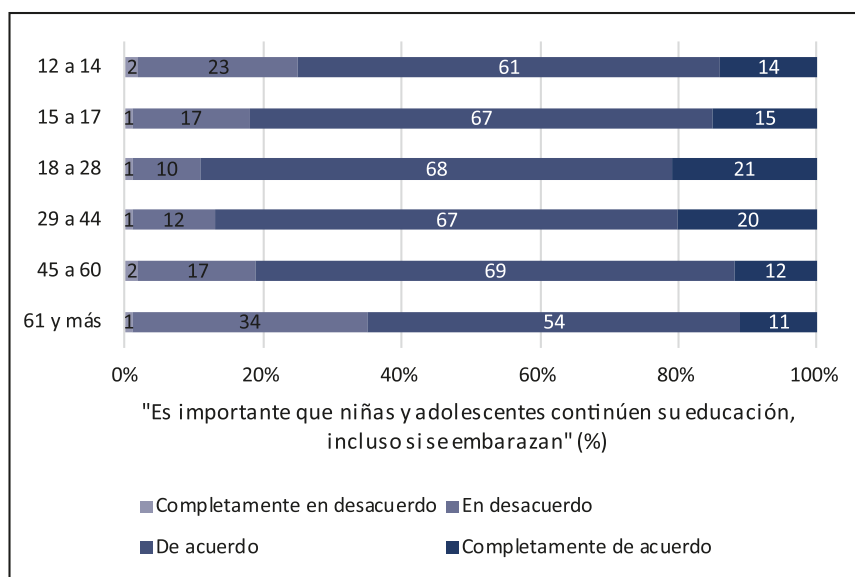


Fuente: Elaboración propia.

La inclusividad y el respeto a la diversidad son actitudes que contribuyen a generar un contexto favorable para el ejercicio de la autonomía de las y los adolescentes sobre su cuerpo y sus decisiones. La educación, en este marco, constituye un recurso indispensable para el desarrollo de dicha autonomía. En particular, la continuidad educativa de las niñas se reconoce como un indicador clave de actitudes sociales que favorecen el ejercicio de decisiones autónomas y el control sobre el propio cuerpo. La EVA y la EMV incluyen la siguiente pregunta al respecto:

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases? Por favor, use esta escala en la que 1 significa “completamente en desacuerdo” y 4 significa “completamente de acuerdo”: *Es importante que las niñas y adolescentes continúen su educación, incluso si se embarazan y tienen hijos.*

Gráfico 4. Percepción de importancia de que las niñas y adolescentes concluyan su educación, incluso si se embarazan. Bolivia, EMV y EVA, 2024



Fuente: Elaboración propia.

Alrededor de una quinta parte de la población en Bolivia rechaza la posibilidad de dar continuidad a la educación de las niñas en caso de embarazo. Esa proporción es relativamente más alta entre las personas adultas que entre adolescentes.

De hecho, los datos de la EMV y la EVA afirman la función clave de la educación para todas y todos los bolivianos, como se aprecia en el gráfico. Más del 80% de la población boliviana entre 15 y 60 años está de acuerdo o muy de acuerdo con la premisa de la pregunta.

El derecho al aborto está relacionado al derecho a la salud y a la vida, además de la autonomía corporal. La aceptación de este derecho suele ser un indicador relevante de una actitud progresista hacia el ejercicio de DSDR y de la autonomía corporal, porque implica la aceptación del derecho a tener control absoluto sobre el propio cuerpo (al decidir tener un aborto fuera de las causales legales) y al tomar una decisión sobre la función reproductiva femenina. Por lo tanto, en este capítulo se analiza esta actitud como el indicador más claro de una actitud conducente a afirmar la autonomía del cuerpo y de las decisiones para los DSDR de las y los adolescentes. La EVA incluye una serie de preguntas sobre causales específicas que podrían

justificar el aborto. Las preguntas son las siguientes:

Para cada una de las siguientes afirmaciones dime, por favor, si piensas: Que siempre están justificadas, que nunca están justificadas o algún otro punto en la escala. (Escala: 1 = nunca está justificado; 10 = siempre está justificado).

El aborto

¿Y el aborto se justifica si el embarazo es producto de una violación?

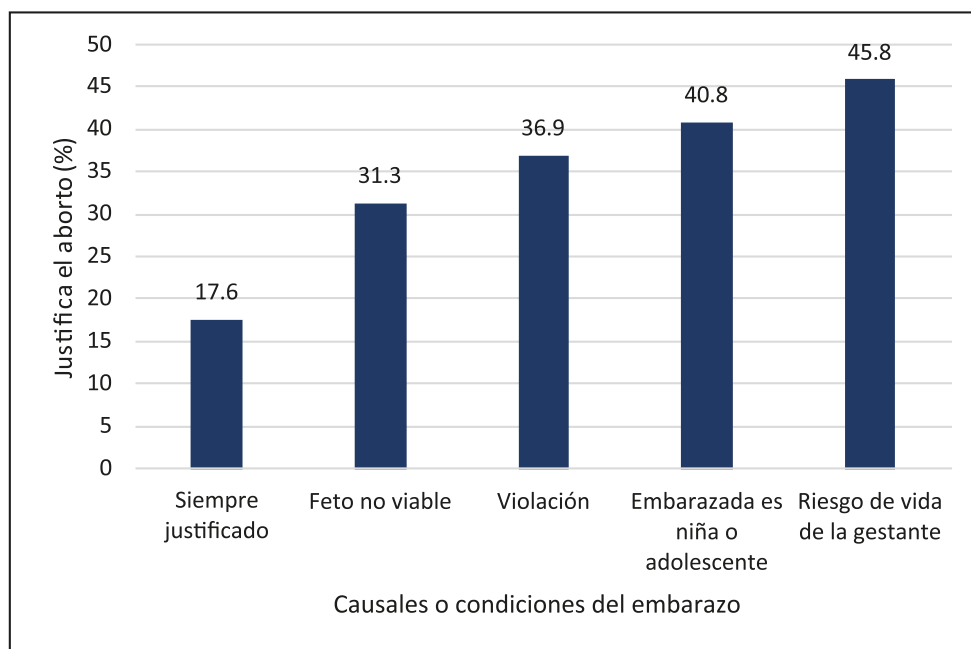
¿Y si está en riesgo la vida de la madre?

¿Si la vida del feto no es viable?

¿Si la embarazada es una niña o adolescente?

El gráfico 5 presenta el porcentaje de personas que responde 8, 9 o 10 para cada una de las opciones.

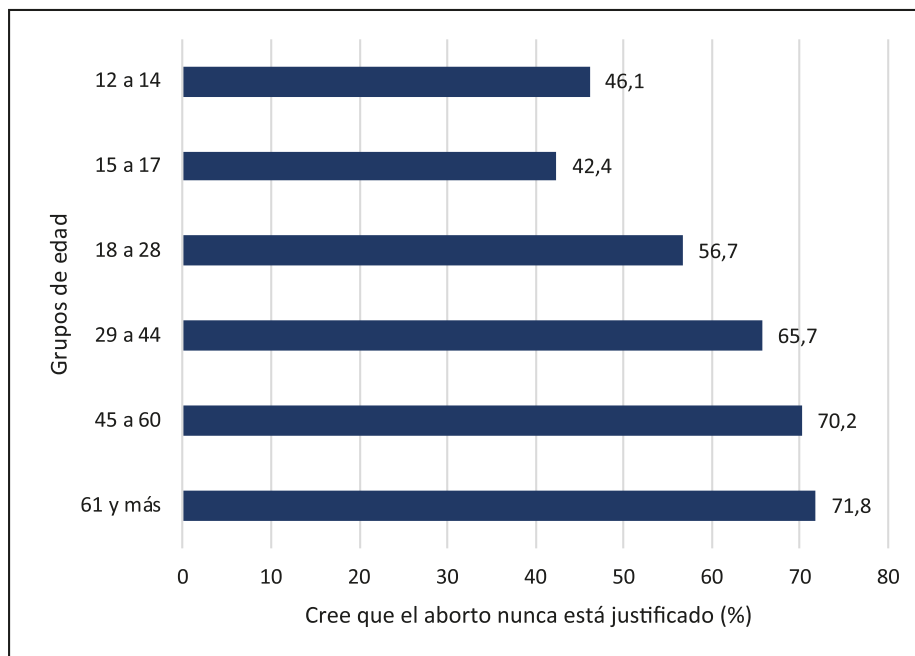
Gráfico 5. Proporción de población adolescente que justifica el aborto, según diferentes causales. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

La proporción de adolescentes que afirma el derecho al aborto varía según las causales específicas, mostrando una tendencia ascendente en los casos más críticos. Según los datos de la EVA, esta afirmación alcanza su punto más alto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre: el 45,8% de las y los adolescentes considera justificado el aborto en esta situación. El 40% aprueba el derecho al aborto cuando la mujer embarazada es menor de edad, y algo más de un tercio (36,9%) lo considera justificado en casos de violación sexual.

Gráfico 6. Proporción de población que rechaza el derecho al aborto en cualquier circunstancia (por grupos de edad). Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

En suma, el contexto ilustrado por estos hallazgos muestra una población adolescente con valores tradicionales en relación con la autonomía del cuerpo y el ejercicio de los DSDR, pero con tendencia a ser más inclusiva, a respetar la diversidad y a reconocer la complejidad en el acceso a derechos como el aborto, en comparación con la población nacional adulta.

3.2. Ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos en adolescentes en Bolivia

Las percepciones sociales sobre sexualidad, reproducción y diversidad no son hechos individuales, sino expresiones de un entramado de valores colectivos que modela cómo se conciben los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR). La teoría de los valores humanos de Schwartz (1992; 2012) muestra que valores como la autodirección y el universalismo favorecen la autonomía corporal, mientras que la conformidad, la tradición o la seguridad tienden a restringirla.

Esta tensión ayuda a explicar por qué, en contextos como el boliviano, persisten narrativas que justifican el matrimonio infantil, rechazan la diversidad sexual o niegan el aborto legal. Los valores se organizan en polos en conflicto: los de conservación social (obediencia, autoridad, moral tradicional) refuerzan patrones adultocéntricos

y patriarcales, mientras que los de cambio abren espacio a la autodeterminación (Schwartz, 2012). Estas estructuras se reflejan en encuestas donde adolescentes reproducen justificaciones de maternidad temprana o rechazo a la Educación Integral en Sexualidad (EIS), reforzadas por la familia, la escuela y la religiosidad.

Desde un enfoque de derechos, garantizar la autonomía corporal exige promover valores de igualdad, diversidad y autodeterminación. Reconocer los DSDR implica no solo marcos legales e institucionales, sino también una transformación cultural y valorativa, ya que las percepciones juveniles son indicadores de matrices sociales que pueden legitimar o cuestionar prácticas discriminatorias (UNFPA, 2014; UNFPA, 2021; OHCHR, 2021).

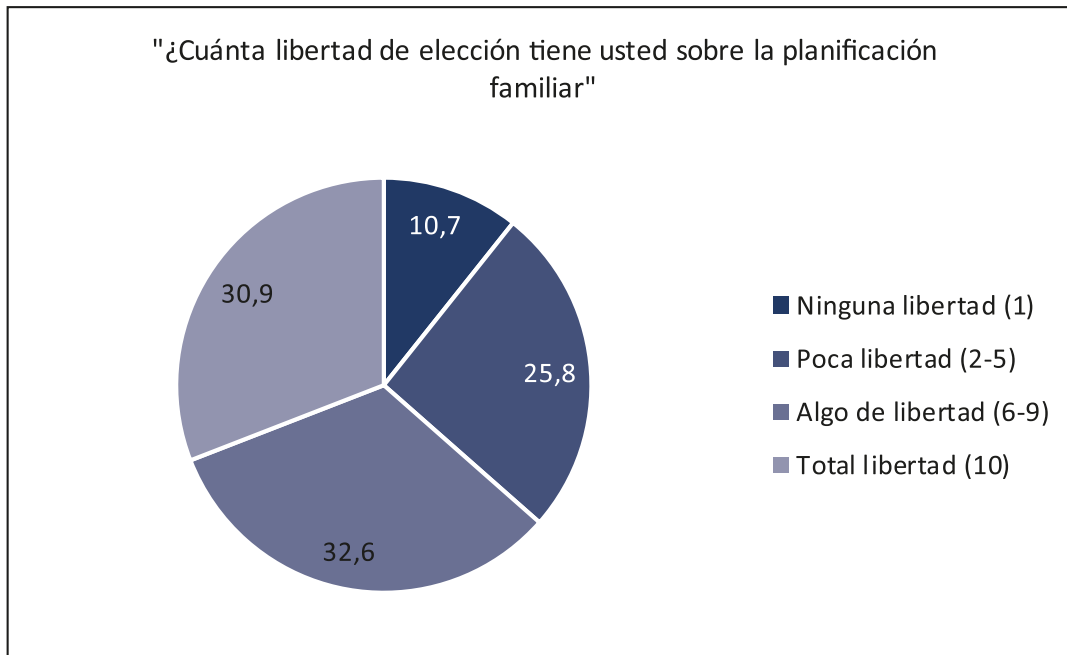
Las percepciones sociales sobre sexualidad, reproducción y diversidad en la adolescencia reflejan un sistema de valores y normas profundamente arraigado que opera como estructura de poder y restringe el ejercicio pleno de los DSDR. Superar esta matriz exige una transformación política, cultural y ética hacia valores democráticos y pluralistas que desplacen la moral punitiva y reconozcan la sexualidad adolescente desde un enfoque de derechos.

Los hallazgos de la EVA exploran percepciones de las y los adolescentes sobre la planificación familiar, el acceso a anticonceptivos y las responsabilidades en la prevención del embarazo. Éstas son expresiones reales y prácticas del ejercicio de los DSDR en la vida cotidiana.

La pregunta planteada en el cuestionario es la siguiente:

¿Cuánta libertad de elección tienes sobre la planificación familiar, es decir, si es que tú decides cuándo y cuántos hijos tener? Por favor use esta escala en la que 1 significa “ninguna libertad para decidir” y 10 significa “total libertad para decidir”.

Gráfico 7. Libertad percibida sobre la planificación familiar entre la población adolescente. Bolivia, EVA 2024



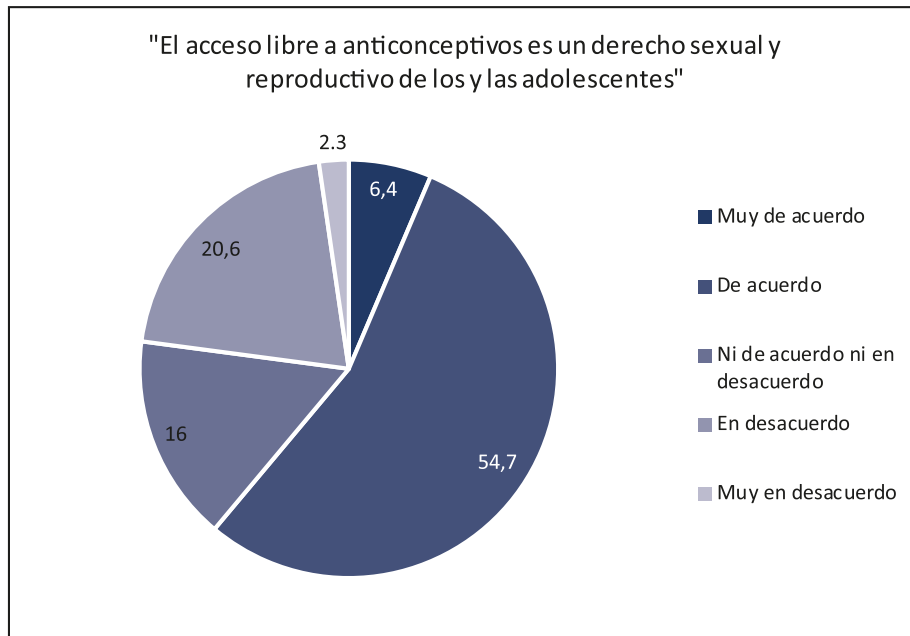
Fuente: Elaboración propia.

Las percepciones de las y los adolescentes en el país sobre su libertad de elección en planificación familiar están divididas. El 36,5% considera que tiene poca o ninguna libertad para decidir sobre la planificación familiar, mientras que el 30,9% sostiene exactamente lo opuesto: que tiene total libertad para elegir. El tercio restante de la población se mantiene en una posición intermedia, afirmando que tiene “algo” de libertad para elegir sobre planificación familiar. Es probable que el acceso diferenciado a SSR y a EIS influya también en la capacidad de elegir con autonomía. Las diferencias con los adultos en relación con este tema se han explorado en un capítulo previo. Un elemento crucial para la libre elección y planificación familiar es el acceso libre e informado a anticonceptivos. Sobre la comprensión del acceso a anticonceptivos como un derecho, la EVA preguntó lo siguiente a los adolescentes encuestados:

El acceso libre a anticonceptivos es un derecho sexual y reproductivo de los y las adolescentes. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo?

El gráfico 8 presenta la distribución de respuestas a esta pregunta entre la muestra de adolescentes.

Gráfico 8. Percepciones de la población adolescente sobre si el acceso libre a anticonceptivos es un DSDR. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los servicios que garantizan el acceso a anticonceptivos en Bolivia son escasos, con programas de corto plazo que facilitan parcialmente el acceso de adolescentes a estos recursos. Las y los usuarios deben enfrentar con frecuencia obstáculos simbólicos como la ignorancia, el miedo y la vergüenza, utilizados como mecanismos para retrasar o impedir el ejercicio de la sexualidad adolescente. Por ello, muchas y muchos no están seguros de si este acceso a anticonceptivos constituye un derecho que les asiste.

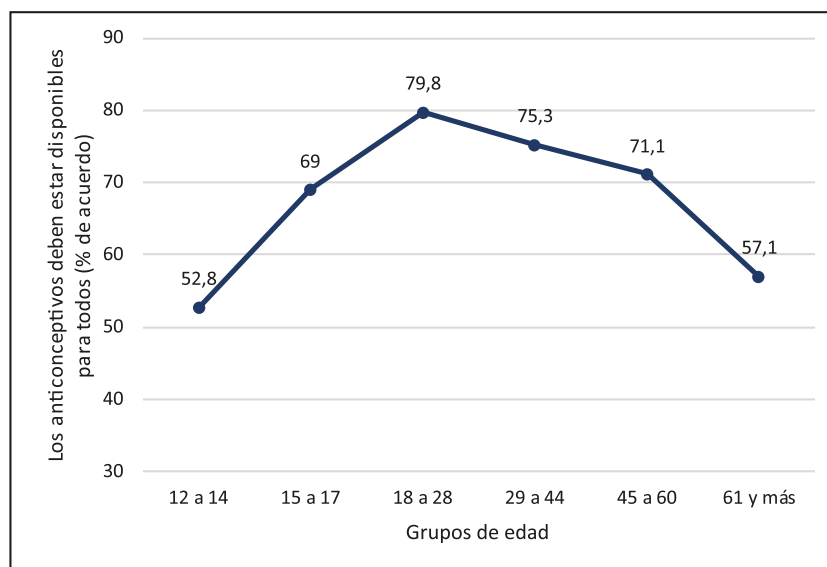
Mientras que la mayoría (61,1%) de las y los adolescentes considera que el acceso libre a anticonceptivos es un derecho propio, casi una cuarta parte (22,9%) no está de acuerdo. Una pregunta similar –aunque no idéntica– realizada en la EVA de 2017 mostraba que, en ese entonces, el porcentaje de adolescentes que reconocía este acceso como un derecho era de apenas 47%.

La población adolescente, particularmente el grupo de 12 a 14 años, es el grupo que menos concuerda con la idea de que los anticonceptivos deberían estar disponibles para todos. El cuestionario de la EMV y la EVA pidió a los encuestados que expresen su nivel de acuerdo con la siguiente frase:

“Los anticonceptivos deberían estar disponibles para todas las personas, sin importar su edad, sexo o estado civil”.

El gráfico 9 muestra el porcentaje de personas que muestra estar de acuerdo con esa frase.

Gráfico 9. Proporción de población que sostiene que los anticonceptivos deben estar disponibles para todos, por grupos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

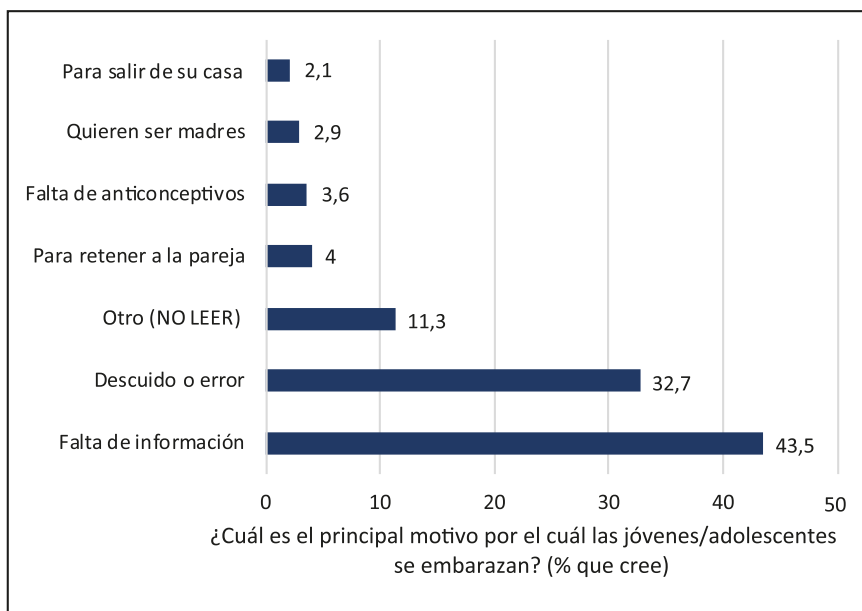
Lo mismo sucede con el grupo de 15 a 17 años, que –con la excepción de sus abuelos (grupo de 61 y más años)– también forma parte del segmento más conservador de la población en cuanto al acceso a anticonceptivos y el reconocimiento de este acceso como un derecho. Sin duda, la Educación Integral en Sexualidad (EIS) –que se analiza en la siguiente sección– es crucial para trabajar con las y los adolescentes en la concientización sobre sus DSDR y los recursos a los que tienen derecho a acceder. Finalmente, no poder planificar la reproducción ni tener acceso a anticonceptivos y preservativos tiene consecuencias, entre ellas la más evidente: el embarazo. La EVA preguntó a las y los adolescentes por qué creen que se embarazan las chicas, formulando la pregunta de la siguiente manera:

En tu opinión, ¿cuál es el principal motivo por el cual las jóvenes/adolescentes se embarazan?

- 1) Descuido o error*
- 2) Falta de información*
- 3) Falta de acceso a anticonceptivos*
- 4) Para retener al novio/pareja*
- 5) Para salir de su casa*
- 6) Quieren ser madres*
- 7) Otro (NO LEER)*

El gráfico 10 presenta las respuestas a esta pregunta.

Gráfico 10. Percepciones sobre el motivo por el que los adolescentes se embarazan. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Aun cuando un tercio de la población adolescente no considera que tiene posibilidad de decidir sobre planificación familiar y un cuarto no está de acuerdo con que se tenga acceso a anticonceptivos, la mayoría de las y los adolescentes entrevistados (43,5%) considera que el principal motivo del embarazo adolescente es la falta de información. El segundo motivo al que se le atribuye mayor relevancia (32,7%) es el descuido o error. Ambas causas son fácilmente prevenibles mediante una implementación adecuada de la EIS, que se aborda en la siguiente sección.

3.3. Educación Integral Sexual (EIS)

La EIS se reconoce como un derecho habilitante, en tanto provee los conocimientos, valores y habilidades necesarios para el ejercicio progresivo de la autonomía y la ciudadanía (UNESCO *et al.*, 2023). No se trata solo de transmitir información biológica, sino de generar capacidades críticas para que la población adolescente comprenda su sexualidad en un marco de dignidad, equidad de género y Derechos Humanos (UNFPA, 2021). En este sentido, la EIS cumple una doble función: preventiva –al reducir embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual y violencia de género– y emancipadora –al permitir decisiones libres e informadas frente a presiones sociales y culturales (WHO *et al.*, 2023). Allí donde se restringe o niega la EIS, no sólo se invisibiliza el derecho a la información, sino que se perpetúan

narrativas adultocéntricas y conservadoras que subordinan a las y los adolescentes a lógicas de control y silencio (Lafontan *et al.*, 2024). Por ello, su implementación efectiva constituye un requisito normativo y ético para garantizar que la sexualidad en la adolescencia no sea gestionada desde la prohibición, sino desde el reconocimiento de derechos.

Para que la autonomía progresiva y la construcción de ciudadanía en la adolescencia se traduzcan en el ejercicio efectivo de los DSDR, se requieren condiciones estructurales y simbólicas que incluyan tanto el acceso a información integral como la disponibilidad de servicios adaptados a sus necesidades.

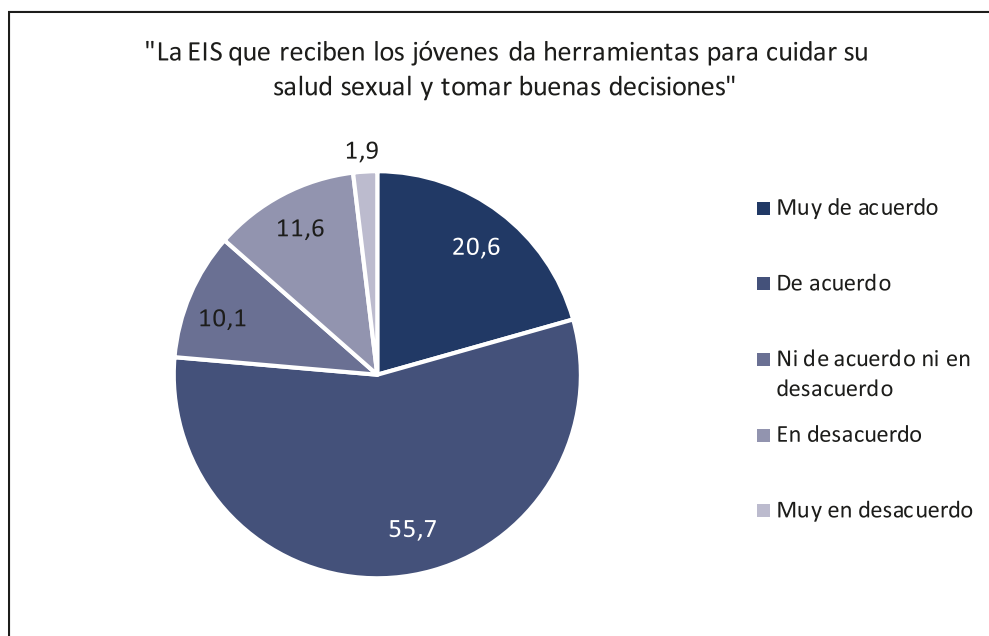
La EIS proporciona contenidos adecuados a la edad y basados en evidencia sobre sexualidad, relaciones, consentimiento, género, salud reproductiva y derechos, fortaleciendo la capacidad de las y los adolescentes para ejercer su autonomía, tomar decisiones informadas y construir ciudadanía con base en la igualdad y el respeto mutuo (WHO *et al.*, 2023). Su ausencia, como ocurre en sistemas educativos influenciados por valores conservadores y adultocéntricos, impide desarrollar competencias críticas sobre el propio cuerpo y la vivencia de la sexualidad, y reproduce narrativas moralizantes que obstaculizan el reconocimiento de estos derechos como legítimos (Lafontan *et al.*, 2024).

La EVA preguntó a los adolescentes encuestados su opinión sobre la EIS, solicitando que expresen su nivel de acuerdo con la siguiente frase:

La educación sexual que reciben los y las jóvenes les da herramientas para cuidar su salud sexual y tomar buenas decisiones.

El gráfico 11 muestra los resultados de esta pregunta.

Gráfico 11. Percepciones sobre la EIS entra la población adolescente, en porcentajes. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

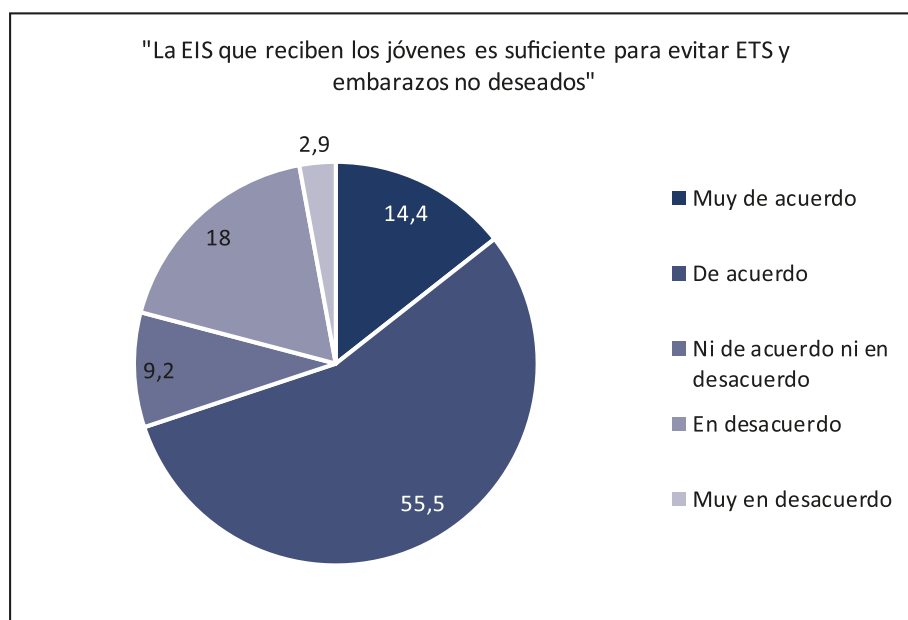
Las y los adolescentes entrevistados en la EVA reportan mayoritariamente (76,3%) que la EIS que reciben en escuelas y colegios les proporcionan herramientas para cuidar su salud sexual y tomar buenas decisiones con respecto al ejercicio de su sexualidad y sus DSDR. Sólo el 13,5% no concuerda con que la EIS brinde dichas herramientas. Desagregando por grupos de edad, la percepción es mucho más favorable entre los adolescentes mayores (de 15 a 17 años) que entre los más jóvenes (de 12 a 14).

Sobre si la EIS que reciben es suficiente para los adolescentes, se pidió a los adolescentes que expresen su nivel de acuerdo con la siguiente frase:

"La educación sexual que reciben las y los jóvenes es suficiente para que se puedan cuidar de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados".

El gráfico 12 presenta porcentualmente los resultados.

Gráfico 12. La EIS es suficiente para cuidarse de ETS y embarazos no planificados. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que el 70% de las y los adolescentes está de acuerdo en que la EIS que reciben como parte de su educación les proporciona información suficiente para cuidarse de las ETS y de embarazos no planificados. Sólo el 20% de esta población expresa expectativas más ambiciosas respecto a recibir una EIS adecuada para sus necesidades y protección. Al cotejar estos datos con la declaración de la sección anterior –que sostiene que los embarazos adolescentes ocurren por falta de información–, es imperativo considerar que la expectativa que tienen las y los adolescentes sobre el tipo, cantidad y calidad de información que deberían recibir mediante la EIS puede estar limitada en relación con sus necesidades reales.

3.4. Prácticas nocivas para el ejercicio de la autonomía y DSDR en adolescentes

Las prácticas nocivas que afectan a niñas y adolescentes –matrimonio temprano, maternidad forzada, violencia sexual, o impedimento del acceso a SSR– se sostienen en normas sociales profundamente arraigadas que reproducen desigualdades de poder y que van en contra de las convenciones normativas e institucionales diseñadas para garantizar y proteger los DSDR de las y los adolescentes. Estas prácticas nocivas se transmiten intergeneracionalmente por medio de valores incuestionables sobre el honor, la obediencia, el control del cuerpo femenino y la sacralización de la

maternidad, lo que explica su persistencia pese a avances legales (UNFPA, 2020; UNFPA y UNICEF, s. f.; Greene, 2019; Taiwo *et al.*, 2023).

Lejos de ser expresiones culturales neutrales, estas prácticas constituyen dispositivos de regulación social que legitiman la intervención sobre cuerpos en situación de vulnerabilidad –especialmente los de mujeres adolescentes– bajo lógicas de tutela, castigo o corrección. En contextos dominados por mandatos de sumisión, recato y heterosexualidad obligatoria, el cuerpo adolescente se representa como objeto vulnerable, peligroso o mercantizable, más que como sujeto de derechos, lo que obstaculiza autonomía y decisiones informadas (UNFPA, 2020; UNFPA y UNICEF, 2022; Greene, 2019). No son anomalías, sino expresiones de un sistema normativo que sanciona cualquier desviación del ideal hegemónico de feminidad y sexualidad. Así, se cristalizan jerarquías de género, edad y clase, mientras la interiorización de estas normas genera que algunas prácticas se asuman como inevitables o deseables, consolidando un sistema que niega el ejercicio pleno de los DSDR.

La EVA implementa una batería de preguntas que explora las creencias, percepciones y actitudes de la población adolescente sobre la existencia, pertinencia y relevancia de algunas de estas prácticas, que se consideran nocivas por obstaculizar el acceso a servicios y por limitar espacios de libertad y acceso a recursos para el ejercicio de DSDR, y de la autonomía del cuerpo de las y los adolescentes. Las preguntas que se hacen son las siguientes:

Por favor dime si las siguientes circunstancias se justifican...

Un matrimonio o una unión antes de los 18 años, se justifica en el caso de un embarazo no planificado.

Es aceptable que hombres mayores tengan parejas adolescentes o niñas.

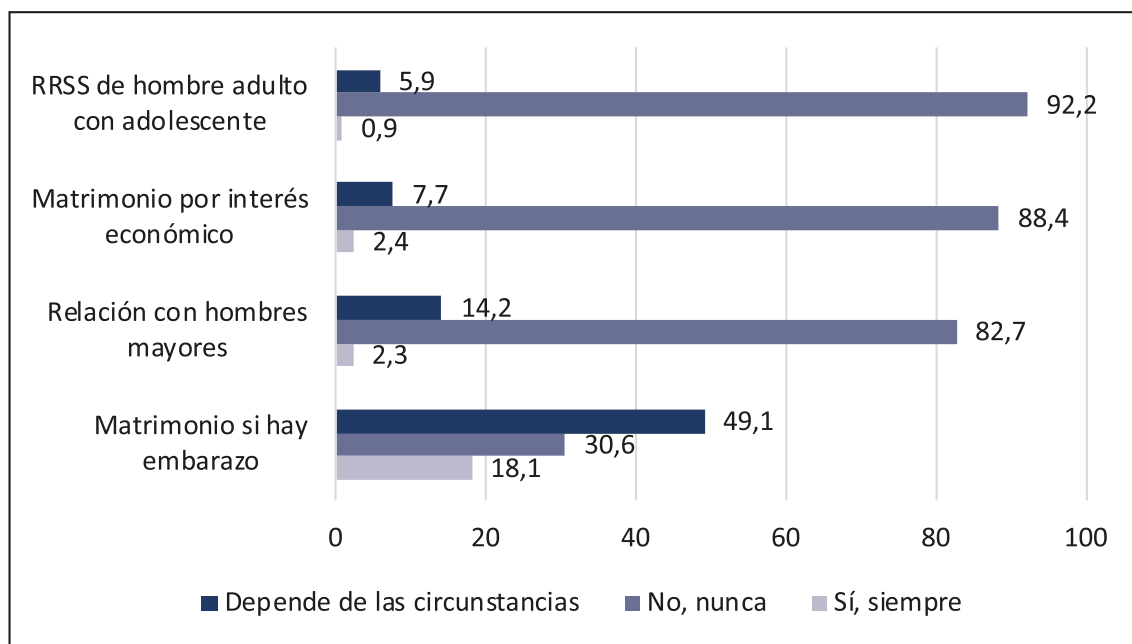
Es aceptable que las familias obliguen a sus hijas a unirse o casarse con hombres mayores por interés económico.

Es aceptable que un hombre adulto tenga relaciones sexuales con una adolescente.

1. Sí, siempre 2. No, Nunca 3. Depende de las circunstancias

El gráfico 13 muestra el porcentaje de respuestas a cada una de ellas.

Gráfico 13. Actitudes de adolescentes hacia prácticas nocivas para la autonomía y los DSDR, en porcentajes. Bolivia, EVA 2024



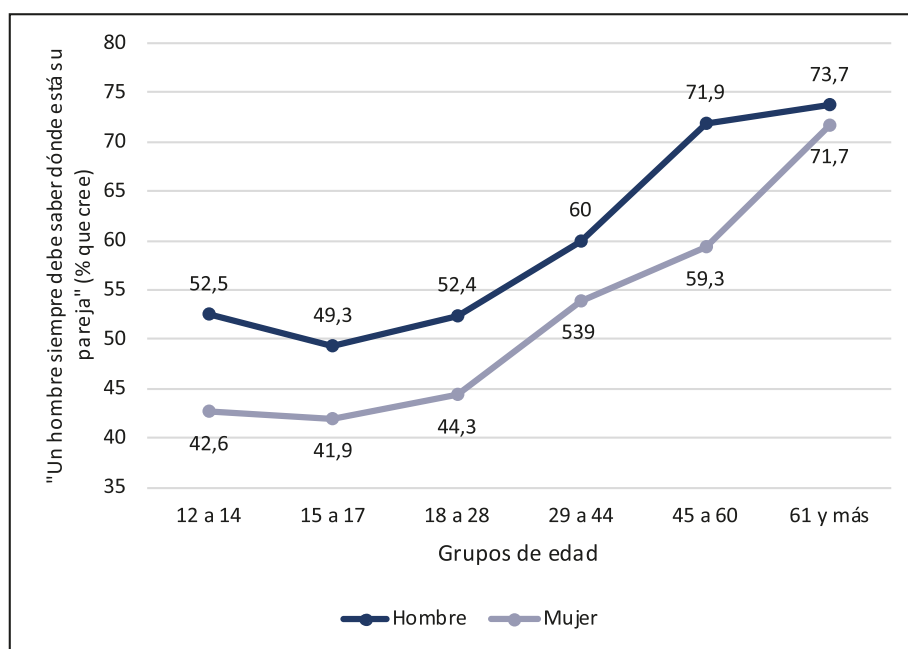
Fuente: Elaboración propia.

De las cuatro prácticas nocivas que se presentaron a las y los adolescentes entrevistados, éstos reportan un rechazo rotundo a las relaciones sexuales entre un adulto y un/a adolescente, a relaciones con hombres mayores y al matrimonio por interés económico, pero su postura es diferente en el caso de matrimonio por embarazo. Casi la mitad de adolescentes (49,1%) señala que, en ese caso, depende de las circunstancias, lo que es una postura realista y abierta a la complejidad de una situación de ese tipo. El 18% de las y los adolescentes considera, en cambio, que en caso de embarazo siempre debería haber un matrimonio, independientemente de la edad de la mujer embarazada o de las circunstancias del embarazo.

Este hallazgo debe ser tomado en cuenta, dado que una de las prácticas más nocivas para el ejercicio de DSDR y la autonomía del cuerpo de las y los adolescentes es la unión temprana, en cualquiera de sus expresiones: unión forzada, matrimonio infantil, embarazo temprano. Estas prácticas están prohibidas en la normativa nacional y aunque la Ley N.º 1639, promulgada en septiembre de 2025, prohíbe el matrimonio y la unión antes de los 18 años, todavía son necesarias las políticas y los recursos para eliminar las áreas grises que continúan normalizando esta figura en la vida de demasiadas adolescentes en el país.

El control es otra práctica nociva que directamente atenta contra la libertad necesaria para ejercer autonomía sobre las decisiones y el cuerpo. En este caso, la forma de control que se plantea a las y los adolescentes implica una tutela masculina sobre la pareja. La EMV y la EVA preguntan el nivel de acuerdo con la siguiente frase: “Un hombre debe saber siempre dónde está su pareja”. El gráfico 14 presente el porcentaje de personas que está de acuerdo con la misma según sexo y grupo de edad.

Gráfico 14. Percepciones sobre el control en la pareja, por grupos de edad y sexo. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran un resultado alentador: las y los adolescentes de 12 a 14 y de 15 a 17 años son los grupos etarios que menos concuerdan con esta premisa de control. Los hombres están más de acuerdo con esta premisa que las mujeres y esto es cierto para toda la población nacional. Sin embargo, la distancia entre hombres y mujeres es mayor en el grupo de 12 a 14 años y en el de 45 a 60 años (de 10 o más puntos porcentuales), lo que indica la necesidad de trabajar con estos valores que refuerzan la desigualdad de género en el balance de poder en la relación.

Algo similar ocurre cuando se pregunta sobre la posibilidad de interferir o no en la protección de víctimas de violencia familiar. La violencia es uno de los elementos más corrosivos para la autonomía personal, la autonomía del cuerpo y el ejercicio de DSDR. A través de la intimidación, la agresión y la vergüenza, se refuerza la

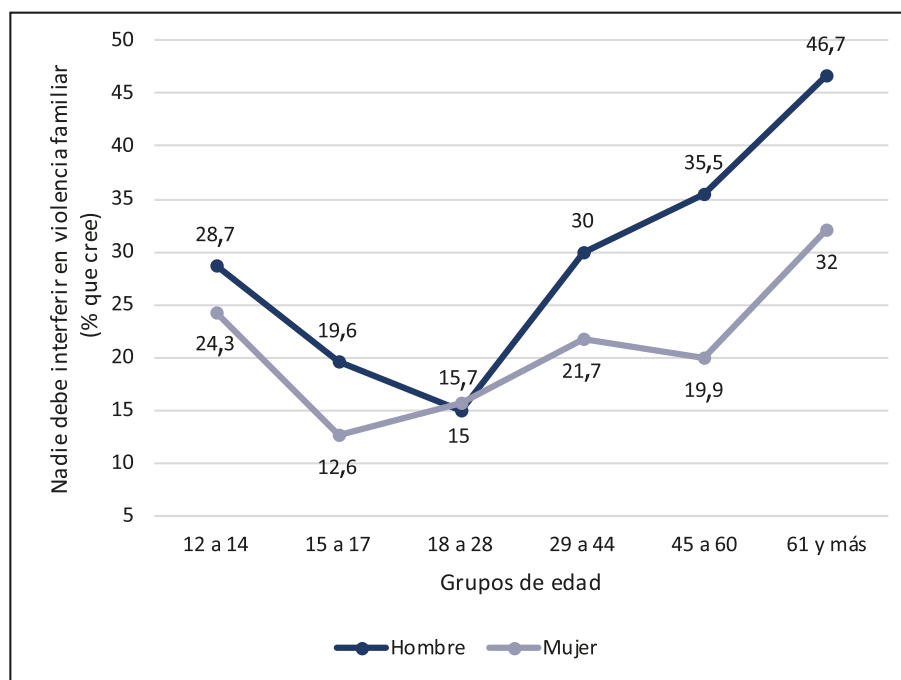
dependencia de la víctima y la asimetría de poder en favor del agresor. Por tanto, al estudiar las distintas posturas sobre este tema, se explora no sólo a proteger, sino también a sostener las condiciones para la autonomía de las personas.

La encuesta pidió a los entrevistados que expresen su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación:

“Nadie debe interferir cuando hay violencia dentro de una familia”.

Los resultados se presentan en el gráfico 15, que presenta porcentajes que están de acuerdo con la afirmación por grupos de edad y sexo.

Gráfico 15. Porcentaje de población que está de acuerdo con no intervenir en la violencia (por edad y sexo). Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los resultados revelan un patrón de percepciones de valor similar al observado en la situación de control masculino: las mujeres en el país apoyan la postura no intervencionista menos que los hombres. En ambos casos, las y los jóvenes son más reacios que los grupos mayores a apoyar la indiferencia ante la violencia. Sin embargo, el grupo de 12 a 14 años –tanto de mujeres como de hombres–, muestran niveles de conservadurismo similares a los de sus contrapartes de 29 a 44 años. Los grupos que más rechazan este postulado son las mujeres de 15 a 17 años y los hombres de 18 a 28 años.

Los hallazgos sugieren una población conservadora que tiende a reforzar la desigualdad en las relaciones de pareja y a rechazar el derecho al aborto, incluso en circunstancias reconocidas como causales legales en la normativa nacional. Al mismo tiempo, evidencian una población adolescente y joven más abierta a la igualdad en las relaciones y a revertir prácticas nocivas que perjudican y dañan la vida de miles de niñas y adolescentes en el país.

3.5. Acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR)

El acceso a servicios diferenciados de SSR constituye un eje sustantivo de los DSDR. La teoría de derechos humanos enfatiza que la salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino al acceso universal, oportuno y no discriminatorio a servicios adecuados (OHCHR, 2021). Para adolescentes, esto implica servicios diseñados con criterios de confidencialidad, respeto y pertinencia cultural, que reconozcan las barreras de edad, género y estigma (UNFPA, 2020).

Su ausencia genera una vulneración estructural: adolescentes que enfrentan embarazos tempranos, violencia sexual o necesidad de anticoncepción suelen encontrar servicios saturados, escasamente diferenciados o restrictivos, lo que erosiona su agencia y confianza institucional (Center for Reproductive Rights y UNFPA, 2018). Los servicios diferenciados no son un “complemento” de las políticas públicas, sino una condición material que define si los DSDR existen como derechos exigibles o permanecen como meras declaraciones normativas. El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N.º 20, reafirma que los adolescentes deben ser reconocidos como titulares de derechos con capacidad progresiva para decidir sobre su salud y sexualidad sin una tutela excesiva (UN Committee on the Rights of the Child, 2016).

En segundo lugar, el acceso a servicios de SSR diferenciados constituye una dimensión central de los DSDR. La evidencia internacional sostiene que estos servicios deben ser amigables, confidenciales, inclusivos y culturalmente pertinentes, garantizando no sólo su existencia formal sino su apropiación por parte de los y las adolescentes (UNFPA, 2020; WHO *et al.*, 2023). La falta de tales servicios –como lo demuestra el análisis en contextos rurales, indígenas o marcados por la desigualdad– impone barreras estructurales y simbólicas que limitan el ejercicio autónomo de los derechos, perpetúan el estigma y refuerzan la exclusión juvenil del sistema de salud (Chandramouli, 2025; Center for Reproductive Rights y UNFPA, 2018). La combinación entre desinformación, escasa oferta diferenciada y percepción de juicio o discriminación por parte del personal de salud limita la confianza en las

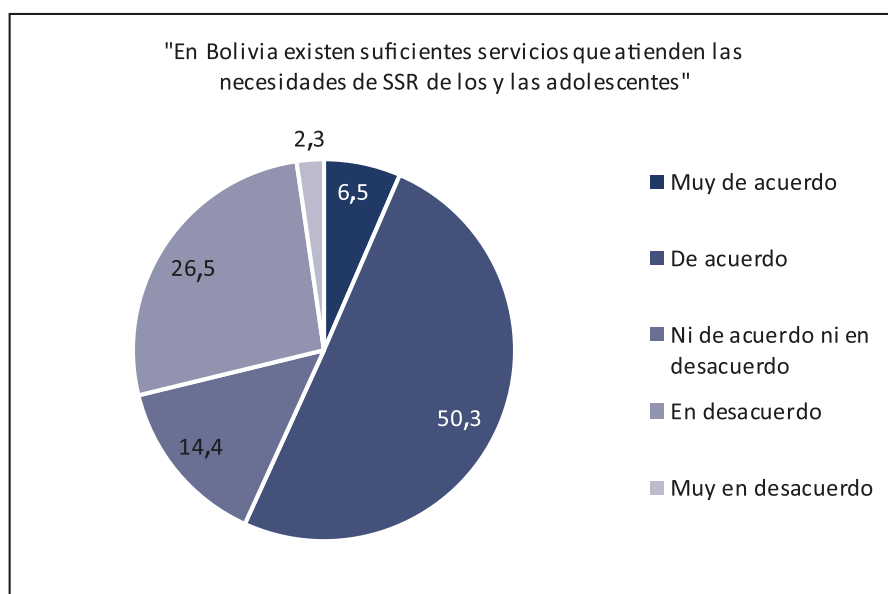
instituciones, lo que a su vez debilita el desarrollo de agencia, dignidad y autonomía corporal en esta etapa vital (UNFPA LAC, 2021).

Los datos de la ronda 2024 de la EVA muestran que, al igual que en la sección sobre la EIS, la expectativa de la población adolescente sobre la calidad y cantidad de acceso a servicios de SSR puede estar limitada por prejuicios culturales más que estar anclada en sus necesidades reales. La encuesta les pidió a los adolescentes encuestados que expresaran su nivel de acuerdo con la siguiente frase:

En Bolivia existen suficientes servicios que atienden las necesidades de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.

El gráfico 16 presenta la distribución porcentual de respuestas a esta pregunta.

Gráfico 16. Percepción de la población adolescente sobre la suficiencia de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva existentes. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Mientras que 56,8% de las y los adolescentes están de acuerdo con que en el país existe suficiente oferta institucional para atender las necesidades de SSR, también hay un 28,8% que están insatisfechos con los recursos institucionales disponibles. Para el acceso de las y los adolescentes en el país se presentan obstáculos institucionales reiterados (como incumplimientos procedimentales, objeción de conciencia mal gestionada, exigencias adicionales) y contextos de estigma, miedo y desinformación que disuaden a usuarias/os de solicitar el servicio, especialmente a

niñas y adolescentes.

La EVA también preguntó a las y los adolescentes si es que utilizan servicios de salud disponibles para ellos, mediante las siguientes preguntas:

Durante los últimos 12 meses, ¿asististe a algún establecimiento de salud?

¿Qué atención recibiste? (múltiple) (LEER)

a. Odontología / dentista

b. Control general

c. Oftalmología

d. Información sobre métodos anticonceptivos o SSR

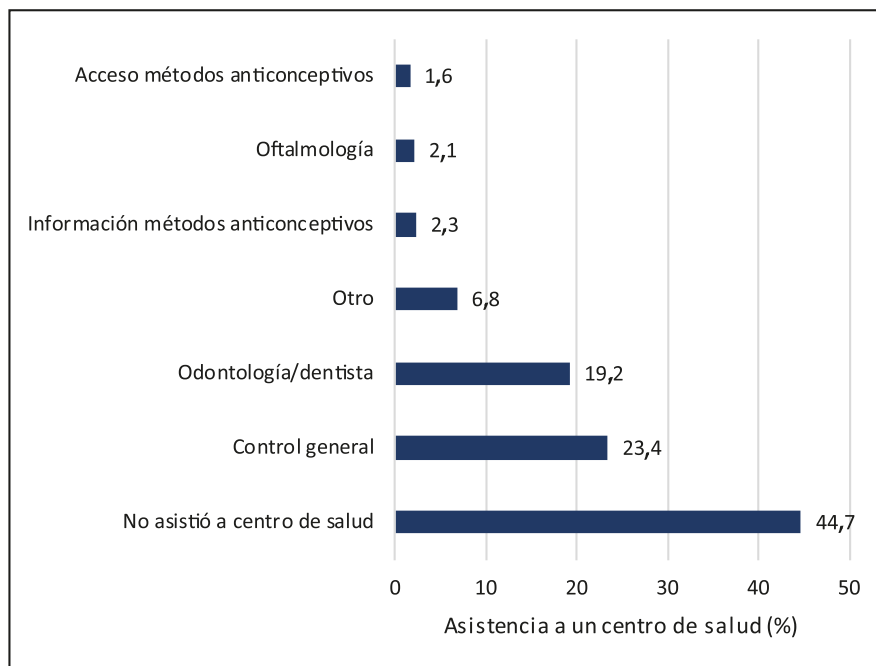
e. Acceso a métodos anticonceptivos

f. Otra

¿Alguna vez recibiste orientación sobre métodos anticonceptivos o Salud Sexual y Reproductiva – SSR?

El gráfico 17 presenta los resultados de la pregunta inicial.

Gráfico 17. Acceso a servicios de salud por parte de adolescentes. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

La experiencia real de acceso a servicios de salud en general (no sólo sexual y reproductiva) de las y los adolescentes en Bolivia es muy limitada. Aunque dos terceras partes de la población adolescente afirma haber recibido alguna vez

orientación sobre métodos anticonceptivos, prácticamente la mitad (44,7%) nunca asistió al centro de salud, y quienes lo hicieron atendieron asuntos de salud general. Sólo el 3,9% de los y las adolescentes reporta haber acudido a un centro de salud para obtener información o acceso a anticonceptivos.

Es muy probable que el 6,8% que no declara el motivo de su visita haya buscado la misma información. Aun así, el uso real de los servicios de salud para atender necesidades de SSR y de DSDR sigue siendo reducido entre la población adolescente.

Conclusiones

Bolivia ha dado pasos significativos en el plano normativo, con instrumentos como la Sentencia Constitucional 0206/2014 que amplió el acceso a la ILE, la Resolución Ministerial 0001/2023, que ordena la incorporación de la EIS en todas las unidades educativas; y, más recientemente, el anteproyecto de Ley 092/2024-2025, que busca prohibir de manera expresa los matrimonios y uniones tempranas. Estos avances configuran un marco jurídico robusto en el papel, alineado con estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento normativo, aunque necesario, no es suficiente para transformar las experiencias cotidianas de las y los adolescentes. El reto sigue siendo traducir estas disposiciones en políticas efectivas y prácticas sostenidas que garanticen el acceso real a los DSDR.

A nivel institucional persisten barreras estructurales que socavan la eficacia de la normativa. La cobertura de los servicios diferenciados resulta limitada, especialmente en áreas rurales; la implementación de la EIS es desigual y depende en gran medida de la voluntad y capacidad docente; y la aplicación de protocolos de ILE se enfrenta a trabas burocráticas, objeciones de conciencia y exigencias indebidas. Estas limitaciones reproducen desigualdades y desalientan a las y los adolescentes de acudir a los servicios, generando un desfase evidente entre lo que la norma garantiza y lo que en la práctica se experimenta.

Un aspecto decisivo es la persistencia de ejes críticos que atraviesan de manera transversal el ejercicio de los DSDR la adolescencia. Las uniones tempranas continúan reproduciendo ciclos de desigualdad y limitando la autonomía, pues muchas adolescentes interrumpen sus trayectorias educativas y ven restringidas sus posibilidades de desarrollo. El embarazo adolescente, aunque con tendencia a la baja, sigue siendo un indicador sensible de exclusión social y de vacíos en el acceso a información y servicios oportunos, mostrando cómo los proyectos de vida juveniles se ven condicionados por patrones culturales y estructuras adultocéntricas. En

cuanto al aborto, el subregistro y la persistencia de prácticas inseguras revelan la distancia entre los marcos normativos que lo permiten, bajo causales específicas, y la posibilidad real de acceder a servicios de salud seguros y confidenciales. La encuesta evidencia que, si bien existe cierto reconocimiento de estos problemas, persisten percepciones ambiguas y valores conservadores que normalizan o minimizan estas situaciones, lo cual perpetúa la vulneración de derechos.

A estas limitaciones se suman percepciones sociales que operan como dispositivos de control simbólico. La encuesta evidencia que la sexualidad sigue siendo un tema tabú, difícil de abordar, con fuentes limitadas de información para la población adolescente. Desde la perspectiva de valores, se observan tensiones: mientras se reconocen ciertos derechos vinculados a la salud y la educación, persisten valores conservadores ligados a la tradición y la conformidad. Este entramado normativo-cultural refuerza la distancia entre lo formalmente garantizado y lo efectivamente vivido, reproduciendo silencios, estigmas y desigualdades. El panorama, por tanto, revela una paradoja: existe un andamiaje legal progresista y esfuerzos institucionales que apuntan al reconocimiento de los DSDR, pero al mismo tiempo persisten brechas estructurales y resistencias culturales que relativizan estos derechos. Al ser los DSDR derechos habilitantes que determinan la agencia, la dignidad y la ciudadanía de las y los adolescentes, su limitación implica perpetuar prácticas nocivas y valores restrictivos, mientras que su garantía plena requiere transformar tanto las instituciones como las matrices culturales. La encuesta confirma que el desafío no radica sólo en ampliar la cobertura de servicios, sino en disputar valores y percepciones que naturalizan la vulneración, y avanzar hacia una transformación integral que reconozca a la adolescencia como etapa de derechos y no solo de tutelas.

Referencias

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (2017). Ley N.º 1005 de 20 de diciembre de 2017. Código del Sistema Penal.

Center for Reproductive Rights y UNFPA (2018). *Derechos sexuales y reproductivos de adolescentes: servicios amigables y diferenciados en América Latina*. Nueva York: CRR/UNFPA.

CLADEM y Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (2023). *Informe Alerta Montevideo: Derechos sexuales y reproductivos en Bolivia*. Montevideo: CLADEM.

Comité de los Derechos del Niño (CRC) (2016). Observación General N.º 20: La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. Naciones Unidas.

Defensoría del Pueblo (2019). *Informe de gestión 2019*. La Paz: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Defensoría del Pueblo (2023). *Informe de gestión 2023*. La Paz: Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia.

Guttmacher Institute (2022). *Abortion in Latin America and the Caribbean*. New York: Guttmacher Institute.

INE Bolivia (2025). *Fecundidad y Maternidad. Documento temático. Encuesta de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva – Bolivia 2023*. La Paz: INE/MSyD.

IPAS Bolivia (2021). *Monitoreo de la Interrupción Legal del Embarazo en Bolivia*. La Paz: IPAS Bolivia.

IPAS Bolivia (2024). *Aborto clandestino: un mal que cobra vidas en Bolivia año tras año*. La Paz: IPAS Bolivia.

Kågesten, A., Gibbs, S., Blum, R. W., Moreau, C., Chandra-Mouli, V., Herbert, A., y Amin, A. (2021). *Understanding factors that shape gender attitudes in early adolescence globally: A mixed-methods systematic review*. PLoS One, 11(6), e0157805.

Lafontan, S., Gómez, A., y Rivera, C. (2024). *Adolescentes, derechos y sexualidad: debates contemporáneos en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Ministerio de Educación (2023). *Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional*. La Paz: Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ministerio de Educación (2023). Resolución Ministerial 0001/2023, Normas de gestión educativa para el subsistema de educación regular. La Paz: Ministerio de Educación.

Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) (2024). *Informe nacional de servicios de salud sexual y reproductiva*. La Paz: MSyD.

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) (2021). *Sexual and reproductive health and rights are human rights*. Geneva: United Nations.

- Orozco-Idárraga, N., Rodríguez, A., y Vélez, C. (2021). Los derechos sexuales y reproductivos como parte del bienestar colectivo. *Revista Latinoamericana de Derechos Humanos*, 12(1), 45-63.
- Taiwo, O., *et al.* (2023). Cultural norms and adolescent sexual health: Evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of Adolescent Health*, 72(5), 654-662.
- UNESCO, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS (2023). *Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en evidencia*. París: UNESCO.
- UNFPA (2008). *Estado de la Población Mundial 2008: Reaching Common Ground*. Nueva York: UNFPA.
- UNFPA (2014). *Estado de la Población Mundial 2014: El poder de 1.800 millones*. Nueva York: UNFPA.
- UNFPA Bolivia (2021). Schwarz, Vivian (inv. principal) *Uniones tempranas en menores de 16 años en la zona de la Cordillera de los municipios de Tiquipaya y Sacaba*. La Paz: UNFPA Bolivia.
- UNFPA (2020). *Servicios de salud sexual y reproductiva amigables para adolescentes y jóvenes*. Nueva York: UNFPA.
- UNFPA (2021). *My Body is My Own: Claiming the Right to Autonomy and Self-Determination*. Nueva York: UNFPA.
- UNFPA (2023). *Revisión sobre derechos sexuales y reproductivos en Bolivia* (cap. 9). La Paz: UNFPA Bolivia.
- UNFPA Bolivia (2025). *Formando con igualdad y derechos: EIS dentro de la escuela (2021-2025)*. La Paz: UNFPA Bolivia.
- WHO, UNESCO, UNFPA y UNICEF (2023). *Adolescent sexual and reproductive health and rights: Global evidence and guidance*. Geneva: WHO.

CAPÍTULO 10:

Los valores de la población adolescente en Bolivia

Natasha Morales Escoffier

Introducción

La adolescencia constituye una etapa crítica del ciclo vital, marcada por profundos procesos de transformación identitaria, emocional y social. Durante este periodo, las y los adolescentes no solo reconfiguran sus vínculos con los valores familiares y sociales heredados, sino que también comienzan a elaborar sistemas propios de creencias, en constante diálogo –y a veces en tensión– con las estructuras normativas del entorno (UNICEF, 2017). Esta construcción subjetiva y progresiva cobra especial relevancia en contextos contemporáneos caracterizados por rápidos cambios culturales, crisis múltiples y entornos digitales omnipresentes.

Este capítulo proporciona un análisis sobre el universo valorativo de los adolescentes bolivianos entre 12 y 17 años, a partir de los resultados de las EMV 2017 y 2024. Si bien retoma y sistematiza hallazgos ya presentados de forma fragmentada en los capítulos anteriores, avanza además en una exploración más diferenciada, incorporando indicadores adicionales que permiten captar con mayor precisión las dinámicas propias de esta etapa vital. El análisis pone especial atención en dimensiones habitualmente relegadas en los estudios generales, como las relaciones afectivas dentro del hogar, las percepciones sobre la felicidad, el bienestar subjetivo, y la manera en que los adolescentes evalúan su entorno social inmediato (Gómez Álvarez D. y Ortiz Ortega V., 2016).

Los adolescentes de hoy integran la llamada “Generación Z” –nacidos entre 1997 y 2012–, y se caracterizan por ser nativos digitales, estar hiperconectados, y tener una alta exposición a contenidos globalizados (Alonso-López y Terol-Bolínches, 2020, Martínez-Estrella E-C., *et al.*, 2023). Por otro lado, varios estudios definen a esta generación por una mayor tendencia a mostrar posturas de mayor apertura hacia la diversidad y equidad de género (Pichler, S., *et al.*, 2021). No obstante, estos resultados deben ser altamente contextualizados. Por ejemplo, el estudio realizado

para Estados Unidos por Moon, P. W., y Kim, H. J. (2024) –que utiliza datos de la Encuesta Mundial de Valores–, muestra que, aunque los jóvenes suelen identificarse con valores de igualdad, ha habido una disminución reciente en el apoyo a la equidad de género, especialmente entre hombres jóvenes con actitudes más conservadoras. En el caso boliviano, el capítulo 7 ilustra cómo los adolescentes, en algunas esferas, no son más progresistas que los adultos, principalmente el grupo de 12 a 14 años respecto a valores sobre la igualdad de género, a la justificación de la violencia de pareja y al rol de las mujeres en la esfera pública (política, educación, negocios).

Por otra parte, el capítulo 2 muestra que una de las principales brechas entre adolescentes y adultos se encuentra en las actitudes frente a prácticas asociadas a la autonomía personal. En temas como el aborto, el divorcio, la homosexualidad y las relaciones sexuales prematrimoniales, los adolescentes registran niveles de aceptación significativamente más altos que los adultos. Estos resultados sugieren un cambio intergeneracional en marcha, más acelerado también en temas de derechos sexuales y reproductivos (lo que se discute a mayor profundidad en el capítulo 9 de este estudio).

Según diversos estudios, los adolescentes presentan un enfoque más pragmático frente al dinero y al futuro, moldeado por la experiencia directa o indirecta de crisis económicas (McKinsey & Company, 2024). Este grupo, además, vivió una niñez y adolescencia interrumpida por la pandemia de COVID-19, cuyas secuelas –como el rezago educativo, la mayor exposición a entornos familiares violentos o, por el contrario, oportunidades inéditas de cercanía familiar– han dejado huellas disímiles en sus trayectorias personales.

En Bolivia, este grupo etario ocupa un lugar demográficamente significativo en la pirámide poblacional. A la vez, atraviesa un entorno adverso, común a todos los bolivianos, marcado por la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y el deterioro del mercado laboral, condiciones que están forzando a muchos adolescentes a combinar estudio y trabajo, o incluso a abandonar la escuela para contribuir al ingreso familiar.

En este marco, el presente capítulo analiza, específicamente, cuatro dimensiones centrales para los adolescentes en Bolivia: 1. Los valores normativos y aspiracionales y, en particular, las cualidades que consideran prioritarias para transmitir a la niñez; 2. La esfera íntima y emocional, que incluye sus vínculos familiares, las redes de amistad y sus niveles de felicidad y bienestar subjetivo; 3. La relación con el trabajo y el tiempo libre, como espacios de transición hacia la vida adulta; 4. Las representaciones sobre el mundo externo, que abarcan la identidad social, las

creencias económicas, y las actitudes hacia la democracia y la participación política. Este enfoque diferenciado busca no solo visibilizar las especificidades de esta generación emergente, sino también ofrecer claves interpretativas para comprender los clivajes normativos y las tensiones culturales que podrían anticipar futuros cambios en la estructura de valores de la sociedad boliviana. Asimismo, el análisis aporta elementos cruciales para el diseño de políticas públicas que reconozcan y respondan a las realidades, potencialidades y desafíos que enfrentan las y los adolescentes en un país en transformación.

1. Valores normativos y proyecciones hacia la niñez

Esta sección examina las percepciones de adolescentes bolivianos entre 12 y 17 años respecto a las cualidades que consideran deseables para transmitir a la niñez. A partir de una lista de diez opciones, los encuestados podían seleccionar hasta cinco opciones en la pregunta sobre los valores que consideran se deben transmitir a la niñez.¹ La comparación entre los resultados de la EMV de 2017 y la EMV/EVA 2024 permiten observar tanto la persistencia de valores tradicionales como el surgimiento de indicios de un cambio generacional que podrían anticipar transformaciones culturales de mayor alcance.

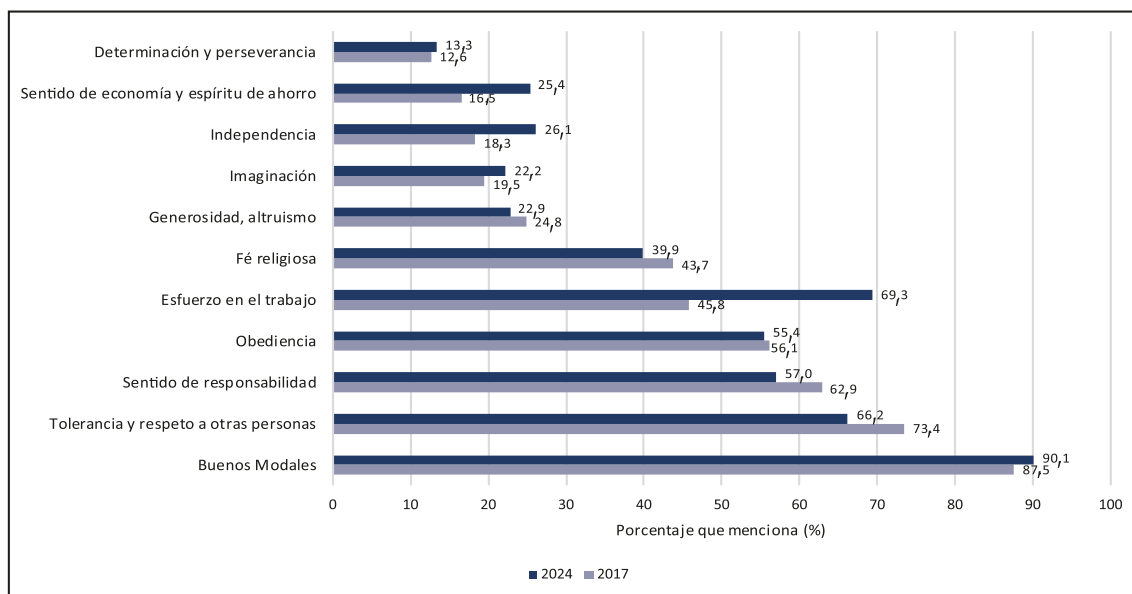
Los datos revelan que las cinco respuestas preferidas son las mismas para ambos periodos (2017 y 2024); buenos modales, esfuerzo en el trabajo, sentido de responsabilidad, tolerancia, respeto hacia otras personas, y obediencia (ver gráficos 1 y 3, capítulo 2). Aunque los adolescentes reproducen un repertorio valorativo conservador similar al de los adultos, sin embargo, le otorgan aún más importancia relativa a la obediencia, el esfuerzo y los buenos modales, perfilando un ideal de infancia marcado por el cumplimiento, la disciplina y la adhesión a normas jerárquicas.

La alta valoración de “buenos modales” (87,5% en 2017 y 90,1% en 2024) y “obediencia” (56,1% en 2017 y 55,4% en 2024) refleja una persistencia en la transmisión de valores normativos que priorizan el respeto a reglas sociales tradicionales. El incremento significativo en la valoración del “esfuerzo en el trabajo” (de 45,8% en 2017 a 69,3% en 2024) sugiere una internalización del discurso meritocrático.

1. La pregunta dice textualmente así: Aquí hay una lista de cualidades que pueden fomentarse en el hogar para que los niños y las niñas las aprendan. ¿Cuál considera usted que es especialmente importante para enseñar a los niños y a las niñas? Por favor escoja hasta cinco opciones. Si bien los adolescentes en su gran mayoría no tienen hijos a quienes transmitir valores, la pregunta tiene sentido para determinar las prioridades normativas de los individuos, independientemente de si tienen hijos o no.

La disminución en la mención de “tolerancia y respeto hacia otras personas” (de 73,4% en 2017 a 66,2% en 2024) podría reflejar una reacción conservadora ante cambios sociales recientes, o bien un repliegue hacia valores de orden frente a un contexto percibido como incierto (Latinobarómetro, 2023). Esta cualidad, aunque sigue siendo una de las más mencionadas, parece estar reconfigurándose: en combinación con valores como “obediencia”, “buenos modales”, “esfuerzo” y “responsabilidad”, configura un ideal de “buen niño” basado en la adaptación, el cumplimiento de deberes y el respeto incuestionado a la autoridad. Este patrón se alinea con procesos de socialización autoritaria aún predominantes en la región (Schulz, 2019). En este contexto, la noción de respeto puede entenderse más como sumisión que como reconocimiento mutuo, en tensión con los principios de una ciudadanía democrática. Estos patrones conservadores reflejan la persistencia de la transmisión intergeneracional de valores en contextos de inseguridad estructural, donde la obediencia y el respeto funcionan como estrategias de protección y resguardo ante la incertidumbre (Inglehart y Welzel, 2005). Esta lógica se refuerza, además, por el aumento en la valoración de cualidades como el sentido de economía y espíritu de ahorro (25,4%), que apunta a una creciente internalización de prácticas de contención en tiempos de crisis.

Gráfico 1. Cualidades más valoradas por los adolescentes (en porcentajes). Bolivia, EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

No obstante, se observan ligeros desplazamientos en la jerarquía valorativa: la independencia, la imaginación y la generosidad muestran una leve alza respecto a 2017, lo cual podría interpretarse como una señal temprana de apertura hacia la creatividad y el pensamiento crítico. En 2024, la independencia es mencionada sólo por el 26,1%, la imaginación por el 22,2% y la generosidad/altruismo por apenas 22,9%. Aunque estos tres indicadores presentan ligeros aumentos respecto a 2017, siguen siendo notablemente menos valorados que cualidades disciplinarias o adaptativas como “esfuerzo”, “obediencia” o “buenos modales”.

Aun así, estas cualidades se mantienen al final de la escala de prioridades adolescentes, lo que sugiere que los modelos de crianza y educación se siguen priorizando el orden sobre la iniciativa.

Este rezago en la valoración de la autonomía plantea interrogantes sobre los marcos normativos que rigen la infancia. En sociedades adultocéntricas, los adolescentes suelen internalizar patrones que privilegian la obediencia sobre la expresión individual. Esta situación coincide con estudios que documentan la persistencia de pedagogías autoritarias y escasa apertura a metodologías participativas en otros países de América Latina (Araya-Crisóstomo y Urrutia, 2022; Silva-Palacios *et al.*, 2024). Por contraste, los datos de la EMV permiten comparar esta tendencia con otros países. Por ejemplo, en la última ronda de la EMV, en Japón, el 63% de los encuestados considera que la independencia es una cualidad clave para enseñar a niñas y niños; en Canadá, la imaginación supera el 43% de menciones. En esos países, estos valores son promovidos activamente como los pilares de una ciudadanía crítica y responsable.

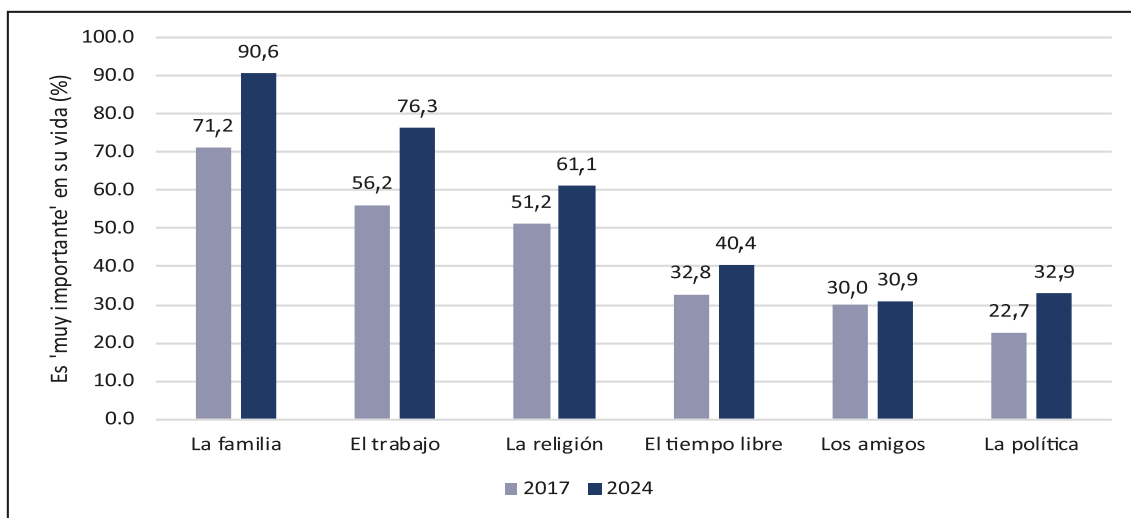
Esta jerarquización de valores evidencia una socialización dirigida hacia la conformidad más que hacia la autonomía, la cooperación o la creatividad, pero al mismo tiempo evidencian cómo el adultocentrismo no sólo se manifiesta, sino que ha sido interiorizado por los propios adolescentes. La adhesión a un modelo de infancia basado en la obediencia y la disciplina limita el desarrollo futuro de personas más autónomas, creativas o transformadoras.

En otras palabras, el hogar boliviano promedio –como institución de transmisión cultural– favorece la tendencia a obedecer y rendir en vez de imaginar, cuestionar o compartir, lo cual plantea desafíos para la formación de ciudadanías democráticas activas y creativas. En contraste con países con sistemas educativos más orientados al pensamiento crítico y la igualdad tienden a fomentar la imaginación, la autonomía y el altruismo como parte de su contrato cultural intergeneracional.

2. Vínculos afectivos y bienestar subjetivo en la adolescencia

En esta sección se analiza la importancia que los y las adolescentes bolivianos atribuyen a seis dimensiones fundamentales de la vida: la familia, el trabajo, la religión, el tiempo libre, la amistad y la política. A partir de los resultados de las EVA 2017 y 2024, se observa que, al igual que en la población adulta (ver capítulo 2), los adolescentes priorizan de forma consistente la familia y el trabajo, situándolos por encima de otras esferas, como la amistad, la religión o la política. No obstante, los adolescentes de 2024 no son los mismos que los de 2017: han atravesado una transformación generacional marcada por la crisis sanitaria del COVID-19, el confinamiento prolongado y una digitalización acelerada de su vida cotidiana. Como muestra el gráfico 2, en todas las categorías se registra un aumento en la proporción de adolescentes que consideran estos aspectos como “muy importantes”, lo que sugiere una revalorización general de la vida.² Sin embargo, esta aparente intensificación del sentido vital encierra matices significativos, vinculados a condiciones estructurales, experiencias familiares y relaciones de género, que se abordan en detalle a lo largo de esta sección.

Gráfico 2. Importancia de distintos factores en su vida, sólo población adolescente. Bolivia, EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

2. La pregunta dice: “Para cada uno de los siguientes aspectos, dígame qué importancia tiene en su vida. ¿Diría que es...? Muy importante, Algo importante, No muy importante, Nada importante”.

2.1 La familia, la amistad y la religión: vínculos afectivos y reorganización identitaria

Los resultados de la EVA muestran que la familia se consolida como el valor más importante para los y las adolescentes, con un salto del 71,2% en 2017 al 90,6% en 2024. Esta tendencia puede leerse como una reafirmación del hogar como núcleo afectivo y red de contención emocional, especialmente en contextos de alta incertidumbre como los ocasionados por la pandemia y el confinamiento, cuando los espacios de socialización externos se vieron drásticamente reducidos. En momentos de crisis sanitaria, económica y social, la familia no sólo cumple funciones prácticas de cuidado, sino que también refuerza su centralidad simbólica y funcional como refugio ante la inseguridad del entorno.

Respecto a la religión, frente a la pregunta sobre la importancia que ésta tiene en su vida, tanto para adultos como para adolescentes se registra un crecimiento: en adolescentes, del 51,2% en 2017 al 61,1% en 2024 (gráfico 2) y en adultos del 58,5% al 67% (gráfico 5, capítulo 2). En contraste, en el gráfico 1 se observa que la fe religiosa como valor importante de transmitir a los niños ha disminuido ligeramente en los adolescentes de casi el 44% en 2017 al 40% en 2024. El hecho de que para los adolescentes la religión aumente como “importante en la vida” pero disminuya como valor a transmitir a los niños sugiere que la religión está siendo reinterpretada como experiencia personal, no como valor normativo universal. En otras palabras, los adolescentes pueden vivir su religiosidad como algo legítimo a nivel individual, pero no necesariamente consideran que deba formar parte del repertorio moral obligatorio que debe inculcarse a las nuevas generaciones. Estos resultados pueden parecer contradictorios, sin embargo, son coherentes con tendencias detectadas en otros países de América Latina (Pew Research Center, 2014), donde se ha observado una desinstitucionalización de la religiosidad, es decir, una separación creciente entre creencias personales y afiliación formal a una iglesia.

A diferencia del valor que los adolescentes le dan a la familia y a la religión, la amistad mantiene niveles notablemente más bajos de valoración y sin cambios significativos: apenas un 30,9% en 2024 la consideran “muy importante”, casi igual al 30% registrado en 2017. Este estancamiento contrasta con la evidencia teórica, que subraya el papel clave de los pares en la formación de identidad, la búsqueda de autonomía y el reconocimiento social durante la adolescencia. En esta etapa del desarrollo, las amistades permiten ensayar roles sociales, negociar normas, expresar disenso y desarrollar habilidades relacionales en entornos horizontales (Bukowski, Laursen y Rubin, 2018).

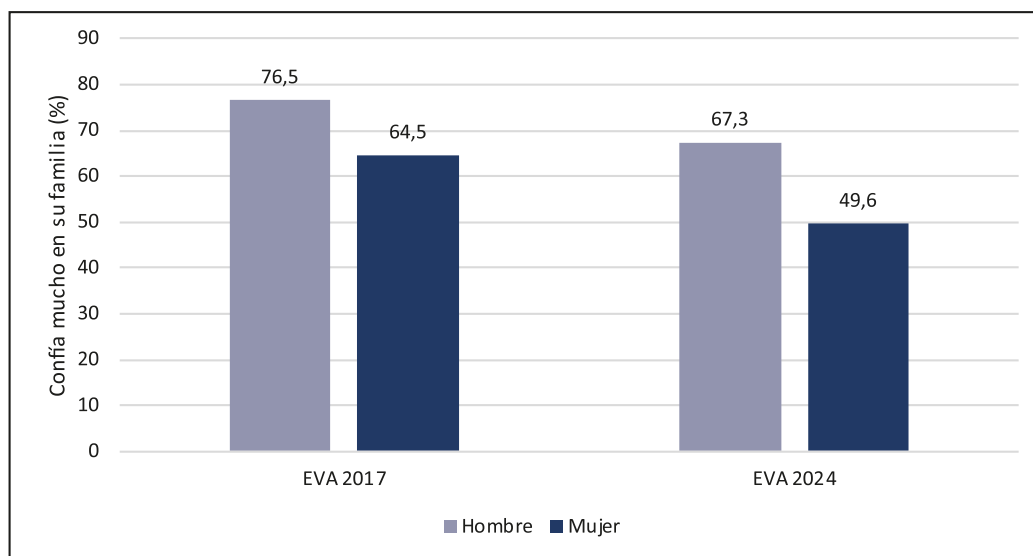
Esta aparente subvaloración de la amistad en el contexto boliviano puede explicarse por las estructuras adultocéntricas que limitan la autonomía adolescente y tienden a deslegitimar los vínculos entre pares como espacios de desarrollo genuino, en concordancia con los resultados de la sección precedente (Berger *et al.*, 2016 y Eslava, 2024). En este marco, no sorprende que una encuesta previa a la pandemia en estudiantes de El Alto revelara que el 81% percibe a la familia como un apoyo mayor que los amigos (Mamani D., 2019), reforzando la hegemonía del lazo familiar por sobre el vínculo entre pares.

Sin embargo, es importante enfatizar que el desarrollo de la amistad no está en contradicción con el valor de la familia, sino que ambas dimensiones pueden coexistir de manera complementaria. En contextos donde el hogar proporciona seguridad emocional, los adolescentes pueden explorar con mayor confianza vínculos externos que nutren su proceso de individuación.

2.2 La confianza en la familia

Si bien la familia aparece como el valor más importante en la vida de los y las adolescentes bolivianos, esta centralidad simbólica se matiza al incorporar una dimensión relacional clave: la confianza interpersonal. La alta valoración declarada no siempre se traduce en una experiencia subjetiva de seguridad, apoyo y legitimidad dentro del hogar. Introducir la variable “confianza en la familia” permite complejizar el análisis y revela tensiones subyacentes en la calidad del vínculo intrafamiliar, especialmente desde una perspectiva de género. En este sentido, lo afectivo y lo normativo no siempre coinciden: se puede valorar mucho a la familia como institución, y al mismo tiempo experimentar relaciones familiares tensas, distantes o asimétricas, marcadas por la desconfianza.

Gráfico 3. Porcentaje de adolescentes que declaran confiar mucho en su familia. Bolivia, EVA 2017- 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del gráfico 3 muestran una disminución general de la confianza plena en la familia (“confía mucho”) entre 2017 y 2024, más acentuada en mujeres adolescentes (de 64,5% a 49,6%) que en varones (de 76,5% a 67,3%). Simultáneamente, aumentan las respuestas en los niveles intermedios y bajos de confianza, particularmente en el caso de las mujeres.³

La caída en el porcentaje de adolescentes que declara confiar “mucho” en su familia puede reflejar tensiones intergeneracionales o crisis de legitimidad de las figuras de autoridad tradicionales. Esta tendencia coincide con hallazgos en otros contextos latinoamericanos que advierten sobre el debilitamiento del vínculo afectivo en entornos familiares marcados por la inseguridad económica y los cambios culturales acelerados (UNICEF, 2021).

Las adolescentes reportan también menores niveles de confianza plena en su entorno, con una disminución significativa entre 2017 y 2024. En contraste, los adolescentes hombres han aumentado su confianza. El aumento de la desconfianza de las adolescentes tanto en su entorno cercano como en su entorno familiar muestra un preocupante desempoderamiento, asociado también a más información percibida. Esta brecha de género puede estar asociada a formas de control, restricciones o violencia simbólica dentro del hogar. La experiencia de las adolescentes en contextos

3. Las pruebas Chi-cuadrado para ambas encuestas indican que las diferencias por sexo son estadísticamente significativas ($p < 0,001$), lo cual es confirmado por las correlaciones de Spearman y Pearson, que también indican una relación significativa entre sexo y nivel de confianza.

patriarcales puede generar una menor percepción de la familia y de entornos cercanos como espacio seguro.

Tabla 2. Porcentaje de adolescentes que confían “mucho” en distintos entornos, por sexo. Bolivia, EVA 2024

	2017		2024	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Vecindario	10,1%	6,9%	10,2%	2,4%
Gente que conoce personalmente	26,2%	22,2%	27,6%	23,1%
Gente que conoce por primera vez	1,7%	1,2%	2,5%	0,2%
Gente de otra religión	9,0%	6,7%	8,6%	4,0%
Gente de otra nacionalidad	2,5%	2,7%	3,4%	2,4%

Fuente: Elaboración propia.

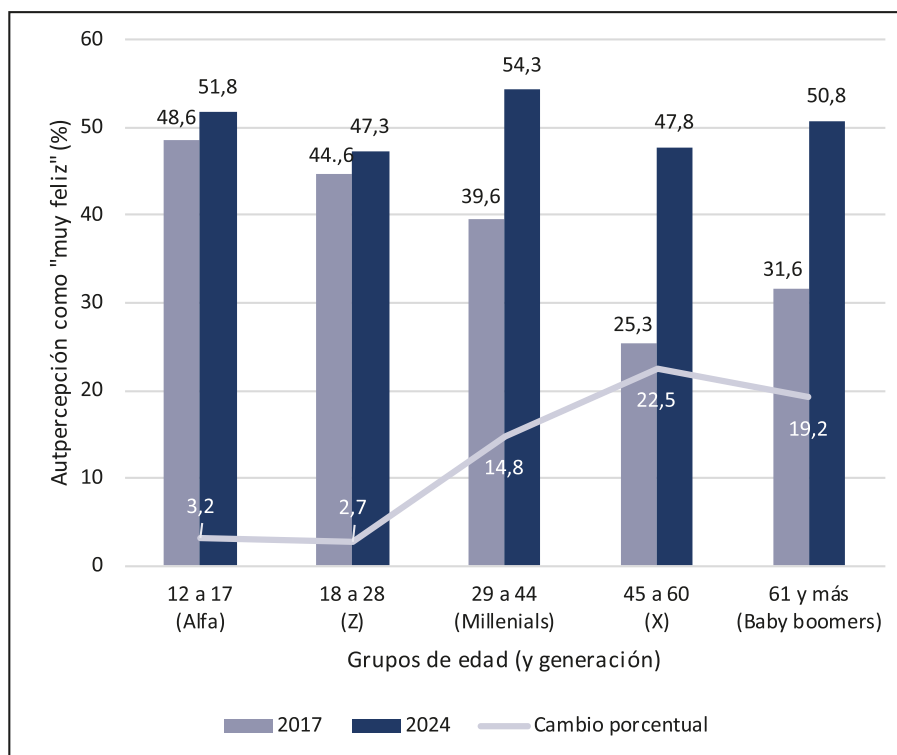
La confianza interpersonal es la base de la cooperación social y de la posibilidad de establecer vínculos solidarios. Su debilitamiento en la adolescencia puede derivar en procesos de desvinculación, desafección cívica y mayor vulnerabilidad frente a discursos de odio o exclusión (IADB, 2021). La confianza en la familia es el primer eslabón para construir confianza generalizada en la sociedad y las diferencias de género refuerzan las desigualdades intergeneracionales.

2.3 La felicidad como dimensión clave del bienestar adolescente

Comprender la felicidad en la adolescencia es fundamental porque esta etapa vital se caracteriza por procesos intensos de transformación emocional, social e identitaria. La percepción de bienestar subjetivo en este periodo refleja no sólo estados de ánimo momentáneos, sino también la calidad de los vínculos familiares, la solidez de las redes de apoyo, la seguridad del entorno y la posibilidad de agencia personal (UNICEF, 2021).

A diferencia de los adultos, para los y las adolescentes la felicidad no suele estar asociada a logros materiales o estabilidad financiera, sino a aspectos relacionales, afectivos y comunitarios, como la pertenencia a un grupo, la sensación de ser escuchado/a y valorado/a, y la posibilidad de construir un proyecto de vida con autonomía (IICC, 2022).

Gráfico 4. Porcentaje de personas que se autoperciben como “muy felices”, por rangos de edad. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024.



* Las generaciones sólo aplican para el año 2024

Fuente: Elaboración propia.

Una buena noticia es que la comparación entre las encuestas de 2017 y de 2024 muestran que, en general, la felicidad de los bolivianos ha aumentado: en general, los bolivianos se autoperciben en 2024 más felices que en 2017. Sin embargo, los resultados muestran que los adolescentes (12-17 años) y jóvenes (18-28 años) son los grupos que menos variación presentan en los niveles de felicidad entre 2017 y 2024. En el caso de los adolescentes, el porcentaje que se considera “muy feliz” sube de 48,6% a 51,8% (un aumento de apenas 3,2 puntos porcentuales), y entre los jóvenes de 18 a 28 años, de 44,6% a 47,3% (solo 2,7 puntos, diferencia que no es estadísticamente significativa).

Este estancamiento relativo contrasta con los aumentos significativos registrados en generaciones mayores, como los adultos de 45-60 años (+22,5%) o mayores de 60 (+19,2%). Una posible interpretación es que los adolescentes parten de niveles ya relativamente altos de felicidad y, por tanto, tienen menos margen de incrementar el porcentaje. Sin embargo, otra explicación relevante es que las condiciones estructurales que impactan el bienestar adolescente –como el acceso a espacios de expresión, la calidad de los vínculos afectivos, y la presencia de confianza y seguridad

emocional– no han mejorado sustancialmente en el periodo analizado.

En la sección precedente se mostró que, si bien la familia es el valor más importante para los adolescentes bolivianos, la confianza plena en ese vínculo ha disminuido, especialmente, entre mujeres. Entre 2017 y 2024, el porcentaje de adolescentes que afirma confiar “mucho” en su familia cayó de 64,5% a 49,6% en mujeres, y de 76,5% a 67,3% en varones.

Esta erosión de la confianza afectiva dentro del hogar puede ser una de las razones por las que los niveles de felicidad se mantienen estables, sin mejoras significativas. La disociación entre la valoración simbólica de la familia y la vivencia emocional del vínculo limita el impacto positivo que este núcleo podría tener sobre el bienestar subjetivo. La literatura muestra que la confianza es un predictor fuerte del bienestar emocional en adolescentes, y que su debilitamiento puede generar sentimientos de inseguridad, incompreensión o soledad (Rodríguez *et al.*, 2020; OECD, 2021).

A pesar de las diferencias en los niveles de confianza familiar por sexo, los datos de la encuesta no muestran una diferencia estadísticamente significativa entre mujeres y hombres en lo que respecta a sentirse “muy feliz”. Esto sugiere que, al menos en la dimensión emocional general, ambos géneros experimentan niveles similares de bienestar subjetivo, lo que podría deberse a que mujeres y varones desarrollan estrategias adaptativas distintas que compensan –parcialmente– los desafíos que enfrentan en sus contextos familiares, escolares y sociales.

Los hallazgos del Estudio “Nuestras Voces en Acción” (IICC, 2022), donde se presenta una encuesta a nivel nacional sobre la participación adolescente –incluida una pregunta sobre la felicidad–, complementan esta lectura al mostrar que una alta proporción de adolescentes bolivianas y bolivianos se considera feliz, pero que este sentimiento está fuertemente condicionado por la calidad de los vínculos sociales con cuidadoras y cuidadores, pares y figuras adultas de referencia. La felicidad adolescente se sostiene en vínculos significativos, reconocimiento, participación real y experiencias de respeto.

La familia sigue siendo el principal espacio de apoyo emocional, pero también aparecen tensiones cuando se niega la voz adolescente, principalmente, en espacios adultocéntricos. La amistad, como ya se ha mostrado, cumple un rol clave en la validación emocional y en la construcción de identidad. La escuela, por su parte, puede ser tanto un espacio de bienestar como de conflicto. Lo que hace la diferencia, es el nivel de participación y reconocimiento que las y los adolescentes experimentan en estos espacios IICC (2022).

El estudio del IICC (2022) plantea que factores como la discriminación, la

sobrecarga de responsabilidades domésticas (en el caso de mujeres) y la violencia simbólica limitan seriamente el bienestar subjetivo, aun cuando, en general, las y los adolescentes declaren “ser felices”. La felicidad no se entiende aquí como una ausencia de malestar, sino como una forma de evaluar si los contextos de vida permiten ejercer derechos, construir vínculos y desarrollarse con libertad.

La implicación principal de estos hallazgos es que fortalecer la felicidad adolescente requiere invertir en entornos participativos, respetuosos y seguros. La felicidad no es un estado individual, sino una señal del grado de inclusión y justicia que experimenta la adolescencia en su vida cotidiana.

3. Trabajo y ocio como parte del tránsito hacia la adultez

El trabajo y el tiempo libre constituyen dimensiones fundamentales en la vida de los adolescentes, no solo como espacios de socialización y construcción identitaria, sino también como reflejo de las condiciones estructurales y culturales que los rodean. En América Latina, múltiples estudios han evidenciado cómo la adolescencia –lejos de ser un periodo exclusivamente dedicado a la educación o al esparcimiento– se encuentra atravesada por expectativas productivas tempranas, especialmente en contextos de pobreza, desigualdad y trabajo informal (CEPAL, 2024). Si bien la versión de la EVA 2024 no incluye varias de las preguntas detalladas sobre la valoración del trabajo en adolescentes, la edición anterior de la encuesta, aplicada en 2017 y analizada en el estudio *Los valores sociales de la juventud* (Ciudadanía, 2018), evidenció que el trabajo tenía una importancia significativamente mayor entre los varones, los adolescentes indígenas y quienes residían en áreas rurales.

En muchos casos, las y los adolescentes no sólo valoran el trabajo como vía de movilidad social, sino como una responsabilidad moral y afectiva frente a sus familias. Al mismo tiempo, el ocio continúa siendo infravalorado, condicionado por una cultura adultocéntrica que lo asocia con la improductividad y la vagancia. Comprender estas valoraciones desde la voz de los propios adolescentes permite evidenciar las tensiones entre el deber y el deseo, entre la necesidad económica y el derecho al descanso, y pone en cuestión las nociones dominantes de éxito, esfuerzo y legitimidad social. Abordar esta temática no sólo resulta clave para analizar la reproducción de desigualdades intergeneracionales, sino también para pensar políticas públicas que reconozcan el trabajo digno, el ocio protegido y la salud mental adolescente como dimensiones complementarias del desarrollo humano.

De acuerdo con la percepción de la importancia que los adolescentes le dan al trabajo,

el porcentaje de jóvenes que dicen que el trabajo en su vida es “muy importante” creció de 56,2% a 76,3% entre el 2017 y el 2024, colocándolo en segundo lugar de importancia (gráfico 2) frente a otros valores. También los datos evidencian que la cualidad de “esfuerzo en el trabajo” aumentó de casi 46% el 2017 a casi el 70% el 2024 (gráfico 1), así como también creció el sentido de economía y ahorro del 16,5% al 25,4%, entre el 2017 y el 2024 (gráfico 1).

Este fenómeno puede interpretarse desde múltiples dimensiones. Por un lado, la creciente centralidad del trabajo puede reflejar un ajuste adaptativo frente a contextos de incertidumbre económica y precarización laboral, en los cuales los adolescentes están en un proceso de internalización con la experiencia observada de sus progenitores de la necesidad de esfuerzo individual y disciplina económica como mecanismos de protección.

Asimismo, el incremento en la valoración del ahorro entre adolescentes sugiere una mayor racionalización económica y proyección hacia el futuro, que puede estar vinculada a dos dinámicas simultáneas: por un lado, la exposición a discursos meritocráticos y financieros en medios digitales y redes sociales; por otro, la experiencia cotidiana de restricción material vivida en sus hogares.

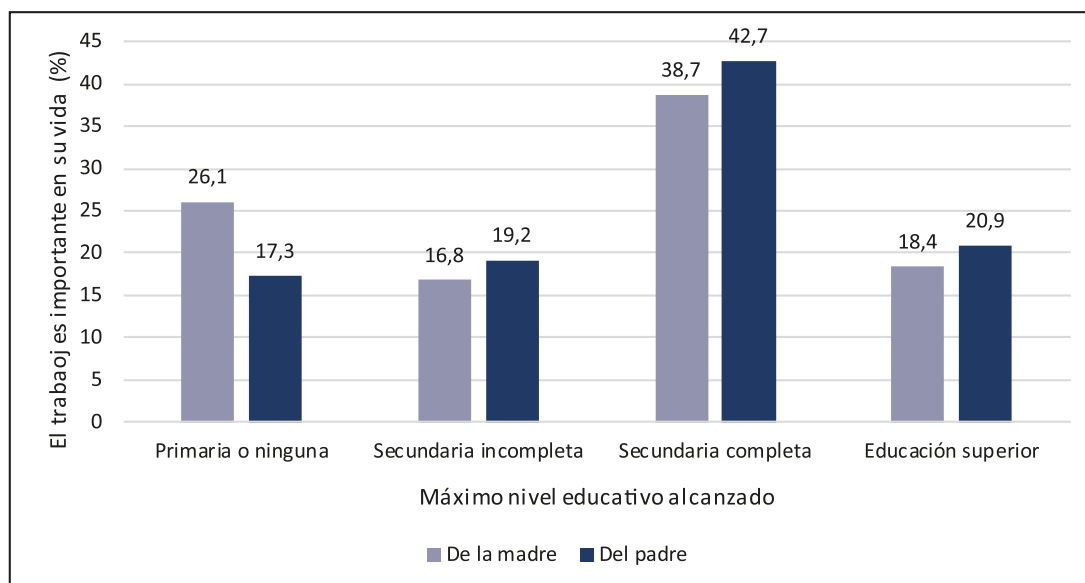
Finalmente, estos hallazgos podrían estar también vinculados a las formas de socialización familiar y escolar, en las que persiste una fuerte transmisión de valores tradicionales asociados al esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad, lo cual se relaciona con los hallazgos presentados en la sección precedente –como una señal de conservadurismo o reproducción normativa–, pero también como una respuesta adaptativa a escenarios de creciente desigualdad e incertidumbre, donde el trabajo se convierte en símbolo de autonomía y protección.

Por otro lado, la percepción sobre el trabajo en los adolescentes está fuertemente asociada a su experiencia y contexto familiar, el cual a su vez influye de acuerdo con el nivel educativo de los progenitores. Los datos de la EVA 2024 muestran una relación interesante entre el nivel educativo de los padres y la valoración del trabajo como “muy importante”, por parte de los adolescentes. Se evidencia que los adolescentes que otorgan mayor importancia al trabajo tienden a provenir de hogares donde los padres tienen educación secundaria completa, tanto en el caso de la madre (38,7%) como del padre (42,7%). En cambio, cuando los padres tienen niveles de educación más bajos o más altos, la proporción de adolescentes que valora intensamente el trabajo disminuye.

Este patrón sugiere una relación no lineal entre nivel educativo parental e importancia otorgada al trabajo (y estadísticamente significativa), que puede interpretarse desde

distintos enfoques de la literatura sobre estudios laborales juveniles.

Gráfico 5. Porcentaje de adolescentes que considera que el trabajo es “muy importante” en su vida, según el máximo nivel de educación del padre y de la madre. Bolivia, EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

Los hogares con padres que alcanzaron la secundaria completa suelen ubicarse en una posición intermedia dentro de la estructura social, donde el trabajo manual, técnico o de servicios es altamente valorado como medio de ascenso social y estabilidad. En el caso de las madres, la mayoría de las mujeres con educación secundaria o menor se inserta en el sector informal, donde las condiciones laborales son precarias, los ingresos bajos y las fronteras entre la vida productiva y reproductiva resultan difusas. Muchas de estas mujeres trabajan en ferias, mercados, cocinas, talleres o actividades agropecuarias, acompañadas por sus hijos e hijas, quienes participan activamente del trabajo o al menos están expuestos cotidianamente a él. En estos hogares, el trabajo no sólo es necesario, sino parte integral de la vida familiar y del vínculo intergeneracional. Además, de acuerdo con Mamani M. (2019) en su estudio sobre valores adolescentes en El Alto, hay una percepción positiva del esfuerzo: muchos creen que trabajar forja el carácter y es parte del “salir adelante”.

En hogares donde los padres no tienen educación formal o sólo cursaron educación primaria, podría operar una normalización de la precariedad laboral: el trabajo no se idealiza, sino que se percibe como inevitable y rutinario. En este contexto, los adolescentes pueden no vincular el trabajo con mejora o logro, sino con fatiga u obligación.

En cambio, en los hogares con educación superior, posiblemente hay una mayor orientación hacia proyectos educativos o profesionales de largo plazo, en los cuales el trabajo inmediato no es tan prioritario. En estos casos, el capital cultural de las familias podría fomentar valores de autorrealización, estudio y/o proyección hacia el futuro.

En contraposición a la valoración del trabajo está la valoración del tiempo libre. El porcentaje de adolescentes que entiende que el tiempo libre es “muy importante” en su vida sube de 32,8% en 2017 a 40,4% en 2024, pero sigue siendo uno de los valores menos priorizados. Esto sugiere que el ocio aún es percibido como un valor no positivo, posiblemente por la hegemonía de una cultura del sacrificio que privilegia el trabajo y la productividad. En contextos empobrecidos, el descanso puede ser considerado un lujo o incluso una irresponsabilidad. Esta visión adultocéntrica niega la importancia del ocio como derecho y como espacio de desarrollo psicoemocional adolescente.

Esta baja valoración puede interpretarse en el marco de una cultura del esfuerzo exacerbada, donde trabajo y estudio son vistos como caminos únicos hacia la legitimidad y el progreso. El tiempo libre, en cambio, es muchas veces percibido como una pérdida de tiempo, especialmente en entornos rurales o empobrecidos donde el ocio (deporte, cultura, arte) no está institucionalizado ni protegido por el Estado.

En Bolivia, la herencia colonial y productivista ha configurado una cultura de la explotación normalizada, donde descansar, aburrirse o no “hacer nada” es mal visto. Los adolescentes reproducen este mandato incluso sin haber ingresado al mundo laboral formal, ya que muchos de ellos colaboran en casa, cuidan a hermanos menores o participan en actividades productivas desde muy temprana edad.

La adolescencia es una etapa en la que el tiempo libre no sólo representa recreación, sino espacio de subjetivación, exploración creativa y emancipación personal. Negar este derecho puede reforzar circuitos de ansiedad, frustración y fatiga crónica que afectan la salud mental adolescente, ya deteriorada por el aislamiento y la falta de redes de apoyo.

4. Identidad social, economía y democracia

En contextos de transformación social acelerada y crisis institucional, resulta clave comprender cómo los adolescentes construyen sus visiones sobre el mundo político y económico. La adolescencia no sólo es una etapa formativa en términos biográficos, sino también un periodo en el que se ponen a prueba las narrativas

dominantes heredadas de los adultos. En sociedades como la boliviana, marcadas por la informalidad económica, la inestabilidad política y el desencanto con las instituciones, los jóvenes tienden a articular repertorios valorativos complejos, que combinan escepticismo, pragmatismo y nuevas formas de participación simbólica. Esta sección analiza los valores emergentes de los adolescentes bolivianos en torno a cuatro dimensiones claves: identidades globales, valores económicos, percepciones sobre el Estado y actitudes democráticas.

4.1 De lo local a lo global: Ciudadanías emergentes en la adolescencia

El análisis de los datos de la EMV y de la EVA en Bolivia en 2017 y 2024 revela transformaciones relevantes –aunque no uniformes– en los sistemas de valores de la población más joven. En particular, los adolescentes bolivianos se ubican en un cruce entre la reafirmación simbólica de su identidad nacional y una creciente apertura hacia el mundo. Esta configuración genera nuevas formas de pertenencia que combinan el orgullo plurinacional con un cosmopolitismo digital, y que desafían las estructuras tradicionales de socialización en el país (ver gráficos 4 y 5 del capítulo 3).

Uno de los hallazgos más llamativos de la EVA 2024 es que los adolescentes, a diferencia de los adultos, expresan un nivel más alto de identificación tanto con Bolivia como con América Latina y el mundo. Esto no indica una contradicción, sino una forma emergente de identidades múltiples. Como sostiene Jeffrey Arnett (2016), las juventudes actuales se forman en una cultura global donde lo local y lo global coexisten sin cancelarse mutuamente. En el caso boliviano, esta doble identificación es particularmente significativa: por un lado, se afirma una identidad nacional; por otro lado, se activa una conciencia global emocional alimentada por la mayor exposición a redes sociales.

4.2 Cambios en los valores económicos de los adolescentes bolivianos (2017-2024)

La revisión de la EMV aplicada en Bolivia en 2017 y 2024 permite observar cambios sutiles pero significativos en la configuración axiológica de los adolescentes (15 a 18 años) respecto a temas económicos. En esta sección se explora cómo las percepciones de los adolescentes bolivianos en torno al mérito, la desigualdad y el rol del Estado se han modificado en el contexto de crisis política, económica e institucional ocurrido entre ambos periodos. Las tendencias muestran una generación ambivalente: más moderada, desconfiada del mercado, pero sin una fe ciega en el estatismo.

Comparando, entre 2017 y 2024 se observa una disminución del apoyo de los

adolescentes a la igualdad de ingresos como ideal, pero sin un traslado paralelo hacia la exaltación del mérito individual. En lugar de ello, crece la ubicación en los puntos intermedios de la escala, mostrando una postura más matizada y posiblemente más escéptica (Capítulo 4, gráficos 11 y 12). Esta postura más moderada puede interpretarse como una forma de distanciamiento frente a discursos absolutos, tanto del igualitarismo estatista como del individualismo neoliberal.

Los adolescentes internalizan la falta de correlación entre esfuerzo y recompensa en contextos de alta informalidad y baja movilidad intergeneracional. La meritocracia, como narrativa hegemónica del capitalismo, pierde poder explicativo en una realidad donde los contactos, la política o el azar parecen pesar más que la constancia y el talento (CAF, 2022).

4.3 Rol del Estado y la adhesión ideológica

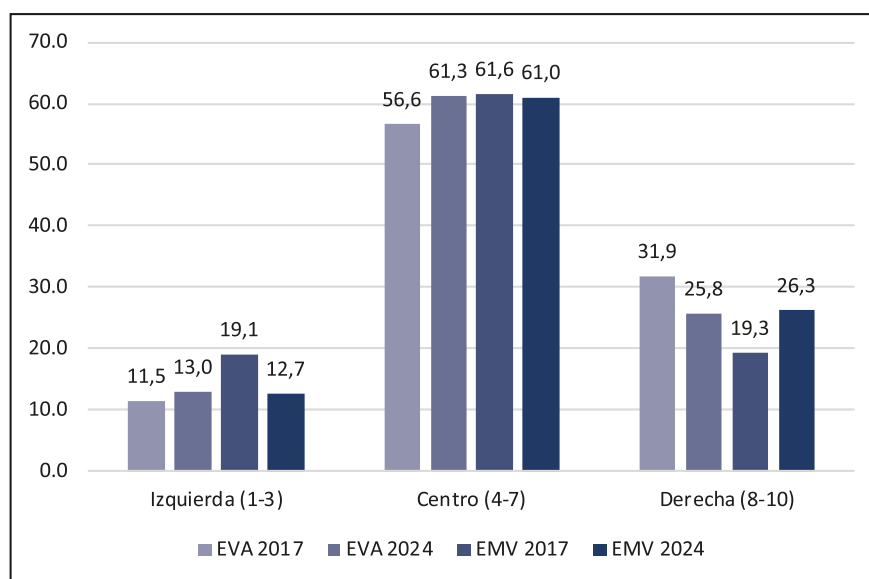
Los adolescentes muestran una leve preferencia por un Estado que proporcione un medio de vida, en contraste con los adultos, que se inclinan ligeramente hacia la responsabilidad individual (Capítulo 4, gráfico 13). Sin embargo, la mayoría también evita posiciones extremas, ubicándose en rangos intermedios. Este patrón sugiere que la juventud, particularmente aquella todavía dependiente en el plano económico, no ha renunciado a sus expectativas de protección estatal. En contextos como el boliviano, donde existe una alta informalidad laboral, para muchos jóvenes el Estado puede ser visto como una figura de estabilidad simbólica y material.

Curiosamente, y en contraste con las otras respuestas, los adolescentes expresan una creencia mayor que la de los adultos en que el esfuerzo lleva al éxito (Capítulo 4, gráfico 20). Sin embargo, este optimismo no parece traducirse en adhesión a políticas específicas ni en una mayor confianza institucional. La adolescencia es una etapa donde las expectativas sobre el futuro tienden a ser positivas, antes de enfrentarse de lleno a las estructuras laborales, clientelares o discriminatorias del mundo adulto.

Lejos de adscripciones ideológicas extremas, los adolescentes bolivianos no se identifican ni con posiciones revolucionarias ni con visiones neoliberales. El gráfico 5 muestra la distribución de la autoubicación ideológica en una escala del 1 (izquierda) al 10 (derecha), comparando la encuesta de 2017 con la de 2024. Los adolescentes, en su mayoría, tienden a ubicarse en el centro del espectro político, replicando patrones similares a los de la población adulta. Según los datos comparativos de 2017 y 2024, aproximadamente el 30% de los adolescentes se autopercibe como “de centro”, frente al 37% de los adultos, sin variaciones estadísticamente significativas entre

ambos periodos. Esta estabilidad sugiere una continuidad en el posicionamiento político moderado de los jóvenes, que no parecen estar radicalizándose. En el gráfico 5, basado en la pregunta que utiliza una escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha), se evidencia una distribución amplia y una dispersión comparable entre adolescentes y adultos, lo cual refuerza la idea de una orientación ideológica más pragmática que doctrinaria. Además, se observa un ligero cambio entre los adolescentes entre 2017 y 2024, con una mayor inclinación hacia el “centro” en 2024. Esta tendencia podría interpretarse como una forma de distancia frente a discursos polarizantes y una preferencia por posturas matizadas en un contexto político marcado por la desconfianza y la fatiga cívica.

Gráfico 6. Porcentaje de personas según su ubicación ideológica en la escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha). Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



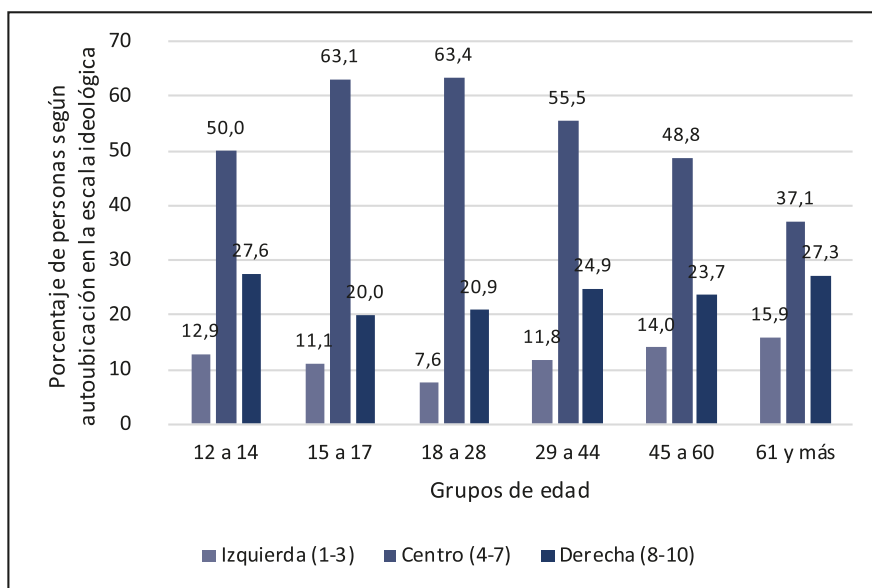
Fuente: Elaboración propia.

El gráfico 6 muestra la distribución de autoubicación ideológica según grupos etarios, basado en la EMV y la EVA 2024. El análisis por edad permite observar no sólo diferencias generacionales en la forma de comprender y posicionarse políticamente, sino también patrones de socialización ideológica y exposición a contextos distintos. Los adolescentes de 12 a 14 años presentan una distribución relativamente parecida a la de los adultos de 45 a 59 años, con una concentración visible en la posición central (valor 5), pero también con una dispersión significativa en ambos extremos del eje ideológico. Esto podría interpretarse como un reflejo del entorno familiar o escolar, en el que la identidad política de los adultos responsables (padres, docentes)

opera como modelo de referencia aún no cuestionado. En esta etapa, como señalan Jennings y Niemi (2014), la politización es baja y predominan formas de socialización vertical, en las que el adolescente adopta las ideas políticas de sus adultos cercanos sin reelaboración crítica.

En cambio, los adolescentes de 15 a 17 años presentan un patrón de respuesta que se aparta al de los adultos: si bien persiste una concentración en el centro (valor 5), la dispersión es más visible y hay una mayor distribución a lo largo del espectro, con incrementos en posiciones tanto de izquierda (1 a 3) como de derecha (8 a 10). Este comportamiento sugiere un inicio de diferenciación ideológica y formación de criterio propio, resultado de la exposición a nuevas fuentes de información –como redes sociales, debates escolares y medios digitales.

Gráfico 7. Porcentaje de personas según su ubicación ideológica en la escala de 1 (izquierda) a 10 (derecha), por grupos etarios. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

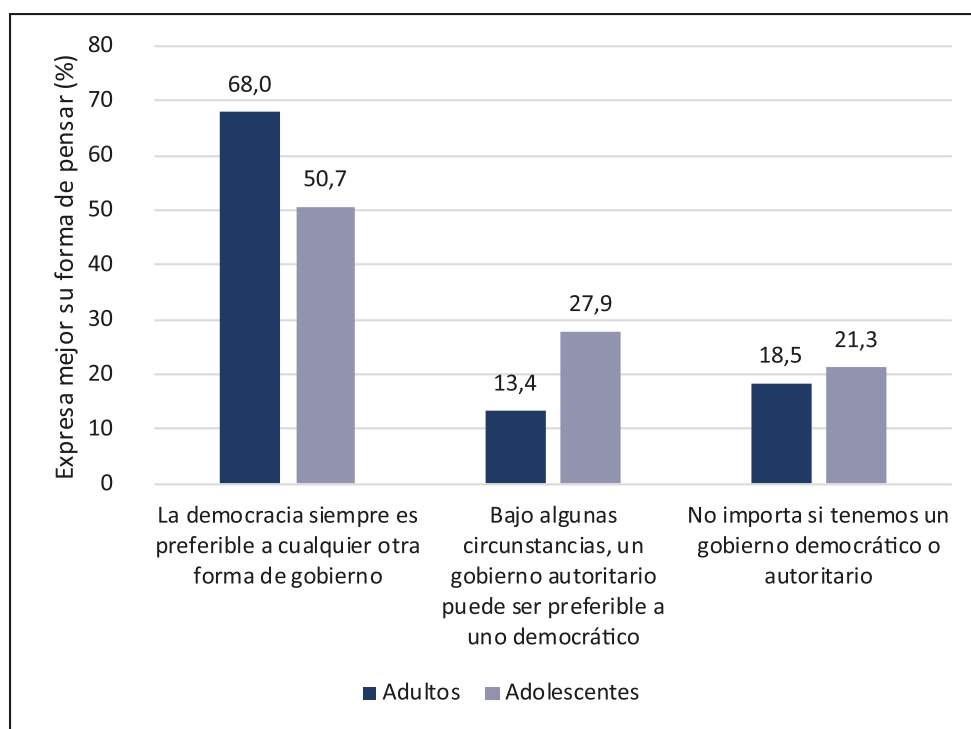
La socialización política en Bolivia parece acelerarse entre los 15 y los 17 años, marcando un punto de inflexión en el tránsito desde la adopción pasiva de ideas hacia la formación activa de la identidad política. Esta transición se refleja en el gráfico de autoubicación ideológica y plantea un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los espacios de deliberación, educación cívica y participación juvenil en la adolescencia media, ya que es en este periodo cuando se definen las orientaciones políticas futuras y el tipo de ciudadanía que los jóvenes adoptarán.

4.4 Democracia y participación política

Esta sección se centra en los principales patrones que permiten caracterizar las actitudes políticas y democráticas de los adolescentes y jóvenes bolivianos en un contexto de desgaste institucional, crisis de representación, polarización ideológica y creciente exposición a discursos conservadores.

La adolescencia es la etapa vital que se caracteriza por una creciente capacidad de formación del juicio crítico, acompañada de un proceso activo de búsqueda de sentido, autonomía moral y definición identitaria. Aunque muchas de sus opiniones políticas aún están fuertemente mediadas por el entorno familiar –que sigue siendo su principal referente normativo–, los adolescentes no son meros receptores pasivos: comienzan a construir criterios propios, influenciados tanto por experiencias personales como por la exposición a medios digitales, redes sociales y debates públicos (UNICEF, 2021).

Gráfico 8. Porcentaje de personas que considera que la frase expresa mejor su opinión. Bolivia, EMV y EVA 2024



Fuente: Elaboración propia.

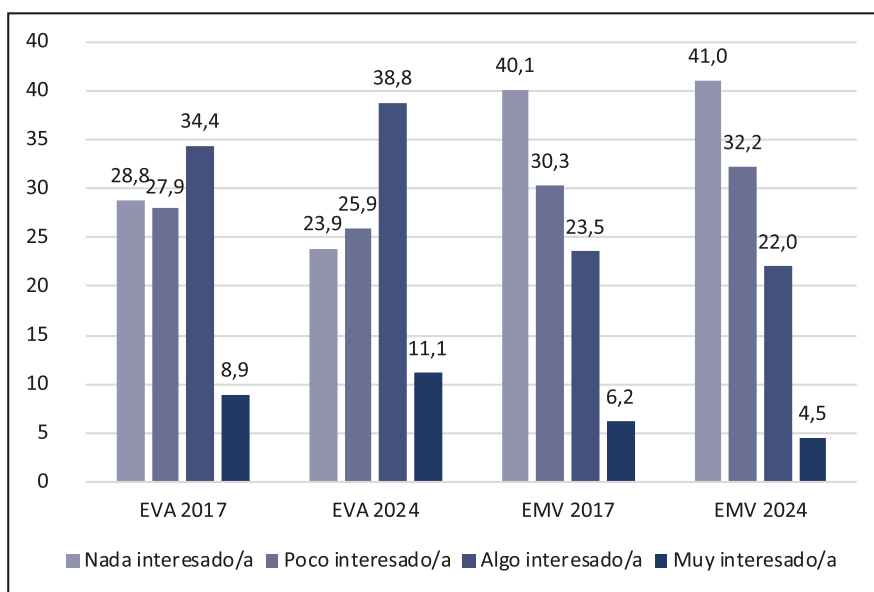
Uno de los hallazgos centrales del estudio es que, aunque la mayoría de la población sigue prefiriendo la democracia como sistema político,⁴ esta adhesión es más débil entre los adolescentes (el gráfico 8 muestra que los adolescentes justifican en mayor proporción un gobierno autoritario que los adultos). Esto no significa necesariamente que los adolescentes sean antidemocráticos, sino que su adhesión es más volátil, menos ideológica y más instrumental. No se trata necesariamente de autoritarismo ideológico, sino de una probable respuesta adaptativa frente a una democracia percibida como fallida.

Este patrón es coherente con tendencias observadas a nivel internacional. Norris e Inglehart (2019) advierten que los jóvenes en contextos de baja calidad democrática tienden a ver la democracia menos como un ideal normativo y más como una expectativa de resultados concretos (bienestar, participación efectiva, transparencia). En Bolivia, donde las instituciones políticas han sido fuertemente cuestionadas por corrupción, concentración de poder o ineficacia, la confianza democrática se ve erosionada desde tempranas edades.

Respecto a la importancia que los adolescentes atribuyen a la política, el porcentaje que considera que la política es muy importante pasó de 22,7% en 2017 a 32,9% en 2024, siendo el valor que más incrementó entre las demás categorías (ver gráfico 2). Aunque sigue ocupando el último lugar en comparación con otras escalas –como la familia, la amistad, etc.– este incremento puede interpretarse como una politización informal de los adolescentes. Esta politización no está mediada por partidos ni instituciones, sino por experiencias personales, redes sociales y un activismo simbólico.

4. La pregunta empleada está codificada como Q204: “¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su forma de pensar? 1. La democracia siempre es preferible a cualquier otra forma de gobierno; 2. Bajo algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático; 3. Para personas como usted, no importa si tenemos un gobierno democrático o uno no democrático”.

Gráfico 9. Porcentaje de personas interesadas en la política. Bolivia, EMV y EVA 2017-2024



Fuente: Elaboración propia.

Lejos de la visión que asocia a la juventud con el desapego o la desafección política, los datos muestran que las y los adolescentes bolivianos parecen estar más interesados en el entorno político que los adultos. Esto podría explicarse, en parte, por su socialización en un periodo de alta conflictividad política y polarización mediática, así como por su inmersión en espacios digitales donde lo político y lo identitario se entrelazan.

Conclusiones

Este capítulo analiza los valores, percepciones y aspiraciones de los adolescentes bolivianos entre 12 y 17 años, a partir de los datos comparativos de la EMV (2017 y 2024). El punto de partida de la investigación es el reconocimiento de la adolescencia como una etapa clave de transición durante la cual se negocian tensiones entre tradición y cambio, autoridad y autonomía. A pesar de vivir en un contexto de profundas transformaciones –marcadas por la digitalización, la desaceleración económica, la pandemia y la sobreexposición a redes sociales–, los adolescentes reproducen un repertorio de valores en gran medida conservador, con fuerte énfasis en la obediencia, los buenos modales, el esfuerzo en el trabajo y la responsabilidad. Aunque se registran leves avances en la valoración de la independencia, la creatividad y el altruismo, estos siguen ocupando posiciones marginales frente a las normas

disciplinarias internalizadas desde el hogar y la escuela.

Los vínculos afectivos constituyen un eje central en la vida de los adolescentes. La familia es el valor más importante para este grupo, con una apreciación creciente entre 2017 y 2024. No obstante, esta centralidad simbólica convive con una caída significativa en los niveles de confianza plena en el entorno familiar, especialmente entre las mujeres adolescentes. La amistad, aunque teóricamente relevante para la socialización en la adolescencia, no aparece como una prioridad subjetiva. Asimismo, la religión crece como valor personal, pero disminuye como valor que se desea transmitir a las nuevas generaciones, lo que sugiere una reconfiguración individualista y desinstitucionalizada de la espiritualidad.

El trabajo adquiere un lugar central en la vida adolescente, con una revalorización significativa entre 2017 y 2024. Este cambio puede interpretarse tanto como una interiorización del discurso meritocrático como una respuesta adaptativa ante la precariedad y el deterioro del mercado laboral. La importancia asignada al trabajo es más alta entre adolescentes cuyos padres tienen educación secundaria completa, lo que sugiere una socialización específica de sectores medios y populares que valoran el esfuerzo como vía de movilidad y estabilidad. En contraste, el ocio sigue siendo escasamente valorado, lo que revela la persistencia de una cultura adultocéntrica y productivista que invisibiliza su importancia para el desarrollo emocional, creativo y relacional de los adolescentes.

En lo político, los adolescentes bolivianos se muestran pragmáticos, moderados e ideológicamente dispersos. La mayoría se ubica en el centro del espectro izquierda-derecha, sin mostrar una radicalización significativa entre 2017 y 2024. Si bien aún prevalece la preferencia por la democracia, los adolescentes expresan una mayor apertura a regímenes autoritarios que los adultos, lo cual no necesariamente implica un rechazo a la democracia como ideal, sino una percepción instrumental y desencantada de su desempeño. Al mismo tiempo, el interés por la política ha crecido, aunque este interés no se canaliza a través de partidos o instituciones tradicionales, sino, posiblemente, mediante redes sociales, causas simbólicas y canales informales de participación. Esta combinación de escepticismo, demanda de resultados concretos, y disposición a construir nuevos repertorios de acción política sugiere que las y los adolescentes bolivianos no están despolitizados, sino que buscan redefinir los términos de la ciudadanía y la acción colectiva en un país marcado por la incertidumbre institucional.

Referencias

- Alonso-López, Nadia; Terol-Bolinches, Raúl (2020). Alfabetización transmedia y redes sociales. *Icono 14*, v. 18, n. 2. <https://doi.org/10.7195/ri14.v18i2.1518>
- Araya Crisóstomo, S., y Urrutia, M. (2022). Uso de metodologías participativas en prácticas pedagógicas del sistema escolar. Pensamiento Educativo. *Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 59(2), Art. 9. <https://doi.org/10.7764/pel.59.2.2022.9>
- Arnett, J. J. (2016). Emerging Adulthood and Globalization: Cultural Dimensions of a New Youth Category. *Emerging Adulthood*, 4(4), 227-230.
- Berger, C., Lisboa, C., Cuadros, O., y de Tezanos-Pinto, P. (2016). Adolescent peer relations and socioemotional development in Latin America: Translating international theory into local research. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 2016(152), 45-58. <https://doi.org/10.1002/cad.20161>
- Bukowski, W. M., Laursen, B., Laursen, B. P., y Rubin, K. H. (2018). *Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups*. Guilford Publications.
- CAF (2022). *Movilidad intergeneracional en América Latina y el Caribe: ¿cuánto, cómo y por qué importa?* Scioteca CAF.
- CEPAL (2024). *Estudio prospectivo del empleo juvenil en América Latina: la educación y la formación para el trabajo como eje clave (LC/TS.2024/80)*. Santiago: CEPAL. https://ayudaenaccion.org/uploads/2024/11/Estudio-CEPAL_def.pdf
- Eslava, E. (2024). Adultocentrism and the children's classroom: If you want to teach them, you must know who they are. *Childhood y Philosophy*, 20, 1-22. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/childhood/article/download/81006/51436/325501>
- Martínez-Estrella, E.-C., Samacá-Salamanca, E., García-Rivero, A., y Cifuentes-Ambra, C. (2023). Generation Z in Chile, Colombia, México, and Panama: Interests and new digital consumption habits. Their use of Instagram and TikTok. *El profesional de la información*, e320218. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.18>
- Gómez Álvarez, D., y Ortiz Ortega, V. (2016). *El bienestar subjetivo en América Latina. Políticas Públicas y Gobierno*. Guadalajara.
- Inglehart, R., y Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. Cambridge University Press.

- Inter-American Development Bank (2021). *Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe* (resumen ejecutivo). IADB Publications. <https://publications.iadb.org/es/confianza-la-clave-de-la-cohesion-social-y-el-crecimiento-en-america-latina-y-el-caribe-resumen-ejecutivo.pdf>
- Jaramillo Martínez, M. I., Jaramillo Martínez, L. G., Quispillo Villagómez, M., Saransig Ramos, L. A., y Mayancela Caizán, N. R. (2024). *Metodologías activas y participativas en el aula diversa*. *Retos de la Ciencia*, 1(4), 73-85. <https://doi.org/10.53877/rc.8.19e.202409.7>
- Jennings, M. K., y Niemi, R. G. (2014). *Generations and Politics: A Panel Study of Young Adults and Their Parents*. Princeton University Press.
- Mamani Cuéllar, M. (2019). Valores y estilo de vida de los adolescentes (estudio realizado en las Unidades Educativas del Distrito 6, del Nivel Secundario de la ciudad de El Alto). Tesis de grado. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. <http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/20627>
- McKinsey & Company (2024, agosto 28). What is Gen Z? Retrieved from McKinsey website: McKinsey y Company.
- Moon, P. W., y Kim, H. J. (2024). Growing Gender Divide: Changing Perceptions of Gender Equality among the Youth in the United States. *International Area Studies Review*, 27(1), 1-20. <https://doi.org/10.69473/iasr.2024.27.1.1>
- Norris, P., y Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- OECD (2021). Measuring what matters for child well-being and policies. OECD Publishing.
- Pew Research Center. (2014). *Religion in Latin America: Widespread Change in a Historically Catholic Region*. <https://www.pewresearch.org/religion/2014/11/13/religion-in-latin-america/>
- Pichler, S., Kohli, C., y Granitz, N. (2021). DITTO for Gen Z: A framework for leveraging the uniqueness of the new generation. *Business Horizons*, 64(5), 599-610. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.021> (ideas.repec.org)
- Rodríguez, E., Cubides C., H. J. (Ed.) *et al.* (2015). *Juventudes latinoamericanas: Prácticas socioculturales, políticas y políticas públicas* (1ª ed.). CLACSO. https://www.clacso.org.ar/pdf_libros/juventudeslatinoamericanas.pdf

- Rodríguez, M., Sauch, M., y Zapata, N. (2020). Relaciones interpersonales positivas: los adolescentes como generadores de bienestar emocional. *Educación y Humanidades*, 2(2), 45-60.
- Schulz, W. (2019). Young people's support for authoritarianism, trust in institutions and expected political participation in five Latin American countries (Paper prepared for the 7th IEA International Research Conference, Copenhagen). Australian Council for Educational Research.
- UNESCO (2023). Estado de la educación en América Latina: entre la recuperación y la transformación. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Santiago: OREALC/UNESCO.
- UNICEF Innocenti (2020). *Global report on growing up in a connected world*. Florence: UNICEF Office of Research-Innocenti.
- UNICEF (2017). *Para cada adolescente, una oportunidad*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
- UNICEF (2017). *The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World*. United Nations Children's Fund.
- UNICEF (2021). *Adolescencia en América Latina y el Caribe: desafíos estructurales y sociales para la protección y el desarrollo integral*.
- UNICEF (2021). *Adolescent well-being: A global framework*. UNICEF Innocenti.
- UNICEF (2024). *Adolescents in the digital age: Changing values and emerging voices in Latin America*. UNICEF Office for Latin America and the Caribbean.

Sobre las y los autores

Aruzamén Zambrana, Zarina: Socióloga y magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Siglo XX. Especialista en Derechos Sexuales y Reproductivos por el Instituto Henry Dunant, Chile.

Camacho Joffré, Carla: Economista, con maestría en Economía, estudios de postgrado en Demografía y Responsable de Datos y Gestión de Datos y Gestión del conocimiento de UNFPA en Bolivia.

Córdova Eguívar, Eduardo: Ph.D. en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador del Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) de la Universidad Mayor de San Simón.

Dacosta Escobar, Ricardo: Es politólogo y M.A. en Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universidad de Barcelona, España. Investigador adjunto en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

Laserna Fernández, Santiago: Economista especializado en Economía Creativa y Economía Digital con maestría de la Universidad de Newcastle, y Humphrey Fellowship en Michigan State University. Director de proyectos en CERES.

Morales Escoffier, Natasha: Economista y magíster en Estudios del Desarrollo por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam, Holanda. Coordinadora de Investigación de Oxfam en Bolivia.

Moreno Morales, Daniel Eduardo: Sociólogo y Ph.D. en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Investigador asociado en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y *Acción Pública*, y *gerente en DATACCION SRL*. *Investigador principal de la EMV en Bolivia*.

Osorio Michel, Daniela: Socióloga y Ph.D. en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Investigadora posdoctoral en el German Institute for Global and Area Studies (GIGA) e investigadora adjunta en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

Schwarz Blum, Vivian: Socióloga y Ph.D. en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. Investigadora asociada en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

Vargas Villazón, Gonzalo: Economista y Ph.D. en Estudios Sociales por el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón. Investigador asociado en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

Anexo digital

Puede obtener una copia digital del presente documento en PDF y acceder al anexo digital a través de la siguiente página web:

<https://ciudadaniabolivia.org/publicacion/informe-nacional-de-la-8va-ronda-de-la-encuesta-mundial-de-valores-en-bolivia-y-de-la-2da-ronda-de-la-encuesta-de-valores-a-adolescentes/>

O escaneando el siguiente código QR:



Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública

Calle Batallón Colorados esq. Tocopilla N° 2340

www.ciudadaniabolivia.org

Cochabamba, Bolivia

Fondo de Población de las Naciones Unidas

Calle 11 de Calacoto N° 503 esq. Av. Ballivián

Edificio Torre Calacoto, Piso 6

bolivia.unfpa.org/es

La Paz, Bolivia

OXFAM Internacional

Urb. San Miguel, Calle Gabriel René Moreno N° 1367

<https://lac.oxfam.org/>

La Paz, Bolivia

World Values Survey Association

www.worldvaluessurvey.org

Viena, Austria

Los valores de una sociedad son fundamentales para definir su rumbo. Las prioridades normativas de las personas, lo que consideran que está bien o está mal, se traducen en decisiones prácticas que marcan la orientación de los procesos sociales y condicionan los procesos económicos. La forma en que las personas se relacionan con el Estado y entre sí dependen, en buena medida, de los valores de la sociedad, y condicionan las posibilidades que las personas, particularmente las más vulnerables, ejerzan sus derechos a plenitud.

La Encuesta Mundial de Valores (EMV) es un proyecto comparativo internacional que busca medir y estudiar los valores de sociedades en todo el mundo a través de la aplicación de una encuesta comparable entre países sobre muestras estadísticamente representativas de cada población. En Bolivia, la EMV se complementa con la Encuesta de Valores a Adolescentes, un esfuerzo que permite levantar información sobre los valores de la población entre 12 y 17 años de edad. La EMV y EVA en Bolivia se realizaron por primera vez en 2017, bajo la séptima ronda internacional de la Encuesta Mundial de Valores. En 2024 se volvió a levantar la información en el marco de un nuevo ciclo de la EMV, lo que permite evaluar cómo han cambiado los valores de la población boliviana en este período, con una mirada intergeneracional. La encuesta fue diseñada, implementada y analizada por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, con el apoyo de UNFPA y Oxfam Internacional.

En este nuevo ciclo que vive el país, conocer los valores, actitudes y preferencias de las personas es importante para entender las oportunidades y desafíos que se presentan para la construcción de una sociedad más respetuosa de los derechos de sus habitantes y más capaz de generar entusiasmo y responsabilidad ciudadana. Los análisis de la información de la encuesta incluidos en este volumen buscan contribuir a este objetivo.

